

ENCRUCIJADAS DE LA RESISTENCIA EN AMERICA LATINA

MOVIMIENTOS SOCIALES EN ÉPOCA
DE CRISIS Y POLARIZACIÓN

Camila Ponce Lara, Natalia Miranda,
Benjamín Tejerina, Camilo Tamayo Gómez
Editoras/es



**Encrucijadas de la resistencia en América Latina:
Movimientos sociales en época de crisis y polarización**

Camila Ponce Lara, Natalia Miranda,
Benjamín Tejerina, Camilo Tamayo Gómez
Editoras/es

Comité de investigación en movimientos sociales, acción colectiva y
cambio social (RC48) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Encrucijadas de la resistencia en América Latina: Movimientos sociales en época de crisis y polarización

Camila Ponce Lara, Natalia Miranda,
Benjamín Tejerina, Camilo Tamayo Gómez
Editoras/es

ISBN: 978-956-6276-43-2

Santiago de Chile

Primera edición, diciembre 2024

Gestión editorial: Ariadna Ediciones

<http://ariadnaediciones.cl/>

DOI: <https://doi.org/10.26448/ae9789566276432.118>

Portada: Matías Villa

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución



Ariadna Ediciones indexada su producción en los siguientes repositorios internacionales: ProQuest, OAPEN, ZENODO, HAL, DOAB, Digital Library of the Commons, SSOAR, Open Library (Internet Archive); Humanities Commons, Google Scholar y en el repositorio ANID sólo para proyectos con folio FONDECYT. También postula a la base Book Citation Index de WoS únicamente si el texto está en idioma inglés.

El contenido este libro fue sometido a revisión de pares bajo el modelo de doble ciego

Tabla de Contenidos

Introducción.....	7
--------------------------	----------

Parte 1: Movilizaciones y resistencias locales

Democracia, movimientos sociales y conflicto en América Latina. Interacciones, impactos y consecuencias	
César Guzmán-Concha.....	17

Efectos de la crisis de intermediación en los movimientos sociales: desmovilización de los movimientos estudiantil y No+AFP en Chile	
Joaquín Rozas-Bugueño.....	33

El giro territorial de los movimientos sociales chilenos: claves para comprender la participación política después de la derrota del proceso constituyente	
Gemita Oyarzo Vidal.....	55

“Somos Históricas”: Un análisis cualitativo de los repertorios de acción feministas en Chile entre 2019-2020	
Rosario Freire Saray.....	75

Parte 2: Movilizaciones transnacionales y resistencias globales

Voces en Resistencia: estudiantes de la Universidad de Chile unidos en solidaridad con Palestina	
Camila Ponce Lara.....	97

Movimientos sociales contemporáneos y democracia radical: perspectivas desde el Sur Global	
Camilo Tamayo Gómez y Kaan Agartan.....	115

Prácticas socioecológicas, desarrollo económico y cambio climático. Los dilemas de la sostenibilidad y el extractivismo en América Latina	
Benjamín Tejerina.....	139

Parte 3: Conflictos socioambientales y juventud

De los conflictos socioambientales hacia formas de paz ambiental: Aproximación al caso del barrio Corinto de Bogotá

Nicolás Gutiérrez Rojas.....157

Activismos políticos juveniles en la Argentina reciente: Apuntes sobre la construcción del primer compromiso (2015-2023)

Marina Larrondo.....173

Protestas, democracia y capacidad institucional en América Latina 2023

Magda Catalina Jiménez Jiménez y Fabio Andrés Díaz Pabón.....191

Sobre las/los autores/as.....211

Introducción

Los días 18 y 19 de enero de 2024, se celebró en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, la conferencia titulada "Movimientos Sociales y Globalización: Una Perspectiva Iberoamericana sobre los Desafíos Latinoamericanos." Este evento se concibió como un espacio inclusivo y abierto, extendiendo su convocatoria a académicos, investigadores, y al público en general, quienes tuvieron la oportunidad de presentar trabajos y reflexionar en torno a los desafíos que enfrenta Iberoamérica en el contexto de la globalización actual. La conferencia reunió a diez y nueve investigadores y dos destacados conferencistas principales (keynotes), provenientes de distintos países de América Latina y España.

El encuentro ofreció un espacio de reflexión e intercambio académico en torno a las dinámicas de los movimientos sociales y su relación con los procesos de globalización, destacando los desafíos que estos fenómenos plantean para el contexto latinoamericano. Las ponencias presentadas abordaron diversas dimensiones de los movimientos sociales, como la acción colectiva, el cambio social, la justicia climática, los movimientos feministas y el impacto de la economía global, en un esfuerzo por conectar la teoría sociológica con los desafíos concretos que enfrentan las comunidades en la región.

Esta conferencia se enmarcó dentro de las actividades del comité de investigación "Social Movements, Collective Action and Social Change" (RC48) de la International Sociological Association (ISA), contando con la participación de varios miembros de su consejo directivo, quienes contribuyeron con sus perspectivas y experiencias en el estudio de los movimientos sociales. La actividad fue ampliamente valorada por sus asistentes y organizadores, destacándose como un espacio relevante para la creación de redes de colaboración y el intercambio de enfoques innovadores y críticos sobre la región. Como resultado del éxito de la conferencia y el interés generado entre los asistentes, se invitó formalmente a los participantes a presentar capítulos que nutrieran un volumen académico colectivo sobre los temas discutidos en el evento. Este libro es el resultado de ese esfuerzo colectivo.

La razón de ser de este libro

En las últimas décadas, América Latina ha sido testigo de un auge sin precedentes de los movimientos sociales, surgidos en medio de olas de inestabilidad económica, agitación política y desigualdades profundamente arraigadas. Estos movimientos no sólo se han convertido

en poderosos agentes de cambio, sino que también representan un mosaico de voces que luchan por la justicia, la igualdad y la dignidad. Como sugiere el título, *Encrucijadas de la resistencia en América Latina: Movimientos sociales en época de crisis y polarización* aborda el papel crítico de los movimientos sociales en toda América Latina y el impacto de su resistencia en las sociedades contemporáneas plagadas de transformaciones y polarización extrema. Este libro ofrece un examen sobre cómo los movimientos sociales latinoamericanos no sólo están desafiando el *statu quo*, sino que están igualmente construyendo activamente nuevos paradigmas de compromiso democrático, justicia social y resistencia transformadora.

El panorama político de América Latina ha estado marcado durante muchas décadas por patrones cíclicos de crisis e inestabilidad, influidos tanto por fuerzas internas como globales. Sin embargo, lo que distingue a la era actual es la intensidad y el alcance de la polarización que impregna casi todos los aspectos de la vida, desde la esfera política hasta las dimensiones sociales y culturales. Esta polarización se ve exacerbada por las plataformas digitales, la fragmentación de los medios de comunicación y el ascenso de líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, que aprovechan la división para consolidar su poder. En este contexto, los movimientos sociales latinoamericanos desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos de las comunidades marginadas, el resguardo de los valores democráticos, y la construcción de marcos socioculturales más inclusivos. Así, las acciones colectivas de estos movimientos sociales desafían las injusticias estructurales y, al hacerlo, fomentan formas de solidaridad y resistencia que trascienden las divisiones políticas. En suma, estos movimientos encarnan una manifestación social que busca desafiar la polarización, mostrando cómo la acción colectiva y la resistencia social pueden servir de antídotos contra las fuerzas que separan a las sociedades.

El papel de los movimientos sociales en tiempos de crisis

Las crisis actuales en América Latina abarcan numerosas dimensiones: recesión económica, degradación medioambiental, abusos de los derechos humanos y deterioro de las instituciones democráticas. Los países de la región se enfrentan a retos únicos que a menudo se entrecruzan, dando lugar a un complejo tapiz de luchas y reivindicaciones. Por ejemplo, la precariedad económica agrava las desigualdades existentes, obligando a las comunidades a enfrentarse a cuestiones como la propiedad de la tierra, los derechos laborales y el acceso a recursos esenciales. La degradación medioambiental, impulsada por modelos de desarrollo insostenibles, amplifica aún más el

desplazamiento de las comunidades indígenas, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales. Mientras tanto, los ataques a las instituciones democráticas, marcados por la corrupción política y el autoritarismo, amenazan los derechos fundamentales de los ciudadanos, y socavan el tejido mismo de la gobernanza democrática.

En este contexto, los movimientos sociales han surgido como actores cruciales en la resistencia a estas crisis. Representan a comunidades e individuos que, a pesar de enfrentarse a la violencia y la represión sistémicas, siguen abogando por el cambio. Su resistencia se basa en un compromiso común con la justicia social, los derechos humanos y la protección del patrimonio cultural y medioambiental. Movimientos como las luchas por el derecho a la tierra en Brasil, las protestas antiextractivistas lideradas por indígenas en Ecuador y los levantamientos feministas en Argentina y Chile han puesto de relieve cómo la acción colectiva puede impulsar cambios políticos, inspirar la solidaridad más allá de las fronteras, y promover la creación de vías alternativas para el desarrollo y el bienestar social.

Cada uno de estos movimientos no sólo aborda un conjunto específico de reivindicaciones, sino que también desafía las estructuras más amplias de desigualdad y opresión. Proporcionan una plataforma para que los más afectados por las crisis expresen sus demandas y hagan valer sus derechos. Esta capacidad de actuar como fuerza unificadora es especialmente importante en tiempos de polarización, en los que diversos grupos deben sortear divisiones ideológicas para encontrar un terreno común en luchas compartidas. Así, al centrarse en cuestiones que trascienden las fronteras de clase, étnicas y geográficas, los movimientos sociales sirven de contrapeso a las fuerzas polarizadoras y recuerdan a las sociedades el valor de la acción colectiva en tiempos de adversidad.

Polarización en América Latina: Una brecha creciente

La polarización en América Latina no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años, alimentada por las disparidades económicas, la corrupción política y la influencia de fuerzas externas. Esta polarización se manifiesta de diversas formas, incluyendo divisiones políticas, antagonismos culturales y un sentimiento general de desconfianza entre los ciudadanos. Por ejemplo, los procesos electorales están cada vez más marcados por la hostilidad, y los candidatos de facciones opuestas se describen a menudo como amenazas existenciales para los partidarios del otro. En algunos casos, esta polarización se extiende a la sociedad civil, donde las alianzas están fracturadas y el purismo ideológico a menudo triunfa sobre los esfuerzos por construir coaliciones integradoras.

El ascenso de líderes populistas y autoritarios en países como Brasil, Argentina, Venezuela y Nicaragua no ha hecho sino profundizar estas divisiones. Estos líderes suelen emplear una retórica divisoria para consolidar su poder, presentándose como defensores del “verdadero” pueblo, el cual estaría amenazado por un grupo concreto, sea una elite política, las grandes corporaciones y multinacionales, los inmigrantes u otros grupos marginados, etc. Al plantear las luchas políticas en términos de “nosotros contra ellos”, fomentan entornos socioculturales en los que el compromiso y el diálogo se consideran debilidades más que fortalezas. En estos climas polarizados, los movimientos sociales de América Latina se enfrentan a importantes retos a la hora de defender sus causas. Deben enfrentarse a la difícil tarea de reunir a diversos grupos en torno a objetivos comunes sin alienar a posibles aliados. Además, en una era en la que la desinformación, las noticias falsas, y la manipulación digital son cada vez más frecuentes. Entonces, estos movimientos se enfrentan a campañas que intentan desacreditarlos, etiquetándolos como fuerzas radicales o subversivas.

A pesar de estos obstáculos, los movimientos sociales de América Latina siguen desempeñando un papel esencial en la reducción de las diferencias. Al hacer hincapié en las experiencias compartidas de opresión y marginación, crean espacios en los que individuos de orígenes diversos pueden unirse. Estos movimientos demuestran que la polarización no es un resultado inevitable, sino un reto que puede superarse mediante la acción colectiva y el diálogo. Subrayan la importancia de reconocer y valorar las diferencias al tiempo que se trabaja por objetivos comunes.

Los movimientos sociales como espacios de resistencia y reimaginación

Los movimientos sociales de América Latina no sólo han resistido a las estructuras opresivas, sino que también han reimaginado cómo podría ser una sociedad más justa y equitativa. Sus visiones del cambio a menudo van más allá de los objetivos inmediatos para abarcar transformaciones sociales más amplias. Por ejemplo, los movimientos feministas de Argentina, Chile y México abogan por reformas legales, pero también desafían el patriarcado profundamente arraigado que impregna la sociedad latinoamericana. Del mismo modo, los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador luchan por los derechos sobre la tierra y la protección del medio ambiente, al tiempo que promueven el respeto por los sistemas de conocimiento y las formas de vida indígenas. Estos movimientos no se limitan a reformar el sistema existente, sino que pretenden darle una nueva forma.

Esta reimaginación es esencial en una región en la que las instituciones políticas tradicionales han fracasado a menudo a la hora de abordar las necesidades y aspiraciones de la población. Al proponer alternativas a los modelos de desarrollo neoliberales dominantes, estos movimientos destacan la importancia de la solidaridad social, la autonomía comunitaria y la sostenibilidad ecológica. Al hacerlo, ofrecen un marcado contraste con el individualismo y el consumismo que caracterizan a gran parte de la sociedad latinoamericana contemporánea. Estas visiones de un futuro más inclusivo y sostenible resuenan profundamente en las personas que se sienten excluidas del discurso político dominante, proporcionándoles un horizonte de sentido y esperanza.

Además, los movimientos sociales latinoamericanos son laboratorios de formas variadas e innovadoras de organización y resistencia. Emplean diversas tácticas, que van desde las protestas no violentas y el activismo digital hasta la producción cultural y la organización de base. Estos métodos les permiten llegar a un público amplio y movilizar el apoyo de diversos segmentos de la sociedad. Y lo que es más importante, también desafían las jerarquías tradicionales dentro de los propios movimientos sociales, promoviendo estructuras participativas y horizontales que empoderan a los individuos a todos los niveles. Este compromiso con la inclusión y la toma de decisiones democrática refuerza la resistencia de estos movimientos, haciéndolos menos susceptibles de cooptación y más capaces de mantener luchas a largo plazo.

Construir la solidaridad más allá de las fronteras

Como queda claro en los manuscritos que conforman este libro, los movimientos sociales latinoamericanos no existen de forma aislada. Forman parte de una red transnacional más amplia de activistas, organizaciones y comunidades que comparten un compromiso con la justicia social y la resistencia contra la opresión. Estas redes son cruciales para contrarrestar las fuerzas de la globalización que contribuyen a la desigualdad y a la degradación medioambiental. Mediante el intercambio de conocimientos, recursos y solidaridad, los movimientos sociales de América Latina establecen alianzas con grupos de otras regiones, amplificando su impacto y creando un diálogo global sobre cuestiones como los derechos humanos, la justicia medioambiental y el antiimperialismo.

En este proceso no puede subestimarse el papel de la comunicación digital. Plataformas como X (antes Twitter), Instagram o Facebook permiten a los movimientos sociales compartir sus historias,

coordinar acciones y obtener el apoyo de audiencias internacionales. El alcance mundial de los medios digitales ha hecho posible que las luchas locales adquieran visibilidad internacional, presionando a gobiernos y empresas para que atiendan las demandas de estos movimientos. Al conectar con activistas y organizaciones de todo el mundo, los movimientos sociales latinoamericanos refuerzan su capacidad de resistencia, y crean oportunidades de aprendizaje y colaboración mutuos. Esta solidaridad transnacional es especialmente importante en una época de fuerte polarización, en la que el apoyo nacional a los movimientos sociales puede verse limitado por las divisiones sociopolíticas. Las alianzas internacionales pueden proporcionar a los movimientos los recursos y la visibilidad que necesitan para continuar sus luchas, incluso frente a la represión. Además, estas alianzas demuestran que los problemas a los que se enfrentan los movimientos sociales latinoamericanos no son exclusivos de la región, sino que forman parte de una lucha global por la justicia y la igualdad. Al enmarcar sus luchas en un contexto más amplio, estos movimientos inspiran la solidaridad más allá de las fronteras y animan a personas de orígenes diversos a reconocer sus intereses comunes.

Es en este marco en el que nuestro libro *“Encrucijadas de la resistencia en América Latina: Movimientos sociales en época de crisis y polarización”* pretende explorar el papel complejo y polifacético de los movimientos sociales en la América Latina actual. En una región marcada por la crisis y la polarización, los autores de este libro dejan en claro que estos movimientos ofrecen un camino hacia la unidad, la resiliencia y la transformación, los cuales desafían las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la división, al tiempo que proponen nuevas visiones de comunidad, solidaridad y justicia. Al examinar las estrategias, los retos y los logros de estos movimientos, este libro pretende aportar ideas sobre cómo la resistencia social puede superar la polarización y contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas y democráticas. A medida que América Latina continúe enfrentándose a su conjunto único de desafíos, el papel de los movimientos sociales seguirá siendo indispensable. Estos movimientos no son meras respuestas a la crisis; son expresiones de un deseo más profundo de cambio y un testimonio del poder de la acción colectiva. En una época en la que la polarización amenaza con desgarrar las sociedades, los movimientos sociales latinoamericanos nos recuerdan la fuerza que reside en la unidad, la resiliencia y la búsqueda incesante de un mundo más justo y solidario.

El mapa de ruta propuesto por este libro

Este libro se organiza en tres secciones, antecedidas por una introducción contextual elaborada por el Dr. César Guzmán-Concha, quien ofrece un marco general para comprender las dinámicas de los movimientos sociales en América Latina.

La primera parte, titulada “Movilizaciones y resistencias locales”, presenta tres capítulos que abordan diversos aspectos de las luchas sociales en Chile, explorando tanto los desafíos internos de los movimientos hasta la redefinición de los espacios de lucha.

El primer capítulo, "Efectos de la crisis de intermediación en los movimientos sociales: desmovilización de los movimientos estudiantil y No+AFP en Chile", Joaquín Rozas Bugueño, analiza cómo la crisis de intermediación política ha afectado la continuidad y fuerza de los movimientos sociales en Chile, focalizándose en dos organizaciones: una estudiantil y otra contra el sistema de pensiones.

El segundo capítulo, "El giro territorial de los movimientos sociales chilenos: claves para comprender la participación política después de la derrota del proceso constituyente" de Carmen Gemita Oyarzo Vidal, examina la transformación de los movimientos sociales chilenos hacia una mayor territorialización, reforzando las identidades y reivindicaciones locales, en medio del desencanto y el escenario post-constituyente experimentado por el país.

En el tercer capítulo, "Somos Históricas": Un análisis cualitativo de los repertorios de acción feministas en Chile entre 2019-2020", Rosario Freire Saray analiza el papel de la memoria, la solidaridad y los espacios de reflexión, en tanto repertorios de acción utilizados por los movimientos feministas en Chile entre los años 2019 y 2020, evidenciando su papel fundamental en el cambio social.

La segunda parte, titulada "Movilizaciones transnacionales y resistencias globales", aborda las conexiones y solidaridades internacionales en los movimientos sociales contemporáneos, reflejando como estos esfuerzos de resistencia encuentran eco en distintas latitudes del globo.

En el primer capítulo, "Voces en Resistencia: estudiantes de la Universidad de Chile unidos en solidaridad con Palestina", Camila Ponce Lara, explora cómo los estudiantes de esta universidad se suman a la ola global de acampes que emerge en el Norte Global y que luego se expande hacia el sur. Analizando la construcción de lazos de solidaridad en apoyo al pueblo palestino, se demuestra el poder de la movilización estudiantil y particularmente de este movimiento emblemático en Latinoamérica como espacio de resistencia y denuncia transnacional.

El segundo capítulo, "Movimientos sociales contemporáneos y democracia radical: perspectivas desde el Sur Global", de Camilo Tamayo Gómez y Kaan Agartan, ofrece un análisis de la relación entre los movimientos y el concepto de democracia radical, brindando una perspectiva desde el Sur Global que incluye una visión comparada entre Colombia y Turquía, dando cuenta de la importancia de estos movimientos en la reconfiguración de la democracia y la justicia social a nivel mundial.

El tercer capítulo, "Prácticas socioecológicas, desarrollo económico y cambio climático. Los dilemas de la sostenibilidad y el extractivismo en América Latina", de Benjamín Tejerina explora cómo el cambio climático y el extractivismo intensifican las desigualdades sociales y ambientales, especialmente en América Latina. Examina las intersecciones entre la crisis climática y las prácticas extractivistas, señalando sus impactos en comunidades vulnerables y ecosistemas. Además, aborda los movimientos sociales que resisten estas prácticas y promueven alternativas sostenibles.

La tercera parte, denominada "Conflictos socioambientales y juventud", presenta tres capítulos que examinan las luchas ambientales y el rol de la juventud en la movilización social.

En el primer capítulo, "De los conflictos socioambientales hacia formas de paz ambiental: Aproximación al caso del barrio Corinto de Bogotá", Nicolás Gutiérrez examina cómo el barrio Corinto en Bogotá ha transformado sus conflictos ambientales en iniciativas de paz ambiental, a partir de una experiencia de ecobarrio donde sus residentes otorgan significado a su espacio por medio de prácticas ecológicas y comunitarias.

El segundo capítulo, "Activismos políticos juveniles en la Argentina reciente: Apuntes sobre la construcción del primer compromiso (2015-2023)" de Marina Larrondo, se centra en la participación juvenil en Argentina, explorando cómo los jóvenes han forjado sus compromisos políticos en el periodo que va de la pandemia hasta la llegada de Milei al poder, analizando las particularidades de sus demandas y estrategias de organización.

Finalmente, en "Protestas, democracia y capacidad institucional en América Latina 2023", Magda Catalina Jiménez Jiménez y Fabio Andrés Díaz Pabón examinan los vínculos entre las protestas sociales, la democracia y la capacidad institucional en América Latina, emplazando a la protesta como herramienta que anuncia fallas a los gobiernos y a los sistemas democráticos, subrayando el papel crítico de la sociedad civil. Para concluir, *Encrucijadas de la resistencia en América Latina: Movimientos sociales en época de crisis y polarización* busca invitar a los lectores a comprometerse con el vibrante y transformador mundo de los

movimientos sociales latinoamericanos. Cada capítulo ilustra la capacidad de resistencia y adaptación de las comunidades que se enfrentan a crisis y fuerzas polarizadoras, ofreciendo una visión en profundidad de cómo individuos y grupos sortean los retos estructurales al tiempo que abogan por un cambio social profundo. A través del lente de los movimientos locales, regionales y transnacionales, este libro presenta una oportunidad única para comprender la dinámica sociopolítica de América Latina y establecer conexiones entre estas luchas y los movimientos globales por la justicia.

Los lectores descubrirán que la estructura del libro, que va desde las resistencias locales hasta las solidaridades transnacionales más amplias y el papel vital del activismo medioambiental liderado por los jóvenes, proporciona un marco crucial para explorar la rica diversidad de las movilizaciones sociales en toda la región. Cada sección está cuidadosamente elaborada para mostrar cómo los diferentes movimientos responden a cuestiones como la exclusión política, la degradación medioambiental y la desigualdad social, arrojando luz sobre la creatividad, la determinación y el espíritu de colaboración que definen a estos movimientos. Al conectar las experiencias regionales con los temas universales de los derechos humanos, la democracia y la protección del medio ambiente, este libro fomenta una comprensión más amplia de la sociedad latinoamericana y sus contribuciones al discurso global sobre la justicia social.

En definitiva, *Encrucijadas de la resistencia en América Latina: Movimientos sociales en época de crisis y polarización* es una invitación a explorar las apasionantes historias de quienes siguen luchando contra la opresión y la desigualdad en todas sus formas. Para estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada en comprender las intersecciones del cambio social, el activismo político y la resiliencia comunitaria, este libro ofrece un camino para descubrir las complejidades de los movimientos sociales latinoamericanos y las formas en que están dando forma a un futuro más justo e inclusivo.

Camila Ponce Lara, Natalia Miranda,
Benjamín Tejerina y Camilo Tamayo Gómez

Democracia, Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina. Interacciones, Impactos y Consecuencias

César Guzmán-Concha

Introducción

La década de 2010 es la década más contenciosa de la historia global de los últimos 50 años. Desde los años 1960s, cuando las protestas estudiantiles florecían a ambos lados de la cortina de hierro, los movimientos de liberación del yugo colonial en Asia y África alcanzaban su cenit, surgían guerrillas en la mayoría de los países de América Latina siguiendo la estela de Cuba, y el movimiento obrero zarandeaba los países del norte global, que el mundo no asistía a un ciclo de movilizaciones de tal envergadura. En efecto, en la última década tuvieron lugar las revoluciones de la Primavera Árabe, vimos a los chalecos amarillos ocupando las calles de París, al movimiento Occupy y las protestas Black Lives Matter en los Estados Unidos, los estallidos sociales en varios países de América Latina, y masivas protestas en lugares tan dispares como Hong Kong, Tailandia, Ucrania o Sudáfrica. La estela de masivas manifestaciones sociales de malestar de este período incluye protestas, rebeliones, levantamientos populares y revoluciones. La pandemia de Covid-19 apenas implicó una suspensión momentánea de corta duración, pues al poco tiempo los ciudadanos volvieron a las calles, sumando a sus quejas y demandas las cuestiones relativas a las privaciones causadas por las prolongadas cuarentenas. En suma, el tiempo presente está signado por convulsiones sociales masivas de variada naturaleza, con impactos variables e implicancias aun en desarrollo.

Las ciencias sociales han asociado los ciclos de movilización social con procesos de democratización social y política. Así habría ocurrido durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y con las luchas populares contra dictaduras y autoritarismos en todos los continentes. Sin embargo, a diferencia del pasado, las protestas de masas de las últimas dos décadas han coincidido con una importante fase de retroceso democrático. La literatura especializada discute sobre cuál sería el mejor término para describir este proceso, pero existe un cierto consenso en que sus principales rasgos consisten en el auge de los populismos, la existencia de tendencias a la autocratización en varios sistemas políticos, y el crecimiento y ascenso a posiciones de poder de la extrema derecha.

También, se observa que la derecha radical está saliendo a las calles, y busca hacer propio un estado de ánimo de desconfianza y cabreo con el estado de las cosas que comparten amplios sectores. La disconformidad y la indignación ya no serían patrimonio de los movimientos progresistas, como en el pasado, sino que de una corriente difusa que encontraría en los actores radicales su mejor expresión. De tal modo, la relación entre democracia (o democratización) y movilización social estaría hoy en cuestión. ¿Cuál es la dinámica actual entre democracia y movimientos de masas? ¿Existe todavía una relación virtuosa entre ambos fenómenos? En este ensayo, me propongo examinar la relación entre movimientos, conflicto y democracia, a partir de una lectura de tendencias recientes que experimentan los países del norte y del sur global, y de la literatura de las ciencias sociales. Identifico en esta literatura dos visiones sobre la relación entre democracia y movimientos: una visión positiva, que ve que la protesta popular expande la democracia, y otra agnóstica, que se detiene en los riesgos que implicaría la movilización social en ciertos contextos (por ejemplo, durante las transiciones del autoritarismo a la democracia).

En las siguientes secciones, desarrollo la idea de que la relación entre democracia, movimientos sociales y conflicto sigue siendo una cuestión central para las ciencias sociales. Sostengo que es erróneo plantear una relación lineal, automática, o simétrica entre ambos factores —de hecho, hay un conjunto de variables de contexto y mediación que intervienen generando variación de resultados e impactos. Es efectivo que la movilización popular ha sido fundamental en las luchas contra las dictaduras, pero también es efectivo que los autoritarismos recientes han incorporado una serie de técnicas de “gestión del disenso”, valiéndose de nuevas tecnologías de información y comunicación y de un aprendizaje de los problemas de los autoritarismos del pasado, que les permite sortear los desafíos que les ponen las protestas populares. Además, la irritación, la impotencia o la frustración social, como estados de ánimo colectivo, no necesariamente coinciden con la agenda de los movimientos populares tradicionales, ni estos últimos consiguen siempre interpretar con fidelidad tales estados de ánimo colectivo. La organización del malestar (ya sea contra las elites, la globalización, los políticos, la corrupción, o el declive económico, o contra todo eso junto) deja de ser territorio exclusivo de organizaciones tradicionales, y nuevos grupos e individuos —también gracias a las nuevas tecnologías— entran a esa zona para disputar los sentidos de la participación desde abajo. Esto configura una situación singular, que la distingue del campo del conflicto social en el siglo XX. Los “estallidos sociales” son fenómenos de protesta de masas, que exhiben estas características distintivas y ejemplifican este cambio. En la actualidad, hay más actores movilizando

el descontento, una mayor fragmentación del campo popular, se multiplican los vínculos potenciales entre individuos, causas y las plataformas de movilización (lo que dificulta la creación de lealtades entre estos), y se hace más difícil sostener en el largo plazo desafíos desde abajo. Esto tiene implicaciones para la relación entre democracia, conflicto y movimientos sociales, que analizo en las siguientes líneas.

Democracia y movimientos en las ciencias sociales

Es relevante examinar la relación entre democracia y movimientos sociales por varias razones, de las que me detendré en las siguientes. Primero, porque históricamente, la democracia y las movilizaciones sociales son fenómenos que no solo han transcurrido en paralelo, sino que se han conectado causalmente. Todas las olas democratizadoras, desde los casos tempranos en Europa, a las olas más recientes en el este de Europa y América Latina, fueron precedidas por movimientos de masas que en ocasiones usaron tácticas altamente disruptivas (Markoff, 1996). Las conexiones entre ambos fenómenos no se limitan a los movimientos populares presionando (exitosamente) por la expansión de los regímenes democráticos. El parlamentarismo y las instituciones de la democracia de masas en las primeras décadas del siglo XX, sumado a la urbanización acelerada (una consecuencia de la industrialización de las sociedades), cambiaron los repertorios de protesta, desplazando las formas más disruptivas y violentas de conflictividad, y modulando la política popular en partidos de masas, centrales sindicales y la política electoral (Tilly, 1983, 2008). Así, a medida que las instituciones liberales fueron tomando cuerpo y consolidándose (por ejemplo, la expansión del sufragio, el derecho a la libre asociación, y a formar partidos), las huelgas, los mítines y la competencia electoral sustituyeron a las formas más disruptivas del conflicto social.

En segundo lugar, en la última década hemos visto un incremento significativo de la actividad contenciosa, a nivel global, como indicaba en la introducción. Politólogos han observado que muchas democracias están atravesando serios problemas de gobernabilidad e inestabilidad. Los especialistas le han llamado en varias formas: des-democratización, des-consolidación, retroceso, enfermedad democrática, autocratización, tendencias autoritarias (Levitsky & Ziblatt, 2018), déficits democráticos (Norris, 2011). Colin Crouch, a principios de la década de 2000s, acuñaba el concepto de post-democracia (2004), para referirse a un problema que aquejaba a las democracias avanzadas, y que se definía como una situación en la que las instituciones formales del régimen democrático dejaban de producir efectos de relevancia en las políticas adoptadas por los distintos gobiernos. Formalmente, la democracia se mantenía, pero

sustancialmente esta perdía relevancia como lugar de toma de decisiones y representación de intereses variados. Crouch tenía a la vista los gobiernos de la tercera vía y el *New Labour* en el Reino Unido, la Alemania de Schroeder y los Estados Unidos de Bill Clinton, los que representan el período cumbre del consenso y dinamismo económico del neoliberalismo. En América Latina, la década de 1990s es la de los años dorados del consenso de Washington, de la Argentina de Menem al Chile de la Concertación, pasando por el período de Salinas de Gortari en México. Durante este período de profundas reformas socioeconómicas en la mayoría de los países de la región, se gestaron problemáticas y tensiones que tendrían amplias implicaciones en las décadas sucesivas.

Una de las características del retroceso democrático actual es que los líderes autoritarios acceden al poder a través del voto popular —no a través de golpes militares como en el pasado— y llevan a cabo un tedioso trabajo de desmantelamiento de las instituciones que les puede llevar varios años —es decir, la creación de un régimen autoritario ocurre en un proceso gradual, no a través de un cambio brusco y radical. Así, como en las post-democracias, las instituciones de la democracia son vaciadas de contenido desde dentro, no desde el exterior. Los síntomas de la enfermedad democrática se observan globalmente, como lo indican los estudios de V-Dem. La calidad de la democracia a nivel global cae al nivel de 1985, y desde 2009, el porcentaje de la población mundial que vive en autocracias (o en proceso de autocratización) supera al que vive en democracias. Curiosamente, y yendo en contra-tendencia global, en la última década en América Latina los niveles de calidad de la democracia han crecido, sin perjuicio de lo cual los autoritarismos se han consolidado en Nicaragua y Venezuela (Nord et al., 2024), y no se avizoran cambios en Cuba.

En tercer lugar, es relevante examinar la relación entre protesta y democracia porque la movilización social fue un catalizador fundamental de las luchas contra las dictaduras y de la causa de la democracia durante el siglo XX. Los movimientos populares fueron condición necesaria para iniciar transiciones a la democracia en América Latina y Medio Oriente (Ahmed, 2013; Kadivar & Caren, 2016; Kadivar & Ketchley, 2018). En la actualidad, seguimos observando que la movilización ciudadana tiene un rol importante en las luchas contra las tendencias autoritarias y los agentes antidemocráticos, como hemos visto recientemente en países tan distintos como Polonia y Guatemala. En estos países, las campañas pro-democracia fueron iniciativa de amplias coaliciones de actores de la sociedad civil, en la que jugaron un rol fundamental las mujeres (Polonia), y los pueblos indígenas (Guatemala). Las movilizaciones contra el pacto de corruptos de Guatemala, y contra un gobierno que amenazaba los derechos de las mujeres y otras minorías en Polonia,

fueron fundamentales para detener (al menos momentáneamente) procesos de reversión democrática ya en curso.

A estas razones para revisar las interacciones entre democracia y movimientos sociales, que podemos calificar como razones de actualidad, o coyuntura, hay que agregar otras que tienen relación con los enfoques teóricos que han adoptado las ciencias sociales para interpretar estas interacciones y dinámicas. Cuando se revisan varias literaturas, se puede notar que hay dos aproximaciones a la relación entre democracia y conflicto social. La primera adopta una visión optimista sobre los efectos de los movimientos sociales para la democracia, y asume que la presión popular es capaz de torcer la oposición de elites tradicionales, extractivas o rentistas. La segunda, en tanto, mantiene una visión más bien agnóstica, la protesta popular no necesariamente tiene efectos positivos, y considera los potenciales efectos negativos de la movilización. En las siguientes secciones reviso estas visiones con mayor detención, relacionándolas con otros cuerpos de literatura.

Visión positiva sobre el conflicto y la democracia

La visión optimista sobre democracia y movimientos sociales es la que encontramos en la literatura del campo “movimientos sociales”, tanto en su versión anglosajona clásica (por ejemplo, autores como Sydney Tarrow) como en su versión europea (desde Alain Touraine a Donatella della Porta). La influencia de estos autores en las ciencias sociales latinoamericanas está muy extendida. En general, los estudiosos que se inspiran en estos autores y visión identifican en los movimientos sociales un factor de expansión de la ciudadanía. Estos estudios, por lo común, adoptan una definición de democracia que enfatiza en sus componentes sustantivos por sobre los aspectos formales o procedimentales, y pone atención en los resultados de la acción política, lo que ella produce (por ejemplo, su eficiencia para producir bienes públicos, o la *responsiveness*), en las bases sociales de la democracia, o sus macro condicionantes históricos.

Basándome en la miríada de estudios que se inscriben en este enfoque, identifiqué cuatro mecanismos por los que los movimientos sociales deberían tener una influencia positiva sobre la democracia y los procesos de democratización: confianza, agregación de intereses, creación de canales, y costos de la represión.

El primer mecanismo es la formación de vínculos de confianza (*trust-building*). Los movimientos sociales establecen nuevos vínculos entre personas, organizaciones e instituciones públicas, y al hacerlo crean ciudadanos. Este es un argumento expuesto muy bien por Charles Tilly (2000, 2007), valiéndose de las ideas de Robert Putnam sobre el capital

social (Putnam, 2000), por el que las redes organizacionales, el capital social, las normas de reciprocidad y la confianza van de la mano. Estas propiedades son condiciones de funcionamiento de la democracia, y a la vez son productos que un régimen razonablemente democrático promueve directa o indirectamente. Un régimen democrático está basado en la libertad de asociación, el pluralismo y la libertad de expresión, y tal como lo explica Tilly, las democracias integran redes pre-existentes de confianza y les dan forma institucional.

Es interesante notar que estas redes de confianza son esencialmente las mismas redes que permiten la emergencia de mercados y del capitalismo. El intercambio económico se basa en confianzas mutuas, sobre el valor de los productos que se comercian, sobre los medios de pago, las cadenas de comercio, la predictibilidad de los intercambios, de los precios (su estabilidad o progresión en el tiempo). Los mercados populares, las ferias callejeras, tanto como las bolsas de comercio, requieren de redes pre-existentes de confianza. La base sociológica que hizo posible los procesos de democratización que identificó Tocqueville en su viaje por los Estados Unidos a mediados del s. XIX proviene de la superposición de redes de confianza social y económica.

Un segundo mecanismo es la agregación de intereses: los movimientos sociales representan demandas que no necesariamente están presente en la agenda de los partidos políticos. A través de la movilización política, esas demandas pueden ser incorporadas por los partidos y procesadas por el sistema político. Los movimientos sociales impulsan la deliberación, a través de la creación de controversias. Las elites políticas no pueden evitar posicionarse respecto de ellas, pues no hacerlo pone en riesgo su propia posición de poder. La deliberación está en el centro de las definiciones de democracia y de conceptos adyacentes, como el de esfera pública y esfera cívica (Alexander, 2006; Levine, 2022), y su dinamismo permite arribar a nuevos acuerdos.

Un tercer mecanismo es la creación de canales para llevar temas y actores a los centros de poder y toma de decisiones. Los movimientos sociales, sus organizaciones y plataformas, son en sí mismos canales por los que intereses, demandas, actores e identidades luchan por el poder. El sufragio y la afiliación a partidos políticos son dos de los canales principales de la democracia electoral. Los movimientos sociales ensanchan la participación sociopolítica y la propia noción de ciudadanía al ampliar la oferta participativa. Los partidos políticos de base popular, como los partidos indígenas en Bolivia o Ecuador, o los partidos de base sindical en Uruguay o en Brasil, son ejemplos de consolidación de un canal que permite amplificar la influencia de actores que tienen una desventaja estructural en cuanto a sus recursos de poder (Anrí, 2018;

Seoane & Taddei, 2002). Otros canales de relacionamiento entre sociedad y estado, y que suelen ser vistos como menos virtuosos dado que sus efectos son controversiales, son el corporativismo, y particularmente el clientelismo.

La idea de que los movimientos sociales representan la incorporación sociopolítica está desarrollada en el libro de Ruth y David Collier (2002) *Shaping the political arena*, que es una obra de referencia en el institucionalismo histórico y en los estudios latinoamericanos sobre sindicalismo y sistema político. Los Collier planteaban que en las primeras décadas del s. XX, la lucha política del movimiento obrero y sus diversos vínculos con los partidos de base popular, crearon distintos modos de incorporación de las clases populares en el Estado. Así, los años de entreguerras (1920-1940) fueron una coyuntura crítica en el proceso de maduración política de la clase trabajadora. Las luchas anti-neoliberales de la primera década del siglo XXI en países como Argentina y Bolivia, han sido descritas como el periodo de la “segunda” incorporación (Silva & Rossi, 2018).

El cuarto mecanismo es que el costo de las regresiones autoritarias aumenta cuando los movimientos son más activos. Aquí la cuestión es que, en tiempos de comunicaciones en tiempo real, redes sociales, e internet, la masividad de una protesta hace más difícil para un gobierno (cualquier gobierno) tomar la decisión de reprimir. Reprimir requiere de amasar recursos específicos, es costoso, comporta riesgos, y puede fácilmente resultar contraproducente. Incluso gobiernos que están dispuestos a reprimir no pueden hacerlo en toda ocasión y todo el tiempo. Por ejemplo, durante las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, hubo momentos en que la policía fue, en los hechos, sobrepasada por los manifestantes. La multiplicación de los focos de la protesta en el territorio, y la altísima frecuencia de sus turnos de guardia, llevó a que la policía no pudiera dar abasto en su cobertura. Los numerosos saqueos que se produjeron en las periferias de las grandes ciudades son una prueba de ello. Cuando una protesta escala en masividad, escapa a todos los planes de control que manejan las autoridades y policías, lo que crea situaciones de potencial desborde. Tal escenario puede animar a más gente a salir a la calle, ante la percepción de que los riesgos para los manifestantes bajan. Asimismo, ello puede ser conducente a situaciones de mayor violencia de parte de los manifestantes, pues se confirma la impresión de que la policía es ineficaz.

Erica Chenoweth y otros (Chenoweth et al., 2017a; Chenoweth & Stephan, 2011) han sugerido la existencia de “la regla del 3,5%”. Cuando esa proporción de la población de un país participa activamente de un movimiento de masas, estos movimientos consiguen sus objetivos incluso cuando se trata de demandas maximalistas, como la

independencia de un territorio o el fin de la ocupación colonial. En 2019, Chile tenía una población aproximada de unos 18 millones de personas. La manifestación del 25 de octubre de 2019 convocó a más de un millón de personas solo en Santiago, es decir, el doble de la cifra que sugiere Chenoweth, y hay evidencia de que en al menos otras dos ocasiones se alcanzaron cifras superiores al 3,5% (que, en 2019, corresponde a unas 630 mil personas).

Las dinámicas creadas por las respuestas de los gobiernos a las protestas, particularmente la represión, las contra-manifestaciones, el escalamiento, la radicalización y violencia, es central para entender los impactos y las implicancias de las manifestaciones populares (Chenoweth et al., 2017b; della Porta, 2014; Lewis & Ives, 2023). Los autoritarismos del siglo XXI han incorporado nuevas tácticas de control de la protesta, como la infiltración de agentes provocadores, la divulgación de noticias falsas, la denuncia de la presencia de agentes extranjeros, o el descrédito de sus líderes u organizadores. También se ha probado con el corte de las redes de internet o el ataque informático a plataformas usadas por los activistas (en contextos tan disímiles como Nicaragua, Hong Kong o Rusia). Estas tácticas impiden la coordinación entre grupos y organizaciones insurgentes, desmovilizan, y previenen ciertos escenarios contraproducentes como la desertión de agentes de la policía, o el rompimiento del bloque dominante por la aparición de sectores menos dispuestos a apostar todo a la violencia represiva.

Visión agnóstica del conflicto social y la democracia

La segunda perspectiva es más bien agnóstica sobre la relación entre democracia y movilización social. Un claro ejemplo de esta visión lo ofrece la “transitología”, es decir, la literatura sobre transiciones a la democracia. Para los autores clásicos en este campo de estudios, el rol de los movimientos sociales durante las transiciones desde el autoritarismo a la democracia era más bien limitado (O'Donnell et al., 1986). Los actores fundamentales eran las facciones moderadas tanto en el campo del régimen –ya fueran mandos militares pragmáticos, o facciones civiles proclives a la negociación– como en el campo de la oposición democrática. Cuando estas facciones conseguían pactar una salida negociada, se viabilizaba el fin de las dictaduras. En este cuadro, la protesta social podía actuar como catalizador de una voluntad de negociación, o como incentivo para que las facciones más moderadas en ambos campos tomaran distancia de los sectores más radicales. Bajo ciertas circunstancias el rol de los movimientos sociales puede ser positivo, pero solo si da paso al protagonismo de las elites moderadas que son las que pactan la transición. La movilización popular, si es

radical y excesiva, podría resultar contraproducente. Así, el rol de la protesta popular en los procesos de democratización queda circunscrito y subordinado.

Otros autores como Levitsky y Ziblatt (2018) han puesto de relieve el rol fundamental de las elites en evitar los retrocesos autoritarios. Estos autores destacan como factores centrales el respeto a las normas democráticas y la tolerancia entre grupos de elite rivales. Samuel Huntington (2006), en tanto, advertía de que cuando las instituciones políticas son débiles, la movilización de la sociedad civil podría profundizar los clivajes, fomentado mayor descontento y creando más inestabilidad. Esta literatura plantea una visión elitista de la democracia, que pone todo el peso de la explicación en el comportamiento de las elites y en los procesos “desde arriba”, y que apunta a los riesgos de la movilización social.

¿Cuáles son los mecanismos que explicarían la ruptura de la relación virtuosa entre movilización social y democracia? Dos son particularmente importantes: polarización, y radicalización. La primera, socava la cooperación y la confianza. La radicalización, si se acompaña de violencia, acelera e intensifica la represión, lo que aumenta los costos de salir a la calle y desmoviliza. La violencia, además, introduciría tensiones en el campo de aliados del movimiento, creando un flanco de moderados y un flanco de actores radicalizados, que competirían entre sí en lugar de cooperar. Esto afecta la unidad del movimiento y abre fisuras que pueden ser aprovechadas por los detentadores del poder. En ambos casos, el efecto último sería el retraimiento de la sociedad, el agotamiento de las energías de cambio.

Sin embargo, hay evidencia de que la movilización social no aborta las democratizaciones ni conduce a un retroceso. Kadivar, por ejemplo, ha mostrado que, en los autoritarismos, la derrota del candidato del gobierno en unas elecciones es más probable cuando la elección tiene lugar siguiendo altos niveles de movilización pre-electoral, y que mayores niveles de movilización durante los autoritarismos son condición para unas democracias durables (Kadivar, 2018, 2022). En EEUU, las protestas del movimiento *Black Lives Matter* se asocian con el voto por candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2020 (Caren et al., 2023). En Chile, no hay modo de entender la victoria del candidato de la izquierda Gabriel Boric en las presidenciales de 2021 sin considerar los impactos del estallido social de 2019 en el sistema de partidos (Guzmán-Concha, 2022).

Organizar a la sociedad civil para resistir una dictadura es una tarea compleja, que requiere dedicación, persistencia, construir militancias y disponer de recursos para sostener la tarea por un periodo de tiempo prolongado. Además, las personas que se comprometen con

esa lucha arriesgan su seguridad personal, y el resultado de sus campañas es incierto. Las fuerzas de oposición necesitan invertir en recursos organizacionales y redes. Si esos recursos y redes consiguen un nivel de autonomía y autosuficiencia, entonces la lucha contra la dictadura puede generar legados duraderos en los años venideros. Si tal legado se reproduce en el tiempo, mayor será la fortaleza de esa sociedad para resistir tendencias autoritarias o reversiones en el futuro. En América Latina, tal vez el ejemplo que mejor describa estos procesos es el del Frente Amplio en Uruguay y su recorrido de 5 décadas en la política de ese país.

Ahora bien, cabe también considerar los movimientos sociales producen consecuencias no deseadas, es decir, que estos inician procesos que en gran parte escapan al control de los propios movimientos. Por más que los movimientos desarrollen estrategias muy meditadas, las reacciones que generan sus propias acciones son en gran parte impredecibles, lo que crea secuencias que requieren un constante balance por parte de todos los actores involucrados. Los actores que protagonizan las luchas anti-dictatoriales, enfrentan el desafío sucesivo de producir condiciones de consolidación y fortalecimiento institucional de la democracia, para los que, con frecuencia, no están preparados, a lo cual cabe sumar un contexto socioeconómico, institucional e internacional que no eligen.

En efecto, las dificultades para consolidar las democracias y prevenir los retrocesos autoritarios habla también de las incapacidades de los actores socio-políticos para producir un orden compartido. En clave de lectura gramsciana, se trata de dificultades históricas para producir hegemonía duradera.

Estudiosos de las revoluciones han observado que estas tienen efectos contradictorios sobre la democracia, especialmente en el largo plazo. Beissinger (2022), por ejemplo, ha argumentado que las revoluciones tienen efectos negativos para la democracia en el largo plazo. En particular, este autor ha mostrado que las revoluciones producen importantes mejoramientos en las libertades políticas en el corto plazo, pero que, en el largo plazo, estos indicadores se sitúan por debajo del promedio de las democracias electorales. Este argumento es coherente con lo que han sostenido otros autores como Levitsky y Way (2022), quienes vieron que las dictaduras que surgieron de revoluciones sociales son extraordinariamente durables, a pesar de enfrentar serias crisis económicas, olas de descontento social y enorme presión externa. La durabilidad del autoritarismo post-revolucionario, según estos autores, se explica por la supresión de organizaciones y centros de poder rivales, y la formación simultánea de una elite cerrada y un poderoso aparato

represivo. Estos efectos son más probables cuando a la revolución le sigue una guerra civil.

La literatura sobre movimientos sociales hace tiempo discute si para producir cambio político, son más efectivos los movimientos pacíficos o aquellos más disruptivos y violentos (Chenoweth & Schock, 2015; Gamson, 1975). De acuerdo con algunos autores (Piven, 2006; Piven & Cloward, 1979), el cambio efectivo ocurre solo cuando los movimientos populares adoptan tácticas disruptivas. En contraste, los estudios de Chenoweth y sus colaboradores han observado que las campañas de movilización que usan medios pacíficos y se distancian de la violencia, han obtenido cambios políticos de relevancia. En particular, ellos notaron que mientras que el 26% de las revoluciones violentas fueron exitosas, un 56% de las campañas no violentas lo fueron. Así mismo, vieron que, en el largo plazo, las protestas violentas se asocian con el autoritarismo, mientras que las campañas no violentas se asocian mayormente con la democracia¹. La cuestión de la eficacia de los distintos tipos de movimiento continúa siendo un tema controversial en el campo de estudios sobre movimientos sociales, y la evidencia es mixta.

Estallidos y cambio político

El tiempo presente se muestra como un período de inestabilidad social, surgido de tensiones sociales, de clase y raciales que se habrían agravado por el declive de la clase obrera organizada y por las reformas neoliberales de las décadas recientes (Badiou, 2012; Clover, 2016; della Porta, 2017; Gerbaudo, 2017; Hopkin, 2020). En América Latina, esta ola de inestabilidad social, sin embargo, muestra diferencias importantes respecto a las olas del siglo precedente.

En América Latina, la última revolución exitosa tuvo lugar en Nicaragua en 1979². En Europa occidental, el último caso de este tipo fue la revolución de los claveles en Portugal en 1974, que acabó con la dictadura del Estado Novo. En contraste, desde 1979 a la fecha, en la región MENA (Medio Oriente y Norte de África) se han registrado al menos 15 episodios revolucionarios, incluyendo a la primera y segunda

¹ Ellos estudiaron casos de campañas violentas y no violentas que buscaban un objetivo “maximalista”, es decir, derrocar un régimen o líder autoritario, buscar la independencia de un territorio ocupado por una potencia colonial, o la secesión de un territorio.

² Revolución exitosa en el sentido de un movimiento que consigue expulsar a la antigua elite política, tomar el poder e iniciar un proceso de construcción estatal y de un nuevo sistema social *ex novo*.

intifada, las revoluciones de la primavera árabe en Túnez, Egipto, Yemen, Siria, Libia en 2011 y 2012.

En América Latina, desde principio de este siglo vemos la aparición de una forma novedosa de descontento social de masas: las revueltas o estallidos sociales. Estos son movimientos populares no armados, mayormente pacíficos, aunque muy disruptivos y con frecuencia haciendo uso de formas de violencia inorgánica, saqueos, destrucción de mobiliario público, enfrentamientos con la policía. Los estallidos son multidimensionales, pues involucran un amplio abanico de demandas, y consisten en la aparición simultánea de decenas de focos de protesta en las que participan varias categorías sociales. Las protestas surgen en modo espontáneo y escalan rápidamente en masividad y disruptividad. Estas características producen el colapso momentáneo del orden social, muchas actividades económicas se interrumpen y el estado se muestra temporalmente incapaz de controlar la situación, restablecer el orden público e imponer su autoridad. El resultado inmediato de los estallidos sociales es una crisis política, que visibiliza una ruptura radical entre elites y ciudadanos. Ejemplos de estallidos sociales son las protestas de diciembre de 2001 en Argentina, los estallidos de Chile y Colombia en 2019, el de Perú en 2022, y las grandes protestas en Ecuador en 2019, entre otros.

Cuando se consideran los impactos de largo plazo de los estallidos, surge una imagen compleja y contradictoria. Por un lado, vemos que la capacidad de las multitudes en revuelta para producir consensos duraderos es limitada y, en general, frágil. En todos los casos, el rol de las elites políticas, contra las que las multitudes se rebelan, se mantiene durante la crisis y en sus fases sucesivas —esto es justamente una de las características clave que distingue los estallidos de las revoluciones—. La capacidad de estos movimientos de producir cambios sustantivos sigue estando mediada a través de las instituciones y el sistema de partidos. En parte, esto explica la rápida aparición de un fuerte efecto de rebote: emergen contra-movimientos que desafían y se enfrentan al estallido. A esto se le ha llamado reversión autoritaria, revolución pasiva, o contra-estallido social.

Los contra-estallidos también pueden adoptar la forma de movimientos de masas, e incluso pueden movilizar a los mismos grupos que participaron de los estallidos originales. La falta de organicidad de los estallidos originales, su carácter espontáneo y sus vínculos laxos o inexistentes con las organizaciones tradicionales de la protesta de la sociedad civil, sumada a la generalidad de sus demandas, los hace maleables, susceptibles a mutar. Un mismo estado de ánimo (el cabreo, la rabia, la desesperanza, el anti-elitismo), puede facilitar que miles salgan a las calles en modo volcánico, como llevarlos a sentirse atraídos por

ofertas política de corte populista, nacionalista o ultra-liberal que se valen del mismo cabreo y rabia. Por su parte, las corrientes que se movilizan durante los estallidos también pueden desarrollar tendencias como el ritualismo, el esencialismo o la desmovilización, las que hacen aún más difícil la proyección en el tiempo de esos movimientos y su influencia futura³.

Así, la calle y el enfado anti-sistémico dejan de ser territorio exclusivo de los movimientos progresistas. La rebeldía se vuelve de derechas, como plantea Stefanoni (2021). Las protestas sociales contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, que anticiparon el movimiento de masas que catapultó a Bolsonaro al poder, las raíces populares de la mayoría electoral de Javier Milei en Argentina (Semán, 2023), o las coincidencias sociológicas en el perfil de los votantes de ofertas políticas en apariencia tan distintas como el Partido de la Gente y la Lista del Pueblo en Chile, son ejemplos de este fenómeno. Los sectores populares son heterogéneos, están sociológicamente más fragmentados que en el pasado, y sus lazos orgánicos con las organizaciones populares tradicionales son más débiles.

La rabia, el desánimo o la frustración que provocan sucesivos gobiernos incapaces de producir reformas largamente esperadas, se consolidan como estados permanentes de ánimo colectivo. Los movimientos populares que tradicionalmente movilizaron a los grupos subalternos tienen dificultades para interpretarlos. Los malestares sociales se hacen más variados, se fragmentan, y su representación en el ámbito público deja de ser territorio exclusivo de las organizaciones tradicionales. Otros grupos e individuos entran a disputar los sentidos de la participación desde abajo. Esto configura una situación que distingue el conflicto social del siglo XXI de aquel que predominó durante el siglo XX. En la actualidad, hay más actores movilizando el descontento, una mayor fragmentación del campo popular, se multiplican los vínculos potenciales entre individuos, causas y las plataformas de movilización (lo que dificulta la creación de lealtades entre estos), y se hace más difícil sostener en el largo plazo desafíos desde abajo.

Los estallidos son convulsiones de altísima volatilidad que abren ventanas de oportunidad a actores de signo variado, cuyas agendas

³ Por ritualismo entendemos la tendencia de grupos e individuos a repetir las mismas consignas y formas de movilización que se consideraron exitosas al inicio del ciclo, sin considerar el cambio en las condiciones. Por esencialismo, entendemos la tendencia a ver en los estallidos al oráculo que representa el pueblo con fidelidad, y a denunciar lo que se considera que traiciona ese mensaje. La desmovilización es el repliegue completo a los ámbitos de la vida privada de activistas altamente comprometidos durante la fase expansiva de las protestas.

apenas coinciden en el estado de ánimo social que dicen movilizar. En suma, las consecuencias de las movilizaciones de masas dependerán de los contextos en que estas surgen, del tipo de movilización (pacífica, violenta), y de los legados potenciales que esas movilizaciones pueden dejar en la sociedad civil. También, es importante considerar los arcos temporales que usamos para evaluar efectos, pues arcos demasiado cortos (o demasiado largos) pueden dar una impresión equivocada sobre las consecuencias del malestar de masas.

Bibliografía

- Ahmed, A. (2013). The Existential Threat: Varieties of Socialism and the Origins of Electoral Systems in Early Democracies. *Studies in Comparative International Development*, 48(2), 141–171.
<https://doi.org/10.1007/s12116-012-9121-8>
- Alexander, J. C. (2006). *The Civil Sphere*. Oxford University Press.
- Anria, S. (2018). *When Movements Become Parties: The Bolivian MAS in Comparative Perspective*. Cambridge University Press.
- Badiou, A. (2012). *The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings*. Verso Books.
- Beissinger, M. R. (2022). *The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of Rebellion*. Princeton University Press.
- Caren, N., Andrews, K. T., & Nelson, M. H. (2023). Black lives matter protests and the 2020 Presidential election. *Social Movement Studies*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2216652>
- Chenoweth, E., Perkoski, E., & Kang, S. (2017a). State repression and nonviolent resistance. *Journal of Conflict Resolution*, 61(9), 1950–1969.
- Chenoweth, E., & Schock, K. (2015). Do Contemporaneous Armed Challenges Affect the Outcomes of Mass Nonviolent Campaigns? *Mobilization: An International Quarterly*, 20(4), 427–451.
<https://doi.org/10.17813/1086-671X-20-4-427>
- Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. Columbia University Press.
- Clover, J. (2016). *Riot. Strike. Riot.: The New Era of Uprisings*. Verso Books.
- Collier, R. B., & Collier, D. (2002). *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*. University of Notre Dame Press.
- Crouch, C. (2004). *Post-Democracy*. Polity.
- della Porta, D. (2014). On Violence and Repression: A Relational Approach (The Government and Opposition / Leonard Schapiro Memorial Lecture, 2013). *Government and Opposition*, 49(2), 159–187.

- della Porta, D. (Ed.). (2017). *Global Diffusion of Protest. Riding the Protest Wave in the Neoliberal Crisis*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789462981690>
- Gamson, W. A. (1975). *The strategy of social protest*. Dorsey.
- Gerbaudo, P. (2017). *The Mask and the Flag: Populism, Citizenism, and Global Protest*. Oxford University Press.
- Guzmán-Concha, C. (2022). Power, Legitimacy and Institutions in the October 2019 Uprising in Chile. *Latin American Perspectives*.
- Hopkin, J. (2020). *Anti-System Politics: The Crisis of Market Liberalism in Rich Democracies*. Oxford University Press.
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kadivar, M. A. (2018). Mass Mobilization and the Durability of New Democracies. *American Sociological Review*, 83(2), 390–417. <https://doi.org/10.1177/0003122418759546>
- Kadivar, M. A. (2022). *Popular Politics and the Path to Durable Democracy*. Princeton University Press.
- Kadivar, M. A., & Caren, N. (2016). Disruptive Democratization: Contentious Events and Liberalizing Outcomes Globally, 1990–2004. *Social Forces*, 94(3), 975–996. <https://doi.org/10.1093/sf/sov096>
- Kadivar, M. A., & Ketchley, N. (2018). Sticks, Stones, and Molotov Cocktails: Unarmed Collective Violence and Democratization. *Socius*, 4, 2378023118773614. <https://doi.org/10.1177/2378023118773614>
- Levine, P. (2022). *What Should We Do?: A Theory of Civic Life*. Oxford University Press.
- Levitsky, S., & Way, L. (2022). *Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism*. Princeton University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die: The International Bestseller: What History Reveals About Our Future*. Penguin UK.
- Lewis, J. S., & Ives, B. (2023). Repression, backlash, and the duration of protests in Africa. *Journal of Peace Research*, 00223433231186449. <https://doi.org/10.1177/00223433231186449>
- Markoff, J. (1996). *Waves of democracy: Social movements and political change*. Pine Forge Press.
- Nord, M., Lundstedt, M., Altman, D., Angiolillo, F., Borella, C., Fernandes, T., Gastaldi, L., Good God, A., Natsika, N., & Lindberg, S. I. (2024). *Democracy Winning and Losing at the Ballot: Democracy Report 2024* (SSRN Scholarly Paper 4774409). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4774409>
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.

- O'Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*. JHU Press.
- Piven, F. F. (2006). *Challenging Authority: How Ordinary People Change America*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Piven, F. F., & Cloward, R. A. (1979). *Poor people's movements: Why they succeed, how they fail*. Random House Inc.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Semán, P. (Ed.). (2023). *Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?* Siglo XXI Editores.
- Seoane, J., & Taddei, E. (2002). Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina. OSAL. Observatorio Social de América Latina N. 9 (septiembre-diciembre, 67-72, CLACSO, <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110216011537/13introcrono.pdf>
- Silva, E., & Rossi, F. (2018). *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*. University of Pittsburgh Press.
- Stefanoni, P. (2021). *¿La rebeldía se volvió de derecha?: Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)*. Siglo XXI Editores.
- Tilly, C. (1983). Speaking Your Mind Without Elections, Surveys, or Social Movements. *The Public Opinion Quarterly*, 47(4), 461–478.
- Tilly, C. (2000). Processes and Mechanisms of Democratization. *Sociological Theory*, 18(1), 1–16.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804922>
- Tilly, C. (2008). *Contentious Performances* (1st edition). Cambridge University Press.

Efectos de la crisis de intermediación en los movimientos sociales: desmovilización de los movimientos estudiantil y No+AFP en Chile

Joaquín Rozas-Bugueño

I. Introducción

La literatura sobre movimientos sociales ha sido prolífica en estudiar movimientos sociales y ciclos de protestas, sobre todo aquellos masivos y que han generado impactos políticos tangibles, como cambios de régimen, creación de partidos políticos o cambios de políticas públicas (Amenta et al., 2018; Tarrow, 2011; Giugni, 2008). Sin embargo, se ha prestado menor atención a procesos de desmovilización (Zeller, 2020; Davenport, 2015; Tarrow, 2011). Este vacío en la literatura es aún más claro en América Latina, donde la desmovilización se ha estudiado poco, aunque existen importantes excepciones como las investigaciones de Kowalchuk (2005) y Lapegna (2013) sobre la desmovilización del campesinado en El Salvador y Argentina, respectivamente. Para el caso chileno, hay investigaciones que abordan la desmovilización de actores sociales en la década de 1990 como la antesala a la irrupción de distintas olas de protestas desde 2006 en adelante (Garretón, 2016; von Bülow y Donoso, 2017; Somma y Bargsted, 2015). Sin embargo, sólo se registra un estudio que toma como objetivo central explicar la desmovilización de movimientos sociales, el estudio de Koppelman (2016) que analiza el retroceso de la movilización social en las poblaciones después de la vuelta a la democracia. De esta forma, aún se sabe poco acerca de los factores que explican la desmovilización.

La década del 2010 en Chile ha sido particularmente movilizadora, emergiendo diferentes ciclos de protesta —estudiantil (Donoso, 2017; Bidegain y Maillet, 2021), medioambiental (Schaeffer, 2017; Schiappacasse, et al., 2024), territorial (Delamaza et al., 2017), feminista (Palacios-Valladares, 2022) y en contra del sistema de pensiones (Rozas y Maillet, 2019)— culminando el período con el estallido social de 2019 (Somma et al., 2021; Sehnbruch y Donoso, 2021). Sin embargo, no todas las organizaciones que participaron de estos ciclos se mantienen igualmente activas, experimentando, muchas de ellas, procesos de desmovilización. Esto ocurrió con dos organizaciones de movimientos sociales (OMS) que fueron protagonistas de la década de 2010: la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que lideró la

movilización estudiantil de 2011 por la gratuidad universitaria y la calidad de la educación (Donoso, 2017; von Bülow y Bidegain, 2015), y la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP⁴, que irrumpió en 2016 con las movilizaciones en contra del sistema privado de pensiones (Rozas y Maillet, 2019).

¿Qué explica la desmovilización de movimientos sociales? ¿Qué factores permiten entender la desmovilización de la CONFECH y No+AFP en Chile? Este capítulo expone un análisis comparado de la desmovilización del movimiento estudiantil y el movimiento No+AFP a un nivel meso, estructurado en un diseño de comparación de casos más diferentes, considerando a la CONFECH y No+AFP como casos disímiles. Ambas OMS se diferencian en sus demandas sectoriales (fortalecimiento de la educación pública y en contra del sistema de pensiones de capitalización individual), el grado de impacto político, el gobierno que se encontraba en el poder mientras se desarrollaba el ciclo de protesta más relevante en el cual participaron, y en su estructura organizacional.

El análisis se basa en 31 entrevistas en profundidad con activistas de la CONFECH y No+AFP realizadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 de manera presencial y remota (ver tabla 1)⁵, documentos secundarios que aborden ambos casos, datos de eventos de protesta del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y trabajos previos del autor (Rozas-Bugueño, 2024; Rozas-Bugueño et al., 2022; Rozas y Maillet, 2019; 2024). El análisis sostiene que la desmovilización de ambas OMS se explica por la crisis de intermediación. La intermediación se entiende como el proceso mediante el cual diversas organizaciones y actores emparejan expectativas individuales o colectivas con resultados o servicios (Sánchez-Cuenca, 2022). De esta forma, la crisis de intermediación es la afectación de la función mediadora de organizaciones intermedias de diferentes esferas de la sociedad, en este caso las OMS (Sánchez-Cuenca, 2022; Rozas-Bugueño, 2024). En esta línea, la crisis de intermediación generó una falla organizacional en la CONFECH y No+AFP y pérdida de compromiso por parte de sus adherentes, afectando la capacidad de movilización de estas OMS y su incidencia política.

⁴ De ahora en adelante No+AFP.

⁵ Las entrevistas se desarrollaron en el marco de la tesis doctoral del autor, bajo el compromiso ético de anonimizar a los participantes, establecido mediante un consentimiento informado.

Tabla 1. Perfil de las Entrevistas

Movimiento	Movimiento estudiantil		Movimiento No + AFP		Total
Género	Presencial	Remoto	Presencial	Remoto	
Hombre	7	2	5	1	15
Mujer	9	3	2	2	16
Total	16	5	7	3	31

Fuente: elaboración propia.

El capítulo se estructura de la siguiente manera. Primero, se presenta una discusión sobre los factores explicativos de la desmovilización y cómo se inserta el concepto de crisis de intermediación en este debate. Segundo, se describen los casos a comparar. Tercero, se presentan los resultados del análisis comparado. Finalmente, se concluye con reflexiones sobre cómo este estudio puede aportar a la literatura sobre desmovilización.

II. Desmovilización y crisis de intermediación

Tarrow (2011) sostiene que los ciclos de protesta se componen por al menos tres fases, la emergencia, el auge y la desmovilización. Por lo tanto, la desmovilización es parte natural del proceso de movilización, en el cual interactúan distintos actores, como los movimientos sociales y OMS, actores de la política institucional y actores del sector privado (Tarrow, 2011; Zeller, 2020). De hecho, como sostienen Piven y Cloward (1977), lo más común es observar movimientos sociales que fallan en lograr sus cometidos y terminan desapareciendo o siendo cooptados. Pese a ser parte intrínseca de la movilización, la literatura le ha prestado menos atención a la desmovilización, la cual se ha enfocado más en el origen y desarrollo de la movilización (Zeller, 2020; Davenport, 2015; Demirel-Pegg, 2017). Por su parte, Davenport (2015, p. 21) definió la desmovilización como un concepto amplio, referido a cuatro posibles expresiones del fenómeno:

- (1) término oficial y/o alteración significativa de la institución formal involucrada en confrontar a las autoridades;
- (2) salida de individuos (miembros) de organizaciones relevantes especialmente de los miembros fundadores y/o centrales que participan con mayor frecuencia;
- 3) la terminación o reducción significativa de las intervenciones disidentes (comportamientos);
- y 4) un cambio fundamental en las ideas del desafiante

(particularidades de la reivindicación) alejándose de lo que se había establecido previamente⁶.

Este capítulo se centra en el tercer punto de Davenport (2015), considerando que la CONFECH y No+AFP no han desaparecido, pero sí sus acciones contenciosas han disminuido. En una línea similar, Karmel y Kuburic (2021) argumentan, en su estudio sobre la desmovilización de los manifestantes de la primavera árabe en Jordania, que la desmovilización tiene relación con un proceso donde la acción colectiva decrece, más que con la desaparición del movimiento. Además, considero necesario agregar la pérdida de incidencia política por parte de los movimientos y OMS como otra expresión de la desmovilización, tomando en cuenta que la mayoría de los movimientos nacen con un horizonte de cambio, el cual se materializa en demandas sociales que son movilizadas a través de un repertorio de acción colectiva. La incidencia política de los movimientos sociales es un elemento sustancial para entender su capacidad de movilización y de alcanzar sus objetivos. Así, la falta de incidencia también sería una expresión de desmovilización a considerar.

Los analistas de la desmovilización han dividido los factores explicativos entre internos y externos (Zeller, 2020; Davenport, 2015). Los factores internos son aquellos que tienen lugar al interior del movimiento social, mientras que los factores externos están vinculados a elementos tales como el contexto político y actores que se encuentran fuera del movimiento. Por un lado, la literatura ha identificado múltiples elementos a nivel interno. Tarrow (2011) explica que la radicalización y la institucionalización son procesos que los movimientos sociales suelen experimentar en las fases de desmovilización, donde después del *peak* de movilización, el movimiento se divide entre quienes buscan la institucionalización de sus demandas para poder alcanzar parte de sus objetivos y quienes buscan radicalizarla hasta lograr la totalidad de sus demandas. Al mismo tiempo, los movimientos pueden desmovilizarse en función del estado de cumplimiento de sus demandas; si se alcanzaron los objetivos, el movimiento deja de tener sentido, mientras que, si fracasó en conseguir los objetivos, el movimiento puede verse afectado por un desánimo entre sus adherentes (Zeller, 2020). Davenport (2015)

⁶ Traducción propia del inglés al español de la cita textual original: “(1) official termination and/or significant alteration of the formal institution engaged in challenging authorities; (2) departure of individuals (members) from relevant organizations – especially the founding and/or core members that participate most frequently; (3) termination of or significant reduction in dissident interventions (behaviors); and (4) a fundamental shift in the ideas of the challenger (particularities of the claim) away from what was earlier established.

presenta cinco elementos internos que inciden en la desmovilización, y que Zeller (2020) agrupa en dos categorías: (i) pérdida de participación al interior de movimientos sociales, en los que se encuentran el *burnout* y la pérdida de compromiso, donde los activistas y adherentes dejan de participar en los movimientos por el desgaste personal que supone sostener una movilización por mucho tiempo; y (ii) la falla organizacional, que contiene la pérdida de adherentes, la faccionalización (división interna de la OMS en distintos grupos con visiones ideológicas y estratégicas diferentes), y la rigidez organizacional (incapacidad organizacional para cambiar objetivos y estrategias para adaptarse a nuevos escenarios).

Por otro lado, la literatura ha identificado como factores externos aquellos elementos asociados al contexto político (Tarrow, 2011; McAdam y Tarrow, 2018). Entre éstos se destacan la cooptación del movimiento o parte de este (Piven y Cloward, 1977). Este es un fenómeno que tiene particular incidencia en el caso chileno. Distintos autores han sostenido que los movimientos sociales fueron desactivados por parte de los gobiernos de centroizquierda de la Concertación de Partidos por la Democracia para disminuir la conflictividad y evitar un retroceso autoritario (Garretón, 2016; Bidegain, 2017; Somma y Bargsted, 2015).

La percepción de amenaza también ha sido relevada como un disparador de la desmovilización. Este elemento tiene que ver con un cambio del contexto político y cómo el movimiento reanaliza el mismo, donde se espera que, si se percibe que los costos de movilización aumentan y sobrepasan los posibles beneficios, el movimiento se desmovilice (Heaney y Rojas, 2010). La participación de los partidos en los movimientos también es un elemento relevante. La cercanía de ciertos actores políticos, que en un momento de auge de la movilización fueron aliados, también pueden generar desmovilización. Por ejemplo, el estudio de Heaney y Rojas (2010) muestra que los demócratas dejaron de participar en el movimiento anti-guerra en los 2000 para enfocarse en la elección de Obama, dejando al movimiento disminuido y con mayor protagonismo de OMS radicales.

El factor externo al que más atención se le ha prestado en el estudio de la desmovilización es la represión. Davenport (2015) centra buena parte de su análisis sobre el movimiento de la República de Nueva África en Estados Unidos en la represión, entendiéndola como las acciones efectuadas por el estado, sean violentas o no, para desarmar una organización. A ello, se suma el estudio de Zeller (2020) que aborda la desmovilización del movimiento *For Fair Elections* en Rusia, en el cual se diferencia entre represión abierta (pública) o cerrada y se señala que puede ser efectuada tanto por actores estatales como actores privados.

Este capítulo se centra en los elementos internos de la desmovilización, particularmente en la falla organizacional y en la pérdida de compromiso, haciendo dialogar estos dos factores endógenos con un elemento estructural que no ha estado presente en la literatura, en parte por su novedad: la crisis de intermediación. Sánchez-Cuenca (2022) presenta el concepto de crisis de intermediación, argumentando que la crisis de las sociedades contemporáneas está dada por la incapacidad de las organizaciones en entender el *input* de la sociedad y entregar servicios y resultados en dicha dirección. Lo que entra en crisis, sostiene Sánchez-Cuenca, es la función mediadora entre preferencias o necesidades y resultados o bienes que ejercen distintas organizaciones intermedias en la sociedad.

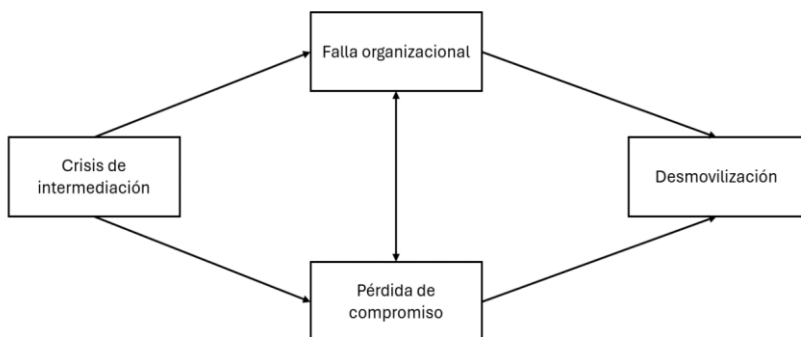
La crisis de representación que atraviesan los partidos en gran parte de las democracias occidentales se circunscribe en el problema de la intermediación, como también organizaciones que son parte de otras esferas societales, como los bancos en el mercado y las instituciones especializadas en arte y cultura (Sánchez-Cuenca, 2022). En la política, el mercado y la cultura han ido emergiendo nuevos actores que buscan reemplazar a los intermediarios tradicionales, como lo son los movimientos políticos no tradicionales de izquierdas y derechas, organizaciones que median los nuevos mercados virtuales de criptomonedas y las plataformas online de crítica de cine levantadas por individuos de a pie (Sánchez-Cuenca, 2022). Lo que tienen en común estas nuevas organizaciones son la intención de hacer más directa e instantánea la mediación entre la expectativa individual y el resultado. Esta crisis tiene un componente dual: por un lado, el desajuste en la intermediación por parte de las organizaciones y, por otro lado, contempla un proceso estructural de desconfianza de los individuos hacia las organizaciones intermediadoras (Sánchez-Cuenca, 2022).

Sin embargo, dentro de las esferas que Sánchez-Cuenca (2022) aborda, no explora la de los movimientos sociales. Como sostengo en otro trabajo, los movimientos sociales, y particularmente las OMS, también se han visto impactados por la crisis de intermediación; siendo la participación de activistas sociales en la Convención Constitucional de Chile (2021-2022) reflejo de ello (Rozas-Bugueño, 2024). Más de un 60% de la composición de este órgano no tenía militancia política y muchos de ellos provenían de organizaciones sociales (Rozas-Bugueño et al., 2022). No obstante, la mayoría de estas organizaciones sociales eran relativamente nuevas y de sectores de movilización que no habían sido parte de los ciclos de protesta más relevantes de la década del 2010 (Rozas-Bugueño, 2024). Lo que habría ocurrido es un proceso en el cual la ciudadanía fue asimilando a los movimientos sociales como parte de la

política tradicional y con organizaciones mediadoras altamente criticadas, como los partidos políticos (Rozas-Bugueño, 2024).

Dicho lo anterior, y siguiendo los trabajos de McAdam et al., (2001) y Tarrow (2011) que abogan por un enfoque relacional entre distintos factores explicativos para estudiar la movilización social, propongo un mecanismo en el que la crisis de intermediación gatilla la falla organizacional y la pérdida de compromiso de los adherentes, y que estos elementos, en su interacción, explican la desmovilización.

Figura 1. Mecanismo explicativo de desmovilización



Fuente: elaboración propia.

III. Los casos: CONFECH y No+AFP

Las OMS a analizar son parte de los movimientos estudiantil y No+AFP. Ambas OMS han experimentado procesos de movilización diferentes desde la vuelta a la democracia (1990). Durante la década de 1990, la Concertación optó por la desmovilización de los movimientos sociales y cooptación de activistas sociales para evitar un retroceso autoritario (Garretón, 2016; Somma y Medel, 2017; Tricot, 2021). En este período, el movimiento estudiantil estuvo más abocado a la reconstrucción orgánica de las federaciones estudiantiles y de la CONFECH (Donoso, 2017), mientras que aún faltarían décadas para la formación de No+AFP (Rozas y Maillet, 2019).

Las primeras olas de movilización del movimiento estudiantil aparecieron en el inicio de la década de los 2000, lideradas por estudiantes secundarios. El año 2001, los estudiantes secundarios protestaron en Santiago por la demora de la entrega de la tarjeta estudiantil de transporte y el alza de la tarifa de transporte para los estudiantes, logrando la reducción de la tarifa y que la gestión del “pase

escolar” pasara de un consejo de empresas privadas de transporte a manos del Ministerio de Educación (Donoso, 2017). En 2006 emergió la movilización más relevante de la post-dictadura hasta ese entonces, la revolución pingüina (von Bülow y Bidegain, 2015; Donoso, 2013). Esta ola de protesta, también liderada por los estudiantes secundarios, se extendió a lo largo del país, con tomas de colegios y protestas multitudinarias. El gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) respondió a la movilización con un Consejo Asesor Presidencial que entregó una propuesta de reforma para reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), herencia de la dictadura. Tras un amplio acuerdo de todo el espectro político, la LOCE fue reemplazada por la Ley General de Educación, la cual no tocó las bases neoliberales del modelo. Este hecho fue asimilado por el movimiento estudiantil como una traición por parte del sistema político (von Bülow y Bidegain, 2015; Donoso, 2017). Con la instalación del gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014) y su agenda pro-mercado en el ámbito educacional, los estudiantes universitarios pasaron a la cabeza de un nuevo ciclo de movilización. El año 2011, los universitarios desde la CONFECH iniciaron un proceso de movilización a lo largo de todo el país en el que demandaron gratuidad en la educación superior, fortalecimiento de la educación pública, y fin al lucro en la educación. La movilización se extendió por casi todo ese año y fue reactivada hasta el último año del gobierno de Piñera, aunque con menos fuerza que durante el 2011 (Guzmán-Concha, 2012; Donoso, 2017).

Líderes estudiantiles como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Karol Cariola entrarían como diputados al Congreso el año 2014 (Ponce, 2024) y Michelle Bachelet, durante su segundo gobierno (2014-2018) incluiría como prioridad en su programa la reforma educacional, la cual culminó con la gratuidad en la educación para el 60% de la población y la eliminación de la selección y el copago en la educación secundaria (Bidegain y Maillet, 2021). Estos dos puntos dan cuenta de la fuerte incidencia política que tuvo el movimiento estudiantil.

Por su parte, No+AFP se formó el 2013, aglomerando sindicatos de diferentes gremios, con la Confederación Bancaria como punta de lanza (Rozas y Maillet, 2019). Sin embargo, el primer antecedente de No+AFP fue en 2008, cuando la Confederación Bancaria llamó por primera vez a una movilización para demandar el fin del sistema privado de pensiones (Rozas-Bugueño y Maillet, 2024). En un inicio, este movimiento fue trabajando desde las estructuras sindicales para luego ampliarse hacia organizaciones territoriales (Rozas y Maillet, 2019). El año 2016, No+AFP lideró una ola de protestas en contra de las AFP, que logró movilizar miles de personas en todo Chile (Rozas y Maillet, 2019).

El gobierno de Bachelet introdujo una reforma de pensiones al Parlamento, que dirigía parte de la cotización previsional a un esquema de solidaridad, estructurando un sistema mixto. No obstante, la reforma no fue aprobada. El segundo gobierno de Sebastián Piñera también introdujo una reforma de pensiones, pero con foco en el aumento de la cotización individual y el fomento de la competencia al interior del sistema, política que tampoco fue aprobada (Rozas-Bugueño y Maillet, 2024). Pese a que No+AFP no generó un cambio de políticas públicas como sí lo hizo el movimiento estudiantil, sí produjo un giro en la discusión política e instaló temas, como la solidaridad, que habían estado fuera del debate público desde la instalación de la política (Rozas-Bugueño y Maillet, 2024; Olivares y Carrasco, 2020).

Descritas las trayectorias de ambas OMS, este capítulo se estructura en base a un diseño de comparación de casos más diferentes, donde el factor en común entre las dos explica la desmovilización. Ambas OMS difieren en el sector de pertenencia, estudiantil y en contra de la privatización de las pensiones. Asimismo, el público al que principalmente buscan movilizar sus demandas también es diferente: estudiantes, y trabajadores y pensionados. Al mismo tiempo, el blanco de las críticas de los movimientos es distinto; por un lado, el movimiento estudiantil apela al Estado y, por otro lado, No+AFP critica a la industria de las AFP, además del Estado. Como se señaló en los párrafos anteriores, el impacto político de los movimientos también ha sido diferente, teniendo el movimiento estudiantil impactos políticos relevantes como la gratuidad en la educación superior, mientras que No+AFP no ha conseguido transformar el sistema de pensiones, pero sí impactar en la opinión pública y la discusión política. A su vez, el movimiento estudiantil tuvo como contendor al primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) durante el ciclo de protestas de 2011, mientras la movilización de No+AFP emergió en 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Por último, vale destacar que la estructura organizacional de las OMS difiere; No+AFP cuenta con una estructura organizacional más clásica, a partir de la estructura jerarquizada y centralizada de sindicatos de trabajadores, mientras que la CONFECH tiene una estructura menos rígida.

Ahora bien, hay factores contextuales que comparten los casos, tales como el diseño político institucional de Chile, la situación económica, y la crisis sanitaria del Covid-19, los cuales podrían interferir en el diseño. Sin embargo, si consideramos otros casos importantes de OMS movilizadas durante la década del 2010 en Chile, como el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA), el movimiento por el agua y los territorios (MAT) o la Coordinadora Feminista 8M, podemos constatar que hay organizaciones

que se mantienen movilizadas y que continúan teniendo incidencia política. Estas tres OMS tuvieron una importante participación en el proceso constituyente, consiguiendo representación al interior de Convención Constitucional (2021-2022) (ver Rozas-Bugueño et al., 2022; Rozas-Bugueño, 2024). Por su parte, la Coordinadora Feminista 8M ha mantenido su capacidad de convocatoria, dando cuenta de ello en cada conmemoración del 8 de marzo. En tanto, MODATIMA ganó la gobernación de la Región de Valparaíso en 2021 a través de la candidatura de Rodrigo Mundaca, su principal liderazgo, mientras que el MAT llevó a cabo los *cabildos por el agua* entre octubre de 2019 y marzo de 2020, la cual fue una experiencia participativa para problematizar la gestión del agua y la escasez hídrica, que contó con un importante despliegue territorial (ver Larocque et al., 2021). En este sentido, se podría aducir que los factores contextuales no estarían explicando la desmovilización, ya que otras OMS se mantienen movilizadas.

IV. Análisis

Esta sección presenta el análisis de la desmovilización de la CONFECH y No+AFP en torno al mecanismo explicativo introducido en la sección II. La sección se divide en tres partes. La primera, describe la desmovilización de las OMS; la segunda, analiza la crisis de intermediación que atraviesan ambas organizaciones; la tercera, se centra en la falla organizacional y la pérdida de compromiso de los adherentes de las OMS.

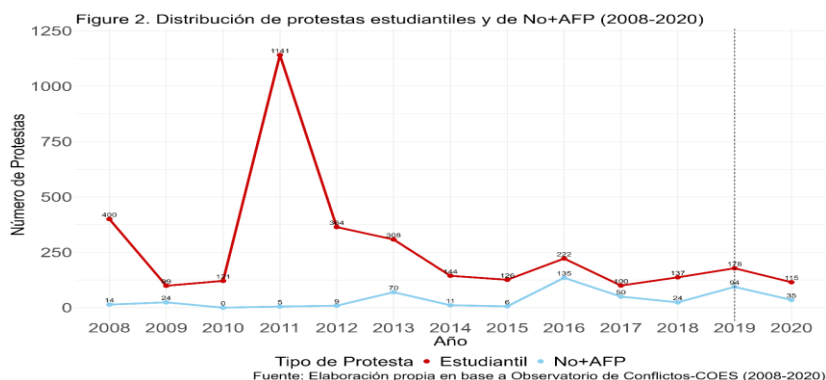
IV.1. Desmovilización de la CONFECH Y No+AFP

Para abordar la desmovilización de la CONFECH y No+AFP utilizo dos indicadores enraizados en la literatura (Tarrow, 2011; Davenport, 2015): la disminución de las acciones de protesta, y el debilitamiento de la capacidad de incidencia de los movimientos sociales. En primer lugar, un *proxy* para revisar la disminución de las acciones de protesta es analizar la trayectoria de ellas. La Figura 2 muestra la distribución de las protestas estudiantiles y relacionadas al sistema de pensiones entre 2008 y 2020, en la cual se puede apreciar que ha habido mayor presencia de protestas estudiantiles que de pensiones, y que los *peaks* de protestas estudiantiles fue en 2011 y el de las protestas de pensiones en 2016, lo que es congruente con lo descrito anteriormente. Después de ambos *peaks* de movilización, los dos tipos de protestas descienden. No obstante, el año 2019 vemos que hay un leve aumento de la movilización. En octubre de ese año ocurrió el estallido social, el cual fue la ola de protestas más masiva desde la vuelta a la democracia, que no se centró en un sector

particular de conflictividad, sino que apelaba a una impugnación general al sistema político y económico (Somma et al., 2021; Sehnbruch y Donoso, 2020). Una característica de esta ola de protestas fue su carácter inorgánico, donde ninguna OMS fue capaz de liderar el proceso (Somma et al., 2021; Bringel et al., 2021). Por ello hace sentido que, pese a este evento, las protestas estudiantiles y de pensiones no hayan alcanzado mayor relevancia.

Es importante señalar que la protesta no es la única acción que es parte de los repertorios de los movimientos y OMS (Tilly, 2006; Rossi, 2015). Tanto la CONFECH como No+AFP han desplegado distintas estrategias y acciones a lo largo del tiempo, como emplear acciones judiciales, tomas de espacios públicos, campañas mediáticas, realizar performances artísticas, acudir a discusiones parlamentarias, realizar plebiscitos autoconvocados y elaborar propuestas populares de ley (ver Ponce, 2024; Rozas y Maillet, 2019; Guzmán-Concha, 2012). No obstante, y de acuerdo con las entrevistas realizadas, las acciones de protesta en general de la CONFECH y No+AFP han decaído en los últimos años, y el estallido social, la pandemia y el fracaso de la Convención Constitucional (2021-2022) lo han profundizado. Así lo ejemplifica una dirigente estudiantil,

Creo que todo el movimiento social queda mal parado, en el sentido de tantos años de movilizaciones y de levantar banderas, de convocatorias, petitorios y todo, como que se tiraron a la basura (...) [en la universidad] el ambiente está muy despolitizado, no sé si cansado por el estallido, cansado por el COVID, pero la gente no sé si no se quiere enterar o no se enteró, y no sé si la [universidad] quiere salir a *carretear*⁷ y no quiere levantar una asamblea (entrevista 5, 12/12/2022).



⁷ Término utilizado para referirse a salir de fiesta.

En segundo lugar, la incidencia política de la CONFECH y No+AFP también se ha visto disminuida en los últimos años. Los activistas de ambas organizaciones coinciden en este diagnóstico. Al igual que sobre el punto anterior, hay una percepción de que el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención en el plebiscito de 2022 fue un golpe que afectó la incidencia política. En esta línea, un vocero nacional de No+AFP argumentó que

Chile quizá adolece de un problema mucho más grande que el resto de los países de América Latina, que la experiencia del 73' [golpe de Estado] y el predominio de los partidos políticos en el seno social, no ha dejado que surja una posibilidad [de cambio] (...) también por la exagerada fragmentación que hay en este país, la desconfianza (Entrevista 2, 06/12/2022).

Sin embargo, la intuición de este capítulo es que la disminución de la incidencia política es anterior al desenlace del proceso de la Convención, y la composición de la Convención es un indicador de aquello. Las elecciones de convencionales en 2021 fueron una oportunidad histórica para que activistas y personas sin militancia pudiesen entrar a la política institucional, dadas las innovaciones electorales que permitieron a los independientes competir en, prácticamente, igualdad de condiciones que militantes de partidos, al habilitar la conformación de listas de independientes. En esta línea, muchos activistas sociales alcanzaron un escaño en la Convención. Sin embargo, no fue el caso ni de dirigentes de No+AFP ni de la CONFECH. No+AFP llevó candidaturas en prácticamente todos los distritos del país, alcanzando sólo dos escaños en la Convención⁸ a través de candidatos que no eran parte de los principales liderazgos de la Coordinadora (ver Interferencia, 2021). Por su parte, la CONFECH no tomó una posición organizacional, y las candidaturas de dirigentes universitarios, como Emilia Schneider⁹, respondieron a arrestos individuales y a militancias de partido. Ningún dirigente universitario resultó electo. Los principales ganadores del activismo social fueron dirigentes de organizaciones medioambientales y territoriales, con pocos años de existencia, y activistas feministas de mayor trayectoria (ver

⁸ Ver base de datos de las trayectorias de los convencionales constituyentes (Rozas-Bugueño, 2023), disponible en: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/F_A6E1V.

⁹ Ex presidenta interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2019. Actualmente, Diputada del Frente Amplio.

Rozas-Bugueño, 2024; Rozas-Bugueño et al. 2022). En las siguientes subsecciones se revisarán los factores que explican la desmovilización de ambas OMS.

VI.2. Crisis de intermediación

Este estudio toma como principal gatillo de la desmovilización de la CONFECH y No+AFP la crisis de intermediación. Un indicador central de esta crisis es la desconfianza hacia las organizaciones. De acuerdo con datos del Estudio Longitudinal Social del COES (2016-2022), ha habido un descenso del apoyo de los chilenos hacia los movimientos estudiantil y No+AFP (ver Rozas-Bugueño, 2024). Asimismo, hay consenso entre los activistas encuestados respecto de que sus organizaciones están experimentando una crisis de confianza. Muestra de ello es lo que señalaron una dirigente universitaria de una universidad de Santiago y un dirigente de No+AFP, respectivamente:

Está muy instalada la idea en la universidad, de que todos los espacios de representación son un trampolín político, que nadie actúa por convicción en política, que todos estamos ahí porque queremos después buscar cada vez un cargo más alto, que queremos tener una diputación (...) (Entrevista 4 a dirigente estudiantil, 08/12/2022).

La desconfianza es un tema importante en el movimiento No+AFP. Muchas personas han perdido la confianza en las instituciones políticas y en los líderes, ya que sienten que no han logrado cumplir con las demandas y necesidades de la ciudadanía. Esto ha llevado a una desilusión y cansancio en la participación y movilización social. Además, la falta de resultados concretos en la lucha por mejores pensiones y políticas públicas ha generado frustración y desconfianza en el movimiento (Entrevista 8 a dirigente de No+AFP, 16/12/2022).

Otro indicador relevante de la crisis de intermediación es revisar si las demandas sociales que impulsan las OMS hacen sentido en sus públicos objetivos y en la población en general. En esta línea, hay saturación en las entrevistas respecto a que las demandas de la CONFECH y No+AFP han perdido arraigo en la población. Las siguientes citas de una dirigente de una federación universitaria del sur de Chile y de un dirigente de No+AFP muestran la visión de que las demandas de la CONFECH han perdido conexión con el estudiantado y la agenda histórica del movimiento estudiantil y que No+AFP ha tenido

dificultades para que propuesta de sistema de pensiones permee en la sociedad,

Últimamente tenemos (...) a la CONFECH muy pendiente del proceso constituyente, del avance que es una nueva constitución, pero han dejado totalmente de lado la agenda programática de las luchas estudiantiles que han sido históricas, que llevan mucho tiempo. Entonces, ahora la CONFECH sale a dar puntos de prensa, sale a marchar una vez cada tanto por una nueva constitución, pero no salen peleando la agenda estudiantil. O sea, personalmente, por ejemplo, nuestra federación, la gratuidad nos da lo mismo si la conseguimos a través de una nueva constitución, a través de ley, a través de donde sea, pero nosotros vamos por la gratuidad, no vamos por una nueva constitución como tal. Entonces [se] ha dejado de lado esa demanda (Entrevista 20, 10/01/2023).

O sea, uno desde No+AFP, desde la propuesta hecha por la Fundación Sol, uno puede demostrar que un sistema solidario de reparto solidario te va a lo menos a duplicar las pensiones (...). Puede demostrar que el sistema austríaco, por ejemplo, funciona con un 100% reparto solidario y que otorga pensiones del 80% del sueldo de activo a las personas y se las garantizan, y aquí estamos lejísimos de ese 80% (...) jamás vamos a llegar al 80% jamás y, sin embargo, la gente [en Chile] sigue diciendo no, pero no me toque mi plata [del ahorro previsional] (Entrevista 13, 27/12/2022).

VI.3. Falla organizacional y pérdida de compromiso de adherentes

Como se plantea en el mecanismo teórico presentado en este capítulo, de la crisis de intermediación se desprenden la falla organizacional y la pérdida de compromiso por parte de los adherentes de las OMS. Por un lado, la falla organizacional puede rastrearse desde los problemas organizacionales y de liderazgos. Las entrevistas dan cuenta de un consenso sobre los problemas organizacionales entre los activistas de ambas OMS, haciendo un vínculo entre la desconfianza hacia sus organizaciones, uno de los indicadores de la crisis de intermediación. La siguiente cita textual de una activista universitaria de Santiago muestra la vinculación entre estos elementos, además de señalar de que se trata de un problema común entre la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) –la organización más clásica del mundo estudiantil y que ha sido un pilar de la CONFECH– y No+AFP.

Creo que hoy es muy difícil organizarse, se ve con mucha desconfianza cualquier organización. No solo de los partidos. También de otras como No+AFP, la FECH... Todos los estudiantes dicen 'esto es un trampolín político' (...) Como hay desconfianza hacia las organizaciones, las personas no gastan su tiempo en asistir a las asambleas, en discutir con tus representantes, porque no se les ha demostrado en los hechos valga la pena. Entonces ha habido una desarticulación, o una falta de organización importante que hace que estos debates que te permitirían volver a encontrar acuerdos entre las diversas posturas que existan, no se puedan dar (Entrevista 11, 26/12/2022).

Es importante señalar que la FECH desapareció entre 2020 y 2022 por no haber logrado el quorum mínimo para constituir federación. Se podría pensar que ello responde a un momento específico, el de la pandemia. Sin embargo, lo cierto es que la crisis organizacional era anterior al 2020: desde el año 2011 en adelante hubo una baja sostenida en la participación de los estudiantes en las elecciones federativas, lo que culminó en que en 2019 se constituyó una mesa interina al no alcanzarse el quorum mínimo de participación para la conformación de federación (El Desconcierto, 2019). Recién a mediados de 2023 se logró conformar federación, después de haber llevado un proceso de refundación mediante un congreso estudiantil desarrollado entre 2022 y 2023. No obstante, en las elecciones de 2024 participó sólo el 9% de los estudiantes, por lo que nuevamente no fue posible la conformación de Federación (Universidad de Chile, 2024). Este fenómeno es representativo de lo que ha ocurrido en otras federaciones del país, donde han desaparecido o se han constituido mesas interinas, cuestión que se agudizó con la pandemia. En el caso de No+AFP, también se ha experimentado un proceso similar de debilitamiento orgánico, donde algunas de las organizaciones fundadoras de la OMS han congelado su participación, como el Colegio de Profesores.

A nivel de liderazgos, las OMS también han experimentado un debilitamiento. Pese a la salida de organizaciones importantes, las entrevistas no entregan evidencia de que No+AFP haya experimentado desgaste de parte de sus liderazgos. En el caso del movimiento estudiantil, si hay evidencia respecto al debilitamiento de los liderazgos. Un punto importante sobre este respecto lo marcó un dirigente estudiantil de una universidad de Valparaíso, quien sostiene que el movimiento estudiantil y sus organizaciones han adolecido de una transmisión de conocimiento y formación de nuevos dirigentes.

El traspaso de conocimiento [ha sido] incompleto (...) ha sido una debilidad bastante importante de la orgánica del movimiento estudiantil. En este periodo de reconstrucción y reorganización, hemos experimentado una falta de quórum, baja participación y dificultad para convocar. Esto se debe a diversos factores, como el desinterés y desconocimiento de los estudiantes más jóvenes, la falta de experiencia y la crisis de expectativas. (...) Todo esto ha afectado la estabilidad orgánica y la continuidad del movimiento estudiantil (Entrevista 9, 17/12/2022).

Por último, en el caso de la pérdida de compromiso de los adherentes, ambas OMS han experimentado un descenso de la participación de sus bases. De acuerdo con la evidencia de las entrevistas, este fenómeno tiene una interacción con la falla organizacional y acentúa los problemas internos de las OMS. Ejemplo de esta percepción son las citas textuales de activistas de ambas OMS.

La CONFECH está muerta hace mucho rato, está muerta hace mucho rato, y estamos tratando como de hacerle electroshock, pero está muerta hace mucho rato. Y está muerta hace mucho rato porque no hace sentido (...) a los estudiantes no les llama ir a las convocatorias, no les llama tener las discusiones que estamos promoviendo (Entrevista 6, dirigente de una universidad de Santiago, 13/12/2022).

Hubo un período que había mucha participación de jóvenes en la Coordinadora [No+AFP], estos jóvenes ahora son trabajadores, algunos son dirigentes sindicales, pero esta generación actual, está como súper ausente, los jóvenes que todavía están estudiando, están muy ausentes de esta realidad (...) (Entrevista 15, dirigente de No+AFP, 29/12/2022).

V. Reflexiones finales

Este capítulo muestra cómo la crisis de intermediación puede explicar la desmovilización de movimientos sociales, desde un análisis relacional a nivel meso a través de la comparación de los casos de la CONFECH y No+AFP, estructurando un diseño comparativo de casos más diferentes. Los resultados del análisis, en base a datos de eventos de protesta (COES, 2020), percepciones de activistas recabadas a través de entrevistas en profundidad y datos cualitativos secundarios, muestran que la crisis de intermediación tiene un correlato en la desconfianza hacia las OMS y la pérdida de capacidad de hacer sentido en la sociedad de estas organizaciones. Esta crisis habría repercutido a nivel organizacional y en

la pérdida de compromiso de los adherentes de los movimientos, derivando en la desmovilización de la CONFECH y No+AFP.

Sin embargo, un elemento emergente del análisis, en el que hay consenso entre los activistas entrevistados, es que el estallido social (2019), la pandemia (2020), y el rechazo de la propuesta constitucional de la Convención (2022) han profundizado las implicancias del mecanismo explicativo en la desmovilización de las OMS estudiadas. En este sentido, el contexto no reemplaza el mecanismo explicativo, sino que amplifica su efecto sobre la desmovilización de la CONFECH y No+AFP.

Este estudio forma parte de una agenda de investigación en torno a las consecuencias de la crisis de intermediación en el campo de los movimientos sociales, buscando aportar a la literatura desde la integración de este concepto al estudio de los movimientos y OMS. Al mismo tiempo, este capítulo busca contribuir al estudio de la desmovilización de movimientos sociales, que es parte inherente de todo proceso de movilización, y que ha sido menos tomando en cuenta por parte de la literatura (Zeller, 2020; Davenport, 2015; Tarrow, 2011). El aporte específico al estudio de la desmovilización es presentar un mecanismo con el cual poder explicar el fenómeno a nivel meso, conectando la crisis de intermediación con elementos internos de las OMS. Por último, es importante destacar que los resultados de este análisis no indican que los movimientos estudiantil y No+AFP hayan desaparecido, sino que pasan por una fase de desmovilización (Tarrow, 2011). La movilización es un proceso cíclico, que contiene fases de auge y declive, por lo que es necesario seguir analizando en el futuro las acciones de estos movimientos.

Referencias

Amenta, E., K. Andrews, and Neal Caren (2018). The political institutions, processes, and outcomes movements seek to influence. *The Wiley Blackwell companion to social movements*, 447–465.

Bidegain, G. (2017). From cooperation to confrontation: The Mapuche movement and its political impact, 1990–2014. *Social movements in Chile: Organization, trajectories, and political consequences*, 99-129.

Bidegain, G., & Maillet, A. (2021). Tracing Social Movements' Influence Beyond Agenda-Setting: Waves of Protest, Chaining Mechanisms and Policy Outcomes in the Chilean Student Movement (2006-2018). *Partecipazione e conflitto*, 14(3), 1057-1075.

Bringel, B., Martínez, A., and Muggenthaler F. (2021). Desbordes: estallidos, sujetos y porvenires en América Latina. Fundación Rosa Luxemburg.

- Centre for Social Conflict and Cohesion Studies COES, 2020
 Centre for Social Conflict and Cohesion Studies, 2020
 Observatory of conflicts-Cumulative Dataset. Harvard
 Dataserve, V/7
<https://doi.org/10.7910/DVN/GKQXBR>
- Davenport, C. (2015). *How social movements die*. Cambridge University Press.
- Delamaza, G., Maillet, A., & Martínez Neira, C. (2017). Socio-Territorial Conflicts in Chile: Configuration and Politicization (2005-2014). *ERLACS* (104), 23.
- Demirel-Pegg, T. (2017). The dynamics of the demobilization of the protest campaign in Assam. *International Interactions*, 43(2), 175-216.
- Donoso, S. (2013). Dynamics of change in Chile: Explaining the emergence of the 2006 Pingüino movement. *Journal of Latin American Studies*, 45(1), 1-29.
- Donoso, S. (2017). "Outsider" and "insider" strategies: Chile's student movement, 1990–2014. In *Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences* (pp. 65-97). New York: Palgrave Macmillan US.
- Donoso, S., & Von Bülow, M. (2017). *Social movements in Chile. Organization, Trajectories, and Political Consequences*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- El Desconcierto (2019, 2 de mayo). Emilia Schneider, primera presidenta trans de la FECh: "El feminismo y las disidencias sexuales cobrarán un rol central en mi gestión". revisado: 13 de octubre de 2024. Disponible en: <https://eldesconcierto.cl/2019/05/02/emilia-schneider-primer-presidenta-trans-de-la-fech-el-feminismo-y-las-disidencias-sexuales-cobrar-un-rol-central-en-mi-gestion/>.
- Garretón, M. A. (2016). *La gran ruptura: institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. LOM ediciones.
- Giugni, Marco (2008). Political, biographical, and cultural consequences of social movements. *Sociology Compass* 2 (5), 1582–1600.
- Guzman-Concha, C. (2012). 'The students' rebellion in Chile: Occupy protest or classic social movement?' *Social movement studies*, 11(3-4), 408-415.
- Heaney, M., & Rojas, F. (2011). The partisan dynamics of contention: demobilization of the antiwar movement in the United States, 2007-2009. *Mobilization: An International Quarterly*, 16(1), 45-64.
- Interferencia. (2021). Los candidatos del mundo sindical que no lograron obtener escaños en la constituyente. 18 de mayo. Revisado: 13 de octubre de 2024. Disponible en:

<https://interferencia.cl/articulos/los-candidatos-del-mundo-sindical-que-no-lograron-obtener-escanos-en-la-constituyente>.

Karmel, E. J., & Kuburic, S. (2021). The impact of moral injury on social movements: the demobilization of Jordan's 'Arab Spring' protestors. *Globalizations*, 1-18.

Koppelman, C. M. (2017). Deepening demobilization: the State's transformation of civil society in the poblaciones of Santiago, Chile. *Latin American Perspectives*, 44(3), 46-63.

Kowalchuk, L. (2005). The discourse of demobilization: Shifts in activist priorities and the framing of political opportunities in a peasant land struggle. *The Sociological Quarterly*, 46(2), 237-261.

Lapegna, P. (2013). Social movements and patronage politics: Processes of demobilization and dual pressure. In *Sociological Forum* (Vol. 28, No. 4, pp. 842-863).

Larocque, F., Maillet, A., Flores-Pérez, C., Martínez, F., Abad, P., Cariaga, V., Hernández-González, M. & Lorenzo-Chamorro, Y. (2021). "Los cabildos por el agua del movimiento por el agua y los territorios (octubre 2019-marzo 2020): un caso de experimento participativo y estratégico". En *Experiencias participativas en el Chile actual*, en C. Biskupovic & C. Stam Eds., pp. 107-140. Santiago de Chile: RIL Editores.

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

McAdam, D., & Tarrow, S. (2018). The political context of social movements. *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements*, 17-42.

Olivares, A., & Carrasco-Hidalgo, C. (2020). Social Movements and Public Policy in Chile: An Analysis of the Student Movement of 2011 and the No+ AFP Movement of 2016. *Studia Politica: Romanian Political Science Review*, 20(2).

Palacios-Valladares, I. (2022). Deliberative talk, critical communities and the making of the 2018 Chilean feminist student movement. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes*, 47(2), 195-218.

Piven, F. F., & Cloward, R. (1977). *Poor people's movements: Why they succeed, how they fail*. Vintage.

Ponce, Camila (2024). *Desde las calles a la Moneda. Liderazgo estudiantil y transformación política en el Chile contemporáneo*. RIL Editores.

Rossi, F. (2015). Conceptualizing strategy making in a historical and collective perspective. In *Social Movement Dynamics* (pp. 15-42). Routledge.

Rozas-Bugueno, J. (2024). Between Hope and Disaffection: The Chilean Constitution-Making Process and the Intermediation Crisis. *PS: Political Science & Politics*, 57(2), 274-281.

Rozas-Bugueño, J., Olivares, A. & Maillet, A. (2022). Entre la independencia y la militancia: Análisis de la vinculación partidaria de los convencionales constituyentes de Chile. *Economía y Política* 9 (2): 67–100.

Rozas-Bugueño, J., & Maillet, A. (2024). Challenging the policy space: The legitimation of alternatives in Chilean pension policy (1980–2019). *Latin American Policy*.

Rozas-Bugueño, J., and A. Maillet. 2019. “Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: Innovación en el repertorio de estrategias del movimiento No Más AFP en Chile (2014–2018).” *Izquierdas* 48:1–21.

Sánchez-Cuenca, I.. 2022. *El desorden político: Democracias sin intermediación*. Madrid, Spain: Catarata Publishing.

Schaeffer, C. & Donoso von Bulow Eds., (2017). Democratizing the flows of democracy: Patagonia Sin Represas in the awakening of Chile’s civil society. *Social movements in Chile: Organization, trajectories, and political consequences*, 131-159.

Schiappacasse, I., Segura, P., & Rozas, J. (2024). Social conflicts over the use of water resources in Chile: the role of social movements and business power. *Oxford Development Studies*, 1-15.

Sehnbruch, K. and S. Donoso (2020). Social protests in Chile: inequalities and other inconvenient truths about Latin America’s poster child. *Global Labour Journal* 11 (1).

Somma, N., M. Bargsted, R. Disi, and R. Medel. (2021). No Water in the Oasis: The Chilean Spring of 2019–2020.” *Social Movement Studies* 20 (4): 495–502.

Somma, N., and M. Bargsted. 2015. La autonomización de la protesta en Chile. In *Socialización política y experiencia escolar: Aportes para la formación ciudadana en Chile*, ed. Cristián Cox and Juan Carlos Castillo, 207–40. Santiago: Ediciones UC.

Somma, N., and R. Medel. 2017. Shifting Relationships Between Social Movements and Institutional Politics. In *Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences*, ed. S. Donoso and M. von Bülow, 29–61. New York: Palgrave Macmillan.

Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements in Contentious Politics*. New York, Cambridge University Press.

Tilly, C. (2006). *Regimes and repertoires*. University of Chicago Press.

Tricot, V. 2021. “Please Mind the Gap: Autonomization and Street Politics.” In *The Social Outburst and Political Representation in Chile*, B. Navarrete and V. Tricot, eds. 75–89. New York: Springer Publishing Company.

Universidad de Chile. (2024, 28 de mayo). Federación de estudiantes. Ante falta de quórum en elecciones FECh Tricel pide que se conforme un Congreso Extraordinario. 28 de mayo. Revisado: 13 de

octubre de 2024. Disponible en: <https://uchile.cl/noticias/216784/-trichel-fech-pide-que-se-conforme-un-congreso-extraordinario->.

Von Bülow, M., and G. Bidegain. 2015. It Takes Two to Tango: Students, Political Parties, and Protest in Chile (2005–2013). In *Handbook of Social Movements Across Latin America*, P. Almeida and A. Cordero, eds. 179–94. New York: Springer Publishing Company.

Zeller, M. C. (2020). Rethinking demobilisation: concepts, causal logic, and the case of Russia's For Fair Elections movement. *Interface: A Journal on Social Movements*, 12(1), 527-558.

El giro territorial de los movimientos sociales chilenos: claves para comprender la participación política después de la derrota del proceso constituyente*

Gemita Oyarzo Vidal

Introducción

Este 2024 se cumplen cinco años de las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y cuyos eventos de protesta han sido los más disruptivos que ha tenido el país desde el retorno a la democracia (1990). Debido a su masividad y a la expresión inorgánica del descontento y la indignación de la gente común, estas jornadas de movilizaciones fueron bautizadas por la prensa nacional como *estallido social* y como *revuelta popular* por los intelectuales más esperanzados en su potencial político¹⁰. Se cumplen también dos años del plebiscito constitucional 2022, el hito que marcó la aplastante derrota electoral del proyecto constitucional que era la expresión de las demandas de los movimientos sociales que alcanzaron representación popular en la Convención Constitucional (2021-2022).

Aunque en términos históricos se trata de hechos recientes, tras el fracaso del proceso constituyente, el giro de la agenda política y mediática ha sido de tal magnitud que las demandas de las movilizaciones del 2019 parecen haber quedado enterradas en un pasado remoto. Además, las elites políticas y económicas que hoy controlan los medios y la agenda legislativa en Chile han hecho lo posible por cancelar la discusión sobre las reformas que nos permitirían avanzar hacia la construcción de un Estado social y democrático de derecho¹¹. Sin embargo, a pesar de los giros de la política contingente, el fracaso del proceso constitucional deja varias interrogantes políticas y teóricas que es preciso responder a la luz de nueva evidencia empírica:

* Investigación financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Proyecto Fondecyt N°11220236

¹⁰ Cabe destacar que el término *revuelta popular* nunca fue un consenso entre los investigadores abocados al estudio de los movimientos sociales.

¹¹ La llamada *Ley Corta de Isapres*, destinada a ofrecer un salvataje al sistema de salud privado después de la crisis sanitaria y la falta de acuerdo en el Parlamento sobre el proyecto de Ley que intenta corregir los defectos del sistema Previsional, agregando un 6% de cotización adicional, son los ejemplos más emblemáticos del giro de la agenda política.

Del lado de las interrogantes políticas, la más evidente e importante de todas, sin duda, es la pregunta por las razones más profundas de la derrota electoral de un proceso constituyente profundamente esperanzador y con un gran respaldo popular (Espacio Público, 2021). La opción por cambiar la Constitución heredada de la dictadura alcanzó el 78% de los votos en el plebiscito de entrada de 2020. En las elecciones a la Convención Constitucional de 2021, las candidaturas independientes ganaron 48 escaños de 155, un triunfo inédito para las fuerzas que estaban fuera del sistema político. No obstante, a pesar de toda la voluntad de transformación, en el plebiscito de salida de 2022, la propuesta constitucional fue rechazada con un 62% de los votos. Una de las razones técnicas más obvias del fracaso electoral fue la imposición del voto obligatorio con un sistema de inscripción automática. Esta reforma del sistema provocó el ingreso abrupto de un padrón electoral nuevo y desconocido que alcanzó una cifra cercana a los 4,5 millones de electores. Sin embargo, existen otras razones sociológicas que es preciso entender¹².

En términos teóricos generales, nos preguntamos por el rendimiento empírico de los conceptos de *movimiento social* y de *las formas de coordinación* (Diani, 2015) como categorías adecuadas para pensar el ciclo de protestas y la diversidad de prácticas colectivas que decantaron en el proceso constituyente chileno (2018-2022). Como sabemos, el uso del término *movimientos sociales* ha sido objeto de una larga controversia teórica (Touraine, 1987; Mc. Adam, 1989; Diani, 1992; Touraine, 1995; Tilly, 1998; Mc Adam, et al.1999; Melucci, 2002; Mc Adam et al.2005; Mc Adam y Tarrow, 2010; Pudal, 2011; Diani, 2015; Pleyers, 2017; 2018, 2023; Martuccelli, 2019). Es por eso que, más que por la existencia de un movimiento social, nos preguntamos por las formas de articulación entre distintos grupos de actores que surgieron de la movilización social que desencadenó el proceso constituyente y por sus posibilidades de disputar espacios de representación.

En base a estas discusiones teóricas, el presente capítulo sintetiza los hallazgos de una investigación en curso que describe las transformaciones de la movilización social por el proceso constituyente en Chile (2021-2025) desde la perspectiva de sus participantes. Concebida en un contexto de gran incertidumbre política, el estudio se

¹² En diversos sondeos de opinión, la población chilena se ha mostrado ambivalente respecto al tema de los derechos sociales. De acuerdo a los datos comparados de la encuesta longitudinal ELSOC (2018 y 2021), la percepción de la injusticia social se ha morigerado respecto al 2019. El mismo sondeo concluye que las clases acomodadas y con mejor educación son más favorables a la idea de un Estado social que las clases populares (Espinoza, et.al, 2023, p.38).

pregunta: ¿qué tipos de actores e identidades emergieron del proceso?; ¿cuáles son sus formas de organización y participación política y; ¿qué posibilidades tienen los movimientos de construir un proyecto colectivo que les permita disputar diversos espacios de influencia y representación política en este contexto?

Conocidas las particularidades de los grupos de activistas que llegaron a la Convención Constitucional en 2021 y constatadas sus debilidades organizativas, es preciso preguntarse por sus estrategias de inserción en diversos territorios y, especialmente, por las dificultades que enfrentarán al crear y mantener organizaciones sociales y partidarias destinadas a darle soporte a su trabajo político y a la competencia electoral por la conquista de espacios institucionales en un escenario de desmovilización.

Superado el primer impacto y el *shock moral* (Jasper, 2013) de la derrota del plebiscito de 2022, durante estos años, tanto los representantes de movimientos sociales como los sectores más progresistas del país experimentan una fase de decepción y pesimismo que es necesario comprender desde un enfoque teórico que facilite el estudio de las emociones morales como un componente fundamental de los procesos de reconfiguración de las identidades colectivas. De ahí nuestro interés por el uso de una perspectiva sociológica centrada en las emociones del compromiso político (Whittier, 2001; Jasper, 2012; 2013; 2018; Flam, 2005; 2015; Della Porta y Giugni 2013).

Se trata de una *investigación cualitativa* basada en tres técnicas centrales de recolección de información: 1) entrevistas semiestructuradas con expertos y representantes de movimientos sociales (30 entrevistas); 2) análisis de fuentes documentales (prensa y estudios de opinión) y; 3) entrevistas grupales con activistas en tres regiones de Chile (Biobío, Los Lagos y Magallanes). Por su protagonismo en el proceso constitucional 2022, nos interesan los representantes del movimiento ambiental, el movimiento político indígena y el movimiento feminista. Más que describir en detalle a cada movimiento, el estudio busca reconstruir las dinámicas de interacción entre diversos actores y problematizar sus posibilidades de rearticulación en un contexto de desmovilización, caracterizada por una aparente disminución de la conflictividad social en Chile.

Por estas razones, el estudio explora la red de activistas que participaron activamente de las movilizaciones sociales de 2019 y que luego se volcaron al trabajo de la Convención Constitucional 2022, sea como convencionales constituyentes o como parte de sus equipos de asesores. La presentación de hallazgos revisa la importancia del *territorio*, entendido más allá de su dimensión geográfica, como el conjunto de

relaciones sociales y lógicas de organización comunitaria que lo producen en un determinado contexto. Creemos que este concepto ampliado de territorio, definido como una categoría que combina una dimensión socioecológica, una socioespacial y otra sociopolítica (Ther, 2012; Romero-Toledo, 2019; Hasbaert, 2020) puede ser muy útil para pensar los procesos de construcción de identidad. Como categoría identitaria, el territorio resulta un concepto clave para entender las diversas lógicas de acción colectiva de estos movimientos.

Para una exposición adecuada de los contenidos, el capítulo comprende tres secciones: 1) Discusiones teóricas para entender el caso chileno 2) Síntesis de hallazgos y; 3) Comentarios finales.

1. Antecedentes y discusiones teóricas para entender el caso chileno

A partir de la revisión de los diagnósticos más influyentes sobre el despertar de los movimientos sociales en Chile y de las revueltas de octubre (2011-2021) (Somma y Bargsted, 2015; Basaure y Joignant, 2019; Joignant, Garretón, Somma y Campos, 2020; PNUD, 2019; Araujo et.al 2019), el trabajo analiza algunos de los episodios contenciosos y los hitos políticos que desencadenan las protestas de octubre de 2019 y que definieron el derrotero del fallido proceso constituyente chileno (2019-2023).

a. Las tres tesis del despertar de las movilizaciones sociales en Chile

Constatado el fracaso de los tres intentos de Chile por otorgarse un nuevo marco institucional nacido en democracia, el balance de los diagnósticos más influyentes sobre el despertar de las movilizaciones sociales en Chile (2011-2021), puede sintetizarse en tres tesis generales: 1) la constatación del cierre de un ciclo de 10 años de movilización social (2011-2021); 2) un proceso sostenido de autonomización de la protesta social; 3) la politización del malestar subjetivo¹³.

¹³ Los tres intentos de cambio constitucional se cuentan desde el proyecto de la ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2017), el cual fuera descartado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2018. Le siguen la fallida Convención Constitucional de 2022 que surgió como respuesta a la movilización social de 2019 y el Consejo Constitucional de 2023, que fue la solución creada por las elites políticas ante el Rechazo de la propuesta de 2022. La propuesta constitucional, redactada por un órgano controlado por la derecha, se volvió a rechazar con el 55,6% de los votos en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023.

Al observar los diversos episodios contenciosos ocurridos desde el 2011 al 2015, varios autores coincidieron en que la movilización estudiantil del 2011 habría iniciado un nuevo ciclo de cambio político, cuyas demandas sociales no podrían ser satisfechas sin una refundación del orden democrático (PNUD, 2015; Somma y Medel, 2016; Garretón, 2016; Fuentes, 2016; Barozet, 2016; Delamaza, 2016; 2019). En base a este primer diagnóstico, la sociología política chilena declaró un amplio consenso en que la *revuelta social* de 2019 y sus formas disruptivas de protesta, marcaron el fin de una etapa movilizaciones por la restitución de derechos sociales y políticos (PNUD, 2019; Araujo et al., 2019; Barozet, 2020; Joignant, Somma y Campos, 2020)¹⁴.

La segunda tesis corresponde al fenómeno de *autonomización de la protesta* (Somma y Bargsted, 2015, pp. 219-228) y describe el distanciamiento de la movilización social de los actores políticos institucionales tradicionales, tales como los sindicatos y los partidos políticos. En un contexto de baja participación electoral, los partidos políticos ya no requieren de la articulación con los movimientos sociales para conservar el poder. Por su parte, los movimientos confían cada vez más en su propia capacidad de emprender campañas de protesta sin los recursos organizativos ni la mediación de los partidos políticos.

En el caso chileno, la gran fractura entre la política institucional y los movimientos sociales tuvo su máxima expresión en la Convención Constitucional de 2021, caracterizada por el protagonismo de las candidaturas independientes que obtuvieron 48 de los 155 escaños; la fragmentación de las fuerzas progresistas llamadas a refundar el orden democrático, así como la unidad electoral de la derecha, articulada para preservar sus partidos y el legado de la Constitución del 1980 (Observatorio de Nueva Constitución, 2021, pp.2-7)¹⁵.

La fuerza y la legitimidad de los movimientos que lograron representación en la Convención Constitucional pareciera explicar buena

¹⁴ Para mayores referencias sobre el movimiento estudiantil, ver los trabajos de O. Avendaño (2014), S. Donoso (2016), C. Ponce (2017;2024), Muñoz y Tamayo (2019); J. Fernández (2019).

¹⁵ Contra todo pronóstico, la derecha fue minoritaria en la Convención Constitucional de 2021. Obtuvo sólo 37 escaños, con los cual quedó sin la posibilidad de vetar las normas constitucionales. Los partidos de izquierda agrupados en *Apruebo Dignidad* (PC+FA+PRVS), obtuvieron 28 escaños y la *Lista del Apruebo*, que representaba la ex Concertación, obtuvo 25 convencionales. La *Lista del Pueblo* (LDP), la plataforma electoral que agrupó a la mayoría de los candidatos independientes que se identificaban con las demandas de la calle durante el estallido social, lograron 27 escaños. Luego se disolvieron tras el escándalo de Rodrigo Rojas Vade, uno de sus representantes que ganó la elección fingiendo ser un paciente oncológico.

parte de las alianzas y de las lógicas de negociación política que ocurrieron en su interior: las normas constitucionales más importantes se votaron por mayorías que superaron los 2/3 que exigía el órgano. Sin embargo, con el transcurso de los meses, el proceso fue mostrando las desventajas de la fragmentación y de la falta de conducción política. Aunque, aparentemente, gozaban de mayor legitimidad que los partidos, las fuerzas independientes no tenían ni la experiencia ni la capacidad organizativa para llevar adelante una campaña electoral muy difícil. La derrota fue compleja tanto para los movimientos como para los expertos que observaban con esperanza el proceso. Pero ¿qué contradicciones podían explicar semejante distancia del proceso constituyente con la ciudadanía y, en general, con la gente común?

La tercera tesis sobre *la politización del malestar subjetivo* marca la continuidad en el modo en que la sociología chilena ha estudiado las contradicciones de la modernización neoliberal y los conflictos de autoridad que se desprenden de la falta de legitimidad del orden social (Moulian, 1997; PNUD, 1998; Araujo, 2016; Araujo et al., 2019; Barozet, 2020, PNUD 2019; Aguilera, et.al, (2020); Aguilera y Espinoza, 2022). De acuerdo con esta tesis, el proceso de politización que vivió la sociedad chilena entre 2019 y 2021 es un fenómeno complejo que surge de las paradojas de la experiencia cotidiana con el neoliberalismo, el cual produce, por una parte, una imagen fortalecida de los individuos y sus capacidades de acción; combinada con una mayor percepción de la injusticia y la desigualdad.

Estas paradojas de la experiencia y la profunda desconfianza en las instituciones políticas sugieren una dificultad de la sociedad chilena para imaginar un proyecto colectivo alternativo al neoliberalismo y, por lo tanto, explican el fracaso de los intentos constitucionales. Las elecciones, marcadas por el voto castigo, son reflejo de desafección de los sujetos comunes con la política institucional. El movimiento del padrón electoral hacia un lado y otro del espectro político en las elecciones de 2021 y 2023 reflejan este descontento. La elección del Consejo Constitucional de 2023 tiene un record de 2.124.906 votos nulos, una cifra inédita en nuestra historia electoral (Servel, 2023).

En suma, el estudio del despertar de los movimientos sociales, las revueltas de octubre de 2019 y, sobre todo, el fracaso del proceso constituyente, constatan la existencia de un conflicto, aparentemente insalvable, entre una pequeña elite política que lucha por auto preservarse y una fragmentaria movilización social que consiguió abrir los espacios de representación, pero que perdió la lucha por redefinir las reglas del juego democrático.

b) Emociones del compromiso político: la politización de la injusticia y la construcción del sentido de la participación

¿Cómo se explican los procesos de politización a nivel subjetivo? La teoría sobre movimientos sociales nos advierte que no basta con que los actores reconozcan la existencia de un conflicto. Para que exista politización, la acción colectiva debe orientarse a la transformación del orden social y de las reglas que son la fuente de ese conflicto. Los actores involucrados en la movilización deben reconocerse como agentes capaces de transformar el orden social y político que desean transformar (Jasper, 2012).

De acuerdo con la literatura sobre emociones asociadas a la protesta y al compromiso político (Whittier, 2001; Jasper, 2012; 2013; 2018; Flam, 2005; 2015; Della Porta y Giugni 2013; Poma y Gravante, 2015; 2017; 2018; Poma, 2019; Gravante, 2020), la indignación por la injusticia, la violencia y los sentimientos de solidaridad que nacen de la movilización social gozan de un enorme potencial político y articulador de alianzas. La problematización de los vínculos emocionales que los manifestantes y activistas forjan con las organizaciones y con la movilización social misma es una clave analítica central para entender el proceso de formación de identidades políticas, las diversas formas de participación y la tendencia de los individuos a crear y mantener formas de organización.

Sin embargo, no todas las emociones sirven para comprender las prácticas de acción colectiva orientadas a la transformación del orden social y político (Whittier, 2001; Flam, 2005, 2015; Jasper, 2013;2018). En su tipología de los procesos emocionales, Jasper (2013) destaca el protagonismo de las *emociones morales* en la comprensión de los procesos de politización. Así, la rabia por la injusticia es una de las más importantes en el estudio de diversos procesos de movilización. La sensación de injusticia puede ser todavía más movilizadora en contextos políticos altamente represivos. Las acciones violentas que emanan del Estado pueden reforzar el compromiso ético y político de los actores con la movilización, o bien, tener un efecto desmoralizante y devastador para los participantes.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que las emociones morales nunca aparecen de manera aislada. Siempre se manifiestan como una combinación de emociones que los actores van calibrando y elaborando en las interacciones que establecen durante la movilización. A este proceso de otorgar sentidos a las emociones compartidas de la movilización en distintos contextos, es lo que Poma y Gravante (2015; 2017;2018) llaman *trabajo emocional* (Hochschild, 1979). El trabajo emocional va formando un determinado modo de gestión de las

emociones permitidas, bajo las cuales los actores formulan *reglas de sentir* que moldean sus experiencias de participación política. En otras palabras, la construcción del sentido de la acción política surge del trabajo emocional.

2) Síntesis de hallazgos

La pregunta por los actores colectivos que podían surgir del proceso constituyente se responde al examinar la composición de la Convención Constitucional 2022, cuyo protagonismo estuvo marcado principalmente por el movimiento feminista, el movimiento ambiental y el movimiento político indígena. Sin embargo, es necesario saber: a) ¿Quiénes son los actores colectivos que responden empíricamente a la categoría de movimientos; b) ¿Cómo definen sus identidades colectivas y sus estrategias de acción política en un contexto de fragmentación? Las respuestas a estas dos preguntas constituyen la estructura de la discusión de resultados.

a) ¿Quiénes son? Núcleos de activistas que siguen diversas causas

Como dijimos, el estudio explora la red de activistas que participaron activamente de las movilizaciones sociales de 2019 y que luego se volcaron al trabajo de la Convención Constitucional 2022, sea como convencionales constituyentes o como parte de sus equipos de asesores.

Para reclutar a ex constituyentes, primero exploramos la red de activistas que eran sus grupos cercanos. El uso de redes horizontales de activistas nos mostró quiénes eran y qué características tenían los representantes de movimientos sociales que participaron de la convención:

- 1) Poseen educación universitaria completa y con formación de postgrado. Todos tienen experiencias previas de activismo y participación en movilizaciones (liderazgo en movilizaciones estudiantiles universitarias). Asimismo, existen ex militantes o militantes disidentes del Frente Amplio (la coalición de partidos del gobierno actual).
- 2) Las coordinadoras de movimientos sociales que llevaron candidatos a la convención se organizaron como pequeños núcleos que operaron bajo una lógica de voluntariado, sin separación de funciones y sin otros soportes organizativos. Respondían a colectivos pequeños de grupos organizados, tales como las asambleas territoriales u organizaciones locales.

- 3) En la Convención, también hubo sujetos individuales que seguían causas sociales, pero no respondían a ninguna orgánica. Usaron la plataforma electoral para posicionarse (por ejemplo, el caso de Independientes No Neutrales).

Los representantes de los movimientos tenían distintas experiencias de organización:

El movimiento *feminista* tiene una Coordinadora Nacional (8M) que convoca a movilizaciones masivas. Cuenta con la Red de Politólogas, que fueron muy importantes en la negociación de las normas de paridad del proceso constituyente. Sin embargo, en la práctica, las activistas independientes identificadas con la causa feminista también funcionan como pequeños colectivos desplegados en distintos territorios.

En el caso del *movimiento político mapuche*¹⁶, se trata de una red de profesionales (abogados, historiadores, educadores interculturales) con trayectoria en el trabajo con las comunidades y experiencia política previa. Algunos de ellos, poseían una trayectoria conocida en los municipios mapuche de las regiones de Bío-bío, Araucanía y Los Lagos.

Los representantes del *movimiento ambientalista* eran quienes estaban más organizados antes de la formación de la Convención Constitucional. Se articularon en la orgánica nacional *Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente* (MODATIMA). Gracias a esta plataforma, en 2021, lograron elegir a uno de sus líderes, Rodrigo Mondaca, como gobernador de la región Valparaíso. Sin embargo, no tenían experiencia en la política institucional¹⁷.

b) Identidades territoriales: más allá de la conciencia ecológica

¿Cómo explicar el giro territorial de los movimientos sociales chilenos en la última década? Es una pregunta central para entender de qué hablamos cuando decimos *territorio* y para problematizar por qué el fallido proceso constituyente de 2022 estuvo marcado por estas “sensibilidades territoriales”, cuyo protagonismo sorprendió a diversos expertos constitucionalistas nacionales e internacionales.

¹⁶ El estudio se centra en el movimiento mapuche por la pervivencia de su conflicto territorial y por su importancia política. Sin embargo, no descartamos incluir a representantes de otros pueblos indígenas que participaron de la convención. Para mayor información del movimiento mapuche, ver los trabajos de Fernando Pairicán (2011; 2018).

¹⁷ Para mayor información sobre el impacto político del conflicto socio territorial, revisar los trabajos de Gonzalo Delamaza.

Para partir, es necesario aclarar que la centralidad en los territorios viene del estudio de diversos conflictos medioambientales que despertaron en Chile durante la primera década del 2000. La observación de múltiples focos de conflicto ambiental a lo largo del país dio origen a un interesante debate entre los estudiosos de la acción colectiva: por un lado, la pervivencia de diversos conflictos y luchas socio territoriales que se produjeron como consecuencia del modelo de desarrollo extractivista, ha llevado a algunos autores a preguntarse por la existencia de un *movimiento socio territorial ambiental*. Asumiendo las dificultades de delimitar un fenómeno empírico muy complejo y con variantes geográficas específicas, han hecho importantes esfuerzos por repensar esta dimensión territorial y ecológica de la conflictividad social vivida en el ciclo de movilizaciones que comprenden el periodo 2011-2021 (Delamaza, 2019; Maillet et.al.2021).

Si bien los estudiosos de las crisis socioambientales reconocen la polisemia del concepto de *territorio* en la literatura especializada de las ciencias sociales, aclaran que los conflictos socio territoriales pueden reconocerse por tres características centrales: 1) la identificación de problemas locales que afectan directamente a los habitantes de ciertos territorios; 2) la existencia de formas de movilización que se expresan localmente en los territorios afectados y; 3) por la identificación de una demanda que involucra a territorios específicos (Delamaza, 2019, p.149).

Precisamente, la constatación de una diversidad de conflictos socio territoriales que expresan la disputa por el control de recursos en un modelo extractivista expandido en todo el territorio nacional (recursos hídricos, forestales, mineros y pesqueros), ha llevado a los sociólogos políticos a dialogar con otras disciplinas como la geografía humana y la antropología. Este diálogo les ha permitido redefinir el concepto de *territorio* como un fenómeno de producción social e histórica de la naturaleza (Romero-Toledo, 2019) en la que se transan distintas concepciones del espacio y el tiempo. Bajo esta mirada, el territorio es mucho más que una locación geográfica cuyos límites se definen bajo determinadas disposiciones político administrativas del Estado. El territorio es cultural y socialmente producido por las comunidades que, al habitarlo, comparten experiencias y memorias de sus espacios de producción de la vida material y simbólica (Haesbaert, 2020)¹⁸.

Debido a la importancia de los conflictos socio territoriales en la propuesta constitucional de 2022 y del concepto mismo de *territorio* en el lenguaje de los activistas en las distintas fases de esta investigación, al

¹⁸ El estudio de las formas de vida de los pueblos indígenas latinoamericanos ha sido muy importante para arribar a esta noción decolonial del territorio como espacio de producción de la vida material y simbólica.

planificar las entrevistas grupales, decidimos preguntar directamente a los participantes qué entendían ellos por territorio. Los resultados obtenidos fueron sorprendentes y van en la misma dirección que sugiere la literatura académica derivada de la geografía humana y la antropología:

Si bien los participantes notan su uso polisémico de la palabra *territorio*, descubrimos que en su discusión se encuentra la clave para entender cómo estos nuevos movimientos construyen identidad colectiva. También, para comprender la manera en que entienden sus capacidades de acción política en determinados espacios sociales. Así, el trabajo empírico permite reconocer al menos tres sentidos relevantes: 1) El territorio como espacio geográfico y socio ecológico; 2) el territorio como espacio político y como grupo de pertenencia; 3) el territorio como forma de vida. Estos múltiples sentidos del territorio nos ayudan a identificar las prioridades de los movimientos y también, sus relaciones de cooperación y conflicto con otros actores institucionales:

- a) El territorio definido como *espacio geográfico y socio ecológico* exhibe una conciencia medioambiental transversal entre los activistas y que no se limita a aquellos que actualmente cooperan con organizaciones medioambientales. Además de la conciencia ecológica, los participantes del estudio enfatizan la importancia de la diversidad territorial en Chile. Dicho de otro modo: no es lo mismo vivir en el norte, en el centro, o en el sur del país. Las comunidades más pequeñas tienen menos dificultades para pensarse como un solo colectivo de identidad. No ocurre lo mismo en las grandes urbes, que están espacial y socialmente segregadas.
- b) El territorio descrito como *espacio político y como grupo de pertenencia* mostró la profundidad de la fractura entre los partidos oficialistas y los movimientos. Esta noción de territorio identifica quiénes son los colectivos que los movimientos piensan como sus bases sociales de apoyo y que serían los destinatarios de su “trabajo territorial”. Sin desconocer las diferencias sociales existentes en Chile, los territorios no pueden ser definidos en términos clasistas (trabajadores o campesinos) o únicamente como grupos políticos de pertenencia (izquierda o pueblo). En tanto espacios sociopolíticos, los territorios abarcan una diversidad de personas y de formas de convivencia cotidiana, con las cuales, los grupos organizados se reconocen. Entonces, el territorio es aquel espacio de interacciones significativas que definen a los activistas y que les permiten ser

reconocidos por los otros como interlocutores válidos (Fillieule, 2015).

Comentados los dos primeros sentidos del territorio, es necesario destacar que, en todos los casos, la importancia de los colectivos de pertenencia y de los grupos de pares significativos es un rasgo que distingue a este tipo de activistas de los antiguos militantes (Oyarzo, 2018; 2019; 2020; 2024). Para los nuevos activistas es imposible pensar el trabajo político fuera de este espacio simbólico de pertenencia. Bajo esta concepción, los representantes ciudadanos no sólo deben venir del territorio. También, deben ser validados por quienes habitan en él. Eso permite comprender la desconfianza en los partidos políticos (incluidos los de izquierda de la coalición gobernante), que se entienden como actores exógenos al territorio. Además, hay una fuerte impugnación a las élites políticas.

El trabajo de terreno con representantes de comunidades mapuche arrojó un tercer sentido del territorio que permite profundizar en estas dimensiones simbólicas.

c) El territorio es un *espacio geográfico en el que se juega toda su forma de vida*: la vida material (el acceso a tierra y el agua), la política (un conjunto de normas de convivencia) y la vida espiritual. La tierra y los ríos están conectados entre sí y conectan a las comunidades con la memoria de sus antepasados. A partir de su vínculo con las comunidades, los representantes del movimiento mapuche defienden la idea de que son una nación: aunque el Estado nunca los reconozca como tal, en la práctica, siempre han sido un pueblo nación. Y no sólo porque comparten un territorio y una misma lengua. Son una nación, porque ejercen su autonomía y su autodeterminación en el espacio de la comunidad.

Confrontados los tres sentidos del territorio, vemos que en este concepto reside la clave para comprender los sentidos de la acción política de los movimientos. El trabajo político se hace en el espacio donde los representantes de los movimientos son reconocidos. En eso consiste el trabajo territorial, que reemplaza a las viejas categorías de base o pueblo. Pero es un espacio político muy acotado, de relaciones cotidianas, en el cual tienden a predominar los vínculos de tipo subcultural o comunitario (Diani, 2015).

Los datos hasta hora recolectados muestran que la fragmentación política que experimentan los movimientos en la actualidad es, en gran medida, producto de la maduración de diversas luchas socio territoriales. Nuestro trabajo empírico permite constatar

que, más que movimientos socio territoriales, lo que existen son grupos de activistas y formas de acción que se despliegan en determinados territorios. El éxito relativo de las luchas de los activistas espacios locales acotados sirve para explicar su defensa irrestricta de sus identidades territoriales. Por último, su distancia con otros actores institucionales explica la dificultad que tuvieron para pensarse como parte de un proyecto colectivo mayor durante el proceso constituyente. Muchos de ellos pensaron que bastaba con representar a sus territorios en el espacio de la Convención. La derrota electoral les mostraría la ingenuidad de aquel supuesto y los llevaría a redefinir sus estrategias políticas.

En síntesis, la evidencia recabada hasta ahora muestra que la conquista de bases sociales en distintos territorios es el objetivo más anhelado de los movimientos. Sin embargo, están conscientes de que se trata de una meta de largo plazo, para la cual, necesitan diseñar una estrategia política adecuada. Junto con consensuar un conjunto de contenidos programáticos, deben definir una política de inserción que requiere tiempo, financiamiento y recurso humanos estables que estén dispuestos a hacer ese trabajo.

Conscientes de su fragilidad organizativa y, sobre todo, de las dificultades de emprender dicha política de inserción sin gente y sin recursos públicos, hasta el primer semestre de 2023, las entrevistas mostraban una resistencia de los movimientos a avanzar en la creación de organizaciones partidarias propias. Sin embargo, de cara al segundo plebiscito de 2023 y, ante la decepción con la manera en que el gobierno transó ante la derecha, estas dudas empezaron a disiparse. Se dieron cuenta que era importante apostar por convertirse en una fuerza política alternativa a las derechas y también a los partidos de gobierno.

De esa discusión interna surgieron tres partidos que, por la izquierda del bloque oficialista, quieren disputar espacios de representación popular, especialmente a nivel local: 1) Transformar Chile; 2) Partido Popular y 3) Partido Solidaridad. Las dos primeras colectividades, agrupan a los disidentes del FA que se desmarcaron del *Partido Convergencia Social* después de la firma del acuerdo por la Paz y la Nueva constitución en noviembre de 2019. El partido Solidaridad, creado en enero de 2024, agrupa a los representantes de la *Coordinadora de Movimientos sociales*. Además de conquistar espacios de representación institucional a nivel nacional y local, creen que un partido es el espacio propicio para pensar esas líneas políticas y definir democráticamente sus prioridades y estrategias de mediano y largo plazo. Hasta ahora, son los que parecen tener mejores posibilidades de armar un proyecto colectivo.

Para finalizar, puede decirse que el fracaso electoral de la Convención Constitucional marcó un punto de inflexión en la evaluación que los movimientos sociales hacen hoy sobre de la eficacia de los

mecanismos institucionales y electorales para conseguir objetivos políticos. Sin embargo, la historia enseña que los procesos de creación y consolidación de organizaciones políticas, así como también la definición de políticas de alianza toman más de una década.

3) Comentarios finales

Hasta ahora, los conceptos teóricos escogidos son útiles para producir hallazgos, específicamente, la perspectiva de las *emociones del compromiso político*. Pero, más que una clasificación de emociones tipo o una descripción detallada de cada una, indagar sobre ellas con los activistas ayuda a reconstruir los momentos más álgidos de la movilización y también a identificar las tensiones y contradicciones entre los diversos grupos.

Aunque todavía queda elaborar los resultados de investigación y afinar las hipótesis que nos permitan construir un dispositivo conceptual útil para estudiar las formas de interacción y participación política de los movimientos, creemos que el carácter territorial de las identidades colectivas, junto con los diversos *sentidos del territorio* son el hallazgo principal de esta investigación, en la medida que la categoría ayuda a comprender el escenario de fragmentación de las luchas colectivas y la profunda distancia de los movimientos con los actores políticos tradicionales.

Aunque varios activistas están en pleno proceso de creación de partidos políticos que recogen la agenda de los movimientos (El caso de Solidaridad), todo parece indicar que la conquista de espacios de representación y la construcción de bases populares será un camino largo y difícil para ellos. Sin políticas de alianza con otros sectores progresistas, no parece existir una manera viable de superar la fragmentación política que caracterizó a la ex Convención Constitucional. Habrá que ver cómo les va a los representantes de movimientos en las elecciones municipales de octubre de 2024 para saber si pueden aspirar a convertirse en una fuerza capaz de disputar espacios de representación a nivel parlamentario.

Referencias bibliográficas

Aguilera, C. et al. (2020, 17 de octubre). 18/O: Personas comunes en movilizaciones extraordinarias (Parte 1). CIPER. Recuperado de: <https://www.ciperchile.cl/2020/10/17/18-o-personas-comunes-en-movilizacion-extraordinarias-parte-1/>

Aguilera, C y Espinoza, V. (2022). “Chile despertó”: los sentidos políticos en la Revuelta de Octubre. *Polis Revista Latinoamericana*, 21 (61), 10-31. doi: <http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2022-N61-1707>

Araujo, K. (2016). *El miedo a los subordinados*. Santiago: LOM

Araujo, K. (ed.). (2019). *Hilos tensados. Para leer el octubre chileno*. Santiago: Editorial USACH

Araujo, K. (2019). Desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos. En Araujo (ed.) *Hilos tensados. Para leer el octubre chileno* (pp.15-36). Santiago: Editorial USACH

Avendaño, O. (2014). Fracturas y representación política del movimiento estudiantil. Chile. 2011. *Última década* 41, 41-68.

Barozet, E. (2016). Entre la urna, las redes sociales y la calle: las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos en el Chile democrático. En Garretón M. (coordinador). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI* (pp.11-58). Santiago: LOM

_____. (2020). Del pueblo desigual y unido a la rotura del modelo: el rol de la desigualdad en el estallido del 18/O1. En De la Fuente, G. y Mlynarz, D. (eds.). *El pueblo en movimiento. Del malestar al estallido* (pp.87-110) Santiago: Catalonia

Barozet, E., Espinoza, V., Ulloa, V. (2020). Élite parlamentaria e instituciones informales en Chile. Nepotismo y clientelismo como formas de sustento del poder”. *Revista Española de Sociología*, 29 (3), 595-611

Basaure, M. y Joignant, A. (2019, 29 de octubre). Las raíces de la conflictividad y radicalización de la protesta en Chile: lo que sabemos y lo que no. *CIPER*. Recuperado en:

<https://www.ciperchile.cl/2019/10/29/las-raices-de-la-conflictividad-y-radicalizacion-de-la-protesta-en-chile-lo-que-sabemos-y-lo-que-no/>

Centro de Microdatos (2019). Encuesta Termómetro Social. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios.

Delamaza, G. (2016). Sociedad civil, ciudadanía, movimiento social en el Chile de hoy. En Garretón M. (coordinador). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI* (pp.109-131). Santiago: LOM

_____. (2019). Consecuencias políticas de los conflictos socio-territoriales. Hacia una conceptualización pertinente. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 37, 139-160. 2019

<https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2019.n37-08>

Della Porta, D. (1999). Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno al a represión policial de la protesta. En McAdam et. al. Eds.. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (pp. 100-142). Madrid: *Itsmo*

Della Porta, D. y Giugni, M. (2013). Emotions in movement. En Della Porta, D., y Rucht, D. (Eds.). (2013). *Meeting Democracy: Power and Deliberation in Global Justice Movements* (pp. 123-151). Cambridge: Cambridge University

Diani, M. (1992). The concept of social movement. *The Sociological Review* 40(1),1-25

—. (1998). Las redes de los movimientos: una perspectiva de análisis. En Tejerina, B. e Ibarra, P. (eds.). *Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural*. (pp.243-270). Madrid: Trotta

—. (2015). Revisando el concepto de movimiento social. *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales* 9 (092), 1-16.

Donoso S. (2016). When social movements become a democratizing force: the political impact of the student movement in Chile. *Research in Social Movements, Conflicts and Change* 39,167–96.

Espacio Público (marzo 2021). ¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un proceso histórico. Recuperado en: <https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/03/Co%CC%81mo-vemos-el-proceso-constituyente-Informe-1.pdf>

Espinoza, V.et, al. (2023). Estratificación, desigualdad y pacto social en el Chile actual: evaluaciones y preferencias de la población para la política pública”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/114), Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Fernández, J. (2019). Politización estudiantil y rol de la toma en las movilizaciones de 2011 en Chile. *Revista Temas Sociológicos* 24, 159-190

Flam, H. (2005). Emotion's Map: a Research Agenda. En Flam, H. y King, D. Eds. *Emotions and Social Movements*. (pp. 19-40.) Londres y New York: Routledge

—. (2015). Micromobilization and Emotions. En Della Porta y Diani (eds). *The Oxford Handbook of Social Movements* (pp. 264-276). London: Oxford University Press

Fillieule, O. (2015). Propuestas para un análisis procesual del compromiso individual. *Revista sociológica de pensamiento crítico* 9 (2),197-212.

Fuentes, C. (2016). La reforma a los partidos políticos. Modelos en pugna. En Garretón M. (coordinador). *La gran ruptura Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. (pp. 161-180). Santiago: LOM

Garretón, M. y Garretón R. (2010). La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales. *Revista de Ciencia Política* 30 (1), 115 – 148

Garretón, M. (Coord.). (2016). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago: LOM

Gravante, T. (2020). Emociones y reglas del sentir como impactos culturales de los movimientos sociales. *Interdisciplina* 22 (8), 157-179.

Haesbaert, R. (2020). Del cuerpo-territorio al territorio-cuerpo (de la Tierra): contribuciones decoloniales. *Revista Cultura y Representaciones Sociales* 29 (15), 267-301

Henríquez, K. y Pleyers, G. Comp. (2023). *Chile en movimientos*. Buenos Aires: CLACSO

Hochschild, A. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. *American Journal of Sociology* 85 (3), 551-575.

Jasper, J. (2012). De la estructura a la acción. La teoría de los movimientos sociales después de los grandes paradigmas.

Sociológica 75 (27), 7-48.

_____. (2013). Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación. *Revista Latinoamericana sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad* 10, 48-68.

_____. (2018). *The emotions of protest*. London and Chicago: The University of Chicago Press

Joignant, A., Garretón, M., Somma, N. y Campos, T. (2020). Informe Anual Observatorio de Conflictos 2020. Santiago, Chile: COES.

Maillet, A. et.al. (2021). Conflicto, territorio y extractivismo en Chile. Aportes y límites de la producción académica reciente. *Revista de Geografía Norte Grande*, 80, 59-80

Martuccelli D. (2019). Alain Touraine y la historia. *Lua Nova*, São Paulo, 106, 36-64. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-036064/106>

Martuccelli, D. (2010). La individuación como macrosociología de la sociedad singularista. *Persona y Sociedad XXIV* (3), 9-29.

_____. (2013). *Sociología de la modernidad. Itinerario del siglo XX*. Santiago: LOM.

Martuccelli, D. y Singly, F. (2012). *Las sociologías del individuo*. Santiago: LOM.

McAdam, D. (1989). The biographical consequences of activism. *American Sociological Review* 54, 744-760.

Melucci, A. (2002). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, DF: Colegio de México. Centro de estudios sociológicos.

McAdam, D. (1989). The biographical consequences of activism. *American Sociological Review* 54, 744-760

McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. N. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.

McAdam, D. Tarrow, S. y Tilly, Ch. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Madrid: Hacer

McAdam, D. Tarrow, S. (2010). Ballots and Barricades: On the Reciprocal Relationship between Elections and Social Movements. *Perspectives on Politics* 8 (2), 529-542

McCarthy, J. (1999). Adoptar y adaptar e inventar límites y oportunidades. En Mc Adam et al. (eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. (pp.205-220). Madrid. *Itsmo*

Moulian, T. (1997). *Chile Actual. Anatomía de un Mito*. Santiago: LOM

Muñoz, V. y Durán, C. (2019). Los jóvenes, la política y los movimientos estudiantiles en el Chile reciente. Ciclos sociopolíticos entre 1967 y 2017. *Revista Izquierdas* 45, 129-159

Observatorio de Nueva Constitución (2021, febrero). Partidos políticos e independientes: una mirada comparada al origen de las candidaturas en la elección de diputados/as 2017 y Convención Constitucional 2021. Recuperado en:

https://www.pauta.cl/pauta/site/docs/20210206/20210206015029/informe_observatorio_nueva_constitucion_claudio_fuentes_gonzalez_militantes_independientes_cc_febrero_2021.pdf

Oyarzo, C. G. (2018). *La vida entre contiendas: militancias y sentidos de la participación política en la lucha antidictatorial chilena*. Santiago: RIL Editores.

_____. (2019). Nuestras luchas de ayer: voces y narrativas generacionales sobre la derrota y los desafíos actuales de la izquierda chilena (1990-2018). *Revista Temas Sociológicos* (24), 229-265.

_____. (2020). La vida después de la lucha. Trayectorias laborales e historias emocionales de la izquierda chilena en la postdictadura. *Revista Austral de Ciencias Sociales* (39), 7-29.

<https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2020.n39-01>

Paredes, J., Ortiz, N. y Araya, C. (2018). Conflicto social y subjetivación política: performance, militancias y memoria en la movilización estudiantil post 2011. *Persona y Sociedad* 32 (2), 122-149

Paricán y Álvarez (2011). La nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009). *Revista Izquierdas* 10, 66-84

Pairicán (2018). Los gobiernos de la Concertación y su política indígena: el multiculturalismo. *Revista Anales* 15, 165-182

Pleyers, G. (2017). Entre las redes y las plazas. En Bringel, B. y Pleyers, G. (eds.). *Protesta e indignación global* (pp.37-46). Buenos Aires: CLACSO

_____. (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO.

Pleyers, G. (2023). El estallido chileno a la luz de la década global de los movimientos sociales. *Polis Revista Latinoamericana*, 22 (65), 320-351. <http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2023-N65-1868>

PNUD. (1998). *Informe de Desarrollo Humano 1998. Las Paradojas de La Modernización*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

_____. (2015). *Informe de Desarrollo Humano 2015. Los Tiempos de La Politización*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

_____. (2019). *Diez años de auditoría de la democracia: Antes del estallido*. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Poma, A. y Gravante, T. (2015). Las emociones como arena de la lucha política. Incorporando la dimensión emocional al estudio de la protesta y los movimientos sociales. *Ciudadanía Activa* 4, 17-44.

_____. (2017). Emociones, protesta y acción colectiva: estado del arte y avances. *Aposta* 74, 32-62.

_____. (2018). Manejo emocional y acción colectiva: las emociones en la arena de la lucha política. *Estudios Sociológicos XXXVI* (108), 595-618.

Poma, A. (2019). Impacto y manejo emocional en la lucha contra represas. *Revista de Estudios Avanzados* 31, 4-20.

Ponce, Camila. (2017). “Internet, nuevas formas de acción colectiva y subjetividades políticas: movilizaciones estudiantiles chilenas del 2011.” *Persona y Sociedad* 31 (2), 173–96.

_____. (2024). *Desde las calles a la Moneda. Liderazgo estudiantil y transformación política en el Chile contemporáneo*. Santiago: RIL.

Pudal, B. (2011). Los enfoques teóricos y metodológicos de la militancia. *Revista Sociológica* 25, 17-35

Romero-Toledo, H. (2019). Extractivismo en Chile: la producción del territorio minero y las luchas del pueblo aimara en el Norte Grande. *Colombia Internacional* [En línea], 98.

<http://journals.openedition.org/colombiaint/5026>

Somma, N. y Bargsted, M. (2015). La autonomización de la protesta en Chile (pp. 207–240.). En *Aprendizaje de la ciudadanía*. Santiago: Ediciones UC.

Siavelis, P. (1999). Continuidad y transformación del sistema de partidos en una transición modelo. En Drake y Jaksic (comp.). *El Modelo chileno. Democracia y desarrollo en los 90* (pp.223-259). Santiago: LOM

_____. (2009). Enclaves de la transición y democracia chilena. *Revista de Ciencia política* 29 (1), 3-21

Somma, N. y Medel, R. (2016). Shifting Relationships Between Social Movements and Institutional Politics. En Donoso, S. y Von

Bülow, M. Eds. *Postransitional social movements in Chile, organization, trajectories and political impacts* (pp.29-61). New York: Palgrave: Mc Millan.

Strauss, A. y Corbin, J. (2004). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para el desarrollo de la Teoría Fundamentada*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Tarrow, S. (1999). Estado y oportunidades. La estructuración política de los movimientos sociales. En McAdam et al. (eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (pp. 72-99). Madrid: Itsmo

Ther, F. (2012). Antropología del territorio. *Polis Revista Latinoamericana* 32, 1-16.

<http://journals.openedition.org/polis/6674>

Tilly, Ch. (1998). Conflicto político y cambio social. En Tejerina, B. e Ibarra, P. Eds. *Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural* (pp.25-41). Madrid: Trotta

Touraine, Alain. (agosto 1987). Conclusiones. La centralidad de los marginales. *Proposiciones* 14, 213-223.

_____. (1995). *Producción de la sociedad*. México, UNAM/IFAL

Unidad Social et.al. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente. Sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos. Santiago: Universidad de Chile. Recuperado en:

<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178886>

Whittier, N. (2001). Emotional Strategies: the Collective Reconstruction and Display of Oppositional Emotions in the Movement against Child Sexual Abuse. En Goodwin, J.; Jasper, J.M. y Polletta, F. Eds. *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*. (pp. 233-250) Chicago: University of Chicago Press

“Somos Históricas”: Un análisis cualitativo de los repertorios de acción feministas en Chile entre el 2019-2020

Rosario Freire Saray

Introducción

El 8 de marzo de 2020, cerca de 2 millones de mujeres se reunieron en Santiago bajo el lema "Somos Históricas" ("Movimiento feminista sigue haciendo historia", 2020). Esta marcha fue la mayor movilización vista en el país desde la vuelta a la democracia y puso al movimiento feminista en el foco de atención. La manifestación tuvo lugar pocos meses después del inicio de la ola de protestas que estalló en Chile en octubre del 2019 (también conocida como Estallido Social), y justo una semana antes de que entraran en vigor las primeras medidas de respuesta a la pandemia, que restringieron el uso del espacio público y cambiaron la forma en que distintas organizaciones sociales, entre ellas las feministas, perseguían sus demandas y objetivos. Los tres acontecimientos que acabo de describir reflejan el complejo y excepcional escenario social y político que acompaña a esta investigación.

La protesta feminista ha ocupado un lugar central durante los últimos años en América Latina. En los últimos años, las ciudades latinoamericanas han sido escenario de grandes movilizaciones para protestar contra el acoso, la violencia contra las mujeres y el derecho al aborto. Grandes movimientos como #NiUnaMenos en Argentina, o #VivasNosQueremos comenzaron a expandirse por toda la región. Además de denunciar la violencia, las organizaciones y colectivos feministas han expuesto discriminaciones en el ámbito laboral, el derecho al aborto, y el reconocimiento de diversidades de género y sexuales, en muchos casos estas demandas se han entrelazado con demandas étnicas y de clase que han estado presente históricamente (Larrondo & Ponce, 2019).

En Chile se organizaron grandes movilizaciones contra la violencia y por el derecho al aborto, pero fue el 2018 que marcó un punto de inflexión en el movimiento feminista chileno cuando más de sesenta campus universitarios fueron tomados para protestar contra la educación sexista y las innumerables denuncias de acoso en los espacios educativos, lo que se conoce como "Mayo Feminista".

En noviembre de 2019, en medio del estallido social, un vídeo en el que un grupo de mujeres chilenas interpretaban la canción "Un violador en tu camino", en referencia a la cultura de la violación, se hizo viral, convirtiéndose según algunos medios en un "himno feminista" (McGowan, 2019). La canción y la coreografía fueron replicadas en diferentes países del mundo e incluso traducidas a diferentes idiomas, situando al movimiento feminista chileno como un referente a nivel global.

El siguiente trabajo forma parte de una investigación etnográfica más amplia sobre los repertorios de acción colectiva de dos organizaciones feministas en Chile¹⁹ durante un periodo marcado por importantes acontecimientos sociales y políticos que afectaron al país. Es precisamente la forma en que las organizaciones feministas canalizan sus reivindicaciones y trabajan por sus objetivos en circunstancias políticas complejas y cambiantes, lo que interesa a esta investigación. En esta ocasión, analizo diferentes dimensiones de los repertorios de acción colectiva que me parecen relevantes para entender el activismo feminista en la actualidad, sobre los que reflexionaré en relación con el contexto en que se desarrollan y la literatura sobre protesta y movimientos sociales. Las dimensiones que he identificado son: la recuperación de la memoria como práctica política, la construcción de redes de solidaridad, las prácticas epistemológicas, el uso de internet y redes sociales, la multiplicación de los espacios de acción e intersección de las luchas, y la importancia del aspecto performativo y simbólico como parte del activismo feminista. Sin embargo, en este capítulo solo me enfocaré en las tres primeras dimensiones mencionadas.

La metodología está basada en una serie de métodos cualitativos tales como participación observante, grupo focal y análisis de documentos virtuales e impresos producidos por las organizaciones.

La presente investigación busca contribuir, a través de un enfoque dinámico, relacional y constructivista de la acción colectiva, a la comprensión de las complejas dinámicas que subyacen a los repertorios de acción en contextos donde múltiples crisis interactúan, así como a entender, desde un análisis situado, el activismo feminista en la actualidad.

¹⁹ Las dos organizaciones en que se basa esta investigación son la Coordinadora Feminista 8M (a la que me referiré durante el capítulo como "Coordinadora") y la Colectiva Feminista Buin (a la que me referiré como "Colectiva"). La primera es una articulación de múltiples organizaciones con presencia a nivel nacional y son las que convocan la Huelga Feminista del 8 de Marzo. La Colectiva en cambio es una agrupación pequeña y reciente en la Comuna de Buin, ubicada a 35 km de Santiago.

I. Breve contextualización del movimiento feminista en Chile

El feminismo en Chile tiene una historia de más de un siglo. Sus inicios coinciden con la primera ola global del feminismo que se caracteriza por demandas de derechos civiles y políticos, tales como el voto femenino. Lo que en Chile se logra en 1949 y se ejerce por primera vez en 1952. Durante los años 70 y 80, la lucha feminista en Chile se centra en los derechos humanos, ya que el país se encuentra bajo una dictadura militar. Un elemento central del feminismo de este período y que lo conecta con el feminismo actual es el pensar la igualdad de género como un elemento central para pensar la democracia (Miranda Perez & Henriquez Olivares, 2021), es justamente en este período que nace el slogan “democracia en el país y en la casa” de la socióloga feminista Julieta Kirkwood, pionera de los estudios de género en el país. Los 90s, por otra parte, período de post-dictadura, vieron una fragmentación y dispersión del movimiento feminista (Ponce Lara, 2020; de Fina & Figueroa, 2019), debido a que muchas mujeres que antes militaban desde los márgenes fueron ocupando espacios institucionales, lo que implicó también una desradicalización de una parte del movimiento. También fue en este período que se crearon organismos profesionales no gubernamentales para estudiar el género. Esto coincide con el período que Álvarez (1998) denomina NGOización y profesionalización de los feminismos en Latinoamérica. Este tiempo de “silencio feminista” en Chile no significa una ausencia de organizaciones o movilizaciones como indican Lamadrid y Benitt (2019), sino una desarticulación y pérdida de protagonismo público y demandas unificadas (Ríos Tobar, Godoy y Guerrero, 2003). Sin embargo, como plantean de Fina y Figueroa (2019), el feminismo militante continuó trabajando desde espacios menos visibles, tejiendo redes y adquiriendo fuerzas.

Las protestas feministas estudiantiles de Mayo del 2018, también llamadas “Mayo Feminista” significaron un resurgimiento masivo del feminismo en el país y pusieron a Chile en el foco internacional. A través de paros, marchas y tomas, las estudiantes cuestionaron la cultura patriarcal en los espacios educativos y la impunidad a los casos de abuso y violación (Miranda Leibe & Roque Lopez, 2019). Las estudiantes consiguieron poner la violencia de género en el centro del debate público y exigir fin a la educación sexista. A pesar de que en un comienzo el foco eran los casos de violación y abuso dentro de las universidades, la crítica al neoliberalismo y al patriarcado también surgieron a partir de estas movilizaciones que se extendieron más allá de las universidades (Miranda Perez & Henriquez Olivares, 2021).

Según estudiosas del feminismo en Chile, elementos característicos del movimiento actual son, por una parte, su conexión

histórica con el feminismo en el país, su resurgimiento masivo a partir de los espacios educativos (y por lo tanto su conexión con el movimiento estudiantil del 2011) y la forma en que dialoga con otros movimientos feministas latinoamericanos y globales (Ponce Lara, 2020; de Fina & Figueroa, 2019). La académica Camila Ponce argumenta que las características del movimiento feminista en Chile forman parte de una cuarta ola feminista, de Fina & Figueroa (2019) utilizan por otra parte el concepto de procesos, poniendo énfasis en la “*continuidad de las luchas y la coexistencia de distintas características, estrategias, discursos y prácticas políticas feministas a lo largo del tiempo*” (p.52).

Al mismo tiempo, en su diálogo con los feminismos latinoamericanos se observan convergencias importantes para analizar y entender su resurgimiento. Como argumentan las autoras Follegati & Ferreti (2020), la violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados ha sido un punto central de emergencia y articulación del movimiento feminista contemporáneo en Latinoamérica. Esto se debe, por una parte, a la importante trayectoria histórica de esta temática en contextos marcados por dictaduras y regímenes autoritarios, y por otra parte, a la intensificación de las violencias en un contexto de agudización de las consecuencias de las políticas neoliberales, lo que al mismo tiempo ha permitido analizar y conceptualizar las violencias en clave estructural. En esta misma línea, los feminismos latinoamericanos de los últimos años han llegado a la comprensión del cuerpo como un *territorio de acción y reflexión* (Garita, 2019). Es en el cuerpo de las mujeres donde se entrelazan las diversas opresiones. El cuerpo racializado, colonizado, abusado y explotado es el punto de partida donde se experimenta esta intersección de violencias y desde donde se resisten. Es así como el cuerpo se transforma en un elemento central de la protesta tal como podemos ver en la performance de Las Tesis o en las marchas por el aborto o la Huelga feminista (Garita, 2019; Larrondo & Ponce, 2019; Proaño Gomez, 2020).

II. Repertorios de acción colectiva

Una de las características de los feminismos actuales tanto en Chile como en América Latina, es la imposibilidad de identificar un actor homogéneo. Sonia Álvarez (1998; 2001) en sus estudios sobre feminismos latinoamericanos, sostiene que desde los años 90 ha habido una reconfiguración del campo feminista en un campo amplio, heterogéneo, policéntrico y multifacético, que va más allá de los propios grupos y organizaciones del movimiento. Desde esta perspectiva, se trata de acontecimientos de acción colectiva que no proceden necesariamente de una organización definida, ni presentan una identidad unificada, y

cuya continuidad no está asegurada. Teniendo esto en cuenta, un enfoque para estudiar a estos actores colectivos, como sugieren Natalucci y Rey (2018), es estudiarlos a través de sus repertorios de acción. Según Taylor y Van Dyke (2004), el aspecto que más distingue a los movimientos sociales de otros actores políticos es su uso estratégico de formas de acción innovadoras y no institucionalizadas. El concepto de repertorios de acción colectiva nos remite al trabajo de Charles Tilly (2006). Estos se definen como el conjunto de tácticas disponibles para un movimiento en un momento dado. Según este enfoque, este conjunto de actuaciones está limitadas y definidas por el entorno político e histórico específico en el que se desarrollan y se basan en entendimientos compartidos. Por lo tanto, son al mismo tiempo culturales y estructurales. Sin embargo, dentro de los límites del entorno social en el que tienen lugar, y debido a su naturaleza interactiva, también hay espacio para la innovación, especialmente en tiempos de rápida evolución de las oportunidades políticas. Taylor & Van Dyke (2004) también expanden sobre este enfoque y se refieren a los repertorios tácticos como “sitios de disputa en los cuales cuerpos, símbolos, identidades, prácticas y discursos son utilizados para conseguir o prevenir cambios en relaciones de poder institucionales (p.268). Jasper & Polleta (2019) también argumentan que los repertorios de acción no son fijos, y que los actores pueden modificar sus estrategias a través de la interacción.

Esta conceptualización de los repertorios de acción como *sitios de disputa* nos permite entenderlos no solo como formas de acción de acción predeterminadas y que cambian gradualmente, sino también como espacios que están siendo constantemente resignificados.

Al mismo tiempo, el análisis de los repertorios de acción feministas requiere una consideración especial a los aspectos culturales que influyen en las formas de acción. Los repertorios de acción de las organizaciones feministas nos hablan de cómo se refleja y moviliza el concepto de género en el contexto específico y general, de cómo estas formas interactúan con otras dimensiones y contextos a la vez que se enraízan históricamente en la larga trayectoria de los movimientos de mujeres.

Donatella della Porta (2015) sugiere un enfoque que tenga en cuenta los diferentes aspectos evaluados. La autora propone un análisis *relacional*, que mire los campos donde los diferentes actores - institucionales y no institucionales- interactúan; *constructivista*, en el sentido de que presta atención a las oportunidades y estructuras externas, así como a las interpretaciones sociales de los actores colectivos; y *dinámico*, que se refiere a la comprensión de los complejos mecanismos que atraviesan los campos contenciosos en determinados momentos.

A través de una metodología de investigación inductiva, he podido reconocer cómo los medios de acción de las organizaciones estudiadas están relacionados e influenciados por las oportunidades y estructuras políticas, como sugiere el enfoque de Tilly, a la vez que están determinados por aspectos culturales, relacionales y dinámicos, siguiendo el enfoque de Della Porta. El estudio de los repertorios de acción en sus particularidades, como ha sido el caso en esta investigación, me ha permitido comprender las complejidades y variedades de factores que motivan las diferentes formas a través de las cuales los actores colectivos persiguen sus objetivos.

III. Dimensiones de los repertorios de acción

a. La recuperación de la memoria como práctica política

Muchas de las actividades y acciones que observé durante la investigación tenían como objetivo recuperar las voces y experiencias de las luchas pasadas de las mujeres en el país. Estas luchas pasadas, usualmente invisibilizadas por las narrativas hegemónicas, estuvieron presentes en los repertorios de acción feministas no sólo en tanto influyeron directamente en las formas de acción disponibles, sino que hubo un ejercicio continuo y explícito de referencia y recuperación de estas voces y experiencias.

En septiembre de 2019, apenas un mes después de que comenzara a sumarme a los distintos eventos e instancias políticas de las dos organizaciones de esta investigación, la Coordinadora organizó el "Mes de las Memorias de las Rebeldías Feministas", apelando a un ejercicio de reivindicación histórica de la participación de las mujeres en las luchas contra la dictadura. Bajo este lema se organizaron diversas acciones. Uno de los eventos denominado "Procesión por la memoria", consistió en un recorrido por distintos lugares de Santiago que durante la dictadura militar funcionaron como centros de tortura y detención. Las mujeres fueron llamadas a participar en el acto vestidas de luto, enfatizando el carácter de la convocatoria. En las distintas paradas del camino se instalaron placas con la inscripción "Aquí se torturó". "Recordar para resistir, y resistir recordando" se lee en uno de los posts de Instagram de la Coordinadora con una foto de la procesión por la memoria. La memoria se convierte en un acto político y colectivo, se trata de contrarrestar las narrativas históricas hegemónicas que han obviado a las mujeres.

Otra acción relevante que tuvo lugar en este marco fue la reparación del memorial "Venda Sexy". Este lugar era un antiguo centro de tortura recuperado por organizaciones feministas. La falta de justicia

en relación con los crímenes cometidos en dictadura hace de ésta un proceso aun abierto, ya que las personas afectadas no han podido vivir el proceso de duelo, lo que dota de aún más relevancia y significado los actos de resistencia a través de la memoria.

Los actos de memoria adquirieron diferentes formas a lo largo del periodo de investigación. El 19 de diciembre de 2019 se construyó un "memorial feminista" como acción de la Coordinadora en el marco del Día Nacional contra el Femicidio, para conmemorar a las mujeres asesinadas por la violencia patriarcal. Otro acto denominado "tejemos memoria para tejer lucha: tejiendo o bordando juntas por la lucha de los territorios en sacrificio". Esta vez el acto de memoria se expresó a través del acto de bordar y tejer, una práctica tradicional que en este caso sirvió como forma de conexión con las prácticas ancestrales y el territorio. Como indican Piper et.al (2011) "En la construcción de memoriales y monumentos, el uso repetido y ritual de ciertos símbolos, estéticas y discursos ayuda a fijar ciertas memorias. Y a menudo a separarlas de las prácticas de poder que las producen".

Ese mismo mes, la Colectiva organizó un acto conmemorativo el 11 de septiembre por las víctimas de la dictadura militar en la plaza principal del pueblo (Ver Foto 1). Se colgaron fotos de mujeres que habían sido torturadas o asesinadas durante ese período, acompañadas de una *velación* (que consiste en un homenaje colectivo a una persona o personas fallecidas mediante el encendido de velas) y un acto público en el que leyeron algunas declaraciones sobre el tema.



Foto 1. Evento conmemorativo el 11 de Septiembre. Colectiva Buin, 2019a.
Obtenido de: <https://www.instagram.com/p/B2S0jxBYGa/>

Durante los siguientes meses, las *velatones* se convirtieron en una forma de acción recurrente. Hubo velatones en memoria de Camilo Catrillanca, activista indígena asesinado por las fuerzas policiales un año antes de la revuelta social, y velatones por las víctimas del Estado durante las manifestaciones en curso. La *velatón* se convirtió no sólo en un acto de conmemoración sino también en una forma de protestar contra la represión estatal, como una forma de decir "el pueblo no olvidará la impunidad con la que actúa el Estado". Muchas veces la *velatón* iba acompañada de una protesta posterior, indicando cómo memoria y protesta se fusionan y refuerzan mutuamente a lo largo de las acciones.

Lo que está sucediendo hoy, es parte de un hilo histórico que se está reconstruyendo en el presente. Este hilo histórico fue simbolizado en todas las acciones de la Coordinadora durante el mes de memorias de rebeldías feministas a través de un hilo rojo, representando la conexión, el hilo que une las luchas de nuestras antepasadas con nuestras luchas actuales. En un contexto en el que las mujeres siguen siendo asesinadas todos los días y la violencia es una amenaza constante, recordar a las que ya no están se convierte en un imperativo, un recordatorio de que la lucha por nuestras vidas sigue siendo real y necesaria.

Conmemorar significa recordar juntas, crear una narrativa feminista colectiva que reconozca el papel que las mujeres han tenido en la construcción de la historia y, al mismo tiempo, cuando lo reconocemos, podemos conectar esas luchas con las actuales. Como sugiere Poole (2008), el rol de la memoria no es sólo cognitivo; no se limita a transmitir información del pasado al presente. También es normativo, transmite responsabilidades. La fuerza simbólica de la memoria reside en su capacidad de producir sujetos, relaciones e imaginarios sociales, capacidad que la convierte en un potencial de resistencias y transformaciones. La magnitud de esta fuerza depende de la capacidad de estas prácticas de tensionar las versiones hegemónicas (Piper et.al, 2011).

Según Farthing & Kohl (2013) en su investigación sobre el papel movilizador de la memoria en los movimientos sociales de Bolivia, existe una "relación mutuamente constitutiva entre memoria y activismo, donde una construcción instrumental de las memorias colectivas sirve para proporcionar significados compartidos a movimientos divergentes" (p. 361). Al renovar constantemente el pasado y la conexión con el lugar, la memoria colectiva sirve como componente clave para mantener vivas las aspiraciones de justicia social y económica" (Farthing & Kohl, 2013).

Somos históricas, el lema retratado en el centro de la Plaza Baquedano (rebautizada Plaza Dignidad durante el estallido) durante la manifestación del 8 de marzo, y que da título al presente trabajo, ilustra

cómo el movimiento feminista actual está siendo histórico en la forma en que se está estableciendo como un actor político importante en el presente, está haciendo historia, pero al mismo tiempo es histórico en el sentido de que es el resultado de todas esas luchas e historias pasadas, es parte de un continuo histórico que está siendo constantemente revivido en el presente. En un diálogo de activistas feministas sobre el devenir de la huelga, al discutir sobre cómo surgieron las diferentes instancias de organización y acción como la huelga, expresaron cómo ésta se establece en procesos e historias anteriores, en el reconocimiento de una conciencia histórica. También reconocen que toda historia está anclada a un contexto específico, por lo que, si bien es necesario el reconocimiento de luchas anteriores, existe un proceso constante de reflexión y actualización de las acciones de acuerdo con la valoración actual del contexto. La memoria se entiende como un lugar de disputa, un campo de conflicto donde las diferentes narrativas luchan entre sí.

b. Redes de solidaridad: creando comunidad

Otro aspecto fundamental observado en muchas de las acciones y actividades de las dos organizaciones es que estas no estaban necesariamente dirigidas hacia un actor político externo, sino que tenían como objetivo crear y/o fortalecer los lazos existentes entre los propios activistas, con la comunidad y otras organizaciones sociales, y también desarrollar estructuras de solidaridad para hacer frente a los diversos desafíos que se derivaban del complejo contexto social y político.

Según Rita Segato (2016), parte del proyecto de modernización, intrínsecamente ligado al de colonización, ha traído consigo la privatización del espacio doméstico, su marginación y despolitización, lo que ha tenido consecuencias nefastas en términos de violencia contra las mujeres. Las iniciativas encaminadas a crear redes y reconstruir los lazos comunitarios son, por tanto, una forma de resistencia a la violencia. Las "tecnologías de la sociabilidad" que dominan las mujeres, el retejido del tejido social y la repolitización de lo doméstico son formas de acción política necesarias para hacer frente a un Estado patriarcal y colonial basado en mecanismos de desvinculación y aislamiento. El fortalecimiento del tejido social proporciona una base para la organización política y social.

Entre el repertorio de acciones de ambas organizaciones hubo numerosas iniciativas de apoyo y solidaridad con las víctimas de la violencia. Otras acciones apuntaron a fortalecer y ampliar los lazos comunitarios, como el evento "Día familiar para seguir de pie", organizado por la Colectiva meses después de iniciada la revuelta social para reunir a la comunidad en espacios de contención en un contexto de

agotamiento generalizado tras meses de protestas. El propósito de esta instancia era "seguir en resistencia y no olvidar la lucha", pero a diferencia de otros eventos que tuvieron un carácter más disruptivo, éste tuvo un formato festivo. Hubo talleres de artesanía, música en directo, actuaciones artísticas una feria abierta y una olla común.

En otra ocasión, en diciembre de 2019, la Colectiva participó junto a otras organizaciones sociales de la zona, en la organización de un "Festival por la Asamblea Constituyente". Fue una instancia abierta a toda la comunidad con música en vivo, teatro y talleres, con el objetivo de construir redes en la localidad y abrir espacios de diálogo hacia el proceso constituyente en desarrollo. Esta actividad funcionó como una instancia de educación, contención y acción creativa. Como también señala Álvarez (2019) "un festival tiene un formato menos académico, se trata de estar en contacto con la calle, de juntarse, es como una 'bocanada de aire fresco feminista'. Este tipo de acciones construyen resistencia al construir redes comunitarias fuera de las esferas políticas formales.

Otros actos feministas, como el estampado de pañuelos, se realizaban recurrentemente en espacios públicos para que otras personas pudieran unirse libremente (véase la Foto 2).



Foto 2. Estampado de pañuelos. Colectiva Feminista Buin, 2019b. Obtenido de: <https://www.instagram.com/p/B5rFYXOlhtL/>

Un día antes de la marcha de las mujeres, y dentro del esfuerzo continuo de la Colectiva por fortalecer las redes locales y descentralizar el feminismo antes de sumarse a la convocatoria de una manifestación masiva en Santiago, organizaron una "Vigilia" en la plaza principal de la comuna. El evento fue coordinado junto a otras organizaciones

feministas locales y consistió en una jornada multicultural con música, talleres, stands informativos, feria de negocios de mujeres locales, performances. La plaza estaba llena de mujeres con pañuelos verdes y morados, pintando pancartas para la marcha del día siguiente, bailando, hablando entre ellas. El feminismo se abría a la comunidad, se abría a las familias, a los niños. El acto terminó con una protesta por la ciudad, en la que interpretamos el baile viral "Un Violador en tu Camino" frente a la comisaría de policía.

Respecto a esto, en el grupo focal realizado con la Colectiva, al reflexionar sobre estas acciones una de las participantes menciona:

“Y también era necesario lo que hicimos, la vigilia, por ejemplo, para articular las redes. Para generar comunidad en Buin. Porque claro, después del Estallido social como que se generó un entramado social distinto. Teníamos distintos contactos, empezábamos a conocer distintas organizaciones, comenzaban a nacer nuevas organizaciones. Y yo creo que ese día era importante trabajar juntos, trabajar en conjunto los que creíamos y los que luchábamos por lo mismo: por los derechos de nosotras”
(Participante grupo focal, Colectiva Feminista Buin).

Algunos meses después de estos acontecimientos, y tan pronto como las primeras medidas de la pandemia entraron en vigor, diferentes estrategias basadas en construir redes de solidaridad y respuestas colectivas a cuestiones urgentes fueron establecidas por las dos organizaciones de esta investigación, de acuerdo con sus recursos disponibles y capacidades organizativas. Los grupos feministas fueron rápidos en reconocer el mayor riesgo que el encierro en el espacio privado representaba para las mujeres y las disidencias de sexo y género, por lo que las redes de apoyo se volvieron cruciales para enfrentar este contexto. Durante la pandemia, las mujeres asumieron la organización solidaria de la vida cotidiana familiar y social en medio de la adversidad (Richard, 2021).

La Coordinadora elaboró rápidamente un "Plan de Emergencia Feminista". Este consistía en diferentes estrategias como realizar registros de la población en riesgo en barrios y territorios, definir números de emergencia y planes de escape en caso de violencia, organizar equipos de atención para hijos de padres trabajadores e identificar profesionales en los barrios que pudieran apoyar con información y ayuda especializada (Ver Foto 3).

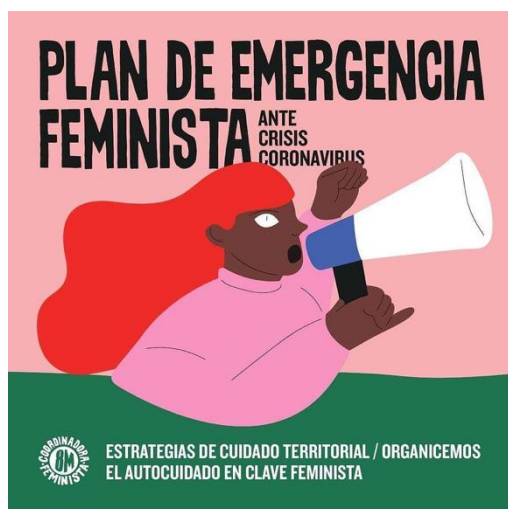


Foto 3. Plan de emergencia feminista. Coordinadora Feminista 8M, 2020a.
Obtenido de: https://www.instagram.com/p/B-Al_HfjSc0/

Ambas organizaciones utilizaron sus redes sociales para crear redes de autogestión y apoyo mutuo. Las organizaciones utilizaban sus plataformas para compartir los emprendimientos de las mujeres y así fomentar un espacio de abastecimiento entre las personas afectadas por la pandemia. El apoyo mutuo y las estrategias colectivas fueron claves en la respuesta feminista al recrudecimiento de la crisis.

Las ollas comunes, (una forma de acción heredada de los repertorios históricos nacionales de acción) también se convirtieron en una acción recurrente durante este tiempo. Si bien aparecen como una estrategia necesaria para suplir la necesidad urgente de alimentar a la gente en tiempos de crisis, también desarrollan oportunidades y redes de solidaridad y organización colectiva (Hardy, 1986). Esta forma de estructura solidaria tiene un fuerte enfoque territorial, así como una gran capacidad organizativa y política. Al mismo tiempo, las ollas comunes son repertorios con un marcado enfoque de género, ya que tradicionalmente han estado a cargo de mujeres, lo que demuestra la importancia de las redes de mujeres y de cómo se vinculan a la respuesta actual a una crisis. Los almuerzos o desayunos colectivos también fueron comunes dentro de los repertorios de acciones observados durante la investigación.

Una de las principales características de las redes de solidaridad es su enfoque de base, que desafía la percepción dominante de la caridad y convierte a los participantes de "receptores" pasivos de ayuda en actores activos de la lucha social (Arampatzi, 2016). Como también observó Vogiatzoglou (2017) durante las protestas contra la políticas de

austeridad en el contexto griego, estas estructuras operan de forma voluntaria y prestan servicios a quienes más lo necesitan, y funcionan con una estructura de democracia directa y asamblea, llenando el vacío de un Estado casi ausente.

En línea con la investigación de Arampatzi (2016) sobre las estructuras de solidaridad en Grecia, también se observa en este caso cómo estas formas de organización desempeñan un papel múltiple. En primer lugar, satisfacen necesidades urgentes en contextos de crisis; en segundo lugar, sirven como mecanismos activos y transformadores de resistencia y politización y, al mismo tiempo, crean posibilidades de formas alternativas de organización socioeconómica.

c. Prácticas epistemológicas

Los feminismos siempre han problematizado y aportado una lente crítica a las narrativas hegemónicas y al funcionamiento de la sociedad. La elaboración de sistemas alternativos de ideas y estrategias sobre cómo cambiar el statu-quo siempre han sido asuntos centrales para las organizaciones feministas de todo el mundo. Estos espacios colectivos de producción de conocimiento son definidos por Della Porta & Pavan (2017, p.297) como:

"conjuntos de prácticas organizativas que fomentan la coordinación de experiencias y racionalidades desconectadas, locales y altamente personales dentro de un sistema cognitivo compartido capaz de proporcionar a los movimientos y a sus partidarios una orientación común para hacer reivindicaciones y actuar colectivamente para producir cambios sociales, políticos y culturales".

Durante el proceso de investigación uno de los elementos que más llamó mi atención fue la cantidad de acciones e instancias de reflexión profunda y producción de conocimiento que tenían lugar dentro de las organizaciones. El carácter etnográfico de esta investigación me permitió adentrarme en aquellas prácticas que no suelen ser visibles para el público pero que constituyen una parte esencial del trabajo de dichas organizaciones. Estos repertorios de producción de conocimiento, en los que se reflexiona sobre la democracia y se aportan nuevos paradigmas y modelos de análisis de la sociedad, encarnan gran parte del trabajo de los dos sujetos de esta investigación y constituyen la base de su acción política (Casas-Cortez et.al,2008). Sostengo, que las estas instancias de producción de conocimiento (especialmente de la Coordinadora), fueron la razón por la que estas dos organizaciones pudieron responder y

adaptarse tan rápida y eficazmente a los diferentes retos políticos y sociales que surgieron a lo largo del periodo de investigación.

Una instancia central de producción de conocimiento que se tornó crucial en la organización y posicionamiento de los movimientos feministas en el país, así como en la elaboración del programa de la Huelga Feminista, fueron los encuentros de mujeres.

La idea de desarrollar el programa de la huelga a través de una serie de encuentros surgió de la necesidad de construir una respuesta alternativa y establecer demandas que no pudieran ser apropiadas por las autoridades, porque iban a ser el producto de un proceso continuo de organización. En Octubre de 2019, a pocas semanas de que estallaran las protestas contra el gobierno, la Coordinadora había organizado una serie de Encuentros en distintas regiones del país bajo el lema "territorio y feminismo". El objetivo era "*seguir propiciando encuentros territoriales y zonales de quienes luchan, fortalecer la organización entre las diversas feministas, mujeres, disidentes que en sus comunidades construyen herramientas y planes de lucha para la transformación y la resistencia*" (Coordinadora Feminista 8M, 2019)". Por un lado, en estas instancias se estructuran planes de acción y se discuten y reflexionan tareas y orientaciones comunes para el proceso de transformación, y al mismo tiempo sirven para construir las redes necesarias para sostener futuras acciones y movilizaciones. La fuerza con la que las organizaciones feministas se sumaron a las manifestaciones posteriores y plantearon sus reivindicaciones fue resultado de las estructuras existentes construidas a través de estas acciones.

El segundo Encuentro organizado por la Coordinadora tuvo lugar en enero de 2020, en el contexto de las revueltas sociales y dos meses antes de la Marcha de las Mujeres. A la lucha contra la "precarización de la vida", que había sido identificada como eje del programa feminista desarrollado a lo largo del año, se sumaba ahora un contexto de extrema violencia estatal. Esta nueva coyuntura exigió a los grupos feministas un análisis y un plan de acción actualizados. Más de cinco mil mujeres y disidencias se inscribieron en el evento, que tenía como objetivo construir alternativas dentro del actual proceso de transformación.

Las asambleas también formaron parte del repertorio común de acciones dentro de los grupos feministas antes de que se convirtieran en una forma regular de organización durante el estallido social. La creación de la propia Coordinadora fue un producto de la asamblea que se formó después de la Marcha de las Mujeres de 2018. La idea era dar una continuidad al proceso de organización y reflexión que se había desarrollado en la Marcha, y trabajar en un programa que se iba a construir a través de encuentros. Al identificar una realidad social fragmentada, las feministas decidieron responder desarrollando una agenda común contra la precarización de la vida. Las asambleas son

espacios abiertos de diálogo que sirven para analizar y reflexionar sobre el contexto, funcionan como espacios de encuentro y decisión que responden a la continuidad de los procesos. A través de instancias como los encuentros y las asambleas, los grupos feministas avanzaron en una evaluación integral y contingente de la realidad social y formaron respuestas pertinentes desde un lente feminista. La evaluación situada de cada situación proporciona a las asambleas un estado de novedad. Se actualizan constantemente. Es una repetición que produce diferencia.

Los cabildos también fueron otra forma de reunión, similar a las asambleas pero con un carácter más local. En noviembre de 2019, un mes después del inicio de las protestas, la Colectiva organizó el primer Cabildo feminista de la localidad, que estuvo abierto a todas las mujeres que quisieran participar. A través del diálogo, se identificaron y se reflexionaron las principales demandas de las mujeres de la localidad y se creó una petición feminista que luego se entregó al alcalde. Era la primera vez que se organizaba un Cabildo de mujeres en la comuna con el objetivo de plantear las demandas y necesidades del territorio. Fue una instancia autoconvocada de discusión, contención y aprendizaje con alrededor de 30 mujeres de diferentes edades, donde cada una aportó diferentes perspectivas, opiniones y propuestas para el petitorio que fue redactado colectivamente (Ver Foto 4).



Foto 4. Cabildo. Colectiva Feminista Buin. 2019c. Obtenido de: <https://www.instagram.com/p/B4bSBQThUVD/>

Esta práctica de construcción de conocimiento desde la experiencia feminista se extendió también a la necesidad de contrarrestar los espacios hegemónicos de difusión del conocimiento. Una de las acciones que representó esto es la "Cuenta Pública Feminista" que realizó la Coordinadora, que se desarrolló como una respuesta directa a la cuenta pública "oficial" que el presidente del país da cada año, en la

que retrata públicamente lo realizado durante su mandato. Alineada con esta estrategia, la Coordinadora también editó su propio periódico que se entregaba en las estaciones de metro y al que también se puede acceder online (Ver Foto 5).



Foto 5. La Primera. Coordinadora Feminista 8M, 2019b. Obtenido de: <https://www.instagram.com/p/B5SghwyFSeg/>

Según Della Porta & Pavan (2017) las cuestiones epistemológicas adquieren un rol importante en tiempos de crisis. En el contexto de una crisis sanitaria y social, como fue la pandemia, el conocimiento también es visto como una necesidad. A finales de septiembre, las semanas del aborto fueron organizadas. El aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los casos en Chile, a lo que la Coordinadora respondió organizando una serie de eventos transmitidos por Internet para informar y apoyar a las mujeres en el tema. Hubo pañuelazos virtuales, intercambio de experiencias abortivas y conversaciones sobre cómo luchar por un sistema público de salud sin violencia obstétrica. En un caso donde existe un problema estructural en términos de falta de fuentes oficiales de información y apoyo por parte del Estado, las redes feministas que difunden conocimiento e información se vuelven esenciales.

Lo que es transversal a todas estas instancias de producción y difusión de conocimiento descritas anteriormente es, en primer lugar, la comprensión del conocimiento como un lugar colectivo de disputa. Implica un proceso constante de diálogo y reflexión. En segundo lugar, este proceso no surge de la nada, sino que es producto del aprendizaje de la praxis y la experiencia políticas. Existe una retroalimentación constante entre la acción política y la producción de conocimiento. Como expresan Casas-Cortez et.al (2008), los conocimientos producidos en estas

instancias son "situados y encarnados, más que neutrales y distanciados (p.42-43)". Al generar conocimiento desde el activismo y desde los territorios, los movimientos feministas plantean una crítica epistemológica: el conocimiento no sólo proviene de la academia. Según las mismas autoras, estas prácticas son también políticamente cruciales por la compleja relación entre conocimiento y poder, y por lo que pueden decirnos sobre el contexto político en el que tienen lugar.

Por último, es importante reconocer que las estructuras horizontales que caracterizan estas instancias y las formas democráticas de toma de decisiones que se practican funcionan como un "laboratorio para la micropolítica de la democracia" (Casas-Cortez et.al, 2008). El conocimiento sobre formas alternativas de democracia no sólo se produce y se difunde, sino que también se ejerce y se practica a diario.

Conclusión

El propósito de la investigación presentada fue identificar dimensiones y aspectos comunes entre los repertorios de acción de dos organizaciones feministas chilenas observados en el período comprendido entre 2019-2020, marco temporal marcado por drásticos cambios en el escenario social y político del país. A través de métodos etnográficos y cualitativos, llegué a seleccionar dimensiones que consideré relevantes para comprender la amplia gama de acciones que estos dos grupos estaban empleando para cumplir sus objetivos.

Basándome en mi investigación, en primer lugar, me gustaría señalar cómo todas las instancias desempeñan un papel importante dentro del proceso de organización. El desarrollo de tácticas y formas de organización es más que una mera elección instrumental. Es un proceso de aprendizaje continuo desarrollado a través de una retroalimentación constante de acción y reflexión (Della Porta, 2015). Es un ejercicio de imaginación política en el que los actores se piensan y repiensen continuamente a sí mismos en el proceso.

Además, y desafiando las perspectivas tradicionales sobre los repertorios de acción, esta investigación ha mostrado cómo las acciones no sólo se dirigen a otros actores políticos o de la sociedad civil, sino que también pueden tener una lógica de fortalecimiento de la dinámica interna del grupo y de construcción de redes con otros actores. Al mismo tiempo, los objetivos de los repertorios de acción no sólo se dirigen al poder político. Se trata también de una lucha por los significados y por disputar el sentido de la propia democracia.

Aunque los canales formales e institucionales siguen siendo un medio legítimo para dirigir sus demandas, el alcance del repertorio crece constantemente y las organizaciones feministas participan en todos los

frentes posibles y también alinean sus demandas con las de otras luchas. Además, en un contexto marcado por una grave crisis de legitimidad del neoliberalismo, y la desconfianza en los actores e instituciones políticas más tradicionales.

A pesar de las condiciones cambiantes y adversas, las mujeres nunca dejaron de actuar, pensar y tomar medidas para mantener sus redes. Organizaron asambleas, ollas comunes, se solidarizaron con las víctimas de violaciones de derechos humanos de la represión policial, activaron colectivos artísticos y fortalecieron complicidades con las diversidades sexuales y de género y se implicaron plenamente en la reflexión en curso sobre la democracia y una nueva constitución (Richard, 2021).

En resumen, el movimiento feminista en Chile ha conseguido consolidarse como un actor político significativo en los últimos años gracias a la variedad de sus acciones y estrategias, su capacidad de adaptarse continuamente y responder a la contingencia, sus interacciones con otros movimientos y causas, sus constantes momentos de reflexión y generación de conocimiento, su innovación en métodos y, al mismo tiempo, su reconocimiento y conexión con el contexto histórico más amplio.

Bibliografía

Álvarez, S. (2019). Feminismos en Movimiento, Feminismos en Protesta. *Revista Punto Género*, 11, 73 - 102. doi:10.5354/0719-0417.2019.53881

Álvarez, S. (1998). Feminismos Latinoamericanos. *Estudios Feministas*, 6(2), 265-284. <http://www.jstor.org/stable/43904051>

Arampatzi, A. (2016). Constructing solidarity as resistive and creative agency in austerity Greece. *Comparative European Politics*, 16(1).50-66. doi:10.1057/s41295-016-0071

Colectiva Feminista Buin [@colectivafeministabuin]. (2019a, 12 de septiembre). “*Conmemoración 11 Septiembre*” [Foto]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/B2S0jjxBYGa/>

Colectiva Feminista Buin [@colectivafeministabuin]. (2019c, 4 de noviembre). “*1er cabildo de mujeres Buin*” [Photo]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/B4bSBQThUVD/>

Colectiva Feminista Buin [@colectivafeministabuin]. (2019b, 5 de diciembre). “*Estampado de pañoletas*” [Photo]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/B5rFYXOltL/>

Coordinadora Feminista 8M. (2019). *Programa Encuentro Mujeres, Territorio y Feminismo/ Niñez y Participación Política*[Folleto].

Coordinadora Feminista 8M [@coordinadorafeminista8m]. (2019b, 25 de noviembre). “La Primera en Elena Caffarena” [Foto]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/B5SghwyFSeg/>

De Fina, D. y Figueroa, F. (2019). Nuevos “campos de acción política” feminista: Una mirada a las recientes movilizaciones en Chile. *Revista Punto Género*, (11), 51-72. <https://doi.org/10.5354/0719-0417.2019.53880>

Della Porta, D. (2015). *Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back into Protest Analysis*. Polity Press.

Della Porta, D. & Pavan, E. (2017). Repertoires of knowledge practices: Social movements in times of crisis. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal* 12(4), 297-314. doi: 10.1108/QROM-01-2017-1483

Farthing, L. & Kohl, B. (2013). Mobilizing memory: Bolivia’s enduring social movements. *Social Movement Studies*, 12(4). 361-376. <http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2013.807728>

Follegati, L., & Ferretti, P. (2020). “Hasta que valga la pena vivir”: violencia y reproducción social como claves de la emergencia feminista contemporánea en América Latina. *Anuario De La Escuela De Historia*, (32). <https://doi.org/10.35305/ach.vi32.293>

Follegati, L. (2021). “Nos quitaron hasta el miedo”: Los feminismos en la revuelta social chilena. *LASA Forum*, 51, 4-10. <https://forum.lasaweb.org/files/vol51-issue4/Dossier-1.pdf>

Gago, V. (2019). *La potencia feminista: o el deseo de cambiarlo todo*. Tinta Limón.

Garita, N. (2019). Prólogo. En M. Larrondo & C. Ponce Lara (Eds.), *Activismos Feministas Jóvenes: Emergencias, Actrices y Luchas en América Latina* (pp.11-19). CLACSO. doi: 10.2307/j.ctvt6rkfs

Hardy, C. (1986). *Hambre más dignidad: ollas comunes*. Programa de Economía del Trabajo.

<http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0033331.pdf>

Jasper, J.M & Polleta, F. (2019). The cultural Context of Social Movements. En D.A. Snow, S.A. Soule, H. Kriesi & H.J. McCammon (Eds.), *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (2nd ed., pp.63-78). WILEY Blackwell.

Lamadrid Álvarez, S., & Benitt Navarrete, A. (2019). Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016. *Revista Estudios Feministas*, 27(3), 54709. <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n354709>

Larrondo, M. Ponce, C. (2019). Activismos Feministas Jóvenes en América Latina. Dimensiones y Perspectivas Conceptuales. In M. Larrondo & C. Ponce Lara (Eds.), *Activismos Feministas Jóvenes:*

Emergencias, Actrices y Luchas en América Latina (pp.21-38). CLACSO. doi: 10.2307/j.ctvt6rkfs

Miranda Leibe, L. & Roque Lopez, B. (2019). El Mayo Estudiantil Feminista del 2018 en la Pontificia Universidad Católica de Chile: "La revolución es feminista". En M. Larrondo & C. Ponce Lara (Eds.), *Activismos feministas jóvenes: Emergencias, actrices y luchas en América Latina* (pp. 59–78). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rkfs.5>

Miranda Pérez, F. y Henríquez Olivares, M. (2021). Movimiento feminista chileno y violencias de género. Claves de lectura para entender la acción colectiva en el tiempo presente. *Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria*, 7(2), 46-63. <https://doi.org/10.29035/pai.7.2.46>

Movimiento feminista sigue haciendo historia: dos millones de mujeres marcharon en Santiago y regiones en el 8M. (El Mostrador, 2020, 8 de marzo). <https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/03/08/movimiento-feminista-sigue-haciendo-historia-dos-millones-de-mujeres-marcharon-en-santiago-y-regiones-en-el-8m/>

McGowan, C. (2019, 6 de Diciembre). Chilean anti-rape anthem becomes international feminist phenomenon. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/06/chilean-anti-rape-anthem-becomes-international-feminist-phenomenon>

Natalucci, A. & Rey, J. (2018). ¿Una nueva oleada feminista? Agendas de género, repertorios de acción y colectivos de mujeres (Argentina, 2015-2018). *Revista de Estudios Políticos y Estratégicos*, 6(2), 14-34. <https://sitios.vtte.utem.cl/revistaepe/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/revista-estudios-politicos-estrategicos-epe-vol6-n2-2018-Natalucci-Rey.pdf>

Piper, I., Reyes, M.J., Fernandez, R. (2011). Women and public space: A psychosocial analysis of the monument women in memory`. *Feminism & Psychology*, 22(2). 249- 260. doi: 10.1177/0959353511415966

Ponce Lara, C. (2020). El movimiento feminista estudiantil chileno de 2018: Continuidades y rupturas entre feminismos y olas globales. *Izquierdas*, 49, 1554-1570. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-50492020000100280>

Poole, R. (2008). Memory, history and the claims of the past. *Memory Studies*, 1(2). 149-166. DOI: 10.1177/1750698007088383

Proaño, L. (2020). Estallido social/estallido feminista: Chile y Argentina 2015-2019. *Revista Artescena*, 9, 1-21.

<http://www.artescena.cl/estallido-social/estallido-feminista-chile-y-argentina-2015-2019/>

Richard, N. (2021). *Revuelta Social y Nueva Constitución*. CLACSO. <https://bibliotecarepositorio.clacso.edu.ar/bitstream/123456789/16737/1/Revuelta-Social-y-Nueva-Constitucion.pdf>

Ríos Tobar, M., Godoy, L., & Guerrero, E. (2003). *Un nuevo silencio feminista? : la transformación de un movimiento social en el Chile posdictadura*. Centro de Estudios de la Mujer : Cuarto Propio.

Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.

Taylor, V. & Van Dyke, N. (2004). "Get up, Stand up": Tactical Repertoires of Social Movements. In D.A. Snow, S.A. Soule & H. Kriesi (Eds.), *The Blackwell Companion to Social Movements* (pp.262-293). Blackwell Publishing.

Tilly, C. (2006). *Regimes and repertoires*. University of Chicago Press.

Urzúa Martínez, S. (2019). Aportes a una etnografía de los movimientos feministas: recursos expresivos en las marchas #Ni una menos y #8M en Santiago de Chile. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 35, 115-124. <https://doi.org/10.7440/antipoda35.2019.06>

Voces en Resistencia: estudiantes de la Universidad de Chile unidos en solidaridad con Palestina

Camila Ponce Lara

Introducción

Desde el 7 de octubre de 2023, la ocupación de Palestina por parte de Israel ha entrado en una nueva fase tras un ataque terrorista perpetrado por Hamas y la subsiguiente respuesta militar del Estado de Israel, respaldada por diversas potencias globales (ONU, 2023). Esta escalada ha tenido repercusiones humanitarias devastadoras hasta mayo de 2024, con más de 40.000 víctimas mortales, incluidos 16.000 menores de edad (ONU, 2024a). Se estima que unas 10.000 personas aún se encuentran sepultadas bajo los escombros y aproximadamente 1.7 millones han sido desplazadas, exacerbando una crisis de desplazamiento forzado sin precedentes (ONU, 2024b). Además, el conflicto ha dejado un paisaje educativo y cultural en ruinas, con el 80% de las escuelas y todas las universidades destruidas, un deterioro que clama a voces el término de genocidio para describir la magnitud del sufrimiento infligido sobre el pueblo palestino.

A nivel global, las manifestaciones y protestas han resonado en múltiples capitales como Nueva York, París o Barcelona (PalestineIsEverywhere.com, 2024), exigiendo un inmediato cese al fuego y una solución política al conflicto. A pesar de los llamamientos internacionales y la presión pública, las acciones concretas para detener los ataques han sido insuficientes hasta el momento (Riegert, 2024), dejando en evidencia la complejidad y la persistencia de los intereses geopolíticos involucrados.

Un punto de inflexión notable en la respuesta internacional a la situación en Palestina ha sido la emergencia de campamentos estudiantiles en solidaridad con el pueblo palestino, organizados por cientos de universidades en todo el mundo. Este movimiento comenzó en Estados Unidos y rápidamente se ha expandido a otras naciones, incluyendo Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, España, Japón, Brasil, México y Chile. La expansión de este movimiento ha sido tan significativa que, a la fecha, se han registrado aproximadamente 174 acampes en todo el mundo, según datos de PalestineIsEverywhere.com (2024).

Esta ola de solidaridad estudiantil ha sido recibida con severa represión por parte de las autoridades académicas y gubernamentales en muchos contextos. Dicha represión refleja una profunda discrepancia con respecto al orden internacional vigente, que tiende a favorecer los intereses políticos y económicos de Israel y su principal aliado, Estados Unidos. En efecto, las autoridades universitarias han reaccionado de manera contundente para disuadir estas manifestaciones de apoyo, temerosas de que puedan desafiar el *status quo* geopolítico y económico. Ejemplo de esto, fue el primer acampe realizado por estudiantes de la Universidad de Columbia, dado que el presidente de la Universidad permitió que la policía de Nueva York desalojara el acampe, donde más de 100 estudiantes fueron arrestados y varios fueron suspendidos (Mansoor, 2024). Situaciones similares se han observado en otras instituciones, como en la Universidad de Nueva York, donde el desalojo de manifestantes llevó a la detención de más de 130 personas, y en la Universidad de Northeastern, con alrededor de 100 protestantes arrestados (ABC News, 2024).

Los datos actuales reflejan una tendencia preocupante: se han contabilizado más de 2.600 arrestos en campus universitarios y más de 240 acciones solidarias han sido reprimidas en diversas partes del mundo (PalestineIsEverywhere.com, 2024). Estas cifras evidencian la magnitud de la respuesta represiva y subrayan la gravedad con la que las autoridades están enfrentando este movimiento. Las medidas adoptadas abarcan desde detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, hasta la imposición de sanciones disciplinarias por parte de las propias instituciones universitarias.

Por otro lado, algunas universidades han decidido acompañar a sus estudiantes en su crítica hacia las instituciones israelíes. Un ejemplo notable de esta postura es el de numerosas universidades españolas, dado que muchas de ellas han tomado una postura firme y solidaria con el pueblo palestino. En concreto, 50 universidades públicas y 26 privadas han anunciado su decisión de romper vínculos con instituciones y centros de investigación de Israel, a menos que estos condenen explícitamente los ataques en Gaza (Suazo, 2024).

A partir de esto, este estudio exploratorio se interroga por los acampes instalados en el Sur Global, en específico en el caso chileno. Esta investigación analiza el campamento en la Universidad de Chile que se inició el 15 de mayo de 2024, que tiene su raíz en un movimiento estudiantil más amplio (Ponce, 2024a), además de las redes de solidaridad que se tejen con otros acampes en el resto del globo. En esta investigación se busca analizar las demandas del movimiento, su estructura organizativa y los conflictos tanto con la administración

universitaria como con la opinión pública y los medios de comunicación que critican estas acciones. Esta es una investigación en curso, que se basa en observaciones y análisis de contenido de grupos de WhatsApp donde participan los participantes del acampe como colaboradores con el movimiento, tales como “Comunidad Coordinadora por Palestina”, “Comité x Palestina UChile” y “Coordinación General Palestina”, así como en cuestionarios online aplicados a diversos activistas involucrados en el acampe. Además, se considera el análisis de medios de comunicación para obtener una perspectiva completa de este fenómeno.

El capítulo se organiza en tres partes. En la primera de ella se analizan algunos elementos teóricos y de contexto en la parte denominada “de movimientos estudiantiles a acampes”; luego se revisa la relación de solidaridad entre Chile y Palestina; más adelante los elementos para la comprensión del acampe de la Universidad de Chile; también se analiza el conflicto con la rectoría y la opinión pública, como sus logros; y por último, antes de las reflexiones finales, se analiza la organización del acampe, sus motivaciones y repertorios, y su disolución.

De movimientos estudiantiles y acampes

Los movimientos sociales estudiantiles pueden ser analizados desde la perspectiva de la teoría de los nuevos movimientos sociales, elaborada por Alain Touraine (2006). Según esta teoría, estos movimientos estudiantiles, a diferencia de los movimientos de trabajadores u obreros, no provienen de organizaciones estructuradas tradicionales, sino que emergen de nuevas formas de organización y acción colectiva. Sin embargo, es importante considerar que estos movimientos también podrían corresponder la denominación de "Novísimos movimientos sociales" (Feixa et al., 2009) caracterizados por su estructura descentralizada y su enfoque en la identidad y la cultura (Castells, 2012).

Otros autores, como Charles Tilly y Sidney Tarrow definen un movimiento social como una prolongada campaña de reivindicación que emplea representaciones repetitivas para alcanzar notoriedad entre un público amplio. Estos movimientos se apoyan en organizaciones, redes, tradiciones y solidaridades. Tal movimiento, asociado a una campaña con estas características, puede manifestarse a través de diversas formas públicas como marchas, concentraciones, manifestaciones, la formación de asociaciones especializadas, reuniones, declaraciones, peticiones, envío de cartas y actividades de cabildo (Tilly y Tarrow, 2008).

En esta investigación nos concentraremos en las acampadas, que representan una forma de protesta particularmente visible y simbólica. Ellas se hicieron populares durante el ciclo de movimientos del 2011, especialmente a través de las movilizaciones en plazas públicas. Ejemplos

notables incluyen el movimiento de los indignados en España y el movimiento de Gezi Park en Turquía (Gençoğlu, 2016) u Occupy Wall Street (Jensen & Bang, 2013). Estas acampadas no solo han sido significativas en el norte global, sino que también han encontrado resonancia en contextos como el chileno.

El movimiento estudiantil chileno ha sido particularmente relevante desde el ciclo de protestas que comenzó en 2011. Este movimiento no solo destacó por su capacidad de movilización y sus demandas por una educación pública, gratuita y de calidad, sino que también sentó las bases para transformaciones políticas más amplias. La influencia de este movimiento fue tan significativa que contribuyó al surgimiento de líderes estudiantiles que posteriormente ocuparon posiciones de poder político, incluyendo al actual presidente Gabriel Boric (Ponce, 2024a).

La evolución de estos movimientos muestra cómo las formas de protesta y organización se adaptan y evolucionan en respuesta a contextos sociopolíticos específicos. La acampada en la Universidad de Chile, por ejemplo, refleja tanto la tradición de las acampadas del norte global como la tradición de movilización estudiantil en Chile donde es común realizar tomas y ahora se suman también los acampes. Este movimiento, con sus demandas específicas y su estructura organizativa, se inscribe en una tradición de lucha por la justicia social y los derechos humanos que trasciende fronteras y contextos históricos.

Al analizar estos movimientos, es crucial considerar su capacidad para articular demandas en un lenguaje que resuene con amplios sectores de la sociedad. La combinación de formas de protesta simbólicas, como las acampadas, con demandas concretas y estructuradas, permite a estos movimientos generar un impacto significativo tanto en el ámbito nacional como internacional (Feixa, 2009). Asimismo, la interconexión de estos movimientos a través de redes transnacionales de solidaridad subraya la globalización de las luchas por la justicia social y los derechos humanos, evidenciando la relevancia de estos nuevos y "novísimos" movimientos sociales en la configuración de un mundo más solidario y justo.

La relación de solidaridad entre Chile y Palestina

La sólida relación de solidaridad entre Chile y Palestina tiene profundas raíces históricas que se remontan a la migración palestina en Latinoamérica, especialmente en Chile, a partir del siglo XIX. Este vínculo se fortaleció a lo largo de los años, haciendo de Chile y Honduras los países con las comunidades palestinas más grandes de la región, con aproximadamente 300.000 personas en Chile y 280.000 en

Honduras (Arad, 2018; Moore y Mathewson, 2013 en Espín, 2020), aunque otros autores señalan que es aún mayor y corresponde a 500.000 personas (Paúl, 2023). Esta población no solo constituye una parte significativa de la diáspora palestina en América Latina, sino que también representa aproximadamente el 1.8% de la población chilena con raíces palestinas (Espín, 2020).

La emigración de palestinos, sirios y libaneses se produjo en un contexto marcado por una profunda crisis económica, el declive del Imperio Otomano y la represión de los primeros movimientos nacionalistas árabes en la región. Este periodo histórico de inestabilidad y desafíos socio-políticos significativos fue un factor determinante en la decisión de muchos árabes de abandonar sus lugares de origen y buscar nuevas oportunidades en otros países (Marzuca en Paúl, 2023). Evidentemente hay varias olas migratorias, y una de las más importantes se da en el 1948, periodo que es denominado como “Nakba” que significa “catástrofe” y la creación del Estado de Israel donde 700.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y significó la destrucción de entre 400 y 600 poblaciones en el territorio palestino (Pappé, 2007).

La mayoría de los palestinos emigraron a Chile desde ciudades cercanas a Jerusalén, como Beit Yala, Belén y Beit Sahur (Molina, 2014). Algunos también llegaron directamente desde Jerusalén y Ramallah. Al igual que en otros países, estas migraciones fueron facilitadas por redes familiares y comunitarias, especialmente en respuesta al deterioro gradual de la situación en la Palestina histórica. La estructura familiar predominantemente patriarcal desempeñó un papel crucial en la preservación de costumbres y tradiciones a lo largo de las generaciones (Samamé, 2003; Espín, 2020).

La comunidad palestina en Chile no solo ha crecido en tamaño, sino que también se ha organizado de manera notable, influyendo profundamente en diversos aspectos de la sociedad chilena, desde la cultura hasta la política. Este legado de solidaridad se manifiesta en iniciativas como el apoyo activo a la causa palestina en momentos de conflicto, así como en la preservación y celebración de la herencia palestina a través de festivales, organizaciones comunitarias y actividades culturales. Un ejemplo de esto es el club Deportivo Palestino fundado en 1920, o la Unión General de Estudiantes Palestinos (UGEP)²⁰ de Chile, creada en la década de los 1980, parte de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

²⁰ La UGEP es una organización creada el año 1959 por Yaser Arafat y Abu Jihad en El Cairo para liberar al pueblo palestino, con representación en un centenar de países. En Chile, se crea en los años ochenta y desaparece por un tiempo tras los Acuerdos de Oslo (Espín, 2020).

Debido a que muchos chileno-palestinos tienen familiares que residen en la Franja de Gaza o en los territorios ocupados, los eventos ocurridos en 2023 han impactado profundamente a esta comunidad. Uno de los casos más conmovedores fue el de Gassan Sahurie, un niño chileno-palestino de 7 años que estuvo desaparecido varios días en Gaza, hasta que se informó que fue encontrado en un hospital local. Por esta razón, no sorprende que el presidente Gabriel Boric exprese su indignación por la barbarie en Gaza (Dote, 2024), como manifestó a través de Twitter o cuando excluyó a Israel de la Feria Internacional de Aeronáutica FIDAE (Montes, 2024).

El impacto de esta diáspora palestina en Chile trasciende lo demográfico y cultural, contribuyendo significativamente al entendimiento y apoyo de la causa palestina en la región. Esta conexión histórica y cultural continúa siendo una fuente de identidad y activismo para la comunidad palestina en Chile, ejemplificando un compromiso duradero con la justicia social y los derechos humanos a nivel internacional.

Algunos elementos de comprensión del acampe en la Universidad de Chile



Figura 1: Afiche convocando al banderazo y acampe

Fuente: cuenta de Instagram @solidaridadpalestina.uch

En octubre de 2023, un grupo de estudiantes del Campus Gómez Millas de la Universidad de Chile dio inicio al Comité de Solidaridad con Palestina a través de la cuenta de Instagram @solidaridadpalestina.uch. El propósito principal del comité era romper el silencio que percibían en la Federación Estudiantil y denunciar lo que consideraban como un genocidio en curso. A lo largo

del año 2024, el comité fue ganando fuerza y atrajo a estudiantes de diversas facultades y disciplinas.

El momento detonante de su acción fue una marcha el 9 de mayo, que contó con la participación de más de 100 estudiantes, académicos y

funcionarios universitarios, según señala Peña en su artículo (2024). Tras la marcha y una asamblea subsiguiente, el grupo decidió establecer un campamento en la Casa Central de la Universidad como una forma de mantener la visibilidad y la presión sobre el tema. Previo a la instalación del campamento, organizaron un banderazo el 15 de mayo que se difundió ampliamente a través de diversas redes sociales con afiches como el que se puede ver en la figura 1, marcando así un hito simbólico al instalar una gran bandera de Palestina en el frontis de la Universidad. Este acto no solo buscaba expresar solidaridad, sino también llamar la atención sobre las condiciones que motivaron su acción y la urgencia de la situación en Palestina.

La Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Catalina Lufin, señaló: “Convocamos a una jornada de protesta, un banderazo en el frontis de la Casa Central, porque a día de hoy la Universidad de Chile mantiene tres convenios activos con universidades israelíes, que hacen que nuestra construcción del conocimiento esté manchada con sangre (...) No es admisible que una universidad que se dice pública, que se dice protectora y garante de los derechos humanos tenga convenios activos con estados ilegítimos, como lo es el Estado de Israel” (Rivera, 2024).



Figura 2: Afiche de Marcha por Universidades libres de Apartheid

Fuente: cuenta de Instagram @solidaridadpalestina.uch

Tal como señala Lufin, los acuerdos de la Universidad de Chile que están activos son tres: el primero es con la Universidad de Ben Gurion de Neguev Beer Sheva y data del 2005, como un acuerdo específico con la Facultad de Medicina. Luego está el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén que data del 1999 como una carta de intención entre la

Facultad de Filosofía y Humanidades y el Instituto de Ciencias Judaicas de la Universidad israelí. Por último, está el convenio Marco con la Universidad de Tel Aviv que es el más antiguo de todos y data de 1982. A partir de entonces Lufin ha sido enfática en la necesidad de romper los convenios con las instituciones israelíes, y que el Estado de Chile rompa relaciones diplomáticas, económicos y militares con el Estado de Israel. Por último, que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) se pronuncie en apoyo al pueblo Palestino señalando que estamos frente a un genocidio y no a una guerra como se ha tratado de instalar.

Desde el 15 de mayo, las movilizaciones en la Universidad de Chile se han concentrado en dos lugares principales: el campamento en la Casa Central, donde también se encuentra la Rectoría, y la ocupación del campus Gómez Millas. En el campamento participan no solo estudiantes, sino también académicos, funcionarios de la universidad y personas externas que solidarizan con los estudiantes o forman parte de otras organizaciones solidarias con Palestina. Las acciones del movimiento han incluido marchas -tal como se puede ver en la figura 2 donde se convoca a una marcha por universidades libres de apartheid el viernes 24 de mayo-, también charlas y actividades artísticas, creando un espacio de resistencia y visibilización.

Además de la cuestión palestina, otros temas han surgido en las ocupaciones. Uno de ellos es la precarización laboral, con los estudiantes de la Facultad de Artes destacando el accidente de una funcionaria, visibilizando así las condiciones de los trabajadores de la Universidad. También se han abordado problemas de infraestructura que han persistido durante años, así como cuestiones de salud mental y demandas estudiantiles específicas del campus de Ingeniería (Peña, 2024). Estas problemáticas reflejan un espectro más amplio de insatisfacción y desafíos dentro de la universidad.

Numerosas facultades han celebrado asambleas y votado a favor de apoyar la movilización, entre ellas: La Facultad de Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias, Derecho, Gobierno, Comunicación e Imagen y Salud. Este apoyo no solo proviene de los estudiantes, sino también de las asociaciones oficiales de académicos y funcionarios, quienes han emitido comunicados expresando su solidaridad con el campamento y respaldando las demandas de los manifestantes. Esta confluencia de apoyo subraya la profundidad y la seriedad de las preocupaciones planteadas por la comunidad universitaria, y destaca un movimiento cohesionado que busca impulsar cambios significativos tanto a nivel institucional como en su compromiso con la justicia global.

Logros del acampe

Un primer triunfo significativo ha sido el cese del convenio que la Facultad de Filosofía y Humanidades mantenía con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aunque, según las palabras del propio decano, no se puede asegurar que este convenio haya sido utilizado desde 1999, sigue siendo un logro importante (González, 2024). Este hecho es particularmente relevante ya que representa el primer convenio de este tipo en ser anulado en toda Latinoamérica, marcando un precedente en la región.

En respuesta a las demandas de los estudiantes, el decanato de Filosofía y Humanidades emitió una declaración condenando la operación de exterminio de la cual ha sido objeto el pueblo palestino. En este contexto, recordaron que en 1999 la Facultad de Filosofía y Humanidades había establecido un acuerdo de cooperación académica con el Centro Internacional para la Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía y el Instituto de Ciencias Judaicas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin embargo, debido a la falta de actividad constatada en casi dos décadas, el decanato consideró que la Facultad estaba en condiciones de declarar unilateralmente la pérdida de vigencia de dicho acuerdo y darlo de baja definitivamente. Esta decisión se fundamenta aún más en los acontecimientos recientes y en el compromiso de la Facultad con la justicia y la solidaridad internacional (González, 2024).

El cese de este convenio ha sido visto como un gesto de apoyo concreto y significativo hacia la causa palestina, demostrando el poder de la movilización estudiantil y académica en influir en las políticas institucionales. Además, esta acción ha sido recibida con reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, destacando el papel de la Universidad de Chile como una institución comprometida con los derechos humanos y la justicia global. Esta medida también ha impulsado a otras universidades en Latinoamérica a reconsiderar sus propios acuerdos y colaboraciones internacionales, fomentando un debate más amplio sobre el papel de las instituciones académicas en contextos de conflicto y opresión.

Conflicto con Rectoría y con la opinión pública

Foto 1: A romper la relación sionista. Fuente: Lavozdelosquesobran.cl



El acampe estudiantil en la Universidad de Chile no ha estado exento de polémicas. Una de las más destacadas fue la instalación de un lienzo en el frontis de la Casa Central que mostraba a la rectora Rosa Devés recibiendo un beso del primer ministro israelí Netanyahu. Este lienzo tenía como objetivo satirizar las asimetrías de poder, inspirándose en el famoso graffiti del muro de Berlín que representa a los líderes comunistas Leonid Brezhnev y Erich Honecker besándose, un símbolo icónico de las tensiones políticas y

las alianzas forzadas.

Sin embargo, la representación no fue bien recibida por Devés, el gobierno, y ciertos sectores de la derecha. Las críticas se centraron en el supuesto carácter machista del lienzo, pasando por alto deliberadamente el contexto sarcástico y el mensaje subyacente sobre las dinámicas de poder. La sátira y el simbolismo detrás de la imagen fueron ignorados en favor de una interpretación que se enfocaba en cuestiones de género, desviando la atención del debate principal sobre la política internacional y el conflicto en Palestina (Ponce, 2024b).

La prensa no tardó en amplificar estas críticas, con columnas que describían la acampada estudiantil como antidemocrática y acusaban a los estudiantes de seguir modas importadas del norte global sin un entendimiento profundo del contexto local (Eyzaguirre, 2024; Ortúzar, 2024). Los medios llegaron a comparar las tácticas de los estudiantes con prácticas nazis, sugiriendo que marcaban a los profesores para controlar

su entrada a la universidad, una acusación grave que ha buscado desacreditar el movimiento estudiantil y desviar la atención de sus demandas legítimas.

Esta controversia refleja las profundas divisiones en la sociedad chilena respecto a la solidaridad internacional y las formas de protesta. Mientras que algunos vieron en el lienzo una expresión válida de crítica política y solidaridad con Palestina, otros lo consideraron inapropiado y ofensivo. Este episodio no solo evidenció las tensiones internas en la Universidad de Chile, sino que también destacó cómo las cuestiones de representación y simbolismo pueden polarizar a la opinión pública y desviar el enfoque de los problemas de fondo.

En este contexto, la rectora Rosa Devés ha subrayado su compromiso con la pluralidad y la diversidad de pensamiento dentro de la universidad. Devés ha argumentado que poner fin a los convenios con universidades israelíes iría en contra de estos principios fundamentales, sugiriendo que la pluralidad académica requiere mantener abiertos los canales de colaboración y diálogo con instituciones de todo el mundo, independientemente de las tensiones políticas internacionales.

Además, la rectora y su equipo administrativo han adoptado una postura firme en contra de cualquier forma de acampe dentro del recinto universitario. Esta oposición a las ocupaciones estudiantiles ha sido tan decidida que Devés y su equipo se han visto obligados a pernoctar en sus oficinas para evitar que la Casa Central de la Universidad de Chile sea tomada por completo por los estudiantes. La posición de Devés puede interpretarse por algunos sectores, como un intento de equilibrar la necesidad de garantizar el funcionamiento regular de la universidad y su compromiso con la libertad de expresión. Sin embargo, esta postura ha generado críticas por parte de algunos sectores que ven en la negativa a romper los vínculos con universidades israelíes una falta de solidaridad con el pueblo palestino y una insensibilidad hacia las preocupaciones éticas que motivan las protestas estudiantiles y específicamente el acampe (Ponce, 2024b).

Organización del acampe, motivaciones y repertorios

El campamento se ha estructurado en base a diversos grupos de solidaridad con Palestina que fueron establecidos a partir del año 2023, así como a otros grupos que surgieron durante el año 2024 y aquellos que ya estaban previamente establecidos. Estos grupos involucran la participación de estudiantes, funcionarios, profesores y otros individuos solidarios con el movimiento. Cada uno de estos grupos despliega funciones específicas dentro del campamento, abarcando áreas como la difusión de información, la organización interna, la representación

pública, el análisis político y otras dimensiones relevantes para la consolidación y desarrollo del movimiento de solidaridad con Palestina en dicho contexto.

Un funcionario universitario, que ha participado activamente en el movimiento, comparte las principales razones que lo motivaron a involucrarse:

“El horror de lo que está ocurriendo en Gaza y la falta de congruencia entre nuestro marco normativo institucional y los compromisos que asume la Universidad en la práctica. El hecho de que la Universidad hable de formar ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno y a la vez mantenga vínculos académicos con universidades que sostienen el genocidio. Siento que hay una brecha entre el discurso institucional y la práctica y estas acciones y no la posición de Rectoría, son un modo de acortar esa brecha” (Funcionario Universidad de Chile participante del acampe)

Este testimonio refleja las motivaciones profundamente éticas y fundamentadas que impulsan la participación de los miembros del campamento, evidenciando una preocupación crítica por los principios y prácticas universitarias en relación con la situación en Palestina.

Dentro del marco de actividades llevadas a cabo en el campamento, se destacan no sólo manifestaciones como marchas y el banderazo, sino también conferencias con académicos destacados abordando temáticas relacionadas con Palestina. En particular, se destaca la discusión con la Dra. Maya Wind²¹ sobre el papel de las universidades israelíes en el genocidio en curso, cuestionando la supuesta neutralidad de estas instituciones. Además de estas actividades, se han organizado talleres artísticos como bordados palestinos tradicionales conocidos como “Tatreez”, festivales musicales y asambleas para fomentar el debate y la participación de los distintos estamentos de la Universidad.

El acampe ha contado con la participación de aproximadamente 50 estudiantes provenientes de diversas facultades, destacándose especialmente las de Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades, y Artes, así como carreras tales como Farmacia, Relaciones Internacionales y Gobierno, Medicina, entre otras disciplinas. Es importante destacar que, según han señalado sus voceros en la prensa, dentro de los participantes no hay militantes de partidos políticos. La comunidad palestina tiene una

²¹ Maya Wind es doctora en Estudios Americanos por la Universidad de Nueva York. Es experta en militarización y universidades israelíes frente al genocidio en Gaza.

presencia significativa en el campamento, y sus voceros son miembros activos de dicha comunidad, lo que refuerza la autenticidad y el compromiso del movimiento con la causa palestina. Uno de los participantes del campamento señala:

"Además de participar en las asambleas y en diversas actividades, tuve la oportunidad de realizar una presentación en una jornada dedicada al estudio del colonialismo en el ámbito universitario. Mi exposición se centró principalmente en proyectos actuales que afectan a comunidades indígenas en el extremo sur de Chile." (Estudiante Universidad de Chile participante del acampe)

Este testimonio ilustra cómo los participantes no sólo se involucran en discusiones académicas cruciales, sino que también se comprometen activamente en la sensibilización y la acción en temas de relevancia social y política dentro y fuera del ámbito universitario.

Fin del acampe

El 14 de julio, tras llevar a cabo un evento en apoyo a la causa palestina, los estudiantes decidieron poner fin a la ocupación de la Casa Central de la Universidad de Chile. Según manifestaron, la decisión fue impulsada por el desgaste que experimentaba el movimiento tras dos meses de movilización, así como por la falta de avances en el diálogo con la rectora, quien reiteradamente se negó a romper las relaciones institucionales con Israel (La Tercera, 2024). Esta resistencia por parte de las autoridades universitarias dificultó la posibilidad de llegar a un consenso, lo que agravó la sensación de agotamiento entre los manifestantes.

A pesar de estos obstáculos, los estudiantes realizaron una evaluación positiva de los resultados alcanzados durante el tiempo de ocupación. En sus declaraciones señalaron que, a lo largo de la movilización, lograron impulsar la creación de numerosos comités de solidaridad con Palestina en distintas escuelas y universidades a lo largo del país. Estos comités, argumentaron, contribuyeron a visibilizar la crisis humanitaria y el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel, logrando instalar el tema en el debate público. A través de sus acciones, consideraron que forzaron tanto a los medios de comunicación como a la propia Rectoría a pronunciarse sobre la cuestión, lo cual fue visto como un logro significativo (Velasco, en La Tercera, 2024).

En su balance final, la vocera del movimiento, Jacinta Velasco, destacó que la decisión de desocupar la Casa Central no representaba el

fin de la movilización, sino un cambio de estrategia. En sus palabras: “Nos retiramos de este espacio con el objetivo de expandir la intifada universitaria a nivel nacional, más allá de los muros de una Rectoría que se ha mostrado ciega ante el genocidio palestino” (Velasco, en La Tercera, 2024). De esta manera, los estudiantes señalaron su intención de continuar con sus acciones en otras áreas del país, reafirmando su compromiso con la causa palestina y con la lucha por los derechos humanos a nivel global.

Reflexiones finales

Es difícil imaginar que uno de los movimientos estudiantiles más robustos y significativos de Latinoamérica, el movimiento estudiantil chileno, pudiera permanecer al margen de un movimiento global que denuncia la incapacidad de muchos gobiernos para enfrentar y repudiar el genocidio que actualmente tiene lugar en Gaza. El movimiento de acampadas, aunque inicialmente surgió en las principales universidades de Estados Unidos, se ha extendido rápidamente por Europa y el resto del mundo. En este contexto, la Universidad de Chile no podía quedarse atrás en esta ola global de protesta y exigencia de justicia, demandando la ruptura de relaciones con Israel, relaciones que se materializan a través de acuerdos entre distintas universidades.

El movimiento de acampada en Chile ha tenido avances positivos en sus demandas y al establecer conexiones con diversas comunidades. Por un lado, ha revitalizado a los estudiantes activistas que parecían desorganizados tras el período de la post-pandemia (Rozas-Bugueño, 2024), proporcionando continuidad al movimiento estudiantil que desde 2011 proponía cambios en el sistema educativo, evolucionando hacia un movimiento feminista estudiantil en 2018 que luchaba contra el patriarcado, y culminando en el estallido social de 2019. Por otro lado, ha ofrecido a la comunidad palestina un espacio crucial para expresar sus demandas y necesidades, fortaleciendo así su visibilidad y su capacidad de acción colectiva dentro del entorno universitario.

La relevancia del movimiento radica en su capacidad para integrar y movilizar a diversos actores sociales y académicos, generando un espacio de resistencia y solidaridad que trasciende las fronteras nacionales. Este movimiento no solo representa una protesta contra las políticas de las universidades que mantienen vínculos con Israel, sino que también se erige como un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la justicia global.

Sin embargo, a pesar de estos logros, el camino por recorrer es aún largo y las demandas del movimiento, aunque significativas, representan solo un pequeño grano de arena frente a la enormidad de las

problemáticas que afectan hoy al pueblo palestino. Las acciones emprendidas por el movimiento de acampada chileno son un paso importante en la construcción de una conciencia crítica y un compromiso activo con la causa palestina, pero es fundamental reconocer que se requiere un esfuerzo sostenido y una mayor articulación a nivel internacional para lograr un impacto más amplio y duradero.

El movimiento estudiantil chileno, al unirse a esta causa global aunque sea por un periodo acotado, demuestra una vez más su capacidad de liderazgo, versatilidad y su compromiso con las luchas por la justicia social. La Universidad de Chile, a través de este movimiento, no solo se posiciona en el debate internacional sobre el conflicto en Gaza, sino que también reafirma su papel protagónico como un espacio de crítica y transformación social. En última instancia, el éxito de este movimiento dependerá de su habilidad para mantener la cohesión interna, fortalecer sus redes de apoyo y continuar ejerciendo presión sobre las instituciones y gobiernos que perpetúan la injusticia en Palestina.

Bibliografía

ABC news (2024). College protests updates: Police crackdown leads to hundreds of arrests. Abcnews.go.com

<https://abcnews.go.com/US/live-updates/college-protests-palestinian-israel-gaza/nyu-students-set-up-new-encampment-days-after-over-130-students-faculty-arrested-109718501?id=109588144>

Arad, R. (2018). Meet the Chilestinians, the Largest Palestinian Community Outside the Middle East.

Haaretz. <https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium.MAGAZINE-the-largest-palestinian-community-outside-the-mideast-thrives-in-chile-1.6613371>

Cares, F. (2024, 25 de mayo). U. de Chile no terminará convenios con universidades de Israel por guerra en Gaza, pese a presiones. Biobío Chile.

<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2024/05/25/u-de-chile-no-terminara-convenios-con-universidades-de-israel-por-guerra-en-gaza-pese-a-presiones.shtml>

Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.

Dote, S. (2024, 23 de abril). Boric vuelve a la carga contra Israel: “No dejemos de indignarnos por la barbarie en Gaza”. El país. <https://elpais.com/chile/2024-04-23/boric-vuelve-a-la-carga-contra-israel-no-dejemos-de-indignarnos-por-la-barbarie-en-gaza.html>

Espín, J. (2020). Origen y evolución de la comunidad palestina en Chile. *Revista Relaciones Internacionales*, 93(1), 91-110.

<https://dx.doi.org/10.15359/ri.93-1.5>

Eyzaguirre, S. (2024, 15 de junio). Columna de Sylvia Eyzaguirre: Universidad de Chile. La Tercera.

<https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-sylvia-eyzaguirre-universidad-dechile/DB7SEJWDMFERLJFVBXL6PQOTZM/>

Feixa, C., Pereira, I., & Juris, J. (2009). Global citizenship and the 'New, New'social movements: Iberian connections. *Young*, 17(4), 421-442.

Feixa, C (2019). Del Campamento al Parlamento: Cronotopos de la Indignación. En: *Políticas de juventudes y participación política*, 283-288. Buenos Aires: CLACSO.

Gençoğlu Onbaşı, F., (2016). Gezi Park protests in Turkey: from 'enough is enough' to counter-hegemony?. *Turkish Studies*, 17(2), 272-294.

González, A. (2024, 22 de mayo). Facultad de Filosofía de la U. de Chile terminó convenio con Universidad Hebrea por guerra en Gaza. <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2024/05/22/facultad-de-filosofia-de-la-u-de-chile-termino-convenio-con-universidad-hebrea-por-guerra-en-gaza.shtml>

Jensen, M. J., & Bang, Henrik P. (2013). Occupy Wall Street: A new political form of movement and community? *Journal of Information Technology & Politics*, 10(4), 444-461.

Mansoor, S. (2024, 19 de abril). Pro-Palestinian Columbia Student Protests Continue Despite Arrests, Suspensions.

Time.com. <https://time.com/6969335/pro-palestinian-columbia-student-protests-continue-after-arrests/>

Montes, R. (2024, 7 de marzo). El Gobierno de Boric excluye a Israel de FIDAE, una feria internacional aeronáutica, y las empresas relegadas se querellan. El País. <https://elpais.com/chile/2024-03-07/el-gobierno-de-boric-excluye-a-israel-de-fidae-una-feria-internacional-aeronautica-y-las-empresas-relegadas-se-querellan.html#?rel=mas>

Moore, A. y Mathewson, K. (2013). Latin America's Los Turcos: Geographic Aspects of Levantine and Maghreb Diasporas. *Nóesis Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 22(43-2), 290-308.

<http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2013.2.7> [Links]

ONU, 2023, 7 de octubre. Cobertura especial de la crisis en Oriente Medio. ONU.org. <https://news.un.org/es/events/israel-palestina/date/2023-10-07>

ONU (2024a,15 de agosto). Gaza: Al sumar 40.000 los muertos, el mundo marca hoy un hito lúgubre. ONU.org. <https://news.un.org/es/story/2024/08/1532046>

ONU (2024b, 16 de septiembre). Israel ha matado en Gaza a más niños que hombres y mujeres.

<https://news.un.org/es/story/2024/09/1532906>

Orellana, M. & Estrada, M. (15 de Julio, 2024). Después de dos meses: el ‘acampe’ desaloja la Casa Central de la Universidad de Chile sin romper convenios con Israel. La Tercera. <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/despues-de-dos-meses-el-acampe-desaloja-la-casa-central-de-la-universidad-de-chile-sin-romper-convenios-con-israel/ZVGQENHORJBO3JWGYWXXTEQNQY/>

Ortúzar, P. (2024, 15 de junio). Columna de Pablo Ortúzar: A desalojar. La Tercera.

<https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-pablo-ortuzar-a-desalojar/43KBZPCILNCRHN6RZDP4XG3QSI/>

Pappé, I. (2007). *The Ethnic Cleansing of Palestine*. New York: Simon and Schuster.

Paúl, F. (2023) Cómo llegó Chile a tener la mayor comunidad de palestinos fuera de Israel y del mundo árabe. BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cyx1xj2x8n4o>

Peña, Y., (2024, 24 de mayo). Qué está pasando en la Universidad de Chile? Acampe por Palestina, tomas de Artes contra la precarización y paros en múltiples facultades. La Izquierda diario.

<https://www.laizquierdadiario.cl/Que-esta-pasando-en-la-universidad-de-Chile-Acampe-por-Palestina-tomas-de-las-facultades-de-Artes>

Ponce, C., (2024a). *Desde las calles a la Moneda. Liderazgo estudiantil y transformación política en el Chile contemporáneo*. Santiago: Ril Editores.

Ponce, C., (20 de junio 2024b). La Universidad de Chile y la ceguera cómplice ante el conflicto palestino. *El Desconcierto*. <https://eldesconcierto.cl/2024/06/20/la-universidad-de-chile-y-la-ceguera-complce-ante-el-conflicto-palestino>

Riegert, B., (2024, 16 de mayo). ¿En qué consiste la nueva demanda sudafricana contra Israel? *Deutsche Welle*.

<https://www.dw.com/es/en-qu%C3%A9-consiste-la-nueva-demanda-de-sud%C3%A1frica-contra-israel-en-la-haya/a-69104876>

Rivera, J., (2024, 15 de mayo). “Jamás seremos neutrales”: estudiantes de la U. de Chile llaman a romper relaciones con instituciones de Israel. ADN Radio.

<https://www.adnradio.cl/2024/05/15/jamas-seremos-neutrales-estudiantes-de-la-u-de-chile-solicitan-cortar-relaciones-con-instituciones-de-israel/>

Rozas-Bugueño, J. (2024). “Efectos de la crisis de intermediación en los movimientos sociales: desmovilización de los movimientos estudiantil y No+AFP en Chile”. En Ponce, C. et.al. Eds. Encrucijadas

de la resistencia en América Latina: Movimientos sociales en época de crisis y polarización, Ariadna Ediciones, Santiago, 2024

Samamé B, M. O. (2003). Transculturación, identidad y alteridad en novelas de la inmigración árabe hacia Chile. *Revista signos*, 36(53), 51-73. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342003005300004>

Suazo, C., (2024, 9 de mayo). Universidades españolas romperán vínculos con instituciones israelíes si no condenan la guerra en Gaza. *Biobío Chile*.

<https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/europa/2024/05/09/universidades-espanolas-romperan-vinculos-con-instituciones-israelies-si-no-condenan-la-guerra-en-gaza.shtml>

Tilly, C. & Tarrow, S. (2008). *Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution*. Paris: Presse de Sciences Po.

Touraine, A., (2006). Los movimientos sociales. *Revista colombiana de sociología*. N°27. p. 255-278. p. 259.

Movimientos sociales contemporáneos y democracia radical: perspectivas desde el Sur Global

Camilo Tamayo Gómez y Kaan Agartan

Introducción

En Colombia, la agitación social que estalló en 2019 y 2021, impulsada por la frustración ante la crisis económica, el aumento de la desigualdad y la corrupción expresó una tendencia mundial más amplia de movimientos democráticos radicales. Las protestas, desencadenadas por las medidas de austeridad y la violencia policial, reflejaron acontecimientos anteriores dados en países como Turquía, donde los ecologistas se opusieron a la demolición del Parque Gezi para dar paso a un centro comercial, simbolizando la resistencia contra las políticas neoliberales. Ambos movimientos, tanto en Colombia como en Turquía, ilustran el anhelo colectivo de un nuevo contrato social y un nuevo modo de ciudadanía que atienda las diversas y nuevas demandas de la sociedad. Estas movilizaciones, que empleaban métodos horizontales, no jerárquicos y participativos, transformaron los espacios públicos en lugares de solidaridad y desobediencia civil, encarnando las aspiraciones hacia una sociedad radicalmente nueva. Sin lugar a duda, fueron más allá de meras expresiones de descontento, utilizando eficazmente campamentos, asambleas y otras formas de activismo como ejercicios de vida cotidiana para fomentar nuevos órdenes sociales más democráticos, inclusivos y armoniosos. En palabras simples, estas prácticas ponen de relieve la emergencia de la *‘democracia radical’* como inspiración clave que de forma a los movimientos sociales contemporáneos, desmarcándose de la democracia liberal representativa tradicional al ofrecer soluciones concretas, a menudo no capitalistas, para las necesidades inmediatas de la comunidad.

En este documento ofrecemos un análisis de los movimientos sociales contemporáneos en Colombia y Turquía para ilustrar los límites y el potencial de la democracia radical para reimaginar nuevas expresiones de ciudadanía y alternativas no capitalistas. La democracia radical, vista como un conjunto conflictivo y contestatario de prácticas políticas, redefine los límites de la esfera política introduciendo nuevas agendas y subjetividades a través de la movilización colectiva. Promueve la descentralización de la toma de decisiones y la participación política,

desafiando las limitaciones formales y espaciales de la democracia tradicional.

Este cambio de paradigma, impulsado por la capacidad creativa y productiva de las personas para constituir su vida política, pretende trastocar los órdenes sociales existentes que perpetúan la desigualdad y la marginación, permitiendo que las voces excluidas reclamen su parte en el panorama político. El paradigma democrático radical opera en tres modalidades: considera la lucha política como un conflicto abierto dentro de la sociedad civil, introduce nuevas agendas y subjetividades políticas y replantea la dinámica de la deliberación, la participación y la representación. Al reconocer los lugares locales de acción política directa y las nuevas concepciones de la ciudadanía y el orden socioeconómico, fomenta un modelo de gobernanza más acorde con las preocupaciones cotidianas. Así, estas innovaciones de la democracia radical revelan su *poder constitutivo*, que permite a los movimientos sociales contemporáneos desafiar los órdenes sociales opresivos y concebir nuevas formas de autogobierno igualitario.

Este manuscrito argumenta que los movimientos sociales contemporáneos en el Sur Global requieren un replanteamiento crítico de la democracia radical, que pase de la contemplación teórica a la aplicación práctica. Esta transición pone de manifiesto las deficiencias del paradigma democrático radical, que a menudo reproduce ideas occidentales sobre la democracia. El paradigma no se compromete plenamente con los diversos e inclusivos enfoques de la democracia que surgen de contextos no occidentales. Por ejemplo, el activismo medioambiental y urbano de Colombia y Turquía demuestra cómo las nuevas formas de ciudadanía y los contemporáneos contratos sociales trascienden los modelos clásicos de Estado-ciudadano y prefiguran nuevos órdenes sociales más allá del neoliberalismo (Omi y Winant, 1996; Howarth y Roussos, 2022). El movimiento social ecológico de Colombia, centrado en la ciudadanía medioambiental, conecta preocupaciones ecológicas cruciales con conceptualizaciones mejoradas de la democracia radical. Ilustra cómo los nuevos tipos de acción colectiva remodelan la relación entre la humanidad y el medio ambiente, abogando por perspectivas post-humanistas. Del mismo modo, las protestas del Parque Gezi en Turquía en 2013 ponen de relieve cómo el activismo urbano fomenta nuevos sentidos de la ciudadanía urbana en torno al concepto de '*lo común*', desafiando el modelo neoliberal de consumidor-ciudadano impuesto por el Gobierno (Yazıcı y Firat, 2013; Ağartan, 2024).

Desde nuestra perspectiva, reimaginar la democracia radical en el Sur Global implica reconocer las formas únicas en que los movimientos sociales no europeos practican y articulan la democracia radical. Esto

requiere ir más allá del marco eurocéntrico para adoptar diversas perspectivas y prácticas que desafíen las dinámicas de poder existentes y promuevan una distribución inclusiva de los recursos. Al examinar los casos de Colombia y Turquía, este documento ofrece un ejemplo de cómo los movimientos sociales contemporáneos generan formas innovadoras de autogobierno igualitario, lo que requiere una articulación más amplia de la democracia radical que trascienda las limitaciones epistemológicas del Norte Global. Así pues, repensar la democracia radical a través de la lente de los movimientos del Sur Global no es sólo un ejercicio académico, sino un paso crucial para desafiar las estructuras de poder imperantes y contribuir a sistemas sociales, políticos y económicos más equitativos. Argumentamos que, al adoptar las complejidades y el potencial transformador de la democracia radical, podemos desafiar eficazmente el dominio de las ideas y las prácticas democráticas liberales, allanando el camino para nuevos contratos sociales y un futuro más inclusivo.

Este texto está organizado de la siguiente manera: La siguiente sección argumenta que la democracia radical, tal y como se emplea en los paradigmas existentes de democracia radical, no capta dos realidades sobre el terreno: 1) cómo los movimientos sociales contemporáneos han producido nuevas formas de experiencias de ciudadanía que podrían construir los cimientos de nuevos contratos sociales que trasciendan los modelos clásicos de Estado-ciudadano, y 2) cómo se prefiguraron nuevos órdenes sociales más allá de una mera forma actualizada de socialismo en la que la mercantilización de la vida no está en el centro de las relaciones sociales y económicas. En la tercera sección se examina la innovadora ciudadanía medioambiental de los movimientos ecologistas colombianos y se ofrecen ideas sobre conceptos alternativos de democracia radical. La cuarta sección se centra en las protestas del Parque Gezi en Turquía en 2013, destacando el desarrollo de nuevas prácticas de ciudadanía urbana. La última sección concluye subrayando la necesidad de ampliar la teoría de la democracia radical más allá de las perspectivas del Norte Global para comprender mejor los movimientos no europeos.

Democracia radical: Una crítica

Para liberar el verdadero potencial de la democracia radical como marco conceptual y fuerza orientadora de la acción política colectiva dirigida a desafiar la estructura social liberal imperante, es crucial reconocer y superar las limitaciones inherentes que hacen visibles las experiencias y acciones de los movimientos sociales contemporáneos, especialmente en el Sur Global. A continuación, destacamos dos novedades introducidas por dichos movimientos que la democracia radical no ha abordado

adecuadamente: (1) nuevas experiencias de ciudadanía que van más allá del modelo clásico de Estado-ciudadano, y (2) prácticas no capitalistas que trascienden una forma meramente actualizada de socialismo.

Movimientos sociales contemporáneos y nuevas experiencias de ciudadanía

La teoría democrática radical amplía los elementos inclusivos, participativos y desafiantes de la democracia liberal, promoviendo nuevas perspectivas sobre la diversidad, la libertad y la responsabilidad cívica. Avanza el concepto de ‘diferencia’ para estimular la revitalización de la democracia liberal dentro de un contexto profundamente igualitario (Mouffe, 2000, 2005). Así, la democracia radical puede verse como una extensión progresiva de las nociones democráticas liberales centrales de libertad, racionalidad, libertad e igualdad, subrayando que la democracia es siempre un proceso sociopolítico ideológico reflexivo, inacabado e impugnado (Dahlberg y Siaperá, 2007; Pettit, 2013). Al tratar de establecer la equivalencia de las demandas e identidades particulares en consonancia con los valores democráticos liberales frente a todas las formas de dominación e injusticia, la democracia radical asume una infraestructura institucional a través de la cual los actores políticos se relacionan entre sí y con el Estado.

La democracia radical, cuando se pone en práctica política, enriquece la cultura democrática fomentando la deliberación abierta y la acción política colectiva (Calhoun, 1992; Habermas, 1994, 1997) y alentando la imaginación política creativa (Hardt y Negri, 2017; Popp-Madsen, 2022). Esta es la razón por la que muchos movimientos anti austeridad y prodemocracia de principios del siglo XXI adoptaron aspectos inclusivos, participativos, deliberativos y agonísticos de la democracia radical como elementos centrales de su activismo. Sin embargo, aunque la democracia radical como marco teórico inspira a movimientos sociales, organizaciones de base y otros grupos comprometidos con la política contenciosa, se basa en una noción más antigua, si no desfasada, de ciudadanía política. Más concretamente, aunque considera estos movimientos principalmente como esfuerzos por obtener el reconocimiento y la aceptación del Estado, ignora las nuevas epistemologías que surgen del activismo prefigurativo de estos movimientos y otras formas de práctica política, una práctica única que abre el camino para reimaginar el contrato social en torno a diferentes subjetividades políticas (Popp-Madsen, 2022). Es aquí donde detectamos una desconexión entre la teoría y su potencialidad política, especialmente desde la perspectiva de los movimientos sociales.

Los movimientos sociales contemporáneos suelen adoptar una forma de activismo que refleja un concepto complejo, dinámico y polifacético de la ciudadanía, como precursor de un contrato social renovado. Es cierto que la teoría democrática radical reimagina el papel del ciudadano, presentando la subjetivación política como fluida en lugar de confinada a grupos de interés rígidos, con individuos que pertenecen a numerosos grupos superpuestos y poseen múltiples identidades que se entrecruzan en lugar de ser sujetos fijos y universales (Trend, 1996). Sin embargo, la teoría se queda corta a la hora de captar el modo en que los movimientos contemporáneos producen nuevas identidades políticas que se forman en torno a ‘preocupaciones comunes’ a partir de diversas demandas democráticas, un fenómeno que ni siquiera el concepto de ‘hegemonía’ (Mouffe, 1996) abarca plenamente.

Más concretamente, no puede captar hasta qué punto el ejercicio real del poder político a través del activismo creativo capacitó a los movimientos sociales para albergar imaginarios de ciudadanía alternativos. En lugar de buscar o trabajar a través de una composición hegemónica para articular sus demandas, estos movimientos prefiguraron y de hecho construyeron un nuevo orden solidario en torno a la idea de ‘*lo común*’ mediante una organización autónoma, ascendente y no jerárquica y un activismo cotidiano en plazas, parques ocupados, casas ocupadas y otros lugares. Esta forma de política generó una nueva subjetividad política y una visión democrática dentro del orden imperante. Al reunirse en plazas, parques y otros espacios urbanos, los activistas pudieron reconceptualizar sus esfuerzos como parte de una lucha colectiva contra un adversario común: el neoliberalismo. Sus identidades políticas y visiones democráticas emergentes se forjaron reconociendo lo común de sus distintas luchas, que no buscaban el mero reconocimiento estatal como grupo identitario, sino que aspiraban a transformar radicalmente el orden social existente para lograr un auténtico cambio social.

Por tanto, lo que la teoría democrática radical no consigue en última instancia es tener en cuenta esta complejidad y, en su lugar, insistir en una definición estrecha de ciudadanía política (es decir, reivindicar la expresión de la identidad basada en la raza, la etnia, el sexo, la identidad de género, etc.) como base principal de los movimientos sociales. Dicho de otro modo, la epistemología democrática radical no abraza “la idea de que la política puede imaginarse fuera del Estado; que la política puede incorporar una lógica diferente a la del Estado [...] El Estado soberano no es el único lugar de los proyectos políticos, y de hecho existe la posibilidad de construir espacios políticos autónomos que no remitan al Estado ni a sus canales representativos” (Newman, 2014: 76). Aunque la epistemología y la práctica democráticas radicales se oponen a la

democracia liberal, siguen estando intrínsecamente ligadas a un marco que sitúa al Estado como el principal, si no el único, lienzo político para promover valores como la diversidad, la libertad y la responsabilidad cívica. En consecuencia, la democracia radical, tal y como se define en la actualidad, carece de las herramientas sólidas y los nuevos marcos necesarios para comprender, y mucho menos para guiar, los ensayos del nuevo contrato social previsto por los movimientos sociales contemporáneos. A través de los ejemplos de los movimientos sociales en Turquía y Colombia, pretendemos demostrar que este punto ciego en el paradigma obstaculiza su capacidad para analizar los potenciales y fracasos de la movilización política para lograr un cambio social real y establecer nuevos contratos sociales.

Movimientos sociales contemporáneos y prácticas no capitalistas

El segundo punto ciego que encontramos con referencia al paradigma democrático radical es su incapacidad para reconceptualizar el capitalismo como un orden social global y, por extensión, para interpretar las manifestaciones de una profunda crisis en ese mismo orden. Aquí estamos de acuerdo con Nancy Fraser (2020, 2022) cuando afirma que el capitalismo contemporáneo se enfrenta a una triple crisis en sus condiciones de posibilidad de fondo, que incluyen la reproducción social, el poder público, la naturaleza no humana y otras formas de riqueza que se encuentran fuera de los circuitos oficiales del capital (Fraser, 2022). La crisis actual, por tanto, puede verse como un síntoma de que el capitalismo no es capaz de funcionar como un orden social autosuficiente y de que está perdiendo su capacidad (por no hablar de su legitimidad) para organizar los procesos de reproducción social, así como la producción económica y la sostenibilidad medioambiental.

Entre los muchos síntomas mórbidos de que el capitalismo está socavando las condiciones mismas de su propia supervivencia se encuentran las enormes disparidades económicas y el aumento de la desigualdad, la grave degradación del medio ambiente, los fallos estructurales del mercado, las prácticas laborales de explotación generalizadas y la erosión de la cohesión social (Valencia, 2018; Mason, 2015). Repensar estas manifestaciones de la crisis en el orden social capitalista es crucial, ya que nos permite ver este sistema no sólo en términos económicos, sino como una entidad dinámica (aunque en lucha) y autosuficiente con múltiples dimensiones que influyen en diversos aspectos de la vida humana y en el contrato social entre individuos, grupos y el Estado. Estas manifestaciones pueden verse tanto como una crisis del sistema actual o como los dolores de parto de un nuevo orden económico y sociocultural más allá del capitalismo. Sin

embargo, las herramientas analíticas proporcionadas por la teoría democrática radical son insuficientes para detectar cualquiera de estos desarrollos. Y lo que es más importante, una consideración seria de estas manifestaciones revelaría el fracaso de la democracia radical (pero también su potencial) como herramienta teórica y praxis política para imaginar formas de existencia no capitalistas que los movimientos sociales contemporáneos han estado prefigurando en las últimas dos décadas.

Aunque la teoría se niega a reducir el conflicto político a la lucha de clases, y aunque pretende ir más allá de la dicotomía capitalismo-socialismo resaltando la pluralidad y heterogeneidad de los "nuevos movimientos sociales" (como vemos especialmente en los trabajos de Laclau y Mouffe), creemos que aún se queda corta a la hora de proporcionar una descripción más realista de cómo puede ser la política futura, una que esté más alineada con la realidad sobre el terreno donde tienen lugar estos mismos movimientos sociales.

Argumentamos entonces que esta deficiencia surge de la simplificación excesiva de la teoría de las complejidades del orden social capitalista, incluidas sus contradicciones y su capacidad de autotransformación, así como de su infra teorización de alternativas no capitalistas. Por ejemplo, Laclau y Mouffe descartan precipitadamente el concepto de modo de producción y aspectos de la economía política, favoreciendo el discurso como marco primario para explicar el cambio social y la transformación estructural (Rey-Araújo, 2021). En su esfuerzo por ofrecer una definición más compleja del antagonismo como motor de la democracia radical, disminuyen el papel de las relaciones de producción capitalistas y de la lucha de clases, enfatizando en su lugar la primacía de lo político conformado por la identidad del trabajador fuera del ámbito del trabajo (Rey-Araújo, 2021). Por lo tanto, el hecho de no incorporar un análisis exhaustivo del capitalismo y su dinámica en la teoría de la democracia radical impide a esta última interpretar con precisión las nuevas formas no capitalistas de reproducción social y las condiciones de existencia en los movimientos sociales contemporáneos.

Como ilustran los casos turco y colombiano, los movimientos sociales del siglo XXI reconocen la insuficiencia de los modelos que recuerdan al socialismo y que han estado construyendo activamente "utopías reales" (Wright, 2010) prefigurando órdenes sociales alternativos a través de su activismo cotidiano. Estas formas de activismo cotidiano, surgidas en respuesta a la crisis inminente del capitalismo, incluyen la coproducción social (cooperativas, huertos comunitarios y otros), la autoorganización (rechazando los modelos corporativos en favor de la propiedad de los trabajadores y la gestión colectiva), las prácticas de comunalización (reapropiándose de los recursos privatizados para su

control y propiedad por parte de la comunidad), las redes de ayuda mutua que prestan servicios sociales básicos (incluyendo clínicas, farmacias, cocinas, bancos de alimentos y bibliotecas) y otras actividades colectivas socialmente beneficiosas fuera del ámbito del mercado (Howarth y Roussos, 2022). Estas prácticas rechazan la lógica capitalista, como la mercantilización, la individualización de la responsabilidad, la mercantilización, la competencia y la producción orientada al beneficio, allanando el camino para visiones alternativas de organización social.

En nuestra opinión, el paradigma democrático radical no capta la rica variación política de los movimientos sociales contemporáneos, especialmente en la forma en que estos grupos se unen para crear algo colectivamente, desde las barricadas hasta las plazas, los parques, las casas ocupadas y otros lugares de activismo. En otras palabras, el anticapitalismo de los movimientos contemporáneos se nutre de un activismo colectivo prefigurativo a través del cual estos movimientos han imaginado un nuevo mundo y lo han construido paso a paso, sin ceñirse a un proyecto. El horizonte anticapitalista de la democracia radical, por otro lado, parece atascado en una noción abstracta de socialismo/comunismo, incluso si esta noción abstracta fue revisada para acomodarse a las necesidades de los tiempos contemporáneos. Esto se debe principalmente al hecho de que la referencia principal de la teoría democrática radical sigue siendo el "poder dislocador" del capitalismo, es decir, su despiadada destrucción de los vínculos de la tradición, la pertenencia local, la familia y las estructuras de parentesco (Critchley, 2005).

Nos parece que en su esfuerzo por rechazar la primacía del "sujeto universal", es decir, el proletariado, y por refundir las luchas emancipatorias en términos culturales, la teoría se limita a las luchas fragmentadas centradas en la identidad. Esta tendencia limita su capacidad para reconocer el poder transformador de las prácticas más pequeñas, a nivel micro, de la vida cotidiana que se producen fuera del dominio del Estado. En otras palabras, la teoría no puede concebir una lucha emancipadora que vaya más allá de la búsqueda del reconocimiento del Estado y la inclusión dentro de una definición estrecha de ciudadanía (Critchley, 2005).

Esta es también la razón por la que la democracia radical se queda corta a la hora de guiar a estos movimientos. No reconoce que los movimientos sociales contemporáneos han conseguido armonizar sus múltiples (y a menudo contradictorias) orientaciones, perspectivas, prácticas y aspiraciones, aunque sólo sea temporalmente y durante breves periodos. Del mismo modo que el paradigma democrático radical de los años setenta y ochenta simplemente ignoraba las cuestiones de clase dentro de los movimientos sociales, impidiendo que estos últimos

desarrollaran una crítica estructural común y un marco para la emancipación más allá de sus propias opresiones, la teoría democrática radical actual tampoco consigue proporcionar una comprensión y una crítica exhaustivas de las complejidades y novedades de los movimientos sociales recientes. En consecuencia, no puede dirigirlos hacia un discurso político más amplio que haga hincapié en la justicia social, la igualdad económica, así como en la tolerancia cultural y la pluralidad (Omi y Winant, 1996). Como resultado, el paradigma democrático radical se vuelve incapaz de comprender (y mucho menos de guiar) las alternativas anticapitalistas que ofrecen y experimentan los movimientos sociales contemporáneos. En las dos secciones siguientes, centramos nuestra atención en dos de estos movimientos del Sur Global para demostrar cómo las formas emergentes de activismo pueden guiar e inspirar la forma en que la democracia radical puede ser reimaginada y practicada sobre el terreno para satisfacer las expectativas diversas, aunque paralelas, de los diferentes pueblos de todo el mundo.

Ciudadanía medioambiental en Colombia

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con casi el 10% de la biodiversidad mundial dentro de sus fronteras. Notablemente, por kilómetro cuadrado, supera a todos los demás en riqueza de biodiversidad. Esta riqueza ecológica abarca una variedad sin parangón de especies de aves, anfibios, mariposas y ranas, lo que convierte a Colombia en un tesoro medioambiental (WWF, 2023). Sin embargo, en medio de este esplendor natural, Colombia se enfrenta a una realidad desgarradora: es uno de los países más mortíferos para los defensores de los derechos humanos, los activistas medioambientales y los defensores del derecho a la tierra. Especialmente en regiones como el Amazonas y la cuenca del Orinoco, la asociación con movimientos sociales ecologistas o medioambientales puede poner en peligro la vida de las personas, que se enfrentan a la criminalización, la violencia e incluso la muerte (Global Witness 2012; Alzate, 2022; Scheidel et al., 2020).

Resulta inquietante que, en la última década, se hayan documentado más de 1.700 homicidios de activistas medioambientales en todo el mundo, y que Colombia haya sido uno de los principales responsables de esta sombría estadística. Sólo en 2022, Colombia representó el 46% del total mundial, con 186 asesinatos registrados, lo que subraya la gravedad de la situación (Global Witness, 2022; Front Line Defenders, 2023). De ellos, 88 víctimas eran miembros de movimientos sociales ecologistas, lo que pone de relieve el carácter selectivo de estos ataques (Front Line Defenders, 2023). La firma de un acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ofrecía esperanzas de paz tras décadas de conflicto. Sin embargo, esta esperanza pronto se vio ensombrecida por la aparición de bandas armadas, grupos paramilitares y organizaciones delictivas transnacionales, que siguieron perpetrando actos de violencia contra líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales. Estas personas, que luchaban por proteger los bosques colombianos de la explotación por parte de empresas mineras, madereras y petroleras, se encontraron en el punto de mira de actores despiadados que buscaban mantener el control sobre territorios lucrativos que antes estaban en manos de las FARC.

El caso del líder indígena Phanor Guazaquillo, quien era una autoridad en temas ambientales y restitución de tierras en el departamento de Putumayo quien fue asesinado en diciembre de 2023, es un caso emblemático. Guazaquillo fue gobernador del cabildo nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo de Puerto Asís, fue una voz visible del estallido social que experimentó Colombia en 2021 y fue integrante de la Instancia Especial de Alto Nivel para seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las FARC.

Los retos medioambientales a los que se enfrenta Colombia son polifacéticos y abarcan cuestiones como la deforestación, la minería ilegal, las disputas por los derechos sobre la tierra, la contaminación, la vulnerabilidad climática y la persistente dinámica del conflicto armado. La deforestación, impulsada por actividades como la ganadería, la agricultura empresarial, la producción de palma aceitera y la extracción ilegal, supone una grave amenaza para los bosques tropicales de Colombia y su rica biodiversidad (Murillo et al., 2023). Esta destrucción se extiende más allá de la Amazonía a otros hábitats naturales, agravada por la expansión agrícola y el cultivo ilícito de coca. Desde la década de 1970, los movimientos sociales ecologistas han desempeñado un papel crucial en la concientización sobre cuestiones medioambientales y en la movilización de la oposición a proyectos con impactos adversos sobre las comunidades y los ecosistemas. Estos movimientos, caracterizados por su naturaleza fluida y heterogénea, aglutinan diversas perspectivas orientadas a preservar la naturaleza y abordar las desigualdades socioeconómicas (Tarazona-Pedraza, 2010; Llano-Arias, 2014; Tobasura-Acuña, 2007).

Inspirado por eventos internacionales como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y publicaciones como *‘Los límites del crecimiento’*, el activismo ambiental colombiano ha evolucionado hasta convertirse en una vibrante fuerza de cambio. La formación del Movimiento Ambientalista Colombiano en 1983 marcó un hito en la historia ambiental del país, fomentando la acción colectiva y la

defensa de la preservación ecológica. La influencia del movimiento culminó con la adopción de la "constitución verde" de Colombia en 1991, que consagró el derecho a un medio ambiente sano y sentó las bases para el desarrollo sostenible (Melo, 2018). La legislación posterior, como la Ley 99, reforzó aún más el compromiso de Colombia con la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos. Sin embargo, la verdadera importancia del movimiento ecologista colombiano no radica únicamente en su capacidad para configurar políticas, sino en su papel como catalizador de la democracia ambiental.

Al defender causas como la protección de los recursos hídricos, abogar por la verdad y la justicia frente a los daños ecológicos e integrar el conocimiento indígena en el activismo, estos movimientos han trascendido las fronteras tradicionales, fomentando un enfoque más inclusivo y equitativo de la gestión medioambiental (Roa, 2016; Ramírez, 2023). El paisaje medioambiental de Colombia es un complejo tapiz de maravillas naturales y retos sistémicos. Aunque el país presume de una biodiversidad sin comparación, también se enfrenta a una violencia generalizada contra los defensores del medio ambiente y a la implacable explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, en medio de estos desafíos, los movimientos ecologistas de Colombia se erigen como faros de esperanza, luchando por un futuro en el que la preservación ecológica y la justicia social estén entrelazadas.

Ciudadanía medioambiental y el movimiento Ríos Vivos

El Movimiento Ríos Vivos, creado en 2008, está conformado por quince iniciativas ecologistas de base unidas en su oposición a la construcción de la represa de Hidroituango en el río Cauca, cerca de Ituango, en el norte de Antioquia (Colombia). Esta represa, liderada por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), tiene una huella significativa, ya que afecta a más de 26.000 hectáreas y 27 municipios, con una previsión de sumersión de 4.500 hectáreas una vez finalizada. A pesar de su potencial para generar energía renovable, el proyecto se ha enfrentado a la vehemente oposición de los activistas medioambientales debido a sus perjudiciales consecuencias ecológicas, como inundaciones, corrimientos de tierras, deforestación, contaminación y desplazamiento de las comunidades locales. Los impactos ecológicos negativos descritos en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada por EPM en 2007 son amplios y abarcan la contaminación del aire y el agua, alteraciones de la dinámica fluvial, pérdida de hábitat y fauna, y desplazamiento de poblaciones. Estos impactos se ven exacerbados en Antioquia, una región profundamente marcada por el antiguo conflicto armado colombiano, donde los activistas medioambientales fueron, y siguen

siendo, unas de las principales víctimas. La intensidad del conflicto en Antioquia se debió a su importancia estratégica en medio del conflicto armado, a los indiscriminados ataques contra la población civil y a la construcción de un régimen de terror por parte de los grupos armados, tanto legales como ilegales, lo que provocó una profunda devastación socioeconómica y medioambiental en este departamento.

Igualmente, la construcción de la represa de Hidroituango complica aún más el proceso de justicia transicional en Colombia al inundar zonas donde se encuentran fosas comunes del conflicto armado, lo que obstaculiza los esfuerzos por esclarecer la verdad y hacer justicia a las víctimas. El proyecto ha contribuido a la desaparición, el desplazamiento y la muerte de cientos de personas, agravando la crisis humanitaria y obstaculizando los esfuerzos de reconciliación. La magnitud de las desapariciones durante el conflicto pone de relieve el reto al que se enfrenta el proceso de justicia transicional en Colombia. La resistencia del movimiento Ríos Vivos a la construcción de la represa encarna una respuesta de base a este desafío, con acciones colectivas que combinan el arte, la memoria y el activismo medioambiental para conmemorar a las víctimas, concientizar y resistirse a una mayor degradación ecológica.

Entre las iniciativas del movimiento se encuentran ‘*Cañoneros y cañoneras contra el olvido*’, un proyecto para colectivos de víctimas que pretende recuperar la memoria colectiva de las víctimas y el significado e importancia de la naturaleza en lugares donde se produjeron masacres de civiles o donde se presume que están enterrados los cuerpos de personas desaparecidas; ‘*Cuerpos Gramaticales*’, una acción performativa político-artística diseñada en el marco de la metodología Agroarte, la cual busca narrar historias de violencia ejercida sobre los cuerpos, la naturaleza y el territorio desde una perspectiva post-humana; y ‘*Saborcito Cañonero*’, que implica la creación de fanzines, poesía, historietas, exposiciones fotográficas, el establecimiento de cocinas comunitarias locales y la producción de material audiovisual. Estas iniciativas trascienden las formas convencionales de activismo, incorporando elementos del post-humanismo y la ciudadanía medioambiental. Estas iniciativas aprovechan la memoria colectiva, la expresión artística y las tradiciones culinarias para fomentar la solidaridad, la reflexión y la resistencia, desafiando las narrativas dominantes y promoviendo procesos socioculturales integradores.

A través de estas acciones, el movimiento Ríos Vivos redefine la ciudadanía como un proceso dinámico y diverso que se extiende más allá de las instituciones formales, abarcando dimensiones de memoria, reconocimiento y solidaridad. Al reconocer las intersecciones entre la justicia social y el ecologismo, el movimiento aboga por la igualdad de

género, los derechos indígenas, la memoria ecológica, la justicia racial y la inclusión de las personas LGBTQIA+, reconociendo el vínculo intrínseco entre el bienestar humano y la salud ecológica. En esencia, el movimiento Ríos Vivos ejemplifica un enfoque holístico del activismo medioambiental, arraigado en los conocimientos locales, las tradiciones culturales y un profundo sentido de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Al adoptar diversas perspectivas y experiencias, el movimiento se esfuerza por crear un futuro más sostenible, inclusivo y equitativo para Colombia y más allá.

Ciudadanía medioambiental y democracia radical en Colombia

El movimiento ecologista y medioambiental en Colombia desempeña un papel fundamental en la configuración de un marco de democracia radical más inclusivo y participativo. Esta importancia se deriva de seis aspectos clave que subrayan el potencial transformador de estos movimientos en el fomento de prácticas democráticas equitativas. En primer lugar, la movilización popular y la democracia participativa son fundamentales para el movimiento ecologista colombiano, personificado por iniciativas como el movimiento Ríos Vivos. Surgidos de comunidades locales directamente afectadas por la degradación medioambiental, estos movimientos capacitan a los ciudadanos para proteger sus territorios de actividades destructivas como la minería y la deforestación. Al descentralizar el poder de decisión, la democracia participativa fomenta el compromiso activo de los ciudadanos y mejora los procesos democráticos a nivel local. Las comunidades indígenas y afrocolombianas, por ejemplo, han establecido estructuras de gobierno autónomas para gestionar los recursos naturales, desafiando el enfoque verticalista del Estado y abogando por prácticas democráticas más localizadas.

En segundo lugar, la intersección de la justicia medioambiental y social subraya la defensa del movimiento de una democracia más inclusiva. La degradación medioambiental suele afectar de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, como los pueblos indígenas y los campesinos rurales. Al poner de relieve estas injusticias, el movimiento ecologista aboga por políticas que aborden tanto las desigualdades ecológicas como las sociales. Además, el énfasis del movimiento en la protección de los defensores del medio ambiente subraya la necesidad de una democracia que salvaguarde los derechos de quienes se oponen a los poderosos intereses económicos. En tercer lugar, el movimiento ecologista en Colombia reimagina la ciudadanía y la responsabilidad colectiva promoviendo la ciudadanía ecológica. Este

concepto más amplio va más allá de las nociones tradicionales, animando a los individuos y a las comunidades a verse a sí mismos como administradores del medio ambiente. Esta perspectiva fomenta un sentido colectivo del deber y del cuidado de los recursos naturales, desafiando las nociones neoliberales de propiedad privada y promoviendo prácticas comunales de gestión de los recursos que mejoran la cohesión social y la resiliencia.

En cuarto lugar, la defensa del medio ambiente fomenta la participación democrática proporcionando plataformas para el diálogo inclusivo y la toma de decisiones. La organización de asambleas y foros permite a las comunidades abordar directamente las cuestiones medioambientales, lo que les capacita para influir en las políticas que afectan a sus vidas. Además, las innovaciones jurídicas, como la concesión de personalidad jurídica a entidades naturales como el río Atrato, reflejan un cambio hacia un marco jurídico más integrador que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza. En quinto lugar, el movimiento ecologista contribuye a crear comunidades resilientes capaces de adaptarse a los cambios medioambientales y sociales. Al defender prácticas sostenibles y la protección de los ecosistemas, estos movimientos ayudan a las comunidades a mitigar el cambio climático y otras amenazas y a adaptarse a ellos. Esta resiliencia es esencial para mantener las prácticas democráticas frente a la evolución de los desafíos. Por último, los movimientos ecologistas colombianos influyen en las políticas medioambientales nacionales y mundiales, lo que demuestra el potencial del activismo local para configurar marcos democráticos más amplios. Las iniciativas de defensa del medio ambiente han reforzado la protección y las políticas medioambientales a escala nacional, lo que pone de relieve el poder de la acción colectiva para influir en las prioridades gubernamentales.

En conjunto, el movimiento ecologista colombiano forma parte de redes mundiales que abogan por la justicia medioambiental y la sostenibilidad. Esta solidaridad global refuerza la interconexión de las luchas locales y globales y pone de relieve el papel del activismo transnacional en la promoción de los principios democráticos en todo el mundo. Así, el movimiento ecologista y medioambiental de Colombia constituye un caso convincente para repensar y revitalizar los marcos democráticos radicales, al tiempo que desafía las limitaciones de los modelos democráticos liberales tradicionales y ofrece vías innovadoras para abordar los complejos retos socioambientales. Al hacer hincapié en la participación de las bases, la justicia social y medioambiental, las nociones ampliadas de ciudadanía y la resiliencia, el caso del movimiento Ríos Vivos demuestra cómo la democracia radical puede ser más inclusiva, participativa y equitativa.

Construir '*lo común*' en Turquía

En esta sección, centramos nuestra atención en Turquía para examinar cómo han surgido prácticas políticas innovadoras como la mancomunidad en el seno de los movimientos sociales contemporáneos de este país, los cuales, desde nuestra perspectiva, han trascendido los límites de la imaginación del paradigma democrático radical.

Del común al procomún

Los bienes comunes son un sistema en el que los recursos son compartidos por una comunidad de usuarios/productores, que también definen los modos de uso y producción, distribución y circulación de estos recursos a través de formas democráticas y horizontales de gobernanza (De Angelis y Harvie, 2013). Si bien las luchas contemporáneas en el Sur Global se han esforzado por garantizar el acceso a los recursos naturales, así como la producción colectiva, es el acto de "comunalizar" lo que convierte los bienes comunes en praxis y no en una mera reserva de recursos compartidos. A mediados de la década de 1990, el movimiento zapatista ya realizaba diversas prácticas de comunización que, posteriormente, inspiraron a movimientos de campesinos sin tierra en diferentes partes del mundo (Firat, 2018). La comunización también se convirtió en un método de lucha contra el cercamiento y la privatización de los espacios públicos a través de proyectos de gentrificación y renovación en el ámbito urbano. La ocupación de calles y carreteras contra la construcción de autopistas, o el auge de la ocupación y otras prácticas de gobierno autónomo en determinadas ciudades de Europa, o las ocupaciones de fábricas de Argentina, o el auge de los huertos colectivos y las cooperativas de producción formaron parte de una oleada de comunización en la década del 2000 (Firat, 2018).

En este contexto, es importante entonces pensar en el concepto de 'procomún' como una noción más amplia para entender las dinámicas de la economía solidaria, el cual se ha convertido en la base conceptual y práctica de un modelo económico alternativo y no capitalista en las últimas décadas (Aykaç, 2017). La economía solidaria surgió como un movimiento mundial destinado a transformar la economía capitalista para ofrecer una alternativa más justa y sostenible. En esencia, la economía solidaria representa un esfuerzo por concebir y aplicar una alternativa económica en respuesta a las deficiencias del capitalismo neoliberal, así como del socialismo de Estado y otros sistemas autoritarios. Así, este concepto de economía solidaria pretende desarrollar un nuevo enfoque de la economía en la línea de la democracia

radical, haciendo hincapié en principios como la solidaridad, la cooperación, la equidad, la participación, la sostenibilidad y el pluralismo. En suma, la economía solidaria aboga por el cambio sistémico, promoviendo una transformación del Estado más acorde con los principios autonomistas y anarquistas, aunque no se limita a ellos (Kawano, 2020).

Igualmente, la “puesta en común” podría entonces encontrarse en el centro de esta idea emergente de economía solidaria, tal y como se experimenta en diversos movimientos sociales de todo el mundo. Se rechaza desde esta perspectiva tanto al Estado como a la lógica del poder del mercado como principio organizador de ordenes sociales. Se ofrece entonces un modelo de organización alternativo que reclame la solidaridad frente al asalto y la destrucción neoliberales. Como tales, los movimientos sociales se convierten así en las incubadoras de una política dual en la que la democracia radical significa simultáneamente política de movilización (para proteger y reclamar los recursos comunes) y política de organización (para constituir una nueva comunidad) contra la lógica neoliberal. En este contexto político, lo común sirve como forma y contenido de las relaciones sociales que trascienden las limitaciones y el cinismo de culto al mercado del capitalismo contemporáneo (Stavrides, 2020). A través de diversas prácticas no capitalistas (cocinas colectivas, centros de salud, guarderías, farmacias no comerciales, cooperativas de productores, mercados de intercambio, huertos, etc.), el procomún trasciende su papel de no solo generar esfuerzos colectivos para producir, defender y reproducir las necesidades materiales de una comunidad fuera del ámbito del mercado y del Estado, sino también como una fuerza que realiza actos de construcción de pilares fundacionales para construir un nuevo modelo de organización social.

En el contexto turco, el término *müşterekler* (bienes comunes) ya había empezado a ganar protagonismo en el léxico del activismo político a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. A menudo se ha asociado a protestas que se resistían a la privatización de los recursos comunes y, especialmente, a la mercantilización de los recursos naturales y su transferencia a las grandes empresas de la construcción y la energía, que se habían intensificado bajo el modelo de crecimiento impulsado por la construcción durante la primera década del siglo XXI (Adaman et al., 2016). El discurso y las prácticas radicales de comunitarización pudieron observarse durante numerosas protestas en este período, incluida la interrupción de las obras de construcción mediante sentadas, barricadas y ocupaciones a menudo acompañadas de enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad privadas o estatales.

Con la intensificación de la urbanización neoliberal bajo el gobierno del AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*, Partido de la Justicia y el Desarrollo), el centro del activismo político y los lugares de puesta en común empezaron a desplazarse hacia los espacios urbanos, especialmente a ciudades como Estambul. Uno de los actores más destacados de esta forma de activismo fueron las asociaciones de vecinos. Se volvieron especialmente activas en Estambul durante los primeros años del AKP para resistirse a los proyectos de renovación, gentrificación y transformación de sus distritos, pero también a megaproyectos como la construcción de un nuevo aeropuerto en Estambul y un tercer puente sobre el Bósforo. Estas asociaciones y otros grupos ecologistas formaron a menudo plataformas y alianzas para promover la educación, el intercambio de información y de concientización (Genç, 2018). Igualmente, a sus esfuerzos se unieron otros para defender lugares históricos y espacios públicos, lo que convirtió este espacio comunal en una forma especial de existencia donde, en agudo contraste con el énfasis del neoliberalismo en el valor comercial del espacio urbano, podía experimentarse una forma no capitalista de unión, una nueva subjetividad política (Firat, 2022).

Ser y actuar en común en el Parque Gezi

Las protestas del parque Gezi y las prácticas radicales que siguieron deben considerarse como parte de este linaje histórico de defensa, reivindicación y reconstrucción de los bienes comunes en Turquía, si no el ejemplo más notable. En mayo de 2013, a un puñado de ecologistas se unieron miles más en el lapso de unas pocas semanas cuando el Gobierno islamista neoliberal intentó demoler el parque Gezi, una de las últimas zonas verdes que quedan en el corazón de Estambul, para construir un centro comercial de alta gama. Las protestas comenzaron como un acto colectivo de protección de un recurso de uso común, un parque público, contra el cerramiento impuesto por el Estado y disfrazado de renovación urbana. Sin embargo, la revuelta fue más allá de un mero acto de defensa y se transformó en prácticas de producción y reproducción de lo común según los principios de solidaridad, autonomía, justicia y auto organización. La provisión de alimentos, refugio, atención sanitaria, educación, actividades recreativas y talleres, jardines públicos y la división del trabajo para el mantenimiento general del Parque Gezi (y más tarde los foros del parque y las casas ocupadas) fueron empresas que prefiguraban inherentemente un futuro colectivo más allá de la visión del AKP del urbanismo neoliberal islamista en Estambul (Akbulut, 2016).

Con el tiempo, todo el movimiento comenzó a evolucionar desde la protección de los bienes comunes a la constitución de lo común, llevando consigo nuevos valores y principios como la libertad, la igualdad, la reciprocidad, la solidaridad, la confianza y el autogobierno en un espacio donde el Estado y el capital estaban excluidos (Genç, 2018). Diversas promulgaciones de la comunización se convirtieron en una fuente de nueva subjetivación que comenzó a cambiar las vidas de quienes participaron en este esfuerzo colectivo (Yazıcı y Fırat, 2013). El poder transformador de resistirse colectivamente a este encierro (y a la violencia abierta y encubierta que lo rodeaba) se desató primero detrás de la barricada durante los enfrentamientos, y después en parques, foros vecinales y casas ocupadas como actos de ser y actuar en común (Ağartan, 2024).

Durante el movimiento Gezi, las casas ocupadas de Estambul se convirtieron en uno de los espacios más destacados donde la política de la comuna podía encontrar su verdadera expresión. Estos lugares alimentaban una forma distintiva de democracia radical, no meramente teórica, sino profundamente entrelazada con los recursos compartidos y las preocupaciones de los residentes de la casa ocupada y del vecindario circundante. Los ocupantes de estas casas ocupadas se comprometieron con la población local a reclamar lo que el gobierno del AKP había robado al público mediante la mercantilización. Participaron activamente en los asuntos del barrio, como la provisión de suministros para las escuelas locales o la ayuda a los refugiados del distrito. Además, organizaron campañas de solidaridad con los comerciantes locales o formaron equipos para ayudar a los ancianos en sus necesidades. Al radicalizar el ámbito de su vida cotidiana (como se vivía en las plazas, los campamentos y luego en los foros del parque), la comunidad se convirtió en una fuente de poder político. En otras palabras, comunidad y política se hicieron inseparables, ya que la comunidad se convirtió en política en/de/alrededor de lo común.

En los años posteriores a los levantamientos de Gezi, los activistas empezaron a utilizar las cooperativas como modelo económico alternativo (Öngel y Yıldırım, 2019). Por ejemplo, se generalizaron las cooperativas de producción y consumo de alimentos (Türkkan, 2019). Las cooperativas dirigidas por mujeres y otras organizaciones económicas alternativas (colectivos) en torno a los principios de la economía solidaria, principalmente en la producción agrícola y la artesanía, empezaron a proliferar por todo el país (Işıl y Değirmenci, 2020). El espíritu de la solidaridad siguió tiñendo el activismo de formas inesperadas. Una organización, *Deep Poverty Network*, que arrancó en 2019 como una iniciativa de investigación para indagar varias dimensiones de la profundización de las desigualdades y la pobreza, amplió su alcance y

se involucró directamente en el establecimiento de redes de cuidado mutuo cuando la pandemia de COVID-19 golpeó en 2020 (Deep Poverty Network, s.f.). Otro caso en el que las redes de solidaridad social se activaron rápidamente fue inmediatamente después de los fuertes terremotos gemelos de febrero de 2023. Mineros, trabajadores de la construcción, médicos y otros profesionales sanitarios, diversos grupos de la sociedad civil, representantes de partidos políticos, equipos de búsqueda y rescate nacionales y extranjeros, y voluntarios individuales se movilaron hacia la zona del terremoto desde el primer día, desarrollando prácticas de asistencia que no dependían de la ayuda gubernamental ni de la lógica del mercado, sino de una forma de movilización de los bienes comunes (Tekin y Yükker, 2023). Con los esfuerzos de socorro y los colectivos locales y nacionales auto organizados que surgieron casi instantáneamente, la zona del terremoto se convirtió en un espacio político para encuentros y prácticas ascendentes, sostenibles y centrados en el ser humano en una organización social no jerárquica.

Así, lo que surgió de todos estos ejemplos democráticos radicales durante y después del movimiento Gezi fue un potencial y una visión para un nuevo orden social, con su institucionalización laxa centrada en torno a lo(s) común(es). La experiencia trascendió una mera demanda de reconocimiento político, como podría haber teorizado la democracia radical. Tampoco podía interpretarse simplemente en términos discursivos, que presentarían la experiencia simplemente como la construcción de una hegemonía entre diversas demandas políticas. Esta política radical, tal y como se desarrolló en foros y asambleas en parques ocupados, barrios y casas ocupadas, transformó los lugares de protesta en espacios de producción y reproducción a través de acciones orientadas a la comunidad o de espíritu comunitario. Toda la experiencia democrática radical se convirtió en una delicada fusión de inclusividad, pluralidad, estructura no jerárquica, participación directa sin principios predefinidos y una relación directa con un espacio físico específico a través de la ocupación. Y lo que es más importante, las fronteras entre lo social, lo político, lo económico y lo ecológico se erosionaron, ya que estas experiencias no sólo eran anticapitalistas, sino también anti sistémicas: su esencia no podía ser captada ni por la lógica capitalista ni por su alternativa, el socialismo. Como observó Stavrides, algo nuevo se estaba materializando en estas experiencias: "acciones orientadas o inspiradas en la comunidad que, a menudo muy distintas de las ideologías neocomunitarias y neoconservadoras, crean o incluso reinventan comunidades en formación" (Stavrides, 2012: 586).

Reimaginar la democracia radical y los movimientos sociales en el siglo XXI

Este texto es un llamamiento para repensar la forma en que la democracia radical como teoría puede responder a las expectativas y demandas de la democracia radical como movimiento social. Nuestro propósito es extender una invitación a activistas, académicos, políticos, profesionales, responsables políticos, grupos de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de base para volver a imaginar una sociedad global más igualitaria que revitalice el potencial del paradigma democrático radical. En las secciones anteriores hemos sugerido que existe un desajuste entre el concepto/teoría de democracia radical tal y como se formula actualmente en la bibliografía y las formas en que se articula en la política contenciosa en contextos no europeos. Los movimientos sociales de Colombia y Turquía demuestran que las nuevas formas de activismo político y las visiones no capitalistas emergentes de una sociedad más igualitaria desafían los marcos conceptuales existentes en la teoría de la democracia radical, y que se necesita urgentemente una articulación y aplicación más exhaustivas de la democracia radical más allá del estrecho lienzo del Norte Global. Esta expansión epistemológica es esencial no sólo para promover un mejor diálogo entre la teoría y la práctica, o para poner de relieve la diversidad de objetivos, métodos y motivaciones de los movimientos sociales contemporáneos en todo el mundo. También es necesaria para comprender el potencial emancipador de la democracia radical en tiempos de erosión democrática y creciente autoritarismo. En otras palabras, es urgente empezar a repensar la democracia radical a la luz de los profundos cambios sociales que se están produciendo en el siglo XXI.

En conclusión, un análisis minucioso de la ciudadanía medioambiental y el procomún en los casos de Colombia y Turquía revela posibles formas innovadoras de renovar la democracia radical como un nuevo marco epistemológico y ontológico. Al ahondar en la intrincada interacción de las diversas voces y perspectivas de estos países, esperamos que este texto inspire a los lectores a reimaginar la democracia radical no sólo como un sistema procedimental, sino como una fuerza transformadora que da forma a los fundamentos mismos del conocimiento y la existencia. Esperamos que las nuevas dimensiones epistemológicas y ontológicas destacadas en el artículo fomenten un cambio de perspectiva, instando a las personas a considerar la democracia radical no sólo como un conjunto de procedimientos institucionales, sino como una fuerza dinámica que puede dar forma a nuevas narrativas culturales e imaginativas estructuras económicas.

Nuestra intención y expectativa es que los ejemplos aquí mencionados pongan de relieve que la democracia radical va más allá del ámbito político, influyendo en el tejido central de las sociedades y ofreciendo una visión holística de un mundo en el que se redefinen el poder, el conocimiento y la existencia. Al analizar las diversas lecciones, experiencias y resultados de ambos casos, esperamos que los académicos y activistas participen activamente en los debates y experimentos en curso sobre la democracia radical, fomentando un diálogo global sobre cómo la democracia radical puede servir de catalizador para un cambio positivo, trascendiendo fronteras y vislumbrando un mundo en el que la diversidad, la igualdad y la justicia estén a la vanguardia de los valores sociales.

Bibliografía

Adaman, F., Akbulut, B. & Kocagöz, U. (2016). Giriş. En F. Adaman, B. Akbulut, & U. Kocagöz (Eds.), *Herkesin, Herkes İçin: Müsterekler Üzerine Bir Antoloji*. Metis

Ağartan, K. (2024). *Gezi: La formación de una nueva comunidad política en Turquía*. Edinburgh University Press

Akbulut, B. (2016). Sonuç. En F. Adaman, B. Akbulut, & U. Kocagöz (Eds.), *Herkesin, Herkes İçin: Müsterekler Üzerine Bir Antoloji*. Metis

Alzate Rodríguez, L. V. (2022). *Análisis de la deforestación en Colombia a partir de la Curva Ambiental de Kuznets*. Universidad Nacional de Colombia.

Calhoun, C. (1992). *Habermas and the Public Sphere*. MIT Press.

Critchley, S. (2005). *True democracy*. En L. Tønder & L. Thomassen (Eds.), *Radical Democracy: Politics Between Abundance and Lack*. Manchester University Press

Dahlberg, L. & Siapera, E. (2007). *Radical Democracy and the Internet: Interrogating Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.

De Angelis, M. y Harvie, D. (2013). The commons. En M. Parker, G. Cheney, V. Fournier, & C. Land (Eds.), *The Routledge Companion to Alternative Organization*.

Red de Pobreza Profunda. (sin fecha). ¿Quiénes somos? Red de Pobreza Profunda. <https://derinyoksullukagi.org/en/who-are-we/>

Fırat, B. Ö. (2018). Ciclos de movimientos globales y movimientos de commoning. En E. Erdoğan, N. Yüce, & Ö. Özbay (Eds.), *La política de los bienes comunes: From Theory to Struggle*. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK).

Fırat, B. Ö. (2022). A double movement of enclosure and commons: commoning Emek movie theatre in three acts. *City*, 26(5-6), 1029-1044.

Fraser, N. (2020). *The Old is Dying and the New Cannot be Born*. Verso.

Fraser, N. (2022). *Cannibal Capitalism: How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet - and What We Can Do About It*. Verso.

Defensores de primera línea. (2023). #COLOMBIA. *Defensores de Primera Línea*

Genç, F. (2018). Movimientos sociales urbanos y la política de los bienes comunes en Estambul. En E. Erdoğan, N. Yüce, & Ö. Özbay (Eds.), *La política de los bienes comunes: From Theory to Struggle*. Estambul: Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK).

Global Witness. (2012). Informe anual 2012. *Exponiendo intereses ocultos*.

Global Witness. (2022). Informe anual 2022: *Afrontar el reto de un mundo en crisis*.

Habermas, J. (1994). Tres modelos normativos de democracia. *Constelaciones* 1(1), 1-10

Habermas, J. (1997). Modernity: an unfinished project. En M. P. Entrèves & S. Benhabib (Eds.), *Habermas and the Unfinished Project of Modernity: Ensayos críticos sobre el discurso filosófico de la modernidad*. MIT Press

Hardt, M. y Negri, H. (2017). *Assembly*. Oxford University Press.

Howarth, D. & Roussos, K. (2022). Radical democracy, the commons and everyday struggles during the Greek crisis. *The British Journal of Politics and International Relations*, 25(2), 311-327.

Işıl, Ö. S. & Değirmenci S. (Eds.). (2020). *Yaşamı Örgütleyen Deneyimler: Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini ve Kooperatifleri Tartışıyor*. NotaBene

Kawano, E. (2020). *Economía solidaria: construir una economía para las personas y el planeta*. Asociación de Economía Solidaria.

https://www.solidarityeconomy.coop/wpcontent/uploads/2017/06/Kawano-E.-2018_Solidarity-Economy.pdf

Llano-Arias, V. (2014). *Prácticas comunicativas y participación ciudadana en el movimiento por el agua en Colombia [Tesis Doctoral]*. University College Dublin.

Mason, P. (2015). *Postcapitalism. Una guía para nuestro futuro*. Penguin.

Mouffe, C. (1996). ¿Democracia radical o democracia liberal? En D. Trend (Ed.), *Radical Democracy Identity, Citizenship and the State*. Routledge

- Mouffe, C. (2000). *La paradoja democrática*. Verso.
- Mouffe, C. (2005). *On the Political*. Routledge.
- Murillo-Sandoval, P. J., Kilbride, J., Tellman, E., Wrathall, D., Van Den Hoek, J., & Kennedy, R. (2023). The post-conflict expansion of coca farming and illicit cattle ranching in Colombia. *Scientific Reports* (13), 19-65.
- Newman, S. (2014). Occupy y la vida política autónoma. En A. Kioupkiolis y G. Katsambekis (Eds.), *Radical Democracy and Collective Movements Today*. Ashgate
- Omi, M., y Winant, H. (1996). Imagina que no hay cielo. En D. Trend (Ed.), *Radical Democracy Identity, Citizenship and the State*. Routledge
- Öngel, F. S., & Yıldırım, U. D. (Eds.). (2019). *Krizeye Karşı Kooperatifler: Deneyimler- Tartışmalar-Alternatifler*. NotaBene
- Pettit, P. (2013). *On the People's Terms: A Republican Theory and Model of Democracy*. Cambridge University Press.
- Popp-Madsen, B. A. (2022). Non-domination and constituent power: socialist republicanism versus radical democracy. *Philosophy & Social Criticism*, 49(10), 1182-1199.
- Ramírez, A. (2023). *Ecología integral: una mirada sistémica de cara a la problemática ambiental actual*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Rey-Araújo, P. M. (2021). *Capitalismo, instituciones y órdenes sociales*. Routledge
- Roa, M. C. (2016). Democratización ambiental y justicia hídrica en fronteras extractivas de Colombia. *Geoforum*, 85, 58-71
- Scheidel, A., Del Bene, D., & Liu, J. (2020). Conflictos y defensores del medio ambiente: una visión global. *Global Environmental Change*, 63, 1-12.
- Stavrides, S. (2012). Plazas en movimiento. *South Atlantic Quarterly*, 111(3), 585-96.
- Stavrides, S. (2020, 8 de mayo). *La vida como bien común*. Entornos indisciplinados.
<https://undisciplinedenvironments.org/2020/05/08/life-as-commons/>
- Tarazona-Pedraza, A. (2010). Movimiento en defensa del Lago de la Cocha, Pasto, Nariño, Colombia (1993-2001), *Luna Azul*, 30, 108-141.
- Tekin, U. & Yüksek, D. (2023, 26 de febrero). Deprem sonrasında yeni bir toplumsallık: umursamazlık mı, dayanışma mı? Aposto. <https://aposto.com/s/deprem-sonrasında-yeni-bir-toplumsallık>
- Tobasura-Acuña, I. (2007). Ambientalismo y ambientalistas: una expresión del ambientalismo en Colombia. *Ambiente & Sociedad*, X(2), 45-60

Trend, D. (ed.). (1996). *Radical Democracy: Identity, Citizenship, and the State*, Routledge.

Türkkan, S. (2019). Vintage modası şimdi gıda kooperatiflerinde: 'yeni bir iletişim yolu buluyoruz.' *Saba Dergisi*, 5 (enero), 76-83.

Valencia, S. (2018). *El capitalismo del gore. Semiotext(e)*. MIT Press.

Wright, E. O. (2010). *Envisioning Real Utopias*. Verso

WWF - Fondo Mundial para la Naturaleza. (2023) Informe sobre las vías forestales 2023

Yazıcı, G. & Fırat, B. Ö. (2013). Hepimiz İştirakçiyiz. *Express*. 139 (noviembre-diciembre).

Prácticas socio-ecológicas, desarrollo económico y cambio climático. Los dilemas de la sostenibilidad y el extractivismo en América Latina*

Benjamín Tejerina

Introducción

En el verano de 2023, viajando desde Petrópolis a Río de Janeiro (Brasil), me vi atrapado en un atasco que duró varias horas. Mientras para mí era una situación excepcional, para los habitantes de Río de Janeiro era una reiterada experiencia cotidiana. Sentado al volante y con tiempo suficiente para reflexionar, recordé una entrevista al físico Antonio Turiel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la que reflexiona sobre el cambio climático, los recursos energéticos y el petróleo. En esa entrevista A. Turiel destaca una transformación de escala planetaria que ha dado lugar a lo que llamamos transición energética, un cambio de grandes proporciones que busca replantear nuestra dependencia de los combustibles fósiles²².

Este tipo de experiencia se repite en muchas de las grandes ciudades del mundo, donde casi 1.400 millones de vehículos dependen de hidrocarburos (petróleo y gas) para el transporte de personas y bienes, sin contar otros medios de transporte igualmente dependientes de combustibles fósiles. La energía sostiene buena parte del desarrollo económico de nuestras sociedades, tanto capitalistas como no capitalistas, avanzadas o no, del norte y del sur. Esta relación entre recursos y desarrollo ha sido cuestionada, especialmente desde la década de 1970, debido a las consecuencias socioambientales del ciclo extractivista que comienza con la industrialización y la llamada revolución industrial en Inglaterra (1760-1840). Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia sobre las tensiones entre desarrollo y

* Este capítulo es resultado del Proyecto Construyendo la sociedad sostenible. Movilización, participación y gestión de prácticas socio-ecológicas. PID 2021-126611BN-I00 del MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Ha contado con el apoyo del grupo de investigación del Sistema Universitario Vasco “Cambio social, formas emergentes de subjetividad e identidad en las sociedades contemporáneas”

²² Puede verse en: <https://www.youtube.com/watch?v=N2DFA-EX91A>. También puede verse y escucharse del mismo autor «El futuro de la energía»: <https://www.youtube.com/watch?v=tlAYZvC9HK0>.

extractivismo, la idea de que los países ricos en recursos pueden utilizar las actividades extractivas para impulsar el desarrollo sigue vigente (Svampa, 2012). Como señala Pellegrini (2018), esta visión tiene más de 50 años y constituye los cimientos de un modelo que asigna un papel central a los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos. En este modelo, el Estado desempeña un papel destacado en la extracción, implementando políticas sociales expansivas y estrategias para diversificar la economía, en línea con el neo-extractivismo.

Aunque esta expansión extractivista es global, América Latina es una región emblemática, no solo por el avance de actividades extractivas en la Amazonía, sino también por la expectativa de que el sector allanará el camino hacia el desarrollo socioeconómico (Arsel, Hogenboom y Pellegrini, 2016). En los apartados siguientes, analizo la literatura existente sobre la transición socio-ecológica y el extractivismo en América Latina, un tema ampliamente debatido en la academia, la política y la sociedad civil. Este ensayo examina, en primer lugar, algunos aspectos clave de la creciente producción científica sobre la transición energética, considerando las contribuciones de autores destacados tanto a nivel general como en el contexto latinoamericano. En segundo lugar, se agrupan los temas y modelos abordados por estos autores. En tercer lugar, se exploran los impactos sociales, políticos y económicos de los procesos acelerados por el extractivismo. Finalmente, este trabajo se detiene en los dilemas y desafíos del desarrollo y de los modelos alternativos que han ido emergiendo en las últimas décadas.

La segunda finalidad de este ensayo es analizar los conceptos centrales que articulan el modelo actual de desarrollo económico y sus alternativas. Mi hipótesis es que, más allá de la clara separación entre dos modelos antagónicos, las diversas prácticas socio-ecológicas en casos concretos parecen estar permeando sus fronteras, lo cual podría indicar un período de “omnivoridad de transición socio-ecológica”. Este término, inspirado en el concepto de “omnivoridad cultural” de Richard Peterson (1992), alude a una mayor tolerancia hacia distintos modelos de desarrollo. Un análisis atento de diversos ejemplos en América Latina sugiere la existencia de un cambio profundo y la aparición de diferentes regímenes de transición socio-ecológica. En este contexto, me centraré en los modelos alternativos que replantean las relaciones entre tres elementos fundamentales: naturaleza y cultura, recursos y espacio territorial, y producción y reproducción.

1. Desarrollo económico, extractivismo y cambio climático

La relación entre cambio climático y extractivismo en América Latina ha sido ampliamente estudiada, reflejando tanto su complejidad como su carácter multifacético. La región ha experimentado una notable expansión del extractivismo, especialmente en la Amazonía, bajo la expectativa de que este sector promueva el desarrollo socioeconómico (Arsel et al., 2016). Este impulso extractivo responde, en gran medida, a la búsqueda de materias primas como una solución política a los desafíos socioeconómicos regionales (Arsel y Pellegrini, 2022). No obstante, la expansión extractiva ha provocado una resistencia importante y generalizada en algunos lugares puntuales, lo que ha producido un aumento de las protestas y de los conflictos sociales contra megaproyectos de desarrollo, un fenómeno especialmente visible desde la década de 1990 (Silva et al., 2018). Este proceso ha dado origen al concepto de *neo-extractivismo*, un enfoque que desafía la teoría del desarrollo en América Latina al centrarse en las dinámicas y contradicciones políticas, institucionales, territoriales y socioecológicas del extractivismo dentro del contexto del capitalismo global (Brand et al., 2016).

Los impactos del extractivismo en el cambio climático en América Latina son también muy evidentes. La degradación de los recursos naturales, la dependencia económica y las consecuencias para la salud pública generadas por el extractivismo han debilitado la resiliencia de las comunidades locales ante los riesgos climáticos, particularmente en los pequeños estados insulares, cuya vulnerabilidad es mayor debido a su aislamiento, pobreza y clima variable (Bambrick, 2017). Además, las políticas ambientales y sociales de las instituciones económicas que financian proyectos de infraestructura, energía y minería en América Latina suelen ser más laxas que las de los bancos multilaterales de desarrollo, contribuyendo a una mayor degradación ambiental y, por ende, al cambio climático (Gerlak et al., 2019).

La percepción del cambio climático y sus riesgos en la región está condicionada por varios factores. La comprensión del cambio climático como un fenómeno antropogénico se presenta como un fuerte predictor de la percepción de sus riesgos, mientras que los fenómenos meteorológicos extremos y el activismo por la justicia climática han intensificado la preocupación por este tema en América Latina (Lee et al., 2015; Capstick et al., 2014). Los latinoamericanos que depositan su confianza en el conocimiento científico tienden a tener una visión del mundo más igualitaria y son más propensos a aceptar la realidad del cambio climático (Spektor et al., 2022). Sin embargo, persiste una

corriente de pensamiento que prioriza el desarrollo económico en determinadas regiones sobre los efectos ambientales²³, relegando la preocupación climática a un segundo plano²⁴.

Así, la relación entre cambio climático y extractivismo en América Latina refleja una interacción compleja entre el desarrollo socioeconómico, la lucha contra la desigualdad, la degradación ambiental, la resistencia a proyectos extractivos y la percepción del cambio climático. Esta relación está marcada por dinámicas políticas, institucionales y socioecológicas, así como por el impacto del extractivismo en los recursos naturales y la resiliencia de las comunidades locales. Comprender estas dinámicas resulta esencial para enfrentar los desafíos que el extractivismo y el cambio climático plantean en la región.

2. Cinco dimensiones y aspectos básicos de la relación entre cambio climático y extractivismo

La investigación sobre la relación entre cambio climático y extractivismo en América Latina abarca una amplia variedad de dimensiones que destacan la complejidad de este vínculo. Un primer aspecto fundamental es la percepción del riesgo y la conciencia pública sobre el cambio

²³ En una consulta popular promovida por el colectivo Yasunidos y realizada junto a las elecciones presidenciales en Ecuador el 20 de agosto de 2023 los votantes rechazaron la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, situado en la Amazonía ecuatoriana y considerado uno de los espacios con mayor biodiversidad del planeta. Otra consulta, impulsada por el colectivo activista «Quito sin minería», también se vio respaldada por una mayoría de los habitantes de Quito en desacuerdo con el avance de la explotación minera en la zona del Chocó Andino, vetando la minería en esta zona próxima a Quito. Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/ce4vx8v8gezo>.

²⁴ En una cumbre de los países que tienen relación con la Amazonía reunidos en agosto de 2023 en Belén do Pará (Brasil) no llegaron a un acuerdo para poner límites estrictos a la explotación de petróleo en la desembocadura del río Amazonas. El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, defendió la explotación apuntando su relación con el desarrollo y la lucha contra la desigualdad: «No se puede hacer la vista gorda frente a la desigualdad que existe en el país. Se necesita crecer para atender las necesidades del pueblo». Ver: <https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-defiende-la-explotaci%C3%B3n-de-petr%C3%B3leo-en-la-desembocadura-del-amazonas/48721600>. La reunión de la Organización del tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) estuvo marcada por la diversidad de puntos de vista y el acuerdo alcanzado entre los países participantes (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), no fijó metas comunes en temas clave como la lucha contra la deforestación, dejando que cada país decida sus propios objetivos de conservación. Ver: <https://otca.org/>.

climático. Aunque numerosos estudios han evidenciado un aumento en la concienciación sobre los efectos ambientales del creciente consumo de materias primas, la COP 26 subrayó la necesidad de avanzar en la divulgación de información y mejorar el rol de las ciencias sociales y los medios de comunicación en la educación ambiental de la ciudadanía. Para ello, varios autores han resaltado la importancia de fortalecer la educación básica, la alfabetización climática y la comprensión pública de los impactos locales del cambio climático, con el fin de incrementar el compromiso social y el apoyo a la acción climática (Lee et al., 2015).

Otra dimensión clave es el impacto social y psicológico de la urbanización y modernización en la salud en América Latina. La relación entre urbanización, modernización y salud es un aspecto que varía según el contexto político y el momento histórico, influyendo en el bienestar psicológico de las poblaciones urbanas (Almeida-Filho, 2021). Estos efectos subrayan la necesidad de analizar cómo los procesos de cambio climático y modernización pueden agravar problemas de salud en la región.

Un tercer elemento significativo es la influencia de las percepciones y creencias públicas sobre el cambio climático. Los estudios sugieren que las variaciones en las opiniones sobre este fenómeno están determinadas por factores físicos y sociales, como los niveles de exposición al riesgo, los valores culturales, el contexto político y la cobertura mediática (Capstick et al., 2014). Paralelamente, los desafíos sanitarios asociados al extractivismo, como la alta prevalencia de enfermedades respiratorias, especialmente el asma, han sido ampliamente documentados, destacando la importancia de investigar las diferencias sociales, genéticas y ambientales en la región para comprender los mecanismos de estas afecciones (Cooper et al., 2008).

La dimensión del marketing social y las prácticas de sostenibilidad también ha sido central en la investigación. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han enfatizado la necesidad de integrar los aspectos sociales y económicos en el desarrollo de prácticas sostenibles, con el fin de potenciar el progreso de las comunidades locales (Alonso-Vázquez y Pastrana, 2022; Fritz y Silva, 2018).

Además, la ideología política, el conocimiento científico y la confianza en instituciones sociales son factores que influyen en las creencias sobre el cambio climático en América Latina. Investigaciones de Altman y Castiglioni (2019) y Spektor et al. (2023) han señalado cómo el individualismo, la confianza en los científicos y las visiones igualitarias impactan en las creencias climáticas de la región. Otros autores destacan que factores sociales, económicos y normativos, incluyendo el papel de la religión, actúan como barreras a la acción climática. En este sentido, se

ha demostrado que la religión influye en los valores, motivaciones y visiones del mundo en torno al cambio climático, y puede servir como un canal importante para promover una ética ambiental (Hernández et al., 2019; Haluza-Delay, 2014).

En conjunto, la investigación social sobre cambio climático y extractivismo en América Latina abarca dimensiones diversas, incluyendo la conciencia pública, salud mental, percepciones sociales, desafíos sanitarios, marketing social, ideología política y factores religiosos. Estas dimensiones ofrecen una comprensión integral de la compleja relación entre cambio climático y extractivismo en la región.

3. Respuestas y modelos alternativos al desarrollo extractivista en América Latina

Retomando mi reflexión inicial, en medio de aquel monumental atasco de tráfico, observé a numerosos adolescentes y jóvenes vendiendo chucherías y bebidas a los pasajeros de los vehículos. Este fenómeno, común en muchas ciudades de América Latina, donde los semáforos en las intersecciones viarias ejemplifican una economía subalterna e informal que surge de la necesidad y de la exclusión social. En este contexto, una de las transiciones actuales plantea sustituir los medios de transporte que funcionan con combustibles fósiles por otros basados en electricidad o energías alternativas. Sin embargo, esta transición también requiere nuevas materias primas, lo que podría incrementar temporalmente la demanda de recursos y poner en cuestión los impactos económicos de estas prácticas en las economías formales e informales, en el medio ambiente y en la naturaleza.

La literatura sobre el extractivismo presenta una visión predominantemente crítica, vinculada al modelo de desarrollo capitalista y sus consecuencias en países en vías de desarrollo. Las teorías de la dependencia y el desarrollo desigual cobraron relevancia entre las décadas de 1960 y 1980, en las que autores como Samir Amin, Fernando Henrique Cardoso y Ruy Mauro Marini analizaron los lazos de dependencia que fortalecían el subdesarrollo en América Latina, África y el sur de Europa²⁵. En la actualidad, diversos autores han propuesto modelos alternativos para afrontar los desafíos socioecológicos que el

²⁵ No es este el momento de detenerme en este aspecto tan interesante de la evolución de las ideas y teorías sobre desarrollo y desarrollo sostenible. En este sentido puede consultarse el libro de Claudio Katz (2018). *La teoría de la Dependencia, cincuenta años después*. Buenos Aires: Batalla de Ideas. Me interesa centrarme en los modelos que desde distintas perspectivas se han propuesto como alternativos al modelo de capitalismo dominante.

extractivismo plantea en la región, con el fin de avanzar hacia sistemas sostenibles y justos. Estas propuestas se agrupan en cuatro categorías: modelos alternativos, redistributivos, pluralistas y de resistencia.

3.1 Modelos alternativos

Dentro de los modelos alternativos, destaca el concepto de buen vivir (*sumak kamsay* en quechua), propuesto por Alberto Acosta (2013, 2015), como un paradigma que se aleja del desarrollo occidental y prioriza el equilibrio entre seres humanos y naturaleza. Este modelo subraya valores como la reciprocidad, colectividad y respeto a la Madre Tierra. Enrique Leff propone una "racionalidad ambiental" que integra dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas en la gestión de recursos, abogando por la participación comunitaria, el conocimiento local y la justicia ambiental (Leff, 2004). Jacques Prades, por su parte, explora economías alternativas y propone la economía social y solidaria como un modelo inclusivo y democrático, centrado en el bienestar humano y ecológico (Prades, 2001 y 2012). Maristella Svampa y Mirta Antonelli también han analizado los impactos del extractivismo y resaltan la importancia de las luchas territoriales y la autonomía comunitaria como alternativas al modelo extractivista (Svampa y Antonelli, 2009).

3.2 Modelos redistributivos

Los modelos redistributivos se enfocan en formas de producción y distribución más equitativas. Mariana Walter estudia el vínculo entre extractivismo y violencia, proponiendo estrategias de resistencia para transformar el modelo extractivista hacia alternativas más justas y sostenibles (Walter, 2018). Luis Miguel Uharte y Júlia Martí Comas exploran procesos de construcción de alternativas económicas que buscan reorganizar la vida cotidiana en base a modelos de producción y reproducción que desafíen las prácticas extractivistas (Uharte y Martí Comas, 2019). Joan Martínez-Alier aporta el concepto de "ambientalismo de los pobres", proponiendo una economía ecológica que respete los límites biofísicos del planeta y promueva una distribución justa de los recursos (Martínez-Alier, 2002).

3.3 Modelos pluralistas

Los modelos pluralistas incorporan múltiples aspectos culturales y epistemológicos en sus enfoques. Arturo Escobar, en su crítica a las visiones lineales del desarrollo, defiende modelos que reconocen y valoran la diversidad de conocimientos y prácticas locales, subrayando el

papel de los movimientos sociales en la construcción de alternativas (Escobar, 1995). Eduardo Gudynas, con su análisis del "nuevo extractivismo" en América Latina, propone diversificar las economías, fortalecer la democracia participativa y proteger los derechos de los pueblos indígenas (Gudynas, 2011 y 2015). Walter D. Mignolo propone un "pensamiento fronterizo" que desafía las estructuras de poder hegemónicas y promueve una diversidad epistémica y cultural (Mignolo, 2000). Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, por su parte, destacan la "memoria biocultural" y la importancia de los conocimientos tradicionales en la gestión sostenible de los recursos naturales (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Estos enfoques valoran los saberes locales, las luchas de resistencia, los derechos y la justicia social y ambiental.

3.4 Modelos de resistencia y autonomía comunitaria

los enfoques agrupados en esta categoría exploran propuestas que se oponen activamente al extractivismo y que defienden la autonomía comunitaria y la justicia ambiental. Las contribuciones de Maristella Svampa y Mirta Antonelli son fundamentales, ya que analizan las resistencias sociales en América Latina frente a los impactos socioambientales del extractivismo. Estos modelos destacan la importancia de las luchas territoriales y los derechos de las comunidades locales frente a la explotación de recursos naturales (Svampa y Antonelli, 2009).

En conjunto, estos modelos alternativos al desarrollo extractivista reflejan la diversidad de perspectivas y estrategias propuestas para enfrentar los desafíos socioecológicos en América Latina. La participación comunitaria, el respeto por los derechos humanos y ambientales y la creación de alternativas más justas y sostenibles son principios compartidos en la búsqueda de un modelo de desarrollo que armonice las necesidades sociales con la preservación de la naturaleza.

4. Los cinco centros nucleares de la discusión

Los debates y aportaciones en torno al extractivismo y sus alternativas en América Latina pueden agruparse en cinco temas fundamentales que abarcan desde definiciones teóricas hasta concreciones prácticas: el concepto de extractivismo, los impactos socio-ecológicos, las transiciones socio-ecológicas, los desafíos y resistencias, y las propuestas alternativas.

En primer lugar, tanto el concepto de extractivismo como los procesos extractivistas en América Latina se basan en dos ideas clave: (1) en las últimas décadas, la región ha experimentado un auge en industrias

como la minería, el petróleo, el gas y la agricultura a gran escala, impulsadas tanto por la demanda interna como por el mercado global, y (2) si bien el extractivismo ha generado beneficios económicos para algunos países y empresas, también ha sido objeto de críticas por sus impactos sociales y ambientales. Las luchas y conflictos sociales de las últimas décadas se han enfocado en la oposición a los macroproyectos de explotación de los recursos naturales del continente, reflejando la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad.

El segundo tema gira en torno a los impactos socio-ecológicos del extractivismo ²⁶. Las comunidades locales, especialmente las agropecuarias, campesinas y los pueblos indígenas, son quienes sufren las consecuencias más graves, incluyendo pérdida de tierras, conflictos sociales, desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos. En términos ecológicos, el extractivismo ha conllevado la deforestación de vastas áreas del Amazonas, la contaminación del agua y el aire, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas esenciales, cuyas repercusiones son por el momento en gran medida irreversibles.

El tercer aspecto relevante es la llamada transición socio-ecológica, que busca transformar los sistemas económicos y sociales hacia modelos más sostenibles y justos. En América Latina, se reconoce cada vez más la necesidad de avanzar hacia un desarrollo que reduzca la dependencia del extractivismo, promoviendo la diversificación económica, la equidad social y la protección ambiental. Este cambio hacia la sostenibilidad es fundamental para garantizar el bienestar humano dentro de los límites ecológicos del planeta.

El cuarto tema trata sobre los desafíos y resistencias que acompañan a estos cambios estructurales. Aunque los impactos negativos del extractivismo son cada vez más evidentes, su reducción o eliminación enfrenta serios obstáculos, como los intereses de multinacionales, la debilidad regulatoria de los Estados, la corrupción y el clientelismo, y la dependencia económica de muchos países de las exportaciones de sus recursos naturales. Sin embargo, movimientos de resistencia liderados por comunidades locales, organizaciones indígenas y activistas ambientales han emergido en defensa de los derechos, territorios y modos de vida tradicionales, oponiéndose a la expansión extractiva.

Finalmente, el quinto aspecto se centra en las alternativas y propuestas formuladas desde diversos enfoques teóricos y prácticos. Estas incluyen la promoción de energías renovables, la agroecología sostenible, la economía circular, el eco-feminismo, la justicia ambiental, la participación ciudadana en las decisiones políticas y el respeto por los

²⁶ Se desarrollan en un apartado propio en el siguiente epígrafe.

derechos de las comunidades indígenas. Estas estrategias buscan impulsar una transición socio-ecológica en América Latina que integre la sostenibilidad y la equidad.

Retomando la teoría de la dependencia y las críticas al desarrollo de las décadas de 1960 y 1970 (Cardoso, Dos Santos, Faletto, Furtado, Gunder Frank, Marini), es posible observar un desplazamiento en las últimas dos décadas hacia una mayor consideración de aspectos sociales, políticos y ambientales, sin abandonar del todo el enfoque económico. Este giro no pretende simplificar una tradición teórica compleja, sino reconocer la evolución de un pensamiento en constante adaptación que incorpora los cambios sociales y ambientales contemporáneos.

5. Una sociedad en transición: impactos sociales, políticos y económicos

En los últimos años, gran parte del pensamiento social y tecnológico se ha enfocado en las llamadas transiciones verde y digital, procesos de transformación radical que implican el abandono de los combustibles fósiles. Este cambio tendrá múltiples impactos en América Latina en los ámbitos social, político y económico. Si bien la extracción de recursos fósiles continuará durante algún tiempo, parece estar cerca de un punto de declive. En particular, el sector de la movilidad ha concentrado esfuerzos en la implementación de alternativas eléctricas para sustituir los vehículos de gasolina, diésel o etanol, señalando un interés creciente por modelos de desarrollo alternativos al modelo globalizado actual. En palabras de Arturo Escobar, esto podría suponer una transición hacia un “pluriverso de mundos socio-naturales” (Escobar, 2012, p. 23).

Estas transiciones conllevan consecuencias importantes que requieren reflexión y planificación. En términos de impactos sociales, se pueden identificar tres aspectos principales: (1) Empleo y desempleo. Muchas comunidades y regiones de América Latina dependen económicamente de la industria de los combustibles fósiles, por lo que la transición podría derivar en pérdida de empleos en sectores como la minería, el petróleo y el gas, afectando gravemente a las comunidades y trabajadores involucrados. (2) Desplazamientos de población. El cierre de minas, pozos petroleros y otras infraestructuras vinculadas a los combustibles fósiles puede provocar migraciones hacia áreas donde haya mayores oportunidades económicas. (3) Mejora de la salud pública. La disminución de la contaminación asociada a la extracción y utilización de combustibles fósiles beneficiará la salud pública, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, al reducir enfermedades respiratorias y

problemas de salud relacionados con la contaminación, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a los impactos políticos, es probable que la transición genere cambios profundos en la gobernanza y en las políticas regulatorias. El abandono de los combustibles fósiles requiere una reconfiguración de políticas relacionadas con la industria extractiva, incluyendo medidas de mitigación, compensación y transición justa para las comunidades y trabajadores afectados. A nivel global, las relaciones internacionales y los equilibrios geoestratégicos pueden sufrir grandes cambios, ya que diversos países de América Latina mantienen fuertes relaciones comerciales y políticas con naciones y empresas dedicadas a los combustibles fósiles. Esta transición podría afectar las relaciones diplomáticas y comerciales, generando intensos debates sobre la conveniencia, ritmo y necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Estos cambios pueden dar lugar a movilizaciones sociales, protestas y demandas de participación ciudadana en las decisiones sobre el futuro energético y extractivo de la región.

En el ámbito económico, los impactos también serán significativos y podrían crear oportunidades para diversificar la economía, impactando directamente las relaciones de intercambio económico con otras regiones del mundo. Aunque es posible que los lazos de dependencia entre América Latina y otros actores externos se profundicen, el abandono de los combustibles fósiles podría también incentivar la diversificación económica hacia sectores sostenibles, como las energías renovables, la agroecología, el turismo sostenible y la economía circular, aprovechando la abundancia de recursos naturales de la región. Asimismo, la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles requerirá grandes inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación, lo que podría atraer financiación nacional e internacional para apoyar el proceso de transición energética y económica. Finalmente, aunque algunas empresas y sectores podrían perder competitividad en el mercado global, esta transición también brinda la oportunidad de posicionarse como líderes en una economía verde y sostenible.

El abandono de los combustibles fósiles en América Latina tendrá importantes repercusiones socioeconómicas y políticas que demandarán políticas y estrategias de mitigación y adaptación para gestionar los desafíos y maximizar las oportunidades hacia un modelo de desarrollo más sostenible y justo. Sin embargo, estos modelos enfrentan actualmente un desafío de escalabilidad: lo que funciona a nivel local y en pequeña escala requiere grandes esfuerzos de implementación cuando se proyecta a nivel nacional, regional o global.

6. Hacia un modelo de desarrollo sostenible y justo: algunos principios generales

La transición hacia modelos de desarrollo sostenibles y justos en América Latina requiere políticas, estrategias y medidas integrales de mitigación y adaptación que aborden los múltiples desafíos y oportunidades asociados con el abandono de los combustibles fósiles. Mientras el desarrollo de energías alternativas alcanza un nivel de madurez, es probable que el modelo de producción de vehículos privados continúe y, de hecho, aumente. Esto implicará un uso continuo de recursos, sean los tradicionales o nuevos materiales. De hecho, la competencia por ciertos recursos estratégicos, como las "tierras raras," ya es una realidad en economías como las de China, EE. UU., y la Unión Europea, que actualizan constantemente sus listas de materiales críticos para garantizar el crecimiento económico (Müller, Ghiotto y Bárcena, 2024)²⁷. Como señala el estudio, esta lista se actualiza periódicamente:

La lista de materias primas críticas (MPC) se actualizó en 2023 con seis nuevos materiales considerados "críticos" en comparación con 2020. La lista de 34 materias primas minerales y metálicas incluye ahora el níquel y el cobre, ambas consideradas materias primas estratégicas no por el riesgo de suministro, sino también por su gran importancia económica para la UE. El níquel, por ejemplo, es un componente crucial de las baterías y, aunque existe un suministro diversificado, la UE considera estratégica esta materia prima debido a los "posibles desafíos futuros" derivados de su propiedad concentrada. Otros minerales figuran como estratégicos porque son necesarios no sólo para la transición ecológica y digital, sino también para producir tecnología aeroespacial y de defensa, sectores ambos en los que se prevé un aumento de la demanda (Müller, Ghiotto y Bárcena, 2024, p. 4).

Se espera que la demanda de materias primas se incremente en las próximas décadas debido a usos tradicionales y nuevas aplicaciones

²⁷ No es este el lugar para hacer un análisis en profundidad de estos planes estratégicos y su implicación para áreas como América Latina, uno de los grandes suministradores de estos materiales, pero en todos los escenarios se plantea un crecimiento muy importante de la extracción de estas «tierras raras» para poder hacer frente a las necesidades de la tecnología digital, la energía renovable y la industria de defensa y aeroespacial europeas (Müller, Ghiotto y Bárcena, 2024, pp. 7-8).

tecnológicas, lo cual plantea una competencia global por su acceso. En este contexto resulta de la mayor importancia el desarrollo de políticas y estrategias que permitan una transición sin «sobresaltos». A continuación, se presentan algunas políticas y estrategias clave, algunas medidas de mitigación que deberán desarrollarse y también medidas adaptativas.

6.1. Transición energética y diversificación económica

Es fundamental avanzar en políticas de transición energética hacia fuentes renovables y sostenibles como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Aunque el hidrógeno promete ser una opción, aún requiere más tiempo y desarrollo para ser viable a gran escala. Además, la diversificación económica hacia sectores sostenibles, como la agroecología, el turismo sostenible, la economía circular y las industrias verdes, es esencial. Para apoyar esta diversificación, se necesitará fortalecer la regulación ambiental y los marcos legales para proteger los recursos naturales y mejorar la salud pública. Asimismo, será crucial invertir en investigación y desarrollo de tecnologías limpias y resilientes para adaptar estas nuevas industrias a las condiciones locales.

6.2. Compensación y transición justa

Será necesaria la implementación de programas de reentrenamiento y recolocación laboral para las comunidades afectadas por el cierre de actividades extractivas, junto con un desarrollo económico local que facilite esta transición. La adopción de prácticas eficientes y sostenibles en sectores clave como la industria, el transporte y la construcción permitirá una mayor eficiencia energética. Al mismo tiempo, los programas de restauración y conservación de ecosistemas degradados, junto con la práctica de las 4R (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar), ayudarán a mitigar el impacto de la transición en los recursos naturales.

6.3. Resiliencia climática y adaptación

La descarbonización de la economía global en las próximas décadas exigirá una sólida resiliencia climática, incluyendo la gestión de recursos naturales esenciales, como el agua, y la adaptación de la agricultura a condiciones cambiantes. Para lograrlo, es fundamental fomentar la participación comunitaria y la toma de decisiones compartida, de manera que los agentes sociales locales se involucren en la gobernanza y el monitoreo de políticas de desarrollo sostenible. La historia de conflictos sociales alrededor de proyectos extractivos subraya la importancia de

incluir a las comunidades implicadas²⁸ en el proceso de transición para prevenir tensiones y promover una gobernanza participativa.

6.4. Educación y capacitación en sostenibilidad

Para asegurar el éxito de la transición, es necesario fortalecer la educación y la formación de la población en temas de sostenibilidad, cambio climático y prácticas sostenibles. Promover la conciencia y la capacidad de adaptación a los nuevos modelos de desarrollo es esencial para una transición efectiva hacia un modelo justo y sostenible.

7. Debate

Desde la perspectiva del extractivismo, América Latina ha sido un territorio en disputa durante siglos. Las prácticas extractivistas anteceden la llegada al continente de portugueses y españoles, y continuaron durante el periodo de dominación colonial, marcado por el dominio político, económico y cultural. Aunque con diferente intensidad, todos los países de la región han experimentado prácticas económicas depredadoras que han explotado los recursos naturales y minerales. En las últimas décadas, los conflictos y controversias medioambientales se han multiplicado, generando un renovado interés en los debates sobre la transformación económica del continente y su papel en la globalización. Estos debates no pueden desvincularse de los cambios sociales y políticos de las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI.

Como espacio de confrontación y de hibridación cultural (García Canclini, 1990), América Latina enfrenta profundos desafíos en su transición hacia una economía ecológica y energética más sostenible. Al mismo tiempo, esta transición ofrece la oportunidad de rescatar prácticas ancestrales que están en peligro de desaparecer debido a un desarrollo que, a menudo, ha sido mal entendido y peor aplicado. En la actualidad, reflexionar sobre el "rostro humano del desarrollo sostenible" (PNUD, 2016) permite replantear la sostenibilidad como un elemento

²⁸ En este sentido es importante señalar el "Mapa de impactos y conflictos de las tierras raras" que documenta los conflictos que tienen lugar a lo largo de la cadena de suministro de las tierras raras (extracción, procesamiento y reciclaje). Documenta más de 25 conflictos socioambientales en países como China, Chile, Brasil, Finlandia, Groenlandia, India, Kenia, Madagascar, Malasia, Malawi, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, España y Suecia, entre otros. Disponible en: <https://odg.cat/es/publicacion/informe-mapa-global-de-impactos-y-conflictos-de-tierras-raras/>

fundamental del desarrollo humano, aunque tanto el extractivismo como el neo-extractivismo no parecen orientar sus esfuerzos en esta dirección.

Para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y justos, América Latina necesita políticas y estrategias integradas que promuevan la transición energética, la diversificación económica, la regulación ambiental y una inversión sólida en investigación y desarrollo. Además, se requieren medidas de mitigación y adaptación que gestionen los desafíos y aprovechen las oportunidades inherentes a la transición hacia un modelo más resiliente y sostenible.

La noción de que hemos gastado en pocas generaciones lo que el planeta ha acumulado durante millones de años (en forma de plantas, animales y microorganismos que dieron origen a los combustibles fósiles) plantea consecuencias graves para la continuidad de la vida. Este debate va más allá de la simple sustitución de los motores de combustión actuales. Es necesario ampliar la discusión hacia un replanteamiento del modelo económico basado en un extractivismo orientado únicamente hacia el crecimiento sin límite. Este debate debería comenzar por una transición socio-ecológica urgente, que replantee el vínculo entre naturaleza y cultura, y nos ayude a salir de este "atasco monumental" en el que, día tras día, nos encontramos.

Referencias

Acosta, A. et al. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En: VV.AA., *Más allá del desarrollo*, Quito: Fundación Rosa Luxemburg.

Acosta, A. (2013). *El Buen Vivir – Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Barcelona: Icaria.

Acosta, A. (2015). «El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y no tan económicas». *Política y Sociedad*, 52(2), 299-330.

Almeida-Filho, N., (2021). «Urbanization and Mental Health as a Research Problem in Latin America (with a Focus on Brazil)». *Current Opinion in Psychiatry*, 34(3), 293-298.

<https://doi.org/10.1097/ycp.0000000000000695>

Alonso Vazquez, M. y Pastrana, N. A., (2022). «Social Marketing in Latin America: A Historical Overview». *Social Marketing Quarterly*, 28(1), 8-27. <https://doi.org/10.1177/15245004211073189>

Altman, D., y Castiglioni, R. (2019). «Determinants of Equitable Social Policy in Latin America (1990–2013)». *Journal of Social Policy*, 49(4), pp. 763-784. <https://doi.org/10.1017/s0047279419000734>

Arsel, M. y Pellegrini, L. (2022). «Global Extractive Imperative: From Local Resistance to Unburnable Fuels». *International Development Planning Review*, 44(1), pp. 1-12.

<https://doi.org/10.3828/idpr.2021.25>

Arsel, M.; Hogenboom, B. y Pellegrini, L. (2016). «The Extractive Imperative in Latin America». *The Extractive Industries and Society*, 3(4), pp. 880-887. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.014>

Bambrick, H. (2017). «Resource Extractivism, Health and Climate Change in Small Islands». *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 10(2), pp. 272-288.

<https://doi.org/10.1108/ijccsm-03-2017-0068>

Brand, U; Dietz, K. y Lang, M. (2016). «Neo-extractivism in Latin America – One Side of a New Phase of Global Capitalist Dynamics». *Ciencia Política*, 11(21), pp. 125-159.

<https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.57551>

Capstick, S.; Whitmarsh, L.; Poortinga, W.; Pidgeon, N. y Upham, P. (2014). International Trends in Public Perceptions of Climate Change over the Past Quarter Century. *Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change*, 6(1), pp. 35-61. <https://doi.org/10.1002/wcc.321>

Cooper, P. J.; Rodrigues, Laura C.; Cruz, Á. A. y Barreto, M. (2008). «Asthma in Latin America: A Public Health Challenge and Research Opportunity». *Allergy*, 64(1), pp. 5-17

<https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2008.01902.x>

Escobar, Arturo (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso. *Revista de Antropología Social*, 21, pp. 23-62.

Katz, C. (2018). *La teoría de la Dependencia, cincuenta años después*. Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Fritz, M.M.C. y Silva, M. E. (2018). «Exploring Supply Chain Sustainability Research in Latin America». *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 48(8), pp. 818-841.

<https://doi.org/10.1108/ijpdlm-01-2017-0023>

García Canclini, Néstor (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.

Gerlak, A. K.; Saguier, M.; Mills-Novoa, M.; Fearnside, P. M. y Albrecht, T. R. (2019). «Dams, Chinese Investments, and EIAs: A Race to the Bottom in South America?» *Ambio*, 49(1), pp. 156-164.

<https://doi.org/10.1007/s13280-018-01145-y>

González-Hernández, L.; Meijles, Erik W. y Vanclay, F. (2019). «Household Barriers to Climate Change Action: Perspectives from Nuevo Leon, Mexico». *Sustainability*, 11(15), 4178.

<https://doi.org/10.3390/su11154178>

Gudynas, E. (2011). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. *Estudios socio-jurídicos*, 13(2), 1-31.

Gudynas, E. (2015). *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Bolivia: CEDIB.

Haluza-DeLay, R. (2014). «Religion and Climate Change: Varieties in Viewpoints and Practices». *Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change*, 5(2), 261-279. <https://doi.org/10.1002/wcc.268>

Lee, T. M.; Markowitz, E. M.; Howe, P. D.; Ko, Ch-Y y Leiserowitz, A. A. (2015). «Predictors of Public Climate Change Awareness and Risk Perception around the World». *Nature Climate Change*, 5(11), 1014-1020.

<https://doi.org/10.1038/nclimate2728>

Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores.

Martínez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Mignolo, W. D. (2000). *Local histories/Global designs: Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking*. Princeton: Princeton University Press.

Müller, B., Ghiotto, L. y Bárcena, L. (2024). *The raw materials rush. How the European Union is using trade agreements to secure supply of critical raw materials for its green transition*. Transnational Institute.

Pellegrini, L. (2018). Imaginaries of Development through Extraction: The 'History of Bolivian Petroleum' and the Present View of the Future. *Geoforum*, 90, 130-141.

PNUD (2016). *El rostro humano del desarrollo sostenible*. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Chile.

Peterson, R. A. (1992). Understanding Audience Segmentation: From Elite and Mass to Omnivore and Univore. *Poetics* 21(4), 243-258.

Prades, J. (2001). Quel est l'avenir de l'économie sociale et solidaire? Pour une approche économique. *Revue d'Études Coopératives Mutualistes et Associatives*, Vol. 80, N° 281, Juil.

Prades, J. (2012). *L'utopie réaliste. Le renouveau de l'expérience coopérative*. Paris: L'Harmattan.

Silva, E.; Akchurin, M. y Bebbington, A. J. (2018). «Policy Effects of Resistance against Mega-projects in Latin America: An Introduction». *European Review of Latin American and Caribbean Studies | Revista Europea De Estudios Latinoamericanos Y Del Caribe*, 106(July-December), 25-46. <https://doi.org/10.32992/erlacs.10397>

Spektor, M.; Fasolin, G. y Camargo, J. (2022). Determinants of Climate Change Beliefs in Latin America. *Research Square* <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2224241/v1>

Spektor, M.; Fasolin, G. y Camargo, J. (2023). Climate Change Beliefs and their Correlates in Latin America. *Nature Communications*, 14: 7241. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2224241/v2>

Svampa, M. y Antonelli, M. (Eds.) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires: Biblos.

Svampa, M. (2012). Resource Extractivism and Alternatives: Latin American Perspectives on Development. *Journal für Entwicklungspolitik*, XXIII,3, 43-73.

Toledo, V. M., y Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria.

Uharte, L. M. y Martí Comas, J. (Coords.) (2019). *Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina*. Barcelona: Icaria.

Walter, M. (2018). Extractivismo, violencia y poder. *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, 47-60.

De los conflictos socioambientales hacia formas de paz ambiental. Aproximación al caso del barrio Corinto de Bogotá

Nicolás Gutiérrez Rojas

1. Introducción

El capítulo es una aproximación que pretende realizar un análisis crítico de un estudio de caso que puede ser considerado como un ejemplo de paz medioambiental, a través de una interpretación que busca dimensionar la movilización social y la construcción de identidad en torno a la formación de un *ecobarrio*²⁹.

El planteamiento del que surge este estudio es acercarse a capturar una imagen sobre los actuales conflictos socioambientales en ciudades latinoamericanas, y las posibilidades de construcción de paz ambiental desde lo comunitario. Para ello, se centra en el barrio Corinto de los cerros surorientales de Bogotá, desvelando una interpretación de las identidades colectivas construidas por sus habitantes para garantizar su permanencia en este territorio.

El objetivo es mapear de forma crítica algunas causas estructurales y las posibilidades de transformación de un conflicto socioambiental que se hila con el conflicto político, social y armado de Colombia, con la finalidad de aportar al estudio del papel de la movilización social en las posibilidades de paz medio ambiental.

Es importante tener en cuenta que el contexto de estudio hace un recuento histórico general, sobre el barrio y su relación con conflictos estructurales. Tras esto, se trata de aproximarse a las construcciones narrativas comunitarias sobre la apuesta por un *ecobarrio* como experiencia de construcción de paz, en medio de una estructura de conflictos socioambientales de una capital latinoamericana.

Este análisis surge, porque la bibliografía escrita hasta el momento sobre la transformación de conflictos ambientales en Colombia brinda variedad de interpretaciones, donde se sitúan algunas investigaciones sobre las lógicas del antropoceno, las causalidades sobre el desarrollo, y la posibilidad de escenarios de construcción de paz

²⁹ Se trata de un análisis en profundidad sobre uno de los conflictos socio-ecológicos que han sido expuestos en la conferencia internacional *Movimientos sociales y globalización: Una mirada iberoamericana a los desafíos latinoamericanos*.

comunitarios. En esa misma línea, este escrito realiza una aproximación a la intención comunitaria de establecer un *ecobarrio*, proceso en el que se crean y se recrean identidades colectivas, que configuran formas concretas de entender, habitar y transformar el espacio.

La literatura académica que se analiza a lo largo del documento sugiere un análisis crítico de algunos conceptos en torno al tránsito del conflicto armado al conflicto político, y sus dimensiones en escala territorial y cultural, donde emergen diversas narrativas para la construcción de una paz con justicia social y ambiental.

Para desarrollar el análisis de las categorías enunciadas anteriormente, el presente texto se compone de cuatro apartados. El primero es una contextualización sobre el conflicto político, social y armado en Colombia en relación con la historia ambiental, líneas de trabajo que dan algunas pistas sobre la formación del barrio Corinto y sus lógicas de desarrollo. Luego, se realiza una aproximación a la discusión teórica sobre la noción de conflictos ambientales recogiendo elementos de la ética convergente desarrollada por Ricardo Maliandi (2016). En el tercer apartado se aborda la experiencia de construcción de identidad ecológica en el *ecobarrio* Corinto. Por último, se presentan algunas reflexiones sobre el caso y su contrastación con la literatura académica.

2. Aproximación al conflicto político, social y armado en Colombia en relación con la historia ambiental del país

En este apartado se examinan dos enfoques sobre el estudio de la conflictividad en Colombia. El primero se centra en la contextualización causal del conflicto político, social y armado, un aspecto fundamental para comprender tanto los desplazamientos de campesinos de las zonas rurales hacia las capitales, como la formación de arraigos territoriales de las poblaciones en determinados ecosistemas. El segundo enfoque aborda algunas particularidades de las relaciones de la sociedad y la naturaleza en el ámbito del desarrollo.

Al analizar el conflicto en Colombia, se evidencia una problemática compleja con múltiples causas y actores, que influye en la formación estatal, la movilización social y las apuestas de paz. El profesor Sergio de Zubiría ha contribuido a este campo categorizando el conflicto armado colombiano en tres temporalidades históricas, basadas en acontecimientos políticos y culturales del siglo XX, las cuales son tomadas como guía en esta aproximación. Asimismo, es relevante considerar algunos aportes del libro *Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental en Colombia 1850-1995*, que ofrece narrativa ambiental del territorio en clave de desarrollo.

Siguiendo esta línea de análisis, de Zubiría (2015) identifica tres temporalidades del conflicto en Colombia. La primera, desde finales de 1920 hasta finales de la década de 1950, se caracteriza por *el cierre del universo político*, los *límites del reformismo* y la *violencia estatal*. La segunda, que abarca desde los años 1960 hasta 1991, está marcada por un *Estado particularista*, la *modernización contra modernidad* y la *protesta social*. La tercera temporalidad, que se extiende de 1992 a 2014 donde se percibe la *desestructuración estatal*, el *neoliberalismo* y la *paz intermitente*.

Paralelamente a las temporalidades mencionadas, desde la época colonial hasta el presente, la relación entre la biodiversidad y las comunidades ha sido banalizada por el Estado, lo que ha impedido comprender integralmente la composición natural del entorno (Escobar, 2014). Esta actitud, reforzada por la lógica hegemónica en el poder y su razonamiento sobre las tierras de América como *Neo-Europas* -territorios destinados a la extracción de recursos como extensión de los países europeos (Palacio, 2001)-, ha provocado un extrañamiento hacia lo natural. Como resultado, se ha fomentado una tendencia de apropiación de los accesos sociales, el territorio y las zonas de frontera.

2.1 Primera etapa. Principios del auge exportador y limitado espacio político

En la cultura política de la primera temporalidad se identifican dos precedentes importantes del conflicto en Colombia. Primero, la concepción contra insurgente precedió la existencia a la aparición de las guerrillas. Segundo, existieron movimientos armados insurgentes antes de la revolución cubana (de Zubiría, 2015:16). Estas características fundamentan tanto la narrativa del enemigo interno de los partidos conservador y liberal como el lenguaje jurídico, legislativo y ejecutivo enfocado a la *legítima defensa y seguridad*.

La ideología contra la insurgencia fue acompañada por la promoción de ideas y acciones violentas por parte de las clases dirigentes. Inicialmente, esto llevó a la exclusión de actores del escenario político, y posteriormente, consolidó el antagonismo como herramienta principal frente a ideas diferentes a las del partido en el poder. Como resultado, se volvió recurrente el asesinato y destrucción de la oposición política, tanto liberal como conservadora (de Zubiría, 2015).

Simultáneamente, estos procesos políticos establecen a quienes acceden al poder como agentes transformadores del entorno, representando en estos actores una *oficialidad*, mientras que a la naturaleza y el campesinado les es conferido el papel pasivo de *lo otro* (Marquéz, 2001). Esta percepción se traduce en un papel económico en el comercio internacional mediante bonanzas efímeras de productos agrícolas, que

beneficiaban principalmente a las elites políticas y a un reducido número de empresas locales y extranjeras.

Los intentos de modernización del campo no contaron con una perspectiva técnica y se centraron en la extracción y comercialización. En esta experiencia, se crea la Caja Agraria, que, mediante *procesos irregulares* realizó una asimétrica adjudicación de tierras (Marquéz, 2001); lógicas similares operaron durante los años próximos para la obtención de créditos para el desarrollo. A pesar de sus deficiencias, estas iniciativas económicas impulsaron cambios significativos en las formas de producción y llevaron a una transformación relevante del paisaje natural. Los planes agrarios productivos impulsados por el BIRF³⁰, siguiendo el modelo del plan Currei, enfrentaron diversas dificultades. Para superarlas, se crearon instituciones estatales con la finalidad de promulgar y efectuar los ajustes estructurales necesarios. Desde estas instituciones, se visibilizaron los papeles del campesinado y la naturaleza como una parte de *lo otro*, buscando integrarlos en procesos de participación. Sin embargo, estos intentos de diálogo fracasaron, porque las perspectivas de las comunidades se encontraban en dirección opuesta a los planteamientos externos que moldeaban las nuevas políticas estatales.

La intención de apertura democrática por parte de la población a partir de reformas políticas no llegó a materializarse en esa época, y las bases campesinas asumieron posiciones antagónicas frente a los dirigentes conservadores y liberales, quienes gestaron un sistema plutocrático. Esta dinámica pronto se vio influenciada por la injerencia extranjera en la economía del país, circunstancia que agudizó las problemáticas sociales, cimentando la inestabilidad política (de Zubiría, 2015; Marquéz, 2001).

2.2 Segunda etapa. Estado particularista y respuestas populares

La segunda temporalidad comienza con la instauración del *frente nacional*, durante el cual la clase dirigente de los partidos conservador y liberal formalizaron acuerdos para alternarse el poder estatal, limitando el espacio para otras expresiones políticas. Esta situación provocó una respuesta social en regiones periféricas y zonas urbanas marginales, manifestada en marchas campesinas y paros cívicos.

Durante esta época, la ganadería se fortalece como uno de los factores clave en los conflictos territoriales en Colombia. Desde la colonia, la fuerte trashumancia de reses por parte de los españoles, especialmente en las sábanas, caracterizó una condición transformadora

³⁰ Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Desde el tratado de Bretton Woods conocido como Banco Mundial.

de ecosistemas y, a su vez consolidó una institución generadora de poder político y económico (Yepes, 2001). La tierra dedicada al pastoreo produce altas tasas de extinción biológica, además de promover los cercos de alambre de púa (Shiva, 2003). Posteriormente, esta tendencia se extendió a los monocultivos. Estos proyectos, promovidos por el estado colombiano (Yepes, 2001:172), a menudo involucraron el uso de la violencia para la privatización de terrenos.

La apertura de nuevas rutas comerciales para la extracción de hidrocarburos intensificó el desgaste de tierras y de otros ecosistemas. Este cambio en la lógica extractiva provocó la imposibilidad de vida para una parte del campesinado, llevando a una migración masiva hacia las periferias urbanas desde mediados del siglo XX. En particular, a la región sur oriental de Bogotá llegaron personas de Boyacá y los llanos orientales (Rico, 2011). Estos migrantes tuvieron que convivir con lugares ambientalmente desgastados por la extracción de recursos y los vertederos de residuos. Esta situación contribuyó a una polarización espacial de la ciudad, donde las clases bajas se asentaron en áreas degradadas, dinámica también influenciada por la industrialización por sustitución de importaciones (Sanghee, 2017).

Estas problemáticas intensificaron los factores de conflicto social desde la década de 1960. Durante este periodo, la protesta social y la subversión son una constante expresión de inconformidad frente a la deficiente implementación de reformas sociales, el desprecio hacia la inequidad y la crisis de legitimidad del Estado (de Zubiría, 2015).

La década de 1980, surgieron nuevos actores y disputas por el control territorial. El conflicto armado involucró a insurgencias de diferentes corrientes ideológicas, grupos paramilitares, narcotraficantes y fuerzas del estado (de Zubiría, 2015). Uno de los casos relevantes en este estudio, es la incidencia por parte de la insurgencia del Movimiento 19 de Abril (M-19), que lideró el asentamiento de las viviendas del barrio Corinto, en los cerros orientales de Bogotá. Este espacio, fue poblado por personas en condición de sinhogarismo, recicladores y trabajadores informales del centro de la capital, y se construyó con residuos de construcción, paroy³¹ y madera (Rico, 2011).

Esto da lugar a dos perspectivas en la política nacional. Por un lado, de las elites en el poder adoptan una perspectiva estatista que promueve la represión, la violencia, el estado de sitio, y el cercamiento de tierras. Por otro lado, una sociedad vital que exige oportunidades, soluciones, ejerciendo legítimamente la protesta, la subversión y la rebelión (de Zubiría, 2015:29).

³¹ Material similar al cartón, cuya utilidad en construcción es blindar contra la humedad.

2.3 Tercera etapa. La consolidación del proyecto neoliberal

En la tercera temporalidad se observa que la tradición particularista de las elites políticas crea una armonía con la entrada del modelo neoliberal en la década de 1990. El ordenamiento político y social se centra en la ley, orden y la propiedad, destruyendo el reducido sentido público y cohesionador del Estado colombiano.

El contexto global posterior al 11 de septiembre del 2001 marcó la lucha antiterrorista como narrativa predominante en occidente, en Colombia se caracterizó a las insurgencias y movimientos sociales como organizaciones transnacionales que amenazan el bienestar. Durante este periodo, se intensificaron las persecuciones y asesinatos a expresiones políticas que se situaban fuera de la narrativa hegemónica (CMH, 2013; de Zubiría, 2015).

Colombia consolidó su papel en el comercio internacional basado en la exportación de materias primas siguiendo los lineamientos del consenso de Washington (Thorp, 1998). Esto intensificó la explotación de la naturaleza y llevó al país a una dinámica neoliberal de tratados de libre comercio desfavorables (Chang, 2004). La deuda permitió un mayor control sobre los seres humanos y no humanos del territorio, garantizando la demanda de recursos naturales a bajos precios (Hauge, 2023).

El anterior recorrido histórico buscaba mapear algunas claves de la conflictividad de la sociedad colombiana desde una perspectiva socioambiental. Así, se entiende que la construcción social del espacio habitado se da en simultaneidad con las formas las que este espacio produce las relaciones que le habitan (Harvey, 2012; Massey, 2005), generando una incidencia recíproca entre humanos y no humanos con interacciones complejas, mediadas por la conflictividad y la cooperatividad (Tsing et al., 2024).

3. Sobre el conflicto y la paz medioambiental como categorías de análisis

Hasta aquí, el documento ha esbozado, de forma general las relaciones complejas entre la sociedad colombiana y la naturaleza, destacando algunas causalidades de conflictos actuales que requieren cambios estructurales. En este apartado, se explora la noción de conflicto, examinando enfoques más allá del antagonismo violento y considerando los aportes de la paz medioambiental como claves teóricas relevantes para el caso de estudio analizado.

3.1 Hacia otro ángulo del concepto conflicto

Una aproximación a la noción de conflicto se encuentra en el trabajo de ética convergente de Ricardo Maliandi (2016). El autor sugiere que el término conflicto está etimológicamente vinculado a las ideas de choque o colisión, y que lo conflictivo es inevitable tanto los aspectos públicos como en los individuales de la experiencia de vivir en la biosfera. Por esto, la categoría de conflicto puede aparecer en el plano ético, político, amoroso, o el natural.

En esta línea, se plantea “que siempre habrá conflictos, o, en otros términos, que las interrelaciones sociales tienen lugar en el marco de estructuras conflictivas” (Maliandi, 2016:95). La referencia del autor aborda el debate de fundamentación y de reflexividad sobre las concepciones morales que se desarrollan en los ámbitos sociales, destacando que esta noción trasciende la lógica negativa sobre las interacciones conflictivas. Maliandi (2016) sugiere que el conflicto posee la potencialidad de generar nuevas relaciones a través de su tramitación, ya sea en el ámbito político, económico o ambiental (Della Porta, 2020). Las dinámicas sociales generan interrelaciones entre sus actores, y los cambios resultantes reflejan la participación de diversos agentes en un conflicto. Según Maliandi (2016), la conflictividad surge porque algunos principios éticos, dentro de la lógica del poder tienden a ser más preponderantes que otros. Por ejemplo, en las sociedades, los principios fundamentados, como la conservación, y los principios universalistas, como las normas generales, a menudo se imponen sobre las nociones de realización, como la creación, y los códigos individuales, como los valores personales.

A pesar de la presencia de los conflictos, se entiende que estos en sí mismos, tienen la posibilidad de ser transformados en otras interacciones. Según Walter Benjamín (2017) y Johan Galtung (2016), la tramitación entre intereses diversos puede alcanzar un entendimiento colectivo. Desde esta perspectiva, se enuncia que los contratos jurídicos no son suficientes, ni la única forma para tramitar un conflicto de formas no violentas. Es importante investigar el desarrollo de relaciones simbióticas y equitativas entre diversos actores en actos de cooperación, amistad y amor. (Galtung, 2016:168).

Esto se relaciona con la propuesta de Benjamín (2017) en su ensayo *hacia una crítica de la violencia*, donde afirma que la tramitación de conflictos se ejemplifica en las relaciones cotidianas. Según Benjamín, “el acuerdo no violento surge dondequiera que la cultura de los sentimientos pone a disposición de los hombres medios puros de entendimiento. Delicadeza, simpatía, amor a la paz, confianza y todo lo que se podría aun añadir constituyen su fundamento subjetivo” (Benjamín, 2017:30).

Este tipo de acuerdos pueden extenderse a las interacciones con actores no humanos. Las relaciones cooperativas interespecies han permitido escenarios de coexistencia donde se manifiestan tanto conflictos como dinámicas cooperativas. Esto requiere intercambios entre actores humanos y naturales para construir entornos vitales, generando un reconocimiento del otro, lo otro y lo sagrado, lo cual configura los espectros simbólicos de los movimientos ambientales (Melucci, 1994) teniendo en cuenta que:

“quien reconoce principios, está moralmente obligado a respetarlos. Pero si reconoce también que los principios están en conflicto entre sí, ese respeto no puede consistir en el cumplimiento óptimo de todos, sino en el cuidado de que ninguno de ellos sea vulnerado, o “pasado por alto”, como si no se lo reconociera.” (Maliandi, 2016:97).

Esta perspectiva de cuidado se encuentra en la redefinición de la racionalidad ambiental, promoviendo interpretaciones plurales de formas de vida basadas en la interdependencia. En lugar de centrarse en eliminar el conflicto o aplicar soluciones jurídicas desde una perspectiva liberal, el objetivo es construir escenarios de comunicación multi-especies (Haraway, 2020). Estos diálogos buscan desarrollar nuevas formas de interacción para enfrentar la crisis epocal/civilizatoria/ambiental (Fraser, 2023; Hauge, 2023; Leff, 2022).

3.2 Las relaciones socioambientales contemporáneas

El avance del cambio climático y su posicionamiento en las agendas políticas locales e internacionales impulsan la reconstrucción de economías y sociedades para enfrentar sus impactos (ODS-2030). Las ciencias sociales también se involucran en la comprensión del problema, profundizando en las relaciones sociedad-naturaleza o cultura-naturaleza (Ostrom, 2009). La escisión ontológica entre el mundo social y natural constituye una problemática central de la actualidad (Escobar, 2015; Kelly, 2019), ya que el capitalismo ha organizado la naturaleza y la humanidad debido a la apropiación de recursos naturales para su posterior capitalización (Moore, 2016), generando una racionalidad centrada en el utilitarismo y extractivismo (Leff, 2022).

Desde la perspectiva de la economía ecológica, el modelo extractivista ignora los límites ecosistémicos y los recursos naturales que lo sustentan (Daly, 2005). Esto ha acelerado el metabolismo social (Martínez-Alier, 2023), donde los países empobrecidos soportan las

cargas ecológicas y sociales del desarrollo occidental, mientras que los países industrializados disfrutaban los beneficios (Crosby, 1988).

Desde las luchas sociales por la calidad de vida en los países empobrecidos ha surgido el concepto de ‘ecologismo de los pobres’ (Guha, 1994; Martínez Alier, 2009) que analiza las dinámicas extractivistas de países y empresas del Norte en el Sur global. Los estudios sobre conflictos ambientales en el Sur global (Folchi D., 2001) muestran que las bases de un conflicto ambiental son diversas y no siempre se limitan a la defensa de recursos naturales. Así, se ha comenzado a hablar sobre ‘el ambientalismo de las personas del común’ en publicaciones recientes (Martínez-Alier, 2023).

La propuesta de Donna Haraway (2020) en ‘seguir con el problema’ sugiere la importancia de prácticas situadas³² que reconozcan la interdependencia entre especies, lo que implica aprender a vivir y morir con responsabilidad en una tierra dañada, reconociendo los conflictos y la colaboración entre diferentes seres asociados (Haraway, 2020; Tsing y Mena, 2021). En este contexto, los conflictos ambientales no se analizan solo para clasificarlos, sino para transformar las relaciones socioecológicas.

3.3 La paz medio ambiental

Desde algunas perspectivas, se sugiere que la paz medio ambiental es un término emergente debido al incremento de debates sobre el cambio climático. No obstante, en su obra *Construcción de paz medioambiental y cambio climático: evaluación, análisis crítico y perspectivas* (Hardt y Scheffran, 2019), las autoras argumentan que existe una tradición significativa en el campo de las relaciones internacionales y los estudios sobre el desarrollo en torno a este concepto. En particular, Hardt y Scheffran (2019) examinan la evolución de distintos análisis en los campos del conflicto y la paz que se vinculan con los problemas medio ambientales. A pesar de ello, reconocen que estos análisis presentan limitaciones y plantean dos críticas principales al respecto.

En primer lugar, la teoría del conflicto medioambiental suele ser entendida desde un ámbito estratégico de posicionamiento entre naciones que buscan obtener/resguardar recursos naturales; por esta razón, se advierte que no se ha demostrado una correlación entre los conflictos, el cambio climático y el medio ambiente. De hecho, la selección de datos para el muestreo de los que se valen algunos de estos análisis visibilizan sesgos de estigmatizaciones y determinismo ambiental (Adams et al., 2018:202).

³² Sociales, ecológicas, conductuales y cognitivas.

Por otro lado, las investigaciones sobre la paz medioambiental aún no han alcanzado una definición común del término y, en muchas ocasiones, solo se le otorga un papel relevante como facilitadora en la resolución de conflictos, similar a la cooperación medioambiental (Hardt y Scheffran, 2019). Esto hace que las producciones que se enmarcan en este paradigma sean entendidas como extensión de la paz liberal, la cual, en varias oportunidades por su interés resolutivo olvida el análisis de los conflictos estructurales.

En particular, el aporte de este ejercicio analítico asume nociones de la ecología política, la historia ambiental, y el aporte de propuestas de la paz medioambiental, que sustentan los estudios del desarrollo desde una posición crítica, ya que, si la intención es transformar la realidad, se deben cuestionar las estructuras de poder que han imperado en los conflictos políticos y ambientales, teniendo en cuenta que las perspectivas de cambio se expresan desde visiones plurales, en medio de interacciones de cooperación y conflicto constantes entre los diferentes actores.

4. La movilización por la constitución de *Ecobarrios* como una apuesta de paz medioambiental

El barrio Corinto guarda relación con las lógicas de extracción de recursos y con el conflicto político, social y armado en Colombia. Este espacio al haber sido ocupado y fundado por militantes de la insurgencia M-19 entre los años 1981-1982, generó un escenario de conflicto armado en la ciudad; además, promovió la estigmatización de sus habitantes, como señala Héctor Hugo Álvarez Cubillos, líder ambiental y gestor comunitario de los *ecobarrios*, Manantial y Corinto (Paisajes inadvertidos, 2019).

En la época de ocupación, a 500 metros del área transformada para ser habitada por seres humanos, se encontraba la cantera minera *el Zuque*, que había sido explotada para obtener material para obras públicas entre 1960 y 1990, incluso, se puede apuntar que fue un lugar donde la exploración minera se mantuvo desde 1987 hasta el 2006, a pesar de ser concebido como parte del área de protección ambiental de los cerros ambientales (Cifuentes et al., 2017). Así mismo, es importante tener en cuenta que este barrio es catalogado como una estratificación social baja, a diferencia de otras construcciones que también se encuentran en zonas similares, pero son propiedades que cuentan con una asignación de estratificación alta.

Se tiene registro de que en el año 2005 se planteó un reasentamiento total del barrio Corinto promovido por el Estado, con el argumento de que se encuentra ubicado en zona de reserva forestal

protectora y en riesgo por remoción de masa. Ante esta circunstancia, se inician las acciones colectivas de la comunidad para preservar su vivienda en el lugar; entre ellas, destaca la co-producción de conocimiento que da lugar a la propuesta de un *ecobarrio* constituido desde tres dimensiones.

La primera es la perspectiva *ecohumana*, desde la cual se busca una creación simbólica colectiva por parte de las personas que habitan el territorio, construyendo relaciones basadas en el respeto. Luego, la dimensión *ecoambiental*, consta de transformar las infraestructuras realizando adecuaciones que mitiguen los riesgos de desastres naturales, con la particularidad de utilizar materiales de la naturaleza. Un ejemplo de esto fue la demolición de la institución de educación infantil, que ahora es un aula ambiental, a lo que se suma un potente ejercicio ecopedagógico y de producción de conocimientos sobre el territorio. Por último, se encuentra la dimensión *económica*, que se sustenta con el ecoturismo y el trabajo en las huertas comunitarias donde se venden y se intercambian productos (Álvarez y Vanegas, 2023).

De esta manera, se evidencia cómo la comunidad construye un arraigo ecológico que se basa en la intención de permanencia en el territorio a través de una práctica de estilos de vida alternativos (Diani, 2015). En particular, las personas dimensionan que vivir allí ha transformado un ecosistema, pero que es posible establecer otras lógicas de relación que fomenten el cuidado entre los actores humanos y no humanos en una apuesta de co-habitar el espacio. Además, es un escenario que no está aislado de la estructura ecológica próxima, por ello, este proceso comunitario se articula con otros territorios, en la mesa ambiental de los cerros orientales, donde diversas organizaciones forman una coalición, movilizan sus esfuerzos en ejercicios de paz ambiental y transformación de conflictos creando y experimentando nuevos modelos culturales (Tejerina, 2005).

Entre los aportes más interesantes está el reconocimiento de los conflictos que han tenido lugar en el territorio, posicionándose más allá de las soluciones legalistas. Ejemplo de esto, es reconocer que en el interior de la comunidad han existido conflictos que limitaban la interacción entre las personas que habitan el *ecobarrio*, los cuales, no son negados, sino que han buscado ser transformados (Melucci, 1994), y pasa lo mismo en las relaciones con la naturaleza que son replanteadas.

De esta manera, la intención de formular un *ecobarrio* brinda elementos para dimensionar construcciones de formas políticas basadas en el entendimiento de las personas teniendo en cuenta la interdependencia con la naturaleza de su entorno. Esto evidencia un ejercicio que esboza un carácter alternativo de lo político en el cual se multiplican los espacios de decisión, entendiendo que continúan surgiendo conflictos multi específicos, de los cuales se busca aprender y

generar conocimientos colectivos, donde la apuesta va más allá de la formalidad legal del mero habitar un espacio.

5. Reflexiones sobre el ensayo

El caso elegido presenta dos particularidades. La primera es que no puede entenderse como un conflicto ambiental en el que algunos poderosos usurpan las cualidades naturales de un territorio en detrimento de las comunidades que lo habitan. Tampoco es un conflicto en el que el antagonismo sea la única lógica presente. Se trata de una conflictividad que permite profundizar la democracia, más allá de la perspectiva liberal, ofreciendo una reconstrucción de un lugar desde la acción de una comunidad que tramita sus propios conflictos.

Tras el recorrido histórico y teórico que se ha desarrollado para hacer una primera aproximación al caso del *ecobarrio* Corinto, la experiencia aporta en la importancia de observar alrededor, en lugar de ver hacia adelante. Esto evidencia que las pautas de cooperación surgen de una coordinación no intencional, constituyendo una red relacional donde espacios y tiempos se interrumpen así mismos (Massey, 2005; Melucci, 1994). Es así como seres humanos y no humanos, en ese lugar específico, trascienden de las lógicas del conflicto armado y de la extracción de recursos que les han precedido.

El reconocimiento de los factores de conflicto y cooperación, fomentan el proceso de diálogo y entendimiento constante con la realidad, con la intencionalidad de empezar a transformarlas desde la construcción simbólica y ambiental del espacio. Por esta razón, vale la pena señalar, que no hay una propuesta de *ecobarrio* definida, sino más bien, hay posibilidades de construcción en medio de prácticas socioecológicas que se presentan en lugares específicos con la participación de diferentes actores que coinciden.

Referencias

Adams, C., Ide, T., Barnett, J., y Detges, A. (2018). Sampling bias in climate–conflict research. *Nature Climate Change*, 8(3), 200–203. 10.1038/s41558-018-0068-2

Álvarez, H., y Vanegas, E. (2023, May 31.). *Ecobarrio*, una propuesta por el derecho a la ciudad y a la partición ciudadana en barrios populares de los Cerros Orientales de Bogotá. La red cultural del banco de la república en Colombia.

Benjamín, W. (2017). Para una crítica de la violencia. *Letal e incruenta: Walter Benjamin y la crítica de la violencia* (1st ed., pp. 19–48). LOM Ediciones.

- Chang, H. (2004). *Retirar la escalera: la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica*. Catarata Madrid.
- Cifuentes, A., Mosquera, N., y Oyola, G. (2017). *Caracterización socioeconómica zona prioritaria Zuque-Corinto*. Bogotá: CMH. (2013). *¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Crosby, A. W. (1988). *Imperialismo ecológico: la expansión biológica de Europa, 900-1900* (1st ed.). Barcelona: Crítica.
- Daly, H. E. (2005). Economics in a full world. *Scientific American*, 293(3), 100–107.
- de Zubiría, S. (2015). *Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano*. Espacio Crítico.
- Della Porta, D. (2020). *How social movements can save democracy: Democratic innovations from below*. John Wiley & Sons.
- Diani, M. (2015). Revisando el concepto de movimiento social. *Encrucijadas: Revista Crítica De Ciencias Sociales*, (9)
- Escobar, A. (2014). *La invención del desarrollo*. Editorial Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia: la ontología política de los "derechos al territorio". *Cuadernos De Antropología Social*, (41), 25–38.
- Folchi D., M. (2001). Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas. *Ecología Política*, (22), 79–100.
- Fraser, N. (2023). *Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso*. Siglo XXI Editores.
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. *Cuadernos De Estrategia*, (183), 147–168.
- Guha, R. (1994). El Ecologismo de los pobres. *Ecología Política*, (8), 137–151.
- Haraway, D. J. (2020). *Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno*. Consonni.
- Hardt, J. N., y Scheffran, J. (2019). Construcción de paz medioambiental y cambio climático: evaluación, análisis crítico y perspectivas. *Pax crítica: aportes teóricos a las perspectivas de paz posliberal* (1st ed., pp. 389–422). Tecnos.
- Harvey, D. (2012). *La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural* (2nd ed.). Amorrortu Editores.
- Hauge, J. (2023). Ecological breakdown. In J. Hauge (Ed.), *The Future of the Factory: How Megatrends are Changing Industrialization* (pp. 119–148). Oxford University Press. 10.1093/oso/9780198861584.003.0006
- Kelly, D. (2019). *Politics and the Anthropocene*. Polity Press.

Leff, E. (2022). *Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI Editores México.

Maliandi, R. (2016, Fundamentación y aplicación de la ética convergente. *Conferencia Pronunciada Por El Académico Titular Dr. Ricardo Maliandi En Oportunidad De Su Incorporación a La Academia Nacional De Ciencias De Buenos Aires*, , 91–101.

Marquéz, G. (2001). De la abundancia a la escasez. La transformación de ecosistemas en Colombia. *Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental en Colombia 1850-1995* (pp. 283–321)

Martínez Alier, J. (2009). Conflictos ecológicos por extracción de recursos y por producción de residuos. *Letras Verdes: Revista Latinoamericana De Estudios Socioambientales*, (3), 8–10.

Martínez-Alier, J. (2023). *Land, Water, Air and Freedom: The Making of World Movements for Environmental Justice* doi:

10.4337/9781035312771

Massey, D. (2005). La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones. *Pensar este tiempo: espacios, afectos, pertenencias* (1st ed., pp. 101–128). Paidós.

Melucci, A. (1994). ¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales? *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad* (1st ed., pp. 119–150). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Moore, J. W. (2016). *Anthropocene or capitalocene?: Nature, history, and the crisis of capitalism*. Pm Press.

Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, 325(5939), 419–422. 10.1126/science.1172133

Paisajes inadvertidos. (2019, sep 19,). *Recorrido Ecobarrio San Cristobal*. Alta consejería de paz, víctimas y reconciliación. <https://www.youtube.com/watch?v=9lbWaVIn7Gw>

Palacio, G. (2001). En búsqueda de conceptos para una historiografía ambiental. *Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental en Colombia 1850-1995* (pp. 37–74). Universidad Nacional de Colombia.

Rico, G. (2011). Discurso y poder en la construcción del hábitat. El caso los cerros surorientales de Bogotá. *Revista Bitácora Urbano Territorial*, 19, 123–137.

Sanghee, J. (2017). La pobreza urbana de América Latina y los desafíos en la era del desarrollo sustentable. *Portes: Revista Mexicana De Estudios Sobre La Cuenca Del Pacífico*, 11(21)

Shiva, V. (2003). *¿Proteger o expropiar?: Los derechos de la propiedad intelectual*. Intermón Oxfam.

Tejerina, B. (2005). Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: Los caminos de la utopía. *Revista Crítica De Ciencias Sociais*, (72), 67–97.

Thorp, R. (1998). *Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo XX*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Tsing, A. L., Deger, J., Saxena, A. K., y Zhou, F. (2024). *Field Guide to the Patchy Anthropocene: The New Nature*. Stanford University Press.

Tsing, A. L., & Mena, F. J. R. (2021). *La seta del fin del mundo: Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas*. Capitán Swing Libros.

Yepes, F. (2001). Ganadería y transformación de ecosistemas: Un análisis ambiental de la política de apropiación territorial. *Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental en Colombia 1850-1995* (pp. 118–172). Universidad Nacional de Colombia.

Activismos políticos juveniles en la Argentina reciente. Apuntes sobre la construcción del primer compromiso (2015-2023)

Marina Larrondo

1. Introducción

El objetivo de este capítulo es presentar algunos hallazgos de una investigación en curso acerca de los primeros pasos de la carrera militante en la adolescencia o juventud temprana. Este trabajo se enmarca en un momento de cambios radicales y profundos en los ciclos políticos en Argentina, dados por la erosión del denominado ciclo progresista y la puesta en vigor de un proyecto político de extrema derecha. La investigación tiene como uno de sus objetivos específicos indagar los procesos de socialización política, construcción de las disposiciones, modos de reclutamiento y acceso a los espacios de militancia en distintos espacios activistas estudiantiles, políticos partidarios o “de causas”, tales como género, ecologismo y diversidad corporal, para reconstruir los sentidos de la militancia y las causas públicas por las que los y las jóvenes se movilizan e inician su primer compromiso político. Tomando como base esa investigación marco, en este capítulo exploramos dos: los activismos feministas y de derechos político-partidarias durante el ciclo 2015-2023.

El activismo es comprendido como un proceso, una carrera que emprenden los individuos (Becker, 2009; Filleule, 2015 y 2020; Agrikoliansky, 2017) insertos en dinámicas colectivas que las posibilitan. En esta dirección, se parte desde el análisis de la construcción de las disposiciones al compromiso, es decir, la socialización política (Benedicto, 1995, Filleule, 2013, Masclet, 2016) entendido como un proceso dinámico en el que tienen fuerte peso las primeras experiencias que generan esquemas de percepción y prácticas -disposiciones- (Lahire, 2007 y 2012), que se reactualizan y retroalimentan permanentemente a partir de los diferentes ámbitos y espacios sociales en los que los sujetos construyen aprendizajes políticos. Estos espacios incluyen la familia y también la acción colectiva, los movimientos sociales, los grupos de pertenencia no familiares y los consumos culturales (Filleule, 2013; Masclet, 2016). La adquisición de estos esquemas y aprendizajes políticos construye predisposiciones que culminan con la decisión de pasar a la acción y comprometerse cuando se encuentran ciertas condiciones y

oportunidades. Aquí analizamos esos momentos decisorios en las carreras militantes a través de una estrategia metodológica que combina un conjunto de entrevistas en profundidad con una mirada biográfica centrada en lo que Meccia (2019) denomina enfoque de *Life Stories* - entendido como un abordaje que busca en los relatos de historias de vida las configuraciones de los recorridos vitales a través de las decisiones, los acontecimientos y los cambios de posición y puntos de vista que los hacen devenir tales- y el análisis de fuentes documentales que enmarcan y contribuyen a explicar estos recorridos. Las fuentes documentales incluyeron las redes sociales de los espacios de militancia de los propios entrevistados, perfiles de Twitter y publicaciones en YouTube e Instagram de influencers o personalidades mencionadas por los entrevistados así como el análisis de fotografías de pancartas y pintadas de movilizaciones callejeras. Para este trabajo se considera, en particular, el relato de siete militantes (tres jóvenes militantes feministas y cuatro de distintos espacios de derechas)

Los resultados parciales fueron puestos en diálogo permanente con los hallazgos de otros colegas sobre estos temas, entre los cuales citamos a Vázquez (2022 y 2024), Saferstein y Goldentul (2022), Semán y Welschinger (2023), Stacchiola y Seca (2023), Larrondo y Ponce Lara (2019), Friedman y Rodríguez Gustá (2023), entre otros.

2. El ciclo político post progresista

No todos los momentos históricos ofrecen las mismas oportunidades para comprometerse, de ahí que caracterizar la coyuntura política es central para entender los cambios en los activismos. El caso de Argentina es complejo dado que se produjeron muchas transformaciones estructurales en muy poco tiempo. A riesgo de simplificar, hablar de “ciclo progresista” versus “restauración de los proyectos de derechas” ofrece un anclaje descriptivo que resulta operativo para ponderar estas transformaciones.

Entre los años 2011 y 2015 se observa un agotamiento del ciclo kirchnerista. Si durante las primeras gestiones (2003-2010) se da un proceso de crecimiento económico, redistribución del ingreso, ampliación de derechos y recomposiciones salariales, hacia el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el bajo crecimiento junto a la alta inflación, la restricción externa, el déficit fiscal y las disputas ideológicas y culturales que muchos analistas denominaron “la grieta”, marcaron un fuerte descontento de la ciudadanía. Así, la alianza Cambiemos, de orientación centro-derecha, condujo a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Este proyecto se presentó como un corte con “el populismo” precedente y como impulsor de los

mecanismos de mercado, de promoción de la inversión del sector privado, de racionalización del gasto público y de “re-ordenador” de las instituciones republicanas.

No obstante, 2015 marcó un hito que impactó en la agenda política y en la militancia joven. El 3 de junio de 2015, con epicentro en Buenos Aires, cientos de miles de mujeres, tanto organizadas como de modo espontáneo, se manifestaron en las calles para protestar contra la violencia de género. Como resultado de ese movimiento, se sumaron a militar y se hicieron visibles en el espacio público una miríada de activismos feministas y de la disidencia sexual que se materializaron en una ola expansiva regional, y convergió con un vigoroso movimiento a nivel global. #Niunamenos fue causa y a la vez efecto: en ONGs, barrios, escuelas, grupos de feminismo popular, partidos políticos o sindicatos las mujeres y disidencias se organizaron y plantearon sus demandas para marcar una nueva agenda pública, política, de las escuelas, de los centros de estudiantes universitarios y secundarios, de los medios de comunicación, de las familias, de los partidos políticos y hasta del habla cotidiana. Asimismo, el movimiento trascendió hacia otros países de América latina y, desde 2017, también se vincula estrechamente con el movimiento #8M (Laguna y Palmeiro, 2023). Cuando en 2018 se trató por primera vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), práctica por entonces ilegal, cientos de miles de mujeres jóvenes volvieron a ocupar las calles y a reafirmar que el feminismo había llegado para quedarse. La posición sobre el aborto interpeló a todas las fuerzas y espacios políticos, obligándolos a tomar postura, y movilizó a diversos grupos de mujeres mostrando una novedosa e interesante confluencia intergeneracional.

El panorama no sería completo sin remarcar que, a la vez, las movilizaciones por la ley de IVE provocaron el reagrupamiento y la consolidación de alianzas de grupos anti aborto, autodenominados “pro-vida”: las iglesias católicas y evangélicas también movilizaron jóvenes estudiantes, docentes, y actores de la sociedad civil que se manifestaron en contra, con el color celeste como emblema.

Volviendo al plano político gubernamental, entre los años 2015-2019 la gestión presidencial macrista no logró cumplir las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la solución del problema de la inflación. A su vez, el crecimiento económico se redujo aún más, decreció la inversión y la actividad, y nuevamente se recurrió al endeudamiento externo. Tampoco logró constituir una nueva hegemonía que pusiera fin o morigerara los efectos de la “grieta”. El descontento y decepción culminó con el fracaso de la reelección de Mauricio Macri en los comicios. El retorno del peronismo, de la mano de Alberto Fernández y secundado por Cristina Fernández de Kirchner, con la promesa de

“volver mejores”, estuvo marcado por la irrupción de la pandemia de COVID-19 a los tres meses de asumido el nuevo gobierno. La gestión de la situación sanitaria, que gozó al principio de un importante apoyo popular, tuvo como pilares la vacunación y un estricto esquema de aislamiento social obligatorio primero, con el cierre total de actividades y, en un segundo momento, con el distanciamiento obligatorio, caracterizado por un prolongado período de suspensión de las actividades educativas. La economía se recuperó relativamente pero la inflación no cedió y los sectores más vulnerables de la población fueron muy castigados por las consecuencias económicas del aislamiento, especialmente los trabajadores informales y cuentapropistas. El gobierno, que iniciaba su gestión con una altísima imagen positiva, fue socavando su imagen y aprobación a causa de hechos inadmisibles, como el escándalo desatado por la filtración de fotografías que mostraban un festejo de cumpleaños de la pareja del presidente, Fabiola Yáñez, en plena vigencia del aislamiento obligatorio. Este hecho, fuertemente simbólico, selló el descontento y la oposición logró sumar adhesiones a través de la crítica permanente a los efectos de las medidas de aislamiento social, los desaciertos en la gestión de la inflación, la crítica a las consecuencias del encierro prolongado hacia los niños y jóvenes y la denuncia a los privilegios que mantuvieron los sectores cercanos al gobierno. No obstante, un proceso mucho más largo de impugnación al estado como tal -juizado como ineficiente, injusto, represivo y corrupto- junto con una lectura de que establecía privilegios para sus empleados y los beneficiarios de la ayuda social (Semán, 2023) y que además encerraba a la población de modo arbitrario, fue generando un nuevo discurso opositor que confluía en grupos que se estaban consolidando y que redundaron en la emergencia de nuevas identidades político-partidarias. Como resultado, se destacó la performance electoral de la alianza libertaria que, en las elecciones legislativas de 2021, llevó a Javier Milei y Victoria Villarruel a conseguir un escaño en el congreso de la nación. Algunos autores (Semán y Navarro, 2022) dieron cuenta de que este proceso gestado “por lo bajo”, evidenció un cambio en las sensibilidades populares. Junto a los padecimientos dados por una economía inflacionaria, se fue conformando una crítica al rol protector, distribuidor y tutelar del estado. Un importante núcleo de ciudadanos empezó a fortalecer la creencia de que “los derechos” aparecían como una retórica vacía frente a las inequidades reales y que existía un ahogo a la iniciativa privada que perjudicaba al trabajador autónomo, “solo y de a pie” que es molestado con impuestos o regulaciones. Semán y Welschinger (2023) muestran cómo en numerosos grupos de sectores populares aparece el “mejorismo”, una especie de *ethos* (y de identidad) en el que las personas apuestan y valorizan sus capacidades individuales

para crecer y salir adelante, sin la ayuda de nadie y menos del estado. La figura que representa este espíritu es el emprendedor, pequeño o grande, ciudadano común que se esfuerza y progresa y que no necesita que nadie le regale nada. La propuesta libertaria logró articular esa sensibilidad enmarcándola en el enfrentamiento a su opuesto: el colectivismo, el estatismo, el comunismo y los *zurdos*.

Así, surgió una militancia específicamente juvenil que comenzó en 2018, se intensificó durante la pandemia y conformó nuevas grupalidades tanto informales como formales. Son jóvenes que se autodefinen abiertamente como antikirchneristas, antipopulistas, anticomunistas y liberales o, incluso, de derecha (Vázquez, 2022). Entre sus consignas, demandan un Estado mínimo, la baja de impuestos, el ultraliberalismo económico y la dolarización de la economía, pero también -al menos, gran parte de ellos- la defensa de valores tradicionales y conservadores como la familia y el derecho a portar armas, al tiempo que se declaran «antiprogres» y son mayormente opositores a lo que denominan «ideología de género». Esta militancia juvenil construyó comunidad y sentido de pertenencia -identidad- a partir de la generación de contenidos en redes sociales (Kessler, Vommaro & Paladino, 2021) y de la difusión y la utilización de consumos culturales bien específicos como libros, videos producidos por influencers e intelectuales y profesionales de dicha orientación (Saferstein & Goldentul, 2022; Vázquez, 2022).

Lejos de ser solamente un fenómeno juvenil que adquiere o se monta sobre una irrupción global de las derechas extremas o alternativas (Stefanoni, 2021), la candidatura presidencial de Javier Milei logró articular el descontento de todo el campo social, no sólo hacia la clase política si no hacia un modelo de organización de lo económico y lo social que parece haber tocado límites. Con un caudal de votos indiscutible, un proyecto ultraliberal en lo económico, conservador en lo cultural y explícitamente reivindicador de la dictadura militar asumió el gobierno. Numerosos analistas coinciden en que la elección de Milei está sostenida por un deseo y una esperanza de un cambio de rumbo radical en la sociedad argentina.

En síntesis, llamamos fin del ciclo progresista como un periodo caracterizado por la implosión de un conjunto de promesas incumplidas del ciclo inaugurado tras la crisis de 2001: la inclusión de las mayorías mostró sus límites al tiempo que la economía dejó de crecer y se volvió inestable e inflacionaria. A la vez, se tornaron cada vez más fuertes nuevas demandas que reclaman, justamente, estabilidad y previsibilidad junto a un imperativo de transparencia en la gestión pública de un estado que se observa como ineficiente y corrupto. En este marco, se producen, además, dos movimientos contrarios: la (re) emergencia de nuevas

identidades y la puesta en primer plano de los reclamos históricos de los feminismos y los grupos LGBT, por un lado, y, por el otro, -como respuesta o reacción- una nueva configuración identitaria que localiza una tendencia global en torno a una agenda reaccionaria, anti progresista y anti feminista que surgió poco tiempo después (Stefanoni, 2021). A la vez, esta agenda, en el plano estrictamente nacional rescata los valores tradicionales de “dios, patria y familia” y se muestra contraria a la agenda de derechos humanos y memoria, verdad y justicia en torno a los crímenes del terrorismo de Estado que consensuaron importantes mayorías desde el retorno democrático de 1983.

3. Los inicios en la militancia juvenil en estos contextos

En este contexto sociohistórico, las juventudes comparten ciertas características: crecieron enteramente durante gobiernos kirchneristas y devinieron adolescentes y jóvenes en momentos en los que el estancamiento económico, la inflación, la crisis del empleo joven y, más tarde, la pandemia, marcaron y constituyeron sus experiencias vitales. Estos años, que coinciden con el ocaso del kirchnerismo, el gobierno de la alianza Cambiemos (2015-2019), el retorno del peronismo al gobierno (2019-2023), la ola feminista y el ascenso de las derechas a nivel global y local (2023), fueron escenario de una acentuación de las redes sociales y comunidades online como espacios de socialización y, más específicamente, de socialización política e impulso de los inicios de un compromiso político-juvenil. Es decir, la ya descrita emergencia de renovados espacios ideológicos y nuevas causas públicas, incluso opuestas, se dio junto con una inusitada y acelerada preponderancia de redes sociales, contenidos web, comunidades de streaming y acciones online/offline como ámbitos privilegiados de formación de opiniones y aprendizajes políticos, y la difusión y creación permanente de consumos culturales. La “virtualización” de la socialización política fue, obviamente, *in crescendo* durante la pandemia.

En el marco de este trabajo, la casi totalidad de los/as entrevistados/as reconoce en las redes sociales, en influencers y en personajes destacados en redes la mayor fuente de aprendizajes teóricos y políticos, incluso aquellos/as jóvenes que provienen de familias militantes. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, se destacan algunos eventos (marchas de protesta, encuentros organizados por fundaciones, presentaciones de libros) como espacios centrales de socialización política y como puntapié para los inicios en la militancia. Esto sucede tanto en los movimientos feministas y de la disidencia sexual como en aquellos del espacio liberal/libertario. En las secciones siguientes mostraremos los rasgos de unas y otros.

3.1 Feminismo, adolescencias y escuela secundaria

La irrupción del activismo feminista y la instalación de la agenda de género que se produce a partir del año 2015 se articula alrededor de algunas causas y repertorios de acción colectiva que pueden distinguirse y que modificaron, al menos por un tiempo, el activismo estudiantil en la escuela secundaria. En primer lugar, se encuentra la adhesión y participación en las marchas #NiUnaMenos y #8M desde centros de estudiantes secundarios. A la vez, se produjo un aluvión de acciones de protesta al interior de varias escuelas privadas, -algunas religiosas-, en torno al apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Durante el año 2018, se registraron, al menos, 33 eventos de protesta en escuelas católicas en las que alumnas (y a veces alumnos) realizaban performances como *pañuelazos* y *pollerazos*. Los pañuelazos consisten en la utilización masiva y visible del pañuelo verde (símbolo de apoyo a la ley de IVE), y los pollerazos son acciones en las que los estudiantes varones acuerdan un día y concurren a la escuela vistiendo faldas (llamadas “polleras” en Argentina) para reclamar por mayor libertad de vestimenta para sus compañeras. A la vez, en muchas escuelas públicas y privadas los estudiantes exigieron, de distintos modos, la aplicación efectiva de la ley de educación sexual integral desde un enfoque amplio, diverso e inclusivo de todos los temas.

Dentro de las demandas que las jóvenes llevaron a las escuelas y a las calles pueden mencionarse aquellas vinculadas a los derechos: derecho a vivir el propio cuerpo de modo libre, derecho al placer sin temor al embarazo ni a los abusos, respeto al consentimiento a la hora de vincularse con varones, cuestionamientos hacia los mandatos de belleza en torno al cuerpo hegemónico, libertad de vestimenta y de construir una identidad sexo genérica propia. Algunas de las consignas que encabezaron protestas fueron:

“Amor propio es resistencia”.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

“Guardate tu opinión sobre mi cuerpo”.

“Aborto legal YA”.

“Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar”.

“Al silencio no volvemos”.

“Juntas y empoderadas”.

“Sobre mi cuerpo decido yo”.

“Basta de femicidios”.

“Se va a acabar esta gran hipocresía cristiana y patriarcal”.

“Callate, varón”.

Otro tipo de acciones que se sucedieron en las escuelas tuvieron que ver con los “escraches”: las denuncias públicas en redes sociales a docentes y alumnos varones a quienes se señalaban como responsables de acosos y/o abusos sexuales. Esto, que puede verse como una acción reivindicatoria y de justicia tuvo ciertos formatos particulares que implicaron un sinnúmero de conflictos, sobre todo, en relación con los adolescentes varones. Algunas escuelas muy conocidas (como las que dependen de la Universidad de Buenos Aires), fueron el escenario de esta oleada de denuncias, pero también fue una práctica que se extendió en diversas instituciones en todo el país. Como era de esperar, el conflicto entre compañeros, compañeras y familias se instaló y produjo tensiones, peleas y el apartamiento y rechazo de muchos adolescentes. En algunas instituciones lograron planificarse acciones pedagógicas y de reparación para poder conciliar posiciones y reconstruir vínculos y aprender formas nuevas de relacionarse pero, en otros casos, hubo heridas que no pudieron sanarse.

En pocos años, se conformó un escenario complejo en el que muchos varones lograron acompañar los reclamos de sus compañeras, mientras que en otros se vieron fuertemente cuestionados en sus conductas y en el modelo de masculinidad que los configuraba, muchas veces sin entender y sin ser conscientes.

3.1.1 Inicios en la militancia: tres formas de entrar al activismo feminista

Eugenia, Guadalupe y Tamara se acercaron a la militancia secundaria juntamente con el feminismo, aunque sus activismos son muy diferentes, al igual que sus orígenes familiares. Tamara proviene de una familia que tiene una activa participación política no partidaria: su madre es licenciada obstétrica y se define a sí misma como una militante de la salud pública y contra la violencia obstétrica. Comenzó su participación en la escuela debido a su interés y militancia en la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Eso la acercó al centro de estudiantes, donde participó de las protestas en contra de las reformas curriculares implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Poco después, comenzó a militar en *La Mella*, una agrupación de izquierda independiente en la que integra la Comisión de género. Guadalupe, en cambio, proviene de una familia sin militancia política a la que define, sin embargo, como «progre»: se encuentra en sintonía con sus tías y con su madre a partir de la asistencia a las marchas #NiUnaMenos y #8M. Comenzó su participación y un compromiso más activista de modo independiente, por su cuenta, liderando acciones en la escuela secundaria católica a la que concurre. Las iniciativas tienen que ver con el pedido de

educación sexual integral y a favor de debatir abiertamente sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito que se estaba discutiendo en el Congreso. Guadalupe construye sus posiciones políticas y sus argumentos desde sus lecturas de activistas feministas (funcionarias, periodistas, científicas, escritoras, influencers), especialmente, a partir de seguirlas en Twitter y otras redes sociales. Junto a un grupo de compañeras, lograron que la escuela les diera un lugar para el debate con distintas posiciones en torno al aborto, así planificaron y llevaron adelante una acción que consistió en que todas las alumnas y alumnos que estuvieran de acuerdo llevaran a la escuela un elemento o un accesorio de color verde, color representativo de la posición que defiende la ley de IVE.

Eugenia proviene de una familia que tuvo militancia política universitaria y es estudiante de una escuela secundaria universitaria, una de las más combativas y con larga tradición de lucha estudiantil. La militancia política es parte del paisaje cotidiano de su escuela y, de hecho, ella decidió comenzar a participar entusiasmada por la discusión política que se daba en esos espacios: explícitamente, referencia a las agrupaciones y a las asambleas del centro de estudiantes como el mayor espacio de aprendizajes políticos. El año en el que comenzó a militar (su primer año de secundaria) coincidió con el año de la marcha #NiUnaMenos. En ese marco, Eugenia eligió dónde participar: una agrupación en formación de carácter independiente en la que había mayoría de mujeres. Ganaron las elecciones y llegó a ser vicepresidenta del centro de estudiantes. En ese tiempo, fueron las cuestiones de género las que atravesaron, por primera vez, toda la política escolar y, dentro de ellas, la cuestión del lugar de los varones en la irrupción de la agenda feminista, las denuncias y escraches. Pero también, Eugenia observa un cuestionamiento más amplio y general a las formas tradicionales de militancia y a sus jerarquías (por género, por la “oratoria”, por temas más o menos legítimos) en un paralelo muy interesante:

“Nosotros hacemos una campaña que siento que logró de alguna manera sintetizar muy bien el lugar que estaba teniendo el feminismo en la política, que no lo estaba teniendo la política en ningún otro aspecto. (...) Había algo de que la política estaba atravesando toda nuestra vida. Que de repente las personas que están denunciadas no pueden ir a las fiestas, era atravesar tus amistades, tus relaciones. Había algo de que la política estaba mucho más presente que en otras épocas. Como que de repente estaba mucho más presente en la vida de todos y había tenido consecuencias muy drásticas en la vida de todos. Creo que había algo de que todos teníamos que tener un lugar, de que la política no tenía que ser solo para los militantes, (...) tener un lugar en que todos tuvieran como su voz, su protagonismo. Nosotros

hablábamos mucho de que había ciertas formas de que ya estaban medio caducas. Y que había que repensarlas”.

Las discusiones que se estaban dando en la escuela pronto se vieron interrumpidas. Enseguida llegó la pandemia y la política y toda la vida social de los jóvenes pasó al mundo online y allí se dieron otros procesos comunicacionales, subjetivos, y políticos que -en parte- se exploran a continuación.

En definitiva, el movimiento surgido tras #NiUnaMenos dejó nuevas actrices, nuevos repertorios de acción colectiva y nuevos reclamos que impregnaron y transformaron la escuela y el movimiento estudiantil (y las juventudes) en dos sentidos: como un conjunto de acciones ampliatorias de debates y la visibilidad de nuevas necesidades y derechos, y también las reacciones de grupos opositores a ello.

3.2 Socialización y aprendizajes políticos de los jóvenes de derechas: entre las redes y la protesta.

Como se mencionó, junto con los grupos de jóvenes pro-vida, fueron creciendo exponencialmente los grupos de seguidores de algunos influencers y divulgadores de distintas vertientes de derechas y ultraderechas, acompañados por lanzamientos editoriales dirigidos a un público joven (Saferstein, 2023) que impugnaban, por ejemplo, la mirada sobre los derechos humanos y la lucha revolucionaria de los años ‘70, denunciaban la “tiranía de la corrección política”, cuestionaban el feminismo y proponían el término “ideología de género”, entre otros tópicos del denominado antiprogresismo (Stefanoni, 2021).

Durante la pandemia y las medidas de aislamiento, los jóvenes no sólo “fueron a la escuela” por internet, sino que generaron otras formas de socializar y de pasar el tiempo, de trabajar y aprender cosas nuevas y tomar nuevos referentes, en ocasiones, pares. En ese contexto, proliferaron streamers, influencers, youtubers, bookstagramers de todas las orientaciones, pero descollaron aquellos que orientaban sus temáticas hacia el emprendedorismo, las inversiones, programación, criptomonedas, pero también manualidades y literatura (Semán y Navarro, 2022). En el tópico “política”, se destacó la crítica cultural e ideológica de los ya mencionados influencers de derecha que, a la vez, se multiplicaron aún más. En este universo, se hicieron cada vez más virales los videos y clases del divulgador televisivo y performer Javier Milei, un economista excéntrico y ultra liberal, siempre indignado, visto y promocionado como un profesor y académico que les hablaba a los jóvenes de economía y de libertad y construía su opuesto: los “zurdos”. Además de Milei, otros economistas como Manuel Adorni, Miguel

Boggiano o Diego Giacomini fueron nutriendo un grupo de influencers y tuiteros que hablaban directamente a la juventud proveyendo explicaciones, diagnósticos y soluciones en relación con los problemas estructurales de la crisis argentina. Todos los jóvenes entrevistados refieren haber construido opiniones a través de la información provista por estos personajes, sus libros y tuits o videos.

Una importante cantidad de jóvenes que estaba sufriendo el encierro y una precarización total en sus condiciones de vida, se declararon hastiados del kirchnerismo (y/o del progresismo): “lo único que habíamos conocido” y vivido, un único discurso, una única propuesta cargada, además, de interpelaciones morales. Parte del diagnóstico era que se trataba de un ciclo jaqueado por la corrupción, la falta de transparencia, los vicios de la política populista y, como corolario, la falta total de oportunidades para progresar. Así lo describe Ciro:

“Yo nací en el 2002 y toda mi infancia fue bajo el kirchnerismo. De hecho mi primer recuerdo político grande es la elección de Cristina en el 2007, que paradójicamente no me acuerdo el rechazo a la 125 pero sí después lo que fue la estatización de Aerolíneas, la estatización de YPF, las cadenas nacionales... era todas las tardes estar mirando la televisión y que esté la cadena nacional. Cuando salió el billete de Eva, cuando fue la escultura de acero en el Ministerio de Desarrollo Social. Todos esos eran recuerdos constantes. Moreno, Kicillof, Lorenzino cuando decía “me quiero ir”. Entonces, con el cambio del 2015, compartíamos entre todos que iba a ser otra cosa. Y ya ahí como una gran decepción. Así y todo para el 2019 sabíamos... Quizás en retrospectiva, porque a esa edad que haya un cambio de signo político, porque fueron desde 2007 al primer momento hasta 2015 eran ocho años, en ese momento era el 75% de mi vida, de toda mi vida vivida y recordada, el 100% era bajo el mismo régimen. Entonces como que ya había una necesidad de ver otra cosa”.

El auge de estas ideas y marcos entre los jóvenes no fue sólo un fenómeno de redes sino que, en paralelo, fueron teniendo un correlato de crecimiento institucional y partidario. Así, se reorganizaron o conformaron partidos y juventudes partidarias como “La Libertad Avanza”, “Republicanos Unidos”, “Avanza Libertad”, “NOS”, juventud de la UCEDE, aún en el contexto de aislamiento obligatorio. Por ejemplo, el armado del partido Avanza Libertad, incluso con la gestión de las firmas y personería jurídica, fue un fenómeno organizado por internet en tiempos del encierro por jóvenes de la provincia de Buenos Aires, como bien relata Ciro, que fue protagonista de este proceso. Ciro

“armó” Avanza Libertad estando en el último año de la escuela secundaria, que cursó online.

En una dirección similar, Valentina -quien cursó su último año de escuela secundaria desde su casa- cuenta cómo sus aprendizajes políticos y su decisión de ser militante activa comenzaron desde su computadora, en y por los efectos de la pandemia:

“El gobierno no me dejaba salir. Entonces era estaba enojada con todos. Pero también lo entendía al principio. (...) Pero llegó un momento que después de meses dije “No, ya necesito salir” Y me empecé a meter un poco en la política actual, más desde los años ‘90 a ahora y todo lo anterior ya lo tenía medio... sabía un poco de la historia general. Y encontré los videos por mi hermano de Espert, en realidad. Y de Milei. Yo dije “No dicen cosas tan locas, ¿entendés?” Es como, no sé, “Libertad”, que era lo que no tenía en ese momento. (...) Mi hermano trabajaba en animaciones infantiles con los amigos. Cerraron todas las casas de fiestas, no tenía ingresos. Con la Facultad, él estudiaba Medicina, o sea, cero esperanza. Y era como que... era una época tan mala y yo había estado tan mal que todo partía del gobierno, básicamente. Y yo no creo que el gobierno sea malo, es más no soy anarquista para nada, minarquista como Milei, sino que tenemos que tener un buen manejo de las cosas”.

Tras comenzar su militancia, organizó la juventud libertaria de la provincia de Buenos Aires, sin experiencia y desde su casa a través de la plataforma Zoom.

Las acciones de protesta presenciales también tuvieron un rol central en el crecimiento de los espacios de derecha y extrema derecha. En las marchas en contra de las medidas sanitarias realizadas en los años 2020 y 2021, muchos jóvenes militantes encontraron en estos espacios sectores más radicalizados y “se pasaron” a estos espacios, vistos como más genuinos y combativos. Gastón, ex militante del partido PRO (fundado por Mauricio Macri) relata que en una de las marchas anti cuarentena, encontró a un grupo libertario con sus cantos y banderas y se vio más afín con esa posición. Otros entrevistados refieren las clases públicas de Economía que daba Milei en las plazas como un espacio clave de acercamiento y adhesión a la corriente libertaria.

Todos los entrevistados militantes de derechas comenzaron a participar o a estar involucrados durante la escuela secundaria, y si bien no hay una ligazón formal entre las actividades político-escolares (como los centros de estudiantes) con estas militancias, si hay vínculos entre lo escolar y la decisión de adherir a estas ideas: las escenas de discusiones en el aula vuelven en los relatos una y otra vez para dar cuenta de la construcción de una identidad política propia, la escuela como lugar

donde se confronta con el progresismo hegemónico o los profesores “zurdos”. No obstante, sí se conformó una organización puramente estudiantil a la que podemos clasificar, en términos muy generales, como de centro-derecha, aunque sus miembros la destacan como una organización apartidaria: Estudiantes Organizados. La misma fue formada por jóvenes de escuela secundaria que pedían por la vuelta a las clases presenciales durante la segunda fase de la pandemia. Dice Ariana, una de sus fundadoras:

“Estudiantes organizados es una gesta que empieza como grupo, con el nombre y todo, el 19 de octubre del 2020. Pero en realidad empieza en la primera marcha que se hace por volver a la presencialidad que se hace el 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante. Una marcha autoconvocada. (...) Yo estaba enferma, estaba en silla de ruedas, no podía ir a una marcha. Entonces no fui a esa marcha pero sí fui propulsora de la marcha desde las redes. Y cuando la marcha terminó un grupo de 4 chicos que son los fundadores, que se conocieron ahí en esa marcha en Pizorno el 21 de septiembre, armaron un grupo de WhatsApp. Hasta el momento se llamaba Volver a la escuela. Era un grupo de WhatsApp. Entonces cuando culmina toda la cobertura en los medios, que fue poca (no la cubrieron muchos medios a esa marcha, fue casi nula la cobertura), yo me puse a buscar si había quedado alguien porque me interesaba poder congregarse con otras personas que también querían volver. Y bueno, encontré el grupo de WhatsApp de estos chicos que era tipo Volver a la escuela. Y bueno, empezó todo un proceso de conocerse, el grupo crecía como... estalló. En menos de 3 días éramos como 200 personas de todo el país. Entonces cuando fue todo eso veíamos que crecía, que no nos alcanzaba el grupo de WhatsApp, que teníamos que armar otro para aglutinar a toda esa gente, empezó un proceso de decir Bueno, todos nosotros queremos volver. ¿Qué hacemos para volver? Para que nos miren y digan ‘Che, hay un montón de gente que quiere volver a la escuela. ¿Cómo hacemos para que esto no sea una cuestión solo de redes sociales? Y ahí arranca Estudiantes Organizados”.

En la actualidad, esta organización brega por algunas consignas: la educación declarada como servicio esencial (es decir, limitar o eliminar la posibilidad de hacer huelgas), No al “adoctrinamiento” escolar, la promoción de ciertos contenidos considerados valiosos, como el emprendedorismo, la educación emocional y el buen manejo de redes, entre otros. Este grupo ha representado una fuerte disputa en relación con las identidades y demandas previas del movimiento estudiantil. Uno de sus puntos más polémicos en relación con las organizaciones del

movimiento estudiantil es su crítica hacia los repertorios de acción colectiva que implican la suspensión de clases.

En definitiva, más allá de la heterogeneidad de los grupos, matices y formas de organización vemos que para los y las jóvenes que adhieren a las agrupaciones de derecha y extrema derechas, las formas de inicio del compromiso están totalmente ligadas a las redes y no en un sentido “complementario”, sino central; no en un sentido irreflexivo, sino como sustento intelectual de posiciones que se van construyendo y sintetizando, como un espacio que los pone en contacto y en movimiento y posibilita una organización incluso institucional. En síntesis: son las redes, los influencers, los grupos de WhatsApp o Facebook donde encuentran intereses y afinidades distribuyen y enseñan ideas y marcos de sentido e invitan a las adhesiones y hasta su último paso: la organización. Muchos de estos personajes que activaron las redes en la pandemia, fueron muy reconocidos y exitosos *influencers* y hoy son funcionarios de primera línea del gobierno nacional: Manuel Adorni, un ex *twitterero* simpatizante de Milei es hoy el vocero presidencial y está a cargo de todos los medios públicos, otros jóvenes influencers manejan hoy, con oficinas y presupuesto estatal, las redes sociales formales e informales del gobierno (en ocasiones, difundiendo fake news y amenazas a adversarios políticos). Todo indica que estos personajes y acciones son centrales en la estrategia de gobierno del actual presidente, aún con resultados inciertos.

Algunas conclusiones

En otros trabajos (Larrondo, Chbari y Gómez Cuba, 2024) hemos explorado cómo se dan los ingresos y las salidas de la militancia por parte de los jóvenes en otras décadas de la Argentina democrática. Allí, mostramos que las características y los cambios sociohistóricos en las culturas políticas, en los entornos partidistas, en el vínculo entre política y ciudadanía impacta en el modo en el que los más jóvenes se interesan por lo público y llegan a comprometerse activamente, es decir, el modo en que devienen militantes. Por ejemplo, si en los años ochentas lo hacían a partir de identidades y organizaciones partidarias, en la década de los noventas junto con el distanciamiento y la desilusión de la ciudadanía con los partidos, la política se desplazó hacia espacios independientes y territoriales. Entonces, los jóvenes que comenzaron a militar en esos años no lo hicieron desde una identidad partidaria, si no desde nuevos referentes (agrupaciones de derechos humanos, expresiones culturales, movimientos de trabajadores desocupados u otras organizaciones territoriales) y causas públicas (la violencia policial, la lucha contra las privatizaciones, el neoliberalismo y el achicamiento del

estado, entre otras). Pero además, a lo largo del tiempo, las formas de aprender y construir un interés e identificaciones políticas se van desplazando desde las familias y las organizaciones políticas “clásicas” (partidos, agrupaciones universitarias) y hasta territoriales hacia los grupos de pares y las redes como espacio central de aprendizajes políticos. Esto último fue clave en el proceso de re emergencia y auge de la militancia feminista y de absoluta centralidad en las militancias juveniles de derechas que surgieron en la pandemia y pospandemia. No se trata de hacer reduccionismos -es decir, explicar los cambios en la militancia desde los cambios en las identidades y culturas juveniles-, pero es imposible no vincularlos con aquellos cambios generacionales más amplios que ha descripto, por ejemplo, Carles Feixa (2021) en sus trabajos más recientes. Este autor observa que los jóvenes ya no usan las redes simplemente para reunirse, convocarse o *vincularse* si no que van creando *bloques* desde los que performan el propio mundo: actúan como *cyborgs* en los que la vida “real” y “virtual” no están divididas. La centralidad y multiplicación constante de contenidos, *influencers*, *streamers*, personalidades y mensajes que se replican cada vez más, logran conformar verdaderas comunidades compactas que no son un fenómeno menor: han sido constitutivas de la entrada al activismo por parte de enormes contingentes de jóvenes en los últimos años. Las redes no son medios, son *productivas* y permitieron la emergencia de liderazgos y organizaciones concretas: Valentina, Ciro y Ariana, por ejemplo, construyeron organizaciones sin ninguna experiencia previa y desde su casa, al igual que Guadalupe, quien logró movilizar estudiantes por una causa controvertida (la interrupción voluntaria del embarazo) en una escuela católica que jamás había protestado por nada. Este nuevo modo de aprender, construir, identificarse y habitar la política produjo, según hemos observado, una diversificación de las formas de socialización y sociabilidad que permitieron distribuir mucho más los capitales militantes y culturales que son valorados en el activismo. Si antes los jóvenes activistas solían provenir de familias activistas, ya sea de entornos de clase media ilustrada que militaban en ciertos partidos tradicionales o bien, de familias de sectores populares de tradición militante barrial -en sus versiones más peronistas o progresistas-, eclesial o sindical, esta “situación de herencia” hoy no es predominante. Por el contrario, los jóvenes que no vienen de familias militantes se comprometen cada vez más. Y lo hacen porque cambiaron las identidades, las causas, las organizaciones pero también -y sobre todo- los lugares de encuentro, aprendizaje y construcción identitaria en los que hay nuevas mediaciones -percibidas como más directas- entre las ideas políticas, los liderazgos y los propios jóvenes.

Bibliografía

Agrikoliansky, É. (2017). Las ‘carreras militantes’: alcance y límites de un concepto narrativo. En O. Fillieule y otros (Dir.), *Sociologie plurielle des comportements politiques*. Presses de Sciences Po (PFNSP).

Becker, H. (2009). *Outsider: hacia una sociología de la desviación*. Siglo XXI.

Benedicto, J. (1995). La construcción de los universos políticos de los ciudadanos. En J. Benedicto y M.L. Morán (Eds.), *Sociedad y Política. Temas de Sociología Política*. Alianza.

Feixa, C. (2021). Generación blockchain: movimientos juveniles en la era de la web semántica. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1), 1-20.

<https://dx.doi.org/10.11600/rclsnj.19.1.4584>

Fillieule, O. (2013). Political socialization and social movements. En D. Snow, D. della Porta, B. Klandermans y D. McAdam (Eds.), *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Blackwell Publishing.

Fillieule, O. (2015). Propuestas para un análisis procesual del compromiso individual. *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 9(2), 197-212. <https://www.intersticios.es/article/view/15549>

Fillieule, O. (2020). Carrera militante. En O. Fillieule, L. Mathieu y C. Péchu (Dir.), *Dictionnaire des mouvements sociaux*. Presses de Sciences Po.

Lahire, B. (2007). Infancia y adolescencia: de los tiempos de socialización sometidos a constricciones múltiples. *Revista de antropología social*, (16), 21-37.

Lahire, B. (2012). De la teoría del habitus a una sociología psicológica. *CPU-e. Revista de investigación educativa*, (14), 75-105.

<https://doi.org/10.25009/cpue.v0i14.30>

Larrondo, M., Chbari, S. & Gómez Cuba, F. (2024) ¿Del entusiasmo a la desilusión? Una mirada comparada sobre los ingresos y las salidas de las militancias juveniles durante los años ochenta y el kirchnerismo. En Vázquez, M., Vommaro, P., & Rocca Rivarola, D. *Juventud militantes desde la recuperación democrática: Participación política, vida cotidiana y cultura*. IIGG-CLACSO.

Larrondo, M., & Ponce Lara, C. (2019). *Activismos feministas jóvenes: Emergencias, actrices y luchas en América Latina*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Maslet, C. (2016). Examinar los resultados intergeneracionales de los movimientos sociales: el caso de las activistas feministas y sus hijos. En L. Bosi, M. Giugni y K. Uba (Eds.), *The Consequences of Social Movements*. Cambridge University Press.

Meccia, E. (2019) Una ventana al mundo: investigar biografías y sociedad. *Biografías y sociedad. Métodos y perspectivas*, Ediciones UNL, 25-62.

Friedman, E. J. y Rodríguez Gustá, A. L. (2023). "Welcome to the Revolution": Promoting Generational Renewal in Argentina's Ni Una Menos. *Qualitative sociology*, 46(2), 245-277.

Saferstein, E.(2023) Entre libros y redes: la "batalla cultural" de las derechas radicalizadas" en Semán, P. (dir), *Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?* Siglo XXI Editores.

Saferstein, E. y Goldentul, A. (23 de mayo de 2022). La batalla cultural de las nuevas derechas. Anfibia.

<https://www.revistaanfibia.com/javier-milei-la-batalla-cultural-de-las-nuevas-derechas/>

Semán, P., & Welschinger, N. (2023). Juventudes mejoristas. La crítica al Estado, la política y la economía en la generación pandémica. *Cuadernos de antropología social*, (58), 29-52.

<https://doi.org/10.34096/cas.i58.13357>

Semán, P. & Navarro, F. (2022) (Orgs.). Dolores, experiencias, salidas. Un reporte de las juventudes durante la pandemia en el AMBA. *Caseros*, RCG Libros.

Stacchiola, O., & Seca, M. V. (2023). Por la defensa de la libertad: participación juvenil en torno a las ideas liberales/libertarias en Mendoza, Argentina. *Ultima década*, 31(60), 71-110.

Stefanoni, P. (2021). *¿La rebeldía se volvió de derecha?: Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)*. Siglo XXI Editores.

Vázquez, M. (2022) ¿El rugir de los leones? Participación juvenil y nuevas derechas durante la pandemia. En P. Vommaro (Ed.), *Experiencias juveniles en tiempos de pandemia ¿Cómo habitan la pandemia las juventudes y qué cambió en su vida cotidiana?* Grupo Editor Universitario.

Vázquez, M. (2023). Los picantes del liberalismo. Jóvenes militantes de Milei y "nuevas derechas" en Semán, P. (dir), *Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?* Siglo XXI Editores.

Protestas, democracia y capacidad institucional en América Latina

Fabio Andrés Díaz Pabón - Magda Catalina Jiménez Jiménez

1. El declive de la democracia en América Latina

Los avances democráticos experimentados en América Latina en las últimas dos décadas del siglo XXI enfrentan un evidente retroceso. Según el último informe de la revista *"The Economist"* sobre democracia, América Latina registró una reducción del 5,68% en sus niveles de democracia en los últimos ocho años (2023, pp. 43).

Este sombrío panorama es consistente con los hallazgos del Instituto *V-dem*. Según *V-dem*, la desinstitucionalización de los Estados, la polarización ideológica, los altos niveles de inseguridad y las condiciones económicas internacionales, explican por qué "el nivel [actual] de democracia del que gozan [los latinoamericanos se han reducido, y] ha vuelto a los niveles [observados al final] de la Guerra Fría [...]" (V-dem, 2023, p. 11).

Este declive en los indicadores sobre democracia se produce en un contexto en el que las perspectivas económicas, institucionales, y sociales, son menos halagüeñas, debido a los efectos dominó de la pandemia del COVID-19, la guerra actual en Ucrania y las crecientes tensiones internacionales. Estos factores y su intersección han agravado las condiciones socioeconómicas y el bienestar de una parte importante de la población de la región, tal vez no mejor ilustradas por las tendencias en los niveles de desempleo y pobreza. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), se prevé que tanto la pobreza y la pobreza extrema aumenten en la región (2023, pp. 15, 19).

Más importante aún, el deterioro de los medios de subsistencia para importantes sectores de la población tiene importantes consecuencias sobre la legitimidad de las instituciones estatales. A medida que empeoran la calidad de vida de los ciudadanos, los contratos sociales pierden su legitimidad y se debilita la confianza en las instituciones, lo que lleva a una desconfianza general en los marcos institucionales. Como ilustra un informe reciente del Latinobarómetro, actualmente el 69% de los latinoamericanos se encuentran insatisfechos con la democracia (Latinobarómetro, 2023, pp. 36).

Este declive en la democracia de la región también se asocia con la reducción en la legitimidad de los partidos políticos dentro de la democracia. Los medios de representación política tienen como función conectar a la ciudadanía y sus instituciones, bien sea como canales de expresión de demandas sociales (Sartori, 1992), o puentes entre la sociedad y el gobierno o la sociedad y el estado (Offe, 1986). En paralelo a la reducción del apoyo a la democracia en la región, hay una alta desaprobación sobre el funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. Por ello, el 77% de los latinoamericanos consideran que los partidos políticos no funcionan, ya que no existe un solo país en la región, en que la mayoría de la población perciba que los partidos políticos funcionen “bien” (Latinobarómetro, 2023, pp. 46).

Adicional a esto, la desconfianza se amplifica a más allá de macro-estructuras como “el Estado”. Por ello, la aprobación y la legitimidad de instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas, han venido en retroceso durante la última década (LAPOP, 2023, pp.42). Por ello “la creación de instituciones sólidas y fiables es fundamental para el compromiso público con la democracia” (LAPOP, 2023, pp. 17).

Frente a ese panorama poco auspicioso de los marcos institucionales y “formales” de representación, la participación de la sociedad civil y los movimientos sociales son un canal importante para acción colectiva. Los movimientos sociales y sus acciones se constituyen en un canal para-institucional para exponer demandas sociales frente a partidos e instituciones estáticas. Por ello, no resulta sorprendente que de acuerdo con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina para más de un quinto de los encuestados participar en organizaciones locales es un vehículo propicio para el cambio social (LAPOP, 2023, pp. 32).

Ahora bien, si bien la falta de popularidad de las instituciones estatales no significa que las instituciones sean indeseables (Latinobarómetro, 2023, pp. 49). Sin embargo, cuando se pierde el apoyo y confianza en los canales que comunican a los estados y los gobiernos con la ciudadanía, se instala un marco de indignación- que ha crecido visiblemente en las primeras décadas del siglo XXI, y en el que “se moldean sensibilidades y se amalgaman reivindicaciones, [a través de] los movimientos sociales, [...] para confrontar [y denunciar] las acciones [...] de los regímenes políticos” (Gentili y Arata, 2017, pp. 12).

La gente en la región no protesta “porque le guste protestar”, sino porque no encuentra otro mecanismo para expresar su voz, dado que los canales institucionales y los partidos políticos se perciben como inútiles para esto. De esa forma, “la protesta esquiva los arreglos institucionales cuando estos limitan a los actores más constreñidos por el sistema político” (Velasco, 2010, pp. 213), por lo que, no sorprenden los datos del *Armed Conflict Location & Event Data Project* (ACLED), y

recopilados por las Naciones Unidas, en el que evidencia que las protestas en los países latinoamericanos se duplicaron en un período de cinco años (Manzotti, Sapienza y Patel, 2024).

La movilización social es un vehículo que sociedades y comunidades usan para expresar su descontento, y coexiste con procesos electorales rutinarios y mecanismos institucionales. Sin embargo, no debemos leer necesariamente el aumento de las protestas como nocivas, ya que las protestas pueden profundizar la democracia, dada la capacidad de los movimientos sociales en “influir en procedimientos institucionales y formales. Bajo ese ángulo, los movimientos contribuyen a la operación eficaz de la democracia, toda vez que haya un diálogo permanente [en y] con el Estado, [en sociedad]” (Zamora, 2015, pp. 166).

Así, el aumento de las protestas en la región puede ser leídas como una respuesta a esa pérdida de la legitimidad en las instituciones. Sin embargo, el fallido golpe de estado en Bolivia en junio de 2024 ilustra que está perdida en la legitimidad, no implica automáticamente un afecto por dictaduras o golpes militares. La sutileza de la relación contenciosa entre los estados y su ciudadanía conlleva también a la interpretación de que el aumento de las protestas sociales implica, que los Estados aún son percibidos como potencialmente preparados para abrazar y entender el descontento social (Manzotti, Sapienza y Patel, 2024).

Por lo tanto, la frecuencia e impacto que están produciendo las protestas en toda América Latina, pone de relieve la legitimidad y validez de las movilizaciones como vehículo para expresar el disenso y buscar apropiar la participación política, o encontrar nuevos canales comunicantes para la búsqueda de reformas sociales y políticas.

En este capítulo, describimos la naturaleza de los **sistemas políticos** (ya sean más o menos democráticos) y la **capacidad institucional** de los Estados en Latinoamérica, como lentes para entender el creciente malestar social de la región y las formas en las que se este malestar manifiesta (protestas más o menos pacíficas). Para hacer esto, nos apoyamos en datos del instituto V-Dem para caracterizar los regímenes políticos en la región; en adición a esto reflexionamos en términos generales en la capacidad institucional en la región haciendo uso de datos presentados por *Bertelsmann Stiftung* (BIT) que miden la capacidad de gobernanza; finalmente triangulamos estos datos con información del instituto ACLED, que caracterizan la evolución de las protestas en la región mediante un ejercicio descriptivo de las tendencias de estas tres variables.

Con base a esta información argumentamos que, en los estados para los cuales las protestas juegan un papel clave en la resolución inclusiva, participativa y pacífica de las diferencias (Manzotti, Sapienza y Patel, 2024), es más probable que las protestas se asocien a la

consolidación de la democracia y sean expresadas de manera pacífica; por otro lado, en aquellos espacios en el que los sistemas políticos son menos abiertos y sus capacidades institucionales son frágiles, es más probable que las protestas tomen formas de movilización más violentas. Observamos con preocupación el aumento de la represión y violación a derechos y garantías para las protestas en países de mayor o menor nivel democrático, ya que esta tendencia a la represión puede conllevar a un escalonamiento de las tensiones en la región.

2. La fragilidad de la democracia latinoamericana

Con un débil sistema de pesos y contrapesos institucionales caracterizando los gobiernos en Latinoamérica, los déficits en la credibilidad de las instituciones visibilizan no sólo problemas en la representación política, sino en la efectividad de los sistemas políticos, con impactos importantes para la gobernabilidad. Así “la [profundidad] de la democracia depende tanto del funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla sus líderes políticos, así como el contexto social [gubernamental e institucional] en que funciona” (Levine y Molina, 2007, pp. 19).

Tres enfoques pueden ser usados para describir la calidad de la democracia en diferentes países. El primero, basado en el concepto de poliarquía creado por Robert Dahl (2009), se centra en la medición de los procedimientos, procesos e instituciones vigentes, como los procesos electorales. El segundo mide cómo las instituciones permiten, en un marco de Estado de Derecho, el ejercicio de las libertades políticas y las libertades socioeconómicas (García y Montalván, 2011, p. 108). El tercero tiene en cuenta la capacidad de promulgar cambios en las políticas y responder a las demandas de su ciudadanía (Bühlmann, 2008).

La democracia es el marco de una relación social, “un modo particular de relación, entre Estado y [sus] ciudadanos y entre los propios ciudadanos, bajo un tipo de estado de derecho que, junto con la ciudadanía política [se relaciona con] la sociedad civil y una red completa de rendición de cuentas” (O'Donnell, 2001, pp. 27).

Y es en esta arista donde la rendición de cuentas desde el estado y los partidos a sus ciudadanos, donde la relación con la acción de los movimientos sociales se vuelve explícita, al ser “una forma de control a las autoridades políticas [y las instituciones existentes], basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como en acciones mediáticas” (Smulovitz y Peruzzotti, 2002, p. 32).

En ese sentido, la rendición de cuentas puede constituirse en “una herramienta de control de la política, estructurad[a] a partir de

organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y otro tipo de grupos significativos con el fin de ejercer supervisión sobre el mandato representativo, [y los actores encargados de este mandato]” (Jiménez, 2012, pp. 99). De acuerdo con los datos de *V-dem*, en la última década esta capacidad de *accountability* se mantiene alta en la región, con un promedio regional superior al 0,70% en la última década, siendo 0 un bajo y 1 un alto de la escala de medición (*Variable Graph – V-Dem*).

La región observa una paradoja. Por un lado, el aumento de las protestas como mecanismo de participación política, ilustra que en la región la movilización social se manifiesta (o se cree) como una de las mejores maneras para buscar cambios en los gobiernos y sus políticas (Latinobarómetro, 2023, pp. 34). Sin embargo, las mismas protestas exigen y denuncian la insatisfacción con el funcionamiento e incapacidad de los gobiernos para resolver las demandas de sus ciudadanos.

Si bien la mayoría de los latinoamericanos (83%) vive en democracias electorales, la democracia no es homogénea en la región. Por ello, en algunos países observamos bajos niveles de democratización. Según el instituto *V-Dem*, América Latina es la región con mayor proporción de población que vive bajo gobiernos con prácticas autoritarias (2024, p. 15-16). Por ello, en Latinoamérica prácticas menos democráticas coexisten con entornos parcialmente democráticos (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2023, pp. 159 y 160).

Preocupantemente, la región está observando un proceso de des-democratización (*V-Dem*, 2023, p. 23), es decir, regímenes políticos de legitimidad frágil e incapaces de hacer cumplir la ley, que conllevan a “la construcción de una democracia con una ‘ciudadanía de baja intensidad’, donde se respetan elementos procedimentales de la poliarquía, pero se viola el componente liberal de la democracia [electoral]” (O Donnell, Lazzeta y Vargas, 2003). Es decir, existen elecciones, pero no son totalmente libres ni justas, no hay garantías para los opositores, o se crean barreras para la participación de los partidos políticos o la sociedad civil.

Por ejemplo, en países con mayores niveles de democracia en la región, como Uruguay y Costa Rica, existe una cultura institucional y política de movilización que garantiza el derecho a la sociedad civil para organizarse y tener acceso irrestricto a la esfera pública. Por su parte, en los Estados semidemocráticos, como Colombia y Perú, las políticas públicas siguen siendo ineficientes y los gobiernos carecen de la capacidad o la voluntad de aceptar incorporar las demandas de los movimientos sociales. En contraste, regímenes autocráticos, como Venezuela o Nicaragua, el disenso es rechazado, condenado al ostracismo, y es respondido con altos grados de represión (Sánchez, 2018, pp. 140).

Esta distinción resulta vital para entender las variaciones en las respuestas gubernamentales a las protestas, en relación con el tipo de régimen de los países. Para ello clasificamos los diferentes regímenes políticos de la región como democracias plenas, democracias medias, democracias débiles, autoritarismos débiles y autoritarismos fuertes (ver Tabla 1), de manera similar a la tipología presentada por Mainwaring y Pérez-Liñán (2023).

Tabla 1 Tipos de regímenes políticos en América Latina 2023

Países	Tipos de sistemas políticos
Costa Rica y Uruguay	Democracias plenas
Argentina, Brasil, Chile y Panamá	Democracias medias (semidemocracias)
Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, México, Bolivia, Guatemala, Honduras, República Dominicana.	Democracias débiles (semidemocracias)
El Salvador	Autoritarismo débil
Cuba, Venezuela, Nicaragua	Autoritarismo fuerte

Elaborada a partir de Mainwaring y Pérez-Liñán. (2023)

La variabilidad de los sistemas políticos en la región muestra que las protestas tienen lugar en contextos diferentes (ver Tabla 1). Sin embargo, a pesar de esta variabilidad, lo que parece ser común a la protesta es una creciente frustración por el deterioro de los medios de vida en el contexto de promesas vacías de las élites en diferentes contextos.

Así, la variabilidad de acciones colectivas dentro de los diversos regímenes políticos latinoamericanos, evidencian que la mayoría de ellos se ubica en lo que se denominan “zonas grises”, en el que prácticas democráticas y autoritarias parecen coexistir. América Latina es la región con la mayor proporción de población que vive en regímenes de “zona gris” (V-Dem, 2024, pp. 15), es decir, los regímenes que están cerca del umbral entre democracia y autocracia (V-Dem, 2024, pp. 11).

3. Capacidad institucional de los gobiernos en Latinoamérica

El crecimiento de la protesta en toda América Latina se relaciona con la falta de voluntad y/o incapacidad de las élites, los gobiernos y los aparatos estatales para responder a las demandas sociales (Lissardy, 2019).

Emergen cuatro tipos de entramados estatales: sólidos, desorganizados, bloqueados y autoritarios, que definen los contextos políticos e institucionales en los que las protestas pueden tener lugar, y las formas en que las movilizaciones sociales pueden manifestarse. Aquellos estados con capacidades sólidas dan cuenta de pocas dificultades para abordar estratégicamente los problemas acuciantes debido a una alta capacidad institucional; por otro lado, en los estados desorganizados, los gobiernos tienen dificultades considerables para responder a las demandas sociales acuciantes debido a la falta de capacidad institucional.

Respecto a los estados bloqueados, los gobiernos se enfrentan a una resistencia institucional o por parte de las élites a implementar reformas o aperturas, por lo que no están dispuestos a hacer concesiones. Y en engranajes autoritarios, la capacidad institucional se asocia a la implementación de políticas antiplurales, el dominio amplio del ejecutivo en la toma de decisiones y, especialmente, la falta de interés en la creación de consensos.

Dada esta caracterización de la capacidad institucional, es más probable que las protestas pacíficas tengan lugar tanto en países de altas capacidades (sólidos y autoritarios), ya que en el primero están permitidas y en la segunda, el uso simbólico de la protesta cuidará no violentar las leyes del régimen para no invitar respuestas violentas. Las protestas violentas son más probables en esas zonas grises, ya que las capacidades estatales son débiles para responder a la protesta (régimenes desorganizados y bloqueados).

Sin embargo, y pese a esta tipología, dos situaciones profundizan la aparente anomia de los gobiernos y los Estados, situación que hace más probable la emergencia de protestas violentas. En primer lugar, el control de élites poderosas y su papel obstaculizador en procesos de transformación y cambio estructural, tiende a entramados estatales mucho más “bloqueados”. Esta obstaculización también tiene lugar dada la vacilación u oposición de las élites a las reformas, en el caso de entramados estatales más “desorganizados”.

En segundo lugar, la mala gobernanza, entendida como la débil capacidad gubernamental para gerenciar y efectuar transformaciones los procesos de transformación. Según datos del índice de gobernabilidad del *Bertelsmann Stiftung* (BIT), la capacidad gubernamental ha caído en promedio un 4,86%, lo que limita la capacidad de reacción a las demandas de la sociedad e implementar políticas que puedan cambiar las realidades que informan las quejas de los ciudadanos, característico de los estados “desorganizados”.

Por lo tanto, y dado que la mayoría de los estados en la región se encuentran en entramados bloqueados o desorganizados, no es sorpresa que los gobiernos de la región se ven cada vez más abrumados por los

problemas a los que se enfrentan. A medida que las comunidades políticas se han fragmentado y polarizado en todo el mundo, cualquier esfuerzo concertado y democrático para alcanzar consensos con el objetivo de emprender procesos de transformación se complica y dificulta la gobernanza (BTI, 2024, pp. 23).

La débil gobernanza no es sólo a nivel nacional, pero también se manifiesta a nivel subnacional. La incapacidad de los gobiernos para gestionar eficazmente los conflictos entre sus poblaciones subregionales se convierte en un factor que "impulsa la tendencia hacia una baja evaluación de la capacidad institucional" (BTI, 2024), al no poder responder a las diferentes demandas regionales asociadas con la prestación de servicios públicos, y los gobiernos subnacionales (IDEA y PNUD, 2022, pp. 28).

Esta tensión entre las demandas nacionales y regionales están informadas por las asimetrías de poder y representación entre las poblaciones urbanas y rurales en la región. Es decir, las personas que viven en zonas urbanas tienen mucho más poder político, mientras que las que viven en zonas rurales tienen menor capacidad de hacer sus demandas escuchadas por los gobiernos centrales (V-dem, *Codebook*, pp. 60).

Esta intersección entre la captura de las élites, y la débil capacidad institucional conduce naturalmente a un debilitamiento de la validez del Estado como un vehículo para la conversación social (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2023, pp. 156-157).

Los argumentos anteriormente expuestos pueden hacerse más claros al exponer la taxonomía de la capacidad estatal frente a la manera en que las movilizaciones se manifiestan, observando capacidades institucionales sólidas como en Costa Rica y Uruguay, a países con capacidades desorganizadas o bloqueadas, donde las instituciones son menos capaces, y la protesta emerge como mecanismo de presión, como en Argentina y Ecuador. Por último, tenemos a los Estados autoritarios, donde la capacidad del Estado gira en torno a la capacidad de hacer cumplir los mandatos del gobierno de turno, en contraposición a la prestación de derechos legales, o libertades como los casos de Venezuela o Nicaragua.

La tabla que se presenta a continuación ubica los países latinoamericanos de acuerdo con las cuatro categorías de capacidad institucional expuestas anteriormente, ello nos permite describir la presencia y tipo de protestas que se presentan.

Tabla 2 Tendencias de patrones de capacidad institucional en América Latina 2023

Sólido	Desorganizado	Bloqueado	Autoritario
Chile Costa Rica República Dominicana Uruguay	Argentina Brasil Honduras México Paraguay Perú	Bolivia Ecuador Colombia Panamá	El Salvador Guatemala Cuba Nicaragua Venezuela

Fuente: Bertelsmann *Siftung* (BIT), Regional_Report_LAC.pdf (bti-project.org)

4. Acción colectiva y conformación de voces de protesta en América Latina

Desde hace más de una década, la región vive un aumento de las protestas que son “crónicas y multidimensionales []” donde un sentimiento de exclusión, junto con un endurecimiento de los medios de vida de los ciudadanos y la percepción de una cultura de privilegio, se ha traducido en [...] la ira ciudadana” (Manzotti, Sapienza y Patel, 2024, p. 18), una policrisis.

Esta indignación da un trasfondo a las demandas que los ciudadanos latinoamericanos han venido expresando. A su vez, la literatura sobre movimientos sociales sugiere que dicho malestar influye en el tipo de acciones colectivas emprendidas para ser escuchados (Tilly, 2002). Sin embargo, las manifestaciones de descontento no siguen una plantilla, por ello, los movimientos sociales pueden usar en una movilización (a veces simultáneamente³³), múltiples repertorios de acción que pueden ser pacíficos, tradicionales, simbólicos, o que pueden escalar a la violencia. Por ejemplo, las protestas de 2023 en Perú, que derivaron en actos como “quema de neumáticos, bloqueos de carreteras o el incendio de edificios estatales como el palacio de justicia” (Turkewitz y Glatsky, 2023), sucedieron simultáneamente al uso de acciones pacíficas.

La probabilidad de la aparición de enfrentamientos violentos durante protestas es más probable, en países con capacidades institucionales frágiles, y en el que el sistema político tiene menos probabilidades de llegar a acuerdos, como en los regímenes semidemocráticos medios y débiles, con patrones de capacidad institucional desorganizados o bloqueados.

³³ Otro ejemplo de esta simultaneidad, es la destrucción de estaciones de transporte público en Colombia, por parte de colectivos feministas en 2022, durante “una protesta en contra de la violencia de género” (El Tiempo, 2022).

Hacer una declaración general sobre la forma que toman las protestas en la región no es fácil dada la heterogeneidad de voces, demandas, organizaciones y contextos en los que las protestas tienen lugar. Como las maneras en que las colectividades se manifiestan no es estática y tiene lugar en una dimensión temporal y espacial, no es sorprendente que las protestas experimenten cambios en su complejidad, tanto en términos de su diferenciación sociocultural, medios de protesta, demandas y su relación con conflictos preexistentes (Calderón, 2017, p. 399), lo que complica una descripción genérica de la forma y los medios de protesta de las organizaciones.

De acuerdo con CIVICUS, las protestas (violentas o no violentas) aumentaron en Latinoamérica. Sin embargo, este aumento se produce en un espacio de regresión democrática (CIVICUS, 2024, p. 4), es decir, las protestas están aumentando al mismo tiempo que se cierra el espacio cívico (CIVICUS, 2024, p. 7)

Tabla 3 Número de protestas en América Latina

Año	Protestas por año en la región
2019	12.535
2020	14.697
2021	19.206
2022	25.589
2023	24.371

Fuente: [ACLED](#) y Repensar los modelos de respuesta a la protesta social en América Latina y el Caribe. [Más allá de "mando y control" | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo \(undp.org\)](#)

Los datos muestran que la frecuencia de las protestas en la región se duplicó en un período de cinco años (véase el cuadro 3). Estas movilizaciones tanto se moldean por los contextos de los sistemas políticos y las características institucionales, en función de la interacción entre los movimientos de protestas, gobiernos y entramados estatales (Guerra, 2007, p. 844). Por lo tanto, no es sorprendente que las acciones colectivas oscilen entre violentas y no violentas en el tiempo en un mismo país, dependiendo del panorama político, las capacidades institucionales y las respuestas gubernamentales a la acción colectiva.

En general, podemos hablar de dos tipos de protestas: las disruptivas e intensivas que pueden derivar en violencia (o en el uso de la violencia), que tienen “mejores probabilidades de lograr respuestas institucionales”; y las no violentas y extensivas, con menor probabilidad de recibir respuestas institucionales (López Calva, 2022).

Las primeras, fueron las protestas denominadas “estallidos sociales” o “revueltas populares” que tuvieron lugar entre 2019 y 2021 en diversos países de la región. Ejemplo fueron los paros nacionales en Colombia durante noviembre 2019 en contra del gobierno de Iván Duque y las de abril a junio 2021, contra la reforma tributaria. En Ecuador, las movilizaciones de julio 2022 y junio 2024, en contra del alza de combustibles y eliminación de subsidios son un ejemplo de ellas. En Perú, durante julio de 2023, los ciudadanos protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte, resultando en un adelanto de las elecciones. Y en Chile, destaca las protestas de octubre de 2019, en contra del aumento del precio del metro en Santiago, y la de septiembre de 2022, a favor de mejoras en el sistema educativo.

Las protestas no violentas, suelen tener una menor capacidad de presión al gobierno, como las movilizaciones de la comunidad LGBTI+, o las marchas por la reivindicación de los derechos laborales de grupos sindicales sectoriales. Por ejemplo, la cantidad y la frecuencia de las protestas en la región contra la violencia de género han derivado en una sofisticación organizativa a través de la región; sin embargo, la posibilidad de generar acuerdos o iniciativas por parte de los gobiernos que respondan problemas estructurales de fondo y los derechos de la mayoría de la población continúa siendo remota.

La contienda entre estados y ciudadanos es y será siempre dinámica, por ello la probabilidad de que la movilización social conduzca a la violencia no sólo radica en las organizaciones movilizadoras, sino que también se relaciona con las acciones de los gobiernos hacia los manifestantes. Así, en el caso de los repertorios que pretenden desafiar la rutina, perturbar los espacios públicos y retar a los gobiernos y su autoridad a través del uso de la violencia, conllevan un alto riesgo de represión y hostigamiento hacia los manifestantes en países menos democráticos.

Los casos de Perú, Colombia, Chile y Ecuador entre 2019 y 2021 ilustran cómo las acciones colectivas de los movimientos (que no necesariamente fueron inicialmente violentas) fueron respondidas generalmente con represión, lo que llevó a una escalada de las demandas y actos de violencia, enfrentamientos y ocupaciones entre los grupos que protestan y las fuerzas estatales. Por lo tanto, si bien las protestas violentas tienen una mayor posibilidad de impacto político, es más probable que inviten (o permitan justificar) una reciprocidad violenta, siendo mucho más probable en el caso de estados débiles y autocráticos. Los repertorios no violentos utilizados en protestas extensas tienen una sofisticación en el lenguaje de la disidencia que los gobiernos no siempre son capaces de comprender. A pesar de ello, este tipo de protestas han aumentado. Un ejemplo son las *protestas "El violador eres tú"*, performance

presentado por parte del colectivo feminista LASTESIS, durante las protestas en Chile de 2019, que logró un gran reconocimiento por parte de diferentes movimientos sociales alrededor del mundo, erigiéndose en una acción colectiva transnacional que sigue denunciando la ausencia de derechos para las mujeres (BBC, 2019), e innovando en las formas de protestas, como ilustra las marchas del 8M en toda la región en el 2024³⁴ (CNN, 2024). A pesar de las innovaciones con respecto a los medios de protesta y su capacidad para acceder e influenciar los discursos y narrativas públicas, su capacidad para reducir los abusos y la discriminación de la que son objeto las mujeres, no es evidente en el corto plazo.

5. La respuesta estatal: ¿una invitación a un café o echarle leña al fuego?

La frecuencia de acciones colectivas a lo largo de la región aumenta la incertidumbre y tensión sobre los sistemas políticos. En este contexto los gobiernos, tienen cuatro opciones para responder a este aumento de la movilización: ignorar, conciliar, reformar o reprimir (Schock, 2005).

En regímenes democráticos plenos o semidemocráticos, ignorar por algún tiempo la movilización es posible, si esta no incluye en su repertorio acciones violentas. Frente a estas, los gobiernos pueden implementar dos estrategias: primero, conciliar a través de gestos simbólicos, con el objetivo final de cooptar o moderar las protestas, o segundo, implementar reformas, en el que a través de “concesiones concretas hacia los grupos agraviados, se busca disminuir el impacto de la protesta” (Schock 2005, pp. 30-31).

En regímenes autoritarios, como Venezuela, Cuba o Nicaragua, la respuesta común parece ser la represión a las libertades de sus ciudadanos por diferentes maneras. Así, la represión “adquiere la forma de violencia directa aplicada sobre los manifestantes. El impacto, tanto para los grupos desafiantes como para el régimen mismo, está inserto en el conflicto” (Sánchez, 2018, pp. 145). Por ello, la probabilidad de represión aumenta drásticamente en las autocracias fuertes y débiles.

Sin embargo, en las autocracias más fuertes, es más probable que la represión conduzca al debilitamiento de las organizaciones que retan al Estado. Ejemplos de protestas en contextos más autoritarios son las de mayo de 2023, en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos, 2023), las huelgas de hambre de opositores políticos al régimen nicaragüense (Selser, 2022), o las más recientes protestas en Venezuela frente a las

³⁴ Esta protesta transnacional ocurrió simultáneamente en la mayoría de las capitales latinoamericanas en 2024, como en Argentina, México y Chile.

irregularidades de las elecciones presidenciales en 2024; sin embargo, es poco probable que estas movilizaciones continúen, ya que la represión está sofocando las expresiones abiertas de descontento (Mendoza y Kurmanaev, 2021).

Es importante señalar que, si bien las protestas han aumentado, desafiando los marcos institucionales y buscando cambiar la naturaleza de las relaciones de poder (Sánchez, 2018, p. 137), este aumento en las protestas ha venido de la mano de un aumento en la violencia por parte de los gobiernos hacia los manifestantes y la criminalización de las protestas por parte de los gobiernos en la región (OMAL, 2022, p. 6). Esto se ha manifestado en un preocupante aumento de diversos tipos de violencia contra la población civil en países más y menos democráticos (ver tabla 4). Esta tendencia es preocupante, ya que puede indicar un aumento de la violencia tanto por parte de los manifestantes como del Estado y una escalada general en los diferentes conflictos tomando lugar en la región.

Ejemplos de ello, son la represión a los colectivos feministas “por parte de las fuerzas policiales de la provincia de El Chaco, en Argentina durante una movilización pacífica en el marco de la protesta nacional de marzo de 2024” (Agencia FARCO, 2024). Por su parte, los ataques a la movilización estudiantil en Colombia o Chile, el que, a bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los vehículos antidisturbios arrojando chorros de agua a alta presión sobre marchas pacíficas, golpizas y maltrato, se sumaron la presencia confirmada de miembros de las fuerzas policiales vestidas de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados (o incitadores a la violencia) en marchas estudiantiles (La izquierda Diario, 2015).

En ese contexto, la próxima tabla ubica el tipo de violencia contra manifestantes ejercida en los diferentes países de la región. Los datos sistematizados a partir de los informes de Amnistía Internacional dan cuenta del aumento de la violencia estatal contra los protestantes, situación que agrava la protección de los derechos humanos, con ataques a la independencia judicial, represión policial y amenazas a la libertad de prensa según advierte *Human Rights Watch* (Palomino, 2022).

Tabla 4 Violencia contra manifestantes en 2023

País	Violencia contra la población civil durante y después de las protestas
México	Aumento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
Honduras	Impunidad para policías acusados de abusos en protestas
Nicaragua	Hostigamiento, represión y encarcelamiento de defensoras de derechos humanos y opositoras
Guatemala	El espacio para la sociedad civil se redujo al ser sometida a tácticas represivas
El Salvador	Debilitamiento del Estado de derecho y aumento de las tácticas represivas
Costa Rica	No se registra
Panamá	Aumento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
Colombia	Aumento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, actos de hostigamiento y coerción
Venezuela	Hostigamiento, represión y encarcelamiento de defensoras de derechos humanos y opositoras
Ecuador	Aumento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
Perú	Aumento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, actos de hostigamiento y coerción
Brasil	Aumento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, actos de hostigamiento y coerción
Bolivia	El espacio para la sociedad civil se redujo al ser sometida a tácticas represivas
Chile	Debilidad de la ley de garantías a la protesta. Impunidad para los policías acusados de abusos durante las protestas.
Uruguay	Debilidad de la ley de garantías a la protesta
Paraguay	Debilidad de la ley sobre garantías de protesta y aumento de las tácticas represivas, criminalización de la protesta
Argentina	Debilidad de la ley de garantías a la protesta. Impunidad para los policías acusados de abusos durante las protestas

Fuente: [Informe 2022/23 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo - Amnistía Internacional \(amnesty.org\)](#)

Conclusión

La democracia en América Latina se encuentra en un proceso de des-democratización. Esto ha tenido lugar en paralelo al resultado de las crisis económicas, la persistencia de la debilidad de la protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos que se manifiestan en altos niveles de

pobreza, inequidad, polarización ideológica e inseguridad y corrupción. Estas crisis erosionan la confianza en las instituciones representativas y el apoyo a los gobiernos democráticos. Si bien esta crisis no es endémica a la región, presenta un preocupante panorama para la democracia en la región.

Al describir la naturaleza de los sistemas políticos (democráticos o no) y la capacidad institucional (si los estados son capaces de implementar políticas de cambio) para responder a estas tensiones, podemos presentar una simple taxonomía para comprender cómo surgen y en que contextos tienen lugar las crecientes protestas en la región. Estos factores contextuales condicionan la ocurrencia de protestas pacíficas o violentas, y la manera en que los estados responden a la acción colectiva. Una futura avenida de investigación podría considerar el rol moderador de las desigualdades en la manera en que las protestas se manifiestan en los diferentes países. Como hipótesis inicial, nos aventuramos a decir que, en países con menores desigualdades de oportunidades, es mucho más probable que las protestas sean pacíficas y el estado responda de manera pacífica.

Para evitar estas tendencias de des-democratización, aumento de la represión y de las protestas violentas, es importante que los gobiernos entiendan a la protesta como un “canario en la mina” que ayuda a saber que elementos de las políticas públicas y los entramados institucionales existentes no funcionan apropiadamente. En una era en el que las tensiones sociales serán maximizadas por el rol de las redes sociales y su configuración polarizadora, y su utilización por actores intra e internacionales, es vital que los gobiernos consideren cómo pueden solidificar los canales de conversación con la ciudadanía y que hagan de la protesta un vehículo de conversación pública y una invitación a una asamblea entre la ciudadanía y los gobiernos.

Ello también requiere una mejor formación de las fuerzas policiales. En Latinoamérica, la policía y su configuración fueron enmarcadas en una lógica contra-insurgente (legado de las dictaduras en la región). Sin embargo, se nos olvida que las fuerzas policiales son quizá la “primera línea” de la relación entre estado y ciudadanía, por ello la formalización de las fuerzas policiales no como una fuerza de seguridad gubernamental, sino como un actor estatal centra la importancia de equipar a las fuerzas policiales con herramientas para dialogar, coadyuvar la presencia de protestas pacíficas, y ser capaz de manejar y des-escalonar la presencia de protestas violentas. Ello se convierte en una oportunidad para consolidar los estados, sus instituciones y su credibilidad.

Por ello, sigue siendo preocupante ver cómo las autoridades parecen responder de manera violenta y poco constructiva a las diferentes demandas sociales, lo que ha aumentado la represión

afectando la protección de los derechos humanos y la legitimidad de los Estados y ha llevado en algunos casos a la radicalización de los manifestantes. Para que la democracia en la región mejore, una tarea urgente es fortalecer los vehículos políticos para permitir que los Estados sean capaces de adoptar las ideas de los manifestantes y, con suerte, evitar los riesgos del autoritarismo populista y su crecimiento en la región y en el mundo.

Referencias

ACLED (2023). Protestas en América Latina entre 2019 y 2022. <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/38ECB2B420AE1689EAC64B1E06949924>

Agencia FARCO. (2024). Crece el repudio a la represión a la manifestación pacífica de los movimientos sociales. Crece el repudio a la represión a la manifestación pacífica de los movimientos sociales | Agencia de Noticias FARCO Agencia de Noticias FARCO

Amnistía Internacional, (2023). Informe 2022/23 Amnistía Internacional. Informe 2022/23 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo - Amnistía Internacional (amnesty.org)

BBC, (2019), "El violador eres tú": el potente himno feminista nacido en Chile que resuena en México, Colombia, Francia o España. "El violador eres tú": el potente himno feminista nacido en Chile que resuena en México, Colombia, Francia o España - BBC News Mundo

Bertelsmann Stiftung BTI, (2024). Informe Regional BTI 2024 América Latina y el Caribe. BTI_2024_Regional_Report_LAC.pdf (bti-project.org)

BTI (2024). Índice de Gobernanza, América Latina y el Caribe. BTI 2024: América Latina y el Caribe: BTI 2024 (bti-project.org)

Bühlmann, Marc., Merkel, Wolfgang, y Bernhard Webels. (2008) La calidad de la democracia: Barómetro de la democracia para las democracias establecidas. <http://www.nccrdemocracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/WP10a.pdf>

Calderón, F. (2017). biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170601025832/La_construccion_social_de_los_derechos_y_la_cuestion_social_del_desarrollo.pdf.

La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

CEPAL. (2023). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023. Panorama Social de América Latina, 2023 (cepal.org)

CIVICUS. (2024). Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. [state-of-civil-society-report-2024_es.pdf](https://www.civicus.org/state-of-civil-society-report-2024_es.pdf) (civicus.org)

CNN, (2024). 8M | Resumen del Día Internacional de la Mujer y las marchas en México, Argentina, España y más, en vivo. 8M | Resumen del Día Internacional de la Mujer y las marchas en México, Argentina, España y más, en vivo (cnn.com)

Coppedge, M. & Gerring, J. et. al (2024). "V-Dem Codebook v14" Varieties of Democracy (V-Dem) Project.

[V-Dem_Codebook_v14.pdf](https://www.v-dem.net/media/1000000/V-Dem_Codebook_v14.pdf)

Dahl, R. (2009). La Poliarquía. Participación y Oposición. Tecnos. ISBN 9788430947515. De justicia.

<https://www.dejusticia.org/column/el-cierre-de-los-espacios-civicos-que-esta-pasando-y-que-podemos-hacer/>

El Tiempo. (2022). las mujeres encapuchadas que destruyeron estaciones de Transmilenio. Protestas en Bogota: mujeres vandalizan estaciones de TransMilienio (eltiempo.com)

Gentili, P. y Arata N. (2017). Presentación. En: Breno Bringel y Geoffrey Pleyers, Eds., Protesta e indignación global: Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial. (11-17). Buenos Aires, CLACSO

Guerra, E. (2007). Reseña Charles Tilly, regímenes y repertorios, Estudios sociológicos, XXV, 75, pp. 843-847

IDEA y PNUD. (2024). Gobernanza, democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe Gobernanza-Democracia y Desarrollo-Final (1) (1).pdf (undp.org)

Jiménez, M. (2012). Importancia del accountability social para la consolidación de la democracia en América Latina. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 7, 2, 97-130.

La Izquierda Diario. (2015). Represión. La criminalización de la protesta y la impune represión ad portas del 21 de mayo. Represión. La criminalización de la protesta y la impune represión ad portas del 21 de mayo (laizquierdadiario.com)

Latinobarómetro. (2023). Informe 2023.La recesión democrática de América Latina. Latinobarómetro

LAPOP. (2023). Pulse of democracy. AB2023-Pulse-of-Democracy-final-20231205.pdf (vanderbilt.edu)

Levine D. y Molina J:. (2007). La calidad de la democracia en América Latina una visión comparada. Revista América Latina Hoy, 45, 17-46.

Lissardy, G.. (2019). Protestas en América Latina: "Vamos a seguir con manifestaciones hasta que los pueblos crean que se gobierna para ellos y no para un puñado" - BBC News Mundo

López-Calva, F. (2022). Hirschman en los trópicos: tensiones sociales, COVID-19 y malestar social en América Latina y el Caribe.

www.undp.org/es/latin-america/blog/graph-for-thought/hirschman-en-los-tr%C3%B3picos-tensiones-sociales-covid-19-y-malestar-social-en-am%C3%A

Mainwaring S. y Pérez-Liñán, A. (2023). Por qué las democracias de América Latina están estancadas, *Revista de la Democracia*, 34, 1, pp. 156-170.

Manzotti, G., Sapienza E. y Patel L.. (2024). Más allá de "mando y control" Repensar los modelos de respuesta a la protesta social en América Latina y el Caribe. Más allá de "mando y control" Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (undp.org)

Manzotti, G., Sapienza E. y Patel L. (2024). Protestas, derechos humanos y prevención de conflictos. Propuestas para repensar los modelos de respuesta estatal a la movilización social. PNUD LAC PDS N°49. Protestas, derechos humanos y prevención de conflictos. Propuestas para repensar los modelos de respuesta estatal a la movilización social | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (undp.org)

Mendoza Y. y Kurmanaev A. (2021). En Nicaragua se profundiza la represión y la democracia peligra. En Nicaragua se profundiza la represión y la democracia peligra - The New York Times (nytimes.com)

Observatorio Cubano de Conflictos. (2023). Cuba: 392 protestas en mayo. Hambre desata gritos de "Libertad" en Caimanera y preside el descontento a lo largo de la isla. - Observatorio Cubano de Conflictos

OCDE y BID. (2024). Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024. Panorama de las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2024 (iadb.org)

O'Donnell, G. (2001). La irrenunciabilidad del Estado de Derecho. *Instituciones y Desarrollo*, VIII (9), 43-82.

O'Donnell, G., (2003) Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. En: Alcántara Manuel (eds). Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina, Rosario, Homo Sapiens y PNUD.

Offe, C. (1986). Partidos y Nuevos Movimientos Sociales. Madrid, Editorial Sistema

Organización Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina OMAL, (2022). Informe Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos. crimderprotespagsimpdef.pdf (omal.info)

Palomino, S. (2024). Autoritarismo, amenazas y represión: América Latina enfrenta un “alarmante” retroceso de libertades. Autoritarismo, amenazas y represión: América Latina enfrenta un “alarmante” retroceso de libertades | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com)

Sánchez F. (2018), La política de la protesta en regímenes autoritarios: síntesis crítica, *Revista de sociología e política*, 26, 65, pp. 132-154.

Sartori, G. (1992). *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid, Editorial Alianza.

Schock, K. (2005). *Insurrecciones no armadas. Movimientos de poder popular en las no democracias*. Minneapolis/Londres, University of Minnesota Press.

Selser, G. (2022). Nicaragua: temen por 4 opositores presos en huelga de hambre. Nicaragua: temen por 4 opositores presos en huelga de hambre - Los Angeles Times (latimes.com)

Smulovitz, C. y Peruzzotti, E. (2002). *Controlando la política: Ciudadanos, medios en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires. Editorial Temas

The Economist. (2023). Democracy Index 2023. Índice de Democracia 2023 (eiu.com)

Tilly, Ch. (2002). Repertorios de la acción contestaria en Gran Bretaña: 1758-1843. En M. Traugott, (Ed.) *Protesta social: repertorios y ciclos de acción de la acción colectiva*. Barcelona Editorial Hacer, pp. 17-48

Turkewitz, J y Glatsky, G. (2023). Perú en crisis: 47 personas han muerto mientras continúa la violencia. Protestas en Perú: Aumenta a 47 el número de muertos - The New York Times (nytimes.com)

Velasco, M. (2010). Democracia, gobernabilidad y movimientos sociales en Colombia 1990- 2006. En Francine Jacome y Martín Tanaka (eds). *Desafíos de la gobernabilidad democrática, reformas institucionales y movimientos sociales en la región andina*. Lima: IE, IDRC-CRDI, INVESP, (213-244).

V-Dem. (2023). Reporte de la Democracia 2023. Resistencia frente a la autocratización.

V-dem_democracyreport2023_espanol_med.pdf

V-Dem. (2024). Informe sobre la democracia 2024. La democracia gana y pierde en las urnas V-Dem_DR_2024_Spanish.pdf

Zamora, C. (2015). Movimientos sociales, democracia y Estado de derecho. Una mirada a la contribución de los movimientos sociales a la democratización e institucionalización del Estado de derecho. *Tlala-Melana*, 9, 39, pp 152-171.

Sobre los/las Autoras/es

Kaan Agartan

Profesor Asociado de Sociología en Framingham State University (EE. UU.), autor de “Gezi: The Making of a New Political Community in Turkey” y coeditor de “Reading Karl Polanyi for the Twenty-first Century”. Su investigación explora el capitalismo racial, movimientos sociales y democracia radical. Próximamente publicará “Reimagining Radical Democracy in the Global South” con Camilo Tamayo Gómez. Correo: kagartan@framingham.edu

Fabio Andrés Díaz Pabón

Fellow del Centro Africano de Excelencia para la Investigación sobre la Desigualdad (ACEIR) de la Universidad de Ciudad del Cabo. Investigador honorario del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Rhodes (Sudáfrica). Miembro del grupo de investigación Comunicación y Democracia de la Universidad del Tolima (Colombia). Su investigación se centra en política, desarrollo, economía y movimientos sociales. Correo: fabio.diazpabon@uct.ac.za

Rosario Freire Saray

Doctoranda en Ciencias Políticas y Sociología en la Scuola Normale Superiore en Florencia, Italia. Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Bielefeld, Alemania y master en Sociología en conjunto con la Universidad de Bologna. Desde su maestría su investigación se centra en analizar repertorios de acción feministas en contextos de crisis. Correo: rosario.freiresaray@sns.it

Nicolás Gutiérrez Rojas

Miembro del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva y asistente de investigación en el Basque Centre for Climate Change (BC3). Cursa sus estudios en el programa de doctorado en modelos y áreas de investigación en ciencias sociales en la Universidad del País Vasco. Correo: ngutierrez043@ikasle.ehu.eus

César Guzmán-Concha

Profesor asistente en el departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Scuola Normale Superiore (Italia), e investigador del Center of Social Movement Studies de la misma universidad. En el pasado, fue investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín (Alemania) e investigador Marie Curie en la Universidad de Ginebra (Suiza). En la actualidad, lidera un proyecto de investigación sobre las implicaciones y dinámicas de los fenómenos de protestas social de masas (estallidos,

revueltas, revoluciones), en perspectiva comparada. Correo: cesar.guzmanconcha@sns.it

Magda Catalina Jiménez Jiménez

Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana y Master en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. Docente-Investigadora en la Universidad Externado de Colombia, es experta en movimientos sociales y política pública en América Latina. Consultora para IDD LAT y el proyecto V-Dem. Investiga sobre la relación entre movimientos sociales y política pública. Correo: MAGDA.JIMENEZ@uexternado.edu.co

Marina Larrondo

Investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (Universidad Nacional de Tres de Febrero). Magíster en Educación por la Universidad de San Andrés y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Integra el Programa de investigaciones en Derechos Humanos y Ciudadanías del IDES y el Grupo de Estudios en Políticas y Juventudes del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Correo: mlarrondo@udesa.edu.ar

Natalia Miranda

Profesora Asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) de la Universidad Mayor (Chile). Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UC Louvain (Bélgica), ha sido también investigadora postdoctoral en la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Secretaria del Comité de Investigación sobre “Movimientos Sociales” (RC48) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). Sus intereses de investigación son los movimientos sociales, activismo (digital), sociología política y métodos mixtos. Correo: nataliamir@gmail.com

Carmen Gemita Oyarzo Vidal

Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile y miembro del claustro académico del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma institución. Socióloga por la Universidad de Concepción y Doctora en Estudios Americanos con mención en Estudios Sociales y Políticos por la Universidad de Santiago de Chile. Su último libro se titula: La vida después de la lucha. Transformaciones identitarias de la izquierda chilena en la postdictadura [en prensa], y que será publicado por la editorial LOM (Chile) a fines de 2024. Correo: carmen.oyarzo@uautonoma.cl

Camila Ponce Lara

Doctora en Sociología por la EHESS-Paris y el CESPRA (Francia). Master en Políticas Comparadas con mención en América Latina de Sciences-Po Paris. Investigadora de la Universidad de Ostrava (República Checa). Ha sido investigadora postdoctoral en la Philipps-Universität Marburg (Alemania), y ha ejercido como profesora titular en la Universidad Católica Silva Henríquez y la Universidad Central (Chile). Recientemente publicó el libro “Desde las calles a la Moneda. Liderazgo estudiantil y transformación política en el Chile contemporáneo” por RIL Editores. Correo: camila.poncelara@gmail.com

Joaquín Rozas Bugueño

Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) e Investigador Doctoral del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos). Cientista Político y Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus temas de interés son el estudio de la protesta y movimientos sociales, instituciones políticas, cambios de políticas públicas y metodología de la investigación en ciencia política. Correo: joaquin.rozas@upf.edu

Benjamín Tejerina

Catedrático de Sociología y Director del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España. Entre sus publicaciones recientes destacan Crisis y movilización social en la España contemporánea: El Movimiento 15M (2018), Sharing Society: el impacto de las acciones colectivas colaborativas en la transformación de las sociedades contemporáneas (2019), y Cambio climático, sostenibilidad y prácticas socioecológicas (2024). Correo: b.tejerina@ehu.eu

Camilo Tamayo Gómez

Profesor titular de la Universidad de Huddersfield. Asesor Principal en Justicia Transicional del PNUD. Presidente del Comité de Investigación sobre Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social (RC48) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). Su agenda de investigación se centra en la relación entre violencia, conflicto armado, justicia social, derechos humanos y seguridad desde una perspectiva sociopolítica. Correo: c.a.tamayogomez@hud.ac.uk

El panorama político de América Latina ha estado marcado durante muchas décadas por patrones cíclicos de crisis e inestabilidad, influidos tanto por fuerzas internas como globales. Sin embargo, lo que distingue a la era actual es la intensidad y el alcance de la polarización que impregna casi todos los aspectos de la vida, desde la esfera política hasta las dimensiones sociales y culturales. Esta polarización se ve exacerbada por las plataformas digitales, la fragmentación de los medios de comunicación y el ascenso de líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, que aprovechan la división para consolidar su poder. En este contexto, los movimientos sociales latinoamericanos desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos de las comunidades marginadas, el resguardo de los valores democráticos, y la construcción de marcos socioculturales más inclusivos.



unibertsitatea



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

